

Curicó, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.

PRIMERO: Individualización de los intervinientes. Ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, constituido por los jueces **Macarena Yáñez Cerda** (quien fue Presidenta de Sala), **Amelia Avendaño González** y **Rodrigo Gómez Marambio**, se llevó a efecto durante los días 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de septiembre y 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 15 de octubre de 2021, la audiencia de Juicio Oral en la causa Rol Interno Tribunal **23-2021**, Rol único de Causa **1.901.138.322-2**, seguida en contra del acusado **FRANCISCO JOSÉ FUENZALIDA CALVO**, chileno, cédula nacional de identidad 7.023.210-3, nacido en Santiago el 14 de enero de 1959 y por ende de 62 años de edad, quien señaló como su actividad u oficio la de técnico mecánico, su estado civil el de casado y tener domicilio en Camino Los Cristales, kilómetro 0.8, sector de Zapallar, comuna de Curicó, actualmente en prisión preventiva por esta causa en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Parral.

Comparecieron como intervinientes, en primer lugar, para sostener la acusación del Ministerio Público, los fiscales de Curicó **Jaime Rojas Díaz** y **Miguel Gajardo Lizana**; además, en razón de haberse adherido a la misma, los abogados **Julio Alex Herrera Rosales** y **Jessica Díaz Reyes** en representación de los querellantes Nicolás Francisco Espinoza Rojas y Ricardo Andrés Solís Opazo, y, también, el abogado **Juan Barrera Correa**, en representación de la Municipalidad de Curicó, quien delegó poder en sus colegas **Sandra Espinoza Fuentes** y **Héctor Muñoz Bravo**; y, para sostener la acusación particular y demanda civil, lo hicieron los abogados **Carlos Gajardo Pinto** y **Pablo Norambuena Arizábalos**, quienes representaron a Claudia Belén Pezo Sáez, actuando ésta a su vez por representación legal, en calidad de madre, de su hijo menor de edad Máximo Baltazar Uribe Pezo. Se deja constancia que, durante el juicio, los abogados Julio Herrera, Carlos Pinto y Pablo Norambuena se delegaron poder recíprocamente.

Por su parte, la Defensa del acusado estuvo a cargo de los abogados defensores privados **Mauricio Alejandro González Morales** y **Francisco Alberto Ramírez González**, y durante el juicio también se delegó poder en el abogado **Javier Ramírez González**.

Todos con domicilio y forma de notificación ya registrados en el Tribunal.

SEGUNDO: Acusación y argumentaciones de la Fiscalía. La acusación formulada por la Fiscalía fue la siguiente:

Los hechos:

“El día 21 de Octubre de 2019, en horas de la noche, siendo alrededor de las 22:00 horas, el imputado FRANCISCO JOSÉ FUENZALIDA CALVO, se desplazaba por diversas arterias de la ciudad de Curicó en su vehículo camioneta, marca Toyota, modelo Hi Lux, color Rojo, placa patente única HVLD-26, portando y manteniendo en su poder un arma de fuego, del tipo pistola marca CZ, modelo 85, serie N° A2773, calibre 9x19 mm, junto con dos cargadores y municiones calibre 9 mm, en ese contexto el imputado al llegar a las inmediaciones de la Avenida Manso de Velasco con calle Merced y Estado de Curicó, realizó diversos disparos directamente en contra de grupos de personas que se encontraban en el lugar, a raíz de su actuar resultaron lesionadas las siguientes víctimas que estaban ubicadas en las inmediaciones, a saber: a) RICARDO ANDRES SOLIS OPAZO, quien resulto con “herida de arma de fuego en antebrazo izquierdo con entrada y salida de proyectil, fractura en otras partes del antebrazo y traumatismo en músculos esqueléticos en antebrazo izquierdo por proyectil de arma de fuego”, de acuerdo al dato de atención de urgencia del Hospital de Curicó y según diagnóstico del Servicio Médico Legal resultó con: 1.- fractura conminuta de radio izquierdo manejada quirúrgicamente, 2.- lesión de nervio mediano lado izquierdo. Lesión de carácter grave con incapacidad permanente a nivel del miembro superior izquierdo con secuelas: alteración funcional a nivel de órgano de la presión de la mano izquierda, por lesión del nervio mediano y estética corporal por las cicatrices descritas con carácter permanente, lesiones de carácter graves gravísimas; b) NICOLAS FRANCISCO ESPINOZA ROJAS, quien resulto con “herida por arma de fuego, proyectil con entrada y salida muslo izquierdo, fractura de la diáfisis del fémur, de carácter grave de acuerdo al datos de atención de urgencia del Hospital de Curicó y conforme al Servicio Médico Legal, diagnosticó: “fractura conminuta del tercer medio del fémur izquierdo, manejado quirúrgicamente. Lesión de carácter grave con un tiempo de curación e incapacidad mayor a 31 días, secuelas: al momento del examen presenta moderada alteración funcional para la locomoción a nivel del miembro inferior izquierdo producto de la fractura descrita. Estética corporal

por las cicatrices descritas de carácter permanente, lesión de carácter grave y c) **MIGUEL ANDRES AYALA SALINAS**, quien resultó con herida por arma de fuego en la espalda, según datos de atención de urgencia del Sar Aguas Negras de Curicó, siendo derivado al Hospital de Curicó quien señala que presenta un trauma torácico no penetrante por proyectil de arma de fuego, herida por arma de fuego infra escapular izquierda, con pronóstico leve de acuerdo al dato de atención de urgencia del Hospital de Curicó.

Momentos más tarde, siendo alrededor de las 22:30 horas, **el imputado FRANCISCO JOSE FUENZALIDA CALVO**, se desplazó en el vehículo camioneta ya señalado, por la Alameda Manso de Velasco de Curicó en dirección sur e ingresó a la carretera 5 Sur, a la altura del acceso Sur a la ciudad de Curicó, correspondiente al kilómetro 187 de dicha vía, instantes en que el imputado portando y manteniendo en su poder el arma de fuego del tipo pistola marca CZ, ya descrita y munición calibre 9 mm, efectuó varios disparos a las personas y vehículos que se encontraban en el lugar producto de manifestaciones ahí existentes, impactando uno de los disparos realizados a la **víctima JOSE MIGUEL URIBE ANTIPANI**, que se encontraba en el grupo de gente ya señalado, provocándole una herida penetrante en la cavidad torácica, por proyectil de arma de fuego, que produce herida lacerante transfixiante de musculo del tórax lateral lado derecho, laceración transfixiante de pleuras parietales y viscerales bilaterales, laceración transfixiante de lóbulos pulmonares, hemotórax bilateral masivo. Herida transfixiante del diafragma lado derecho. Herida transfixiante de pericardio y corazón. Herida lacerante a nivel del lóbulo derecho del hígado en su porción superior, fractura conminuta de quinto arco costal anterior izquierdo y laceración de musculo del tórax lateral lado izquierdo, siendo la causa de muerte anemia aguda, heridas que le provocaron la muerte momentos más tarde. Las lesiones causadas a la víctima son de carácter mortal, lo que no se hubiera podido evitar aun con socorros médicos oportunos y eficaces; además de provocar daños en el vehículo tipo furgón, marca Fiat, modelo Doblo, color Blanco, placa patente única KKTG – 33, conducido por don Cristian Humberto Miranda Miranda, quien se encontraba detenido en la calzada, siendo alcanzado su vehículo en el costado derecho por dos disparos realizados por el imputado, daños que serán evaluados oportunamente y que superan una UTM. Luego el imputado se retiró a su domicilio particular ubicado en camino a Los Cristales, Kilometro 0.8, sector de Zapallar de Curicó, lugar en el cual, momentos más tarde, fue recuperada la pistola

marca CZ, ya descrita, junto a dos cargadores y cinco municiones calibre 9 mm, donde además mantenía el imputado bajo su posesión y tenencia un arma de fuego, del tipo fusil, calibre 7x57 mm, marca Máuser, modelo 1912, serie 69148, armas que se encuentran aptas como armas de fuego. El imputado portaba y mantenía en su poder ambas armas de fuego ya individualizadas, junto a las municiones indicadas, sin tener las armas inscritas a su nombre y sin tener los permisos respectivos para el porte y tenencia de esas armas de fuego y municiones.

El día 26 de Octubre del año 2019, en horas de la tarde, siendo alrededor de las 13:30 horas, oficiales policiales de la policía de investigaciones incautaron desde el domicilio del imputado FRANCISCO JOSÉ FUENZALIDA CALVO, ubicado en Camino a los Cristales s/n, km 0,8 Sector Zapallar, de la comuna de Curicó 240 cartuchos calibre 7 mm y 10 cartuchos 7 x 57 mm, respecto de los cuales el imputado no mantenía las autorizaciones respectiva para la tenencia en su domicilio de dicha municiones” (Sic).

Calificación jurídica y participación criminal:

A juicio de la Fiscalía, los hechos descritos precedentemente son constitutivos de los siguientes delitos respecto del acusado Francisco José Fuenzalida Calvo:

a) Tres delitos de homicidio, en grado de frustrado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, en perjuicio de las víctimas **Ricardo Andrés Solís Opazo, Nicolás Francisco Espinoza Rojas y Miguel Andrés Ayala Salinas.**

b) Los delitos consumados de porte y tenencia ilegal del arma de fuego del tipo pistola CZ y municiones y tenencia ilegal de arma de fuego del tipo fusil y municiones, ilícitos previstos y sancionados en el artículo 2, 9 y demás pertinentes de la Ley 17.798 de control de armas.

c) Homicidio, en grado consumado, en perjuicio de la víctima **José Miguel Uribe Antipani**, ilícito previsto en el artículo 391 N°2 del Código Penal. Y,

d) Daños simples, en grado consumado, en perjuicio de la empresa Lizcal SA, previsto y sancionado en el art. 487 del Código Penal.

En todos estos ilícitos le atribuyó al encartado la calidad de autor.

Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal:

Para el Ministerio Público concurre únicamente la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, esta es, la irreprochable conducta anterior, y no invocó agravante.

Penas requeridas:

El Ministerio Público solicitó se imponga al acusado Francisco José Fuenzalida Calvo las siguientes penas:

A.- Respecto de los tres homicidios frustrados y el homicidio consumado, la pena única de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, comiso de las especies incautadas, accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, demás accesorias legales, incorporación de huella genética al registro de condenados conforme al artículo 17 de la Ley 19.970, y las costas.

B.- Respecto del delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego del tipo pistola, marca CZ, y municiones, la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, comiso de las especies incautadas, accesorias del artículo 29 del Código Penal, demás accesorias legales, y costas.

C.- Respecto del delito de tenencia de arma de fuego del tipo fusil marca Mauser, y municiones, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, comiso de las especies incautadas, accesorias del artículo 29 del Código Penal, demás accesorias legales, con costas. Y,

D.- Respecto del delito de daños, a la pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, accesorias legales del artículo 30 del Código Penal, demás accesorias legales, y costas.

Cabe hacer presente que, en la acusación original, recogida en el auto de apertura, se había formulado también un cargo en contra de una segunda persona, **Juan Carlos Jesús Reyes Araneda**, cuyo conocimiento y resolución fue dejado en definitiva para la **competencia de la Justicia Militar**, según decisión de la Exma. Corte Suprema de fecha 6 de agosto de 2021.

Ya en el juicio, en su **alegato de apertura**, el fiscal señor Miguel Gajardo señaló que, a contar del 18 de octubre de 2019, tan solo tres días antes de los hechos que nos convocan, se había generado a nivel país una situación de efervescencia inusitada, que se denominó el estallido social, lo que se tradujo en múltiples acciones masivas e ilícitas como saqueos, incendios de empresas y negocios, y otras, fue una situación inesperada y violenta, ampliamente abordada por los medios de comunicación social, generando la alerta y preocupación de toda la población. Curicó no estuvo al margen, generándose manifestaciones y marchas desde el primer día que se fueron incrementando en número y en violencia. Fue así como el día 21 de octubre se intenta el saqueo de distintos supermercados de esta ciudad, entre ellos el Unimarc de calle Estado con Alameda, y asimismo el corte diario de la carretera 5 sur con barricadas, hogueras y elementos similares. Es en ese contexto fue que el acusado, como resultado de esa conmoción social generalizada, decide salir de su casa y circula por diferentes arterias de la ciudad en su camioneta Toyota Hilux color roja placa patente HVLD26, que tiene una característica bien especial, una toma de aire en un costado de color negro, portando una arma de fuego de tipo pistola marca CZ junto con cargadores y municiones del mismo calibre. Así, llega al sector de la Alameda Manso de Velasco donde ve diversos grupos de gente y realiza diversos disparos directamente contra esos grupos, resultando lesionados por arma de fuego Ricardo Solís Opazo, con una grave lesión en su antebrazo izquierdo, con entrada y salida de proyectil y secuelas permanente hasta hoy; Nicolás Espinoza Rojas, con una herida por fractura gravísima en una de sus piernas, que lo mantiene aún con secuela; y también Miguel Ayala Salinas, herido en su espalda, bala que aun esta alojada en esa zona vital de su organismo. Momentos más tarde, el acusado, luego de haber tenido un altercado en calle Estado al llegar a Manso de Velasco con el comunicador social Dani

Bravo, a quien increpa por testar grabando la contingencia que ocurría en ese lugar, se retira por esa avenida hacia la carretera 5 sur, a la que ingresa por la salida hacia el norte, donde, aun portando esos elementos, efectúa nuevos disparos hacia las personas y vehículos que allí se encontraban, impactando uno de esos disparos a la víctima José Uribe Antipani, que era un joven de 25 años de edad, padre de un niño de tan solo un año y diez meses, que vivía en el sector La Obra de Curicó, que junto a dos amigos había ido al centro de Curicó a participar de esas actividades, el que sufre distintas heridas transfixiantes en órganos internos, entre ellos el corazón, privándose así de una vida recién desarrollándose y a su hijo a crecer sin la presencia de su padre. Esos disparos también causaron daños en una camioneta tipo furgón placa patente KKTG35, conducido por Cristian Miranda, lo que es importante pues él es testigo, el que accidentalmente pasaba por el lugar. De dos disparos a ese vehículo se recuperaron dos balas, las que fueron periciadas y comparadas con el arma CZ utilizada por el acusado, resultando que efectivamente habían sido disparados por esa arma. El acusado luego regresa a su domicilio ubicado en el sector Los Cristales de Zapallar y momentos después la PDI recupera desde ese lugar el arma CZ, municiones y cargadores, y un fusil tipo máuser, ambas armas aptas para el fuego y sin que tuviera permiso para su tenencia o porte. Posteriormente en ese domicilio se encontró gran cantidad de municiones, respecto de los cuales tampoco tenía permiso. Durante el juicio estima que podría acreditar todos los fundamentos fácticos y jurídicos de la acusación, con las pruebas que espera aportar de la manera más cronológicamente posible, a fin de que el Tribunal, atendiendo a la coherencia y multiplicidad de la prueba rendida, pueda arribar a un veredicto condenatorio por los graves delitos que se imputan al acusado, y así restablecer el Estado de Derecho que, por cierto, rechaza la autotutela y reserva el uso de la fuerza en el Estado, para el resguardo del orden social. Afortunadamente Ricardo Solís, Nicolás Espinoza y Miguel Ayala sobrevivieron para contar lo sucedido, y aun con sus secuelas físicas y psicológicas pueden continuar con su vida, sin embargo, José Uribe no tuvo igual suerte, y el pequeño Máximo Uribe, pronto a cumplir 4 años, todavía llama a su padre, sin que venga. Su vida ha sido cegada a corta edad en forma injustificada. Cuatro familias víctimas de estos hechos han sufrido todo este

tiempo y espera que la sentencia pueda traer un poco de paz en sus corazones, que como el de José Uribe fue atravesado por una bala asesina.

A su vez, en el **alegato de cierre**, indicó que al inicio del juicio señaló que el Ministerio Público podría acreditar todos los presupuestos fácticos y jurídicos de la acusación, lo que estima haber logrado. En efecto, se pudo establecer que el 21 de octubre de 2019, aproximadamente entre las 22:00 a 22:30 horas, el acusado Francisco Fuenzalida Calvo, conduciendo su camioneta Toyota Hilux patente HVLD26, circuló por diversas arterias de Curicó, en particular por la Avenida Manso de Velasco, efectuando disparos a las personas reunidas en gran número debido a las manifestaciones sociales generadas en esos días. En esas circunstancias, sus disparos alcanzaron a Nicolás Espinoza, Ricardo Solís y Miguel Ayala, resultando lesionados en diferentes partes de su cuerpo. Además, se pudo establecer la existencia de los delitos de porte y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones por parte del acusado. Ello se pudo demostrar, en primer lugar, con el testimonio de las víctimas, Nicolas Espinoza, quien refirió que se encontraba viendo cómo algunas personas se encontraban tratando de ingresar al supermercado Unimarc, mientras carabineros trataba de impedirlo mediante elementos disuasivos como escopetas, decidiendo retirarse junto a sus amigos, sintiendo un impacto en la pierna izquierda que lo hace caer al suelo, no pudiéndose mover, y con ayuda de sus amigos detienen una ambulancia que transitaba por el sector, la que lo lleva al Hospital de Curicó, donde le diagnostican una grave fractura múltiple, que le ha tomado un tratamiento largo y con secuelas hasta el día de hoy, como pudo corroborar el médico Saul Tirado del Servicio Médico Legal. Espinoza señaló que no se percató quien le disparó, pero sí que carabineros no disparó hacia el sector en que estaba él y que además ellos usaban otro tipo de armas, escopetas. Relevante fue también Miguel Ayala, quien dijo que estaba en el mismo sector, en el bandejón central de la alameda, entre calle Estado y Argomedo, el día y hora de los hechos, mirando los desmanes que afectaban al Unimarc, y de repente desde una camioneta roja, que tenía un tubo negro hacia arriba, le efectúan un disparo en la espalda, la que todavía tiene alojada en su cuerpo, lo que complementó el perito balístico Daniel Cáceres, quien indicó que ese proyectil correspondía a una bala 9 milímetros. La versión

de Ayala es refrendada por su tía Carmen Salinas, quien también circulaba por allí, y al llegar a calle Argomedeo ve una camioneta roja con un tuvo negro que sale de su costado, conducida por un hombre que dispara con una pistola de color negro hacia el sur, lugar por el cual se desplazaban varios transeúntes, reconociendo en el juicio al acusado Francisco Fuenzalida Calvo como aquel sujeto. Luego, señaló que volvió a ver esa camioneta circulando por la ciudad, lo que también indicó su hermana, la testigo Clara Salinas, refiriendo el miedo de acercarse a la camioneta por el temor de que su conductor se encontraba armado. El doctor Rixio Sánchez, que atendió a Ayala, dijo que la bala quedó alojada en la espalda y que tuvo mucha suerte porque esa bala pudo haber producido gravísimos daños a su salud, atendida la parte del cuerpo afectada. Por su parte, Ricardo Solís, dijo que ese día en la Alameda junto a su pareja y a su hija menor, y estando en las cercanías del juzgado laboral, siente una especie electricidad en su brazo izquierdo, pensó que era balín, pero no era así, pues sangraba mucho, su pareja trató de detener un vehículo para llevarlo al hospital, sin conseguirlo, por lo que él se hace un torniquete y corren ambos al hospital para pedir ayuda. Solís no sabe quién le disparó, pero en su cuerpo quedaron restos de un proyectil encamisado balístico, y él mismo recuerda haber visto circulando por el sector una camioneta roja. Él mostró sus heridas al tribunal y expresó su frustración que como proveedor del hogar esta lesión le ha provocado, incluso pensando en quitarse la vida. Su pareja, Karolain Suazo, ratificó lo expuesto por él, agregando que, en el hospital, mientras era atendido Solís, las personas comentaban la presencia de una camioneta roja, lo que también le señaló su pareja; ella también señaló las secuelas físicas y psicológicas de Solís. El doctor Tirado, del Servicio Médico Legal, examinó asimismo a esta víctima y dio cuenta de la gravedad de sus lesiones y sus graves secuelas que permanecerán para siempre en él. El inspector Ignacio Valeria, de la unidad de cibercrimen de la PDI, dio cuenta de las grabaciones que pudo rescatar de las redes sociales sobre los hechos, destacando un video grabado en la alameda de Curicó donde aparece circulando una camioneta roja e instantes después se escuchan disparos, lo que corrobora la presencia y acciones del imputado en el lugar. La declaración del propio acusado ante el Ministerio Público es otro antecedente, pues reconoce haber

estado dando varias vueltas en el sector de la alameda en su camioneta y cuando estaba detenido en el semáforo de calle Estado con la alameda, justo en el bandejón central, siente temor de ser agredido, pues quedó entre los carabineros y los manifestantes, y, como dice, con la intención de dispersarlos, efectúa varios disparos por la ventana del copiloto hacia el norte, hacia el lugar donde precisamente se encontraba Espinoza, reconociendo Fuenzalida que alrededor circulaban muchas personas. También dijo que después siguió transitando por el sector. La subcomisario Marcela Sánchez, que tuvo a su cargo las labores de investigación el día 21 de octubre, hizo un extenso análisis de las múltiples labores investigativas en el sitio del suceso, la forma en que supieron la patente de la camioneta roja y como se individualiza y ubica el domicilio de su conductor, antecedentes con los que se logra detener al acusado, quien colabora con la investigación y entrega la pistola CZ utilizada en estos hechos, junto a dos cargadores, cinco cartuchos y cuatro vainillas percutidas, además de un fusil Mauser modelo 1912, y una escopeta Maverick, y posteriormente se incautaron gran cantidad de proyectiles de diferentes calibres, compatible la mayoría de ellas con las armas incautadas. Sánchez también entrega una fundada apreciación criminalística que establece los hechos investigados y la participación que le cabe al encausado en calidad de autor. Asimismo, se pudo establecer más allá de toda duda razonable que el imputado, después de herir a los tres afectados, se dirigió por la alameda Manso de Velasco hacia el sur, hacia la carretera 5 sur, sector de acceso hacia el norte, efectuando allí múltiples disparos con la pistola CZ que portaba contra los manifestantes, hiriendo mortalmente a la víctima José Miguel Uribe Antipani y causando daños al vehículo patente KKTG33, que se encontraba ahí. Un elemento central para unir los eventos reseñados, fue el testimonio de Dani Bravo, quien en su carácter de comunicador social se encontraba esa noche en calle Estado con Manso de Velasco, transmitiendo en vivo la situación que ocurría en el supermercado Unimarc, indicando que cuando terminaba su nota se acerca a él una camioneta roja con un tubo negro en su costado, y desde su interior su conductor y único ocupante le increpa por estar haciendo grabaciones, se baja y lo sigue increpando, utilizando improperios y palabras hirientes por su discapacidad visual. Ello motiva que se acerquen carabineros a efectuar un control de

identidad. En ese momento se da una orden de replegarse y el sargento Osses le devuelve su licencia de conductor y le dice que se retire a su hogar. Dani Bravo en ese momento graba la patente de la camioneta y también indica que ese día había tenido un contacto previo con él, cuando estaba en calle Merino, quien lo increpó por lo mismo, por andar grabando los hechos, indicando que la camioneta siguió hacia el norte por la Alameda, y él siguió un poco más atrás, y, al llegar a calle Merced con Manso de Velasco, se percató que había una persona lesionada que era auxiliada por otras personas. Bravo se retira a su hogar y esa noche es contactado por el sargento Osses de la SIP de Curicó y le proporciona la imagen de la patente de la camioneta, lo que permite identificar y ubicar a su chofer. Bravo reconoció en el juicio como esa persona de la camioneta al acusado. Prestó también declaración Sergio Osses, jefe de la SIP de Curicó, quien coincidió en aquel control de identidad al acusado, alrededor de las 22 horas observa, cuando presencia un altercado entre el conductor de una camioneta roja y otra persona, le hace control de identidad al conductor, recibiendo orden de la comisario de retirarse a la comisaría, por lo que le entrega su licencia y le pide que se retire a su casa. En la noche personal de la BH le pide información sobre la identidad del conductor, y conociendo al comunicador social Dani Bravo lo llama y éste le aporta la imagen de la patente que Osses le entrega a la funcionaria Marcela Sánchez, y reconoce también en un Kardex fotográfico al acusado como aquella persona que conducía la camioneta y al cual él controló. Agrega que, al igual que los funcionarios Opazo y Solís, expresaron que en la comisaría se efectuó un análisis de todo el armamento y munición del personal policial que estaba ese día en la población, alrededor de 60 funcionarios, dando como resultado que ninguna de las armas a su cargo fue usada y tampoco faltaba munición. El funcionario Matus, de larga experiencia en la PDI, tuvo la labor específica de investigación de recabar los videos de las cámaras de seguridad en la Alameda y la carretera, ubicando diversas cámaras en el Unimarc, servicentro Facaz y Copec de la Alameda, el local Protege, un Jardín Infantil ubicado en calle Carrera, el domo de la cámara de seguridad de la municipalidad ubicado en el bandejón central de la Alameda, las cámaras de la Asoducam y el gimnasio ubicado en el acceso sur de Zapallar. Luego efectuó el análisis detallado de cada imagen para identificar

la camioneta doble cabina color rojo que conducía el acusado, con las características especiales de ese tubo negro tipo esnórquel y llantas estrelladas. Con el apoyo del perito Jorge Guzmán del Laboratorio de Criminalística de Temuco se pudo reconstruir un video que muestra secuencialmente la circulación de la camioneta desde que termina el control de identidad al acusado por el sargento Osses, a las 22:24:07, luego enfila al oriente, traspasa la rotonda donde está el monumento a Luis Cruz Martínez, y más tarde aparece nuevamente captada por las cámaras del Unimarc en la alameda poniente a las 22:28:42, y desde ahí enfila constante hacia el sur, siendo captado por las cámaras señaladas de Facaz, Copec y otras, saliendo hacia la carretera 5 sur, dirección norte, siendo captado a las 22:29:07 por las cámaras de la Asoducam y luego en el gimnasio. A su vez, el agente Matus pudo establecer la salida de los vehículos del ejército desde dicho lugar antes de la llegada de la camioneta roja, gracias a los videos aportados por el testigo Nicolás González. Fundamental en la determinación de los hechos en la carretera fue el relato de Cristian Miranda, de la empresa Lizcal, que ese día regresaba desde el sur a su domicilio en Santiago, quien señaló que en el camino se encontró en varias oportunidades con la camioneta blanca y el bus de los militares, y cada vez que había alguna detención en la ruta los vio bajarse a hacer un perímetro de seguridad, lo mismo al llegar a Curicó, pero en este lugar fueron agredidos por los manifestantes, por lo que hacen uso de sus armas, logrando abrir el paso hacia el norte, por lo que la camioneta blanca pasa la barricada siguiendo hacia el norte, y el bus entra a Curicó, observado todo por Miranda, que avanzó hasta quedar en el primer lugar antes de la barricada. Allí identificó a los jóvenes que estaban en el lugar y entre ellos a la víctima José Uribe, pues le llama la atención su vestimenta, especialmente unos pantalones negros con parches blancos. En un momento lo ve pasar por el costado derecho de su vehículo y justo entonces escucha disparos, ve chispas en el pavimento delante de él y siente que su auto también es impactado, y en ese momento se abre la ruta nuevamente, los manifestantes huyen despavoridos por los disparos, y él sigue hacia el norte, escuchando que los milicos habían matado a una persona. Él sigue en shock, en Pelequén pasa a buscar un salvoconducto y se percató que había una persona fallecida en las manifestaciones de Curicó, busca después en redes

sociales y vio una foto, reconociendo a Uribe como el joven que vio, y que fue herido cuando ya los militares se habían retirado, agregando que vio una camioneta roja pasar hacia el norte. Este testigo entregó una bala al personal de la PDI que se trasladó a Santiago a tomarle declaración y una segunda fue extraída del mismo por éstos. Llevadas a peritaje, se estableció que esas balas fueron disparadas por la pistola CZ que portaba el acusado y con la que hirió también a los otros tres afectados. Miguel Neira, que se encontraba también en la carretera, se percata también de esta situación y efectuó una grabación con su celular, estableciendo que en un momento los militares se retiran y la gente así lo dice, pasan unos minutos, y siente disparos y ve el brazo de una persona que conducía una camioneta roja en la salida de la carretera hacia el norte, disparando hacia los manifestantes unas 8 veces, la que siguió al norte. La gente culpaba a los militares, pero a él le consta que no fueron ellos, los que se habían retirado ya del lugar, y porque él vio los disparos efectuados por el conductor de la camioneta roja. Alejandro Muñoz dio cuenta que su casa está ubicada a pocos metros del lugar, vio la manifestación en la carretera, eleva un dron de su propiedad y captó imágenes desde las alturas, de las barricadas, los manifestantes, el acceso sur a Curicó, la salida a la carretera hacia el norte, y dijo cómo vio aparecer o emerger por esa salida una camioneta roja, una Hilux doble cabina se inclina a decir, y sale una mano por la ventana del conductor que efectúa disparos hacia los manifestantes, no sabe cuántos, y luego escapa hacia el norte, escuchando de inmediato que había una persona herida, que corresponde a quien falleció. Tenemos entonces a los testigos Miranda, Neira y Muñoz que no se conocían entre sí, que desde sus respectivas ubicaciones ven lo mismo, una camioneta doble cabina color rojo que sale desde la alameda a la carretera hacia el norte, y al llegar a la carretera su conductor dispara un arma corta en contra de los manifestantes, y de inmediato cae herido Uribe Antipani. Todo ello cuando los militares ya se habían retirado del lugar. El perito Daniel Cáceres explicó todas las diligencias efectuadas en esta causa, desde el inicio hasta la Reconstitución de Escena realizada en febrero de 2020, donde él realizó un análisis que da cuenta que hay plena concordancia entre la camioneta y la altura de su ventana y el ángulo en que los proyectiles ingresan al vehículo Fiat Doblo conducido por Miranda,

señalando que Uribe estaba en el campo de tiro del acusado cuando este dispara. Por su parte, el perito balístico Eduardo Soto y el médico Germán Tapia Coppa de la PDI, dieron cuenta de los análisis efectuados para concluir que la bala que quitó la vida a Uribe no es compatible con la de un arma de guerra como los fusiles Sig que portaban ese día los militares, sino concordante con una munición 9 milímetros como la usada por la pistola CZ como la que portaba el acusado. Don Saul Tirado, del Servicio Médico Legal, dio cuenta de la autopsia a Uribe, de acuerdo al protocolo de Minnesota, donde pudo concluir que la causa de muerte fue una anemia aguda por herida penetrante a cavidad torácica, que traspasa gran cantidad de órganos vitales, entre ellos su corazón, compatible con un arma de fuego de baja energía como es una calibre 9 milímetros y no con un arma de guerra, pues no se observa pulpificación de sus órganos internos. Por su parte, el subinspector Veloso de la PDI dio cuenta de las labores investigativas desarrolladas en esta causa y su apreciación criminalística, en cuanto a la existencia del delito de homicidio de ese joven y la responsabilidad que le cabe al acusado en calidad de autor. El padre y la pareja de Uribe Antipani dieron cuenta de la forma en que tomaron conocimiento de los hechos, las consecuencias que han traído para su vida, y en particular para su hijo Máximo Baltazar, el cual aun no comprende la ausencia de su padre.

Asimismo, se pudo establecer que el acusado tiene una inteligencia normal, sin daño orgánico, y a la época de los hechos actuó con su juicio de realidad conservado y sin la presencia de rasgos sicóticos, y si bien el Servicio Médico Legal a través de la siquiatria María José Villena y el sicólogo Jonathan Valdés han expuesto que los elementos ambientales estresantes, la personalidad propia del acusado y su trastorno afectivo bipolar aparentemente descompensado por voluntad propia, afectaría en grado leve o menor su voluntad, no afecta su capacidad de discernir y autodeterminarse, y por tanto no es posible estimar la concurrencia de una eximente de inimputabilidad y, tampoco, una imputabilidad disminuida.

Terminó indicando que faltan pocos días para que las víctimas directas y la familia de José Uribe recuerden la aciaga noche en que sus vidas cambiaron abruptamente,

algunos afortunadamente están con nosotros, Uribe Antipani no tuvo esa posibilidad, pero todos ellos claman justicia y eso es lo que pide a este Tribunal.

Concedida la palabra para su **réplica** a lo expuesto por la Defensa, señaló que esa parte plantea que los hechos ocurridos en la Alameda no podían ser calificados como homicidio frustrado, primero, por el principio de congruencia, por cuanto no se dijo que el acusado al disparar a mansalva a las personas que circulaban por ese lugar lo hizo con intención de matar, pero eso no es así, se indica el detalle de la acción realizada por el acusado y al calificar la misma se indica que los hechos constituyen el delito de homicidio frustrado respecto de las tres víctimas heridas. Según el texto del artículo 341 del Código Procesal Penal, tal como se ha señalado, la acusación indicó claramente los hechos que configuran esos delitos. La Defensa también arguyó que las etapas imperfectas de ese delito no admiten el dolo eventual, sino que solo el directo. Pero es la Defensa la que habla de dolo eventual, pues el Ministerio Público estima que Fuenzalida Calvo actuó con dolo directo, que, citando a Novoa y Matus, equivale al dolo de consecuencias seguras o necesarias, entendiéndose por tal cuando el sujeto tiene la intención de matar, y busca el resultado, abarcando todas las consecuencias que, aunque no las busque, prevé que necesariamente se producirán. Ello porque el acusado efectuó diversos disparos con un arma de fuego, y él mismo lo reconoció, habiendo muchas personas alrededor. Doña Carmen Salinas lo ve disparar directamente a las personas en calle Argomedo y Miguel Ayala al recibir el impacto en su espalda se vuelve y ve que él le había disparado. Los disparos los hace el acusado donde circulaba gran cantidad de personas, impactando a tres de ellos, uno en una pierna, otro en una pierna y otro en el tórax, y luego se desplaza al sector de la carretera y dispara directamente a los manifestantes, causando la muerte a uno de ellos. Se trata claramente de un dolo directo, el imputado no quería dispersar a los manifestantes, no disparó hacia arriba, lo hizo directamente contra ellos, a matar. La Defensa señala que no se ha establecido su participación en los hechos de la Alameda, indicando todo lo que no se estableció, pero evita señalar lo que sí se estableció, y que se señaló en el alegato de clausura. En tercer lugar, la Defensa pone en duda la participación de su representado en lo sucedido en la carretera, indicando que pudo haber otra arma,

además de la del acusado y las de los militares que ya se habían retirado, pero rehúye considerar los tres testimonios claros, contestes y de personas ajenas unas de otras, que dan cuenta que los disparos que dieron muerte a Uribe Antipani no venían de una supuesta persona que supuestamente andaba disparando en el lugar, no, dicen que provenían de la persona que conducía una camioneta roja, lo que se complementa por la pericia balística que concluyó que las balas encontradas en el furgón conducido por el testigo Cristian Miranda fueron disparadas por el arma del acusado. Finalmente, la Defensa argumenta respecto de la inimputabilidad del acusado, que la siquiatria del Servicio Médico Legal de Rancagua María José Villena habría señalado que el imputado habría tenido imputabilidad disminuida, y ello no es efectivo. Volvió a escuchar el audio y no dijo eso, solo que el tener una enfermedad siquiátrica no es homologable a tener una imputabilidad disminuida. Lo relevante es que al tiempo de los hechos tenga su juicio de realidad alterado, y aquí había una afectación menor, leve en palabras del sicólogo Valdés. Por eso la tesis del Ministerio Público de negar tanto la inimputabilidad como la imputabilidad disminuida. Destacó aquí que las pericias aportadas por su parte fueron efectuadas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, sin tener interés alguno ni vinculación con los participantes, lo que debe ser altamente valorado.

TERCERO: Acusación particular deducida por el abogado Carlos Gajardo Pinto y sus argumentaciones en el juicio. Ya consignamos que en este proceso dedujeron acusación particular los abogados **Carlos Gajardo Pinto y Pablo Norambuena Arizábalos**, en representación de Claudia Belén Pezo Sáez, y esta a su vez actuando por representación legal en calidad de madre de su hijo menor de edad Máximo Baltazar Uribe Pezo.

Conforme se recogió en el auto de apertura, los hechos de esa acusación particular son idénticos a los que consigna la acusación Fiscal, los que esta parte estimó son constitutivos de los siguientes delitos:

a) Delito de Homicidio, en perjuicio de la víctima don José Miguel Uribe Antipani, ilícito previsto en el artículo 391 N°2 del Código Penal, en grado de ejecución consumado; y,

b) Los delitos consumados de porte y tenencia ilegal del arma de fuego del tipo pistola CZ y municiones y tenencia ilegal de arma de fuego del tipo fusil y municiones, ilícito previsto y sancionado en el artículo 2, 9 y demás pertinentes de la ley 17.798 de control de armas.

A su juicio, al acusado se le atribuye en esos delitos una participación en calidad de autor conforme al artículo 15 N°1 del Código Penal, toda vez que ha tomado parte en la ejecución de los hechos de una manera inmediata y directa.

Estimó que respecto del acusado concurre la circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal contenida en el artículo 11 N°6 del Código Penal, esta es, tener irreproachable conducta anterior.

Finalizó pidiendo que el acusado Francisco José Fuenzalida Calvo sea condenado a las siguientes penas: Respecto del homicidio consumado, a la pena única de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, comiso de las especies incautadas, accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, demás accesorias legales, incorporación de huella genética al registro de condenados, conforme al artículo 17 de la ley 19.970, con costas; respecto del delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego del tipo pistola, marca CZ, y municiones, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, comiso de las especies incautadas, accesorias del artículo 29 del Código Penal, demás accesorias legales, con costas; y respecto del delito de tenencia de arma de fuego del tipo fusil marca Mauser, y municiones, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, comiso de las especies incautadas, accesorias del artículo 29 del Código Penal, demás accesorias legales, con costas.

En el juicio, en su **alegato inicial**, el abogado **Carlos Gajardo** señaló que alegaba en representación de la familia de José Uribe Antipán y hacía suyas las palabras del fiscal. Efectivamente es imposible disociar estos hechos de lo ocurrido en el país a partir del 18 de octubre, porque la protesta social que legítimamente se levantó con mucha fuerza en esos días y que tiene al país convulsionado hasta el día de hoy, y se origina básicamente en

un tema que nos atañe también a los que hemos dedicado nuestra vida al Derecho, como es la profunda desigualdad instalada en el país, de la que el sistema judicial es un reflejo. Cuando la protesta se enfoca en las desigualdades que el tratamiento de la justicia da a sus ciudadanos este juicio puede ser un buen ejemplo. Tenemos por una parte una víctima, un joven de 25 años asesinado, que ejercía su legítimo derecho a la protesta, a quien no se le puede asociar ilícito alguno, que se encontraba en ese momento sin trabajo y que levantaba la voz para exigir más justicia, pero sus gritos fueron acallados por las balas de un empresario curicano que hasta esa fecha ejercía perfectamente sus actividades comerciales en la zona, y que tras este hecho se encuentra en prisión preventiva. Este Tribunal tendrá que conocer estos hechos, aquilatarlos, y dictar una sentencia absolutoria o condenatoria, dependiendo de la entidad de la prueba que los acusadores aporten. No deja de destacar las diferencias que en una misma causa se van viendo, como nacen de que el imputado pudiera tener una defensa privada de primer nivel y acceso a muchas pericias, porque tiene recursos para ello, versus la posibilidad que ha tenido la familia de Uribe Antipani, cuya representación han aceptado asumir, si bien Curicó no es donde ejercen ni se especializan en homicidios. Por tanto, hay una carga simbólica importante en este juicio respecto de lo ocurrido en el país. Su desafío como acusadores está en probar la participación del acusado, ya que no está en discusión la existencia del homicidio, pues Uribe fue asesinado. Se desplegarán testimonios y pericias a cargo de las agencias estatales que unidas como rompecabezas mostrarán que los disparos a esa víctima y las otras de esta causa fueron realizados por Francisco Fuenzalida Calvo. La Defensa elaboró una forma de intentar evadir su responsabilidad sobre la base de la eximente de responsabilidad penal de locura o demente. Es decir, el próspero empresario que era el acusado hasta el 18 de octubre es a partir de esa fecha una persona incapaz, y para ello habrá una segunda tanda de peritajes, tesis que desde ya rechaza. El acusado se paseó por buena parte del Código Penal, homicidio, consumado y frustrado, porte de armas de fuego y municiones y daños, se trata de delitos que son extremadamente graves. La víctima y la sociedad en su conjunto reclama para estos hechos una sanción acorde y proporcional, y eso es lo que intentará acreditar.

En su **alegato de clausura**, el mismo profesional reiteró que hacía suyos los argumentos expuestos por el fiscal y expresó que la abundante evidencia recolectada en este juicio permite establecer más allá de toda duda razonable los hechos de la acusación, destacando que el acusado ese día condujo la camioneta indicada por las calles de Curicó entre las 22 y 22:30 horas y que efectuó diversos disparos. Son fundamentales los cuantiosos videos que muestran su desplazamiento y el incidente en que fue controlada su identidad por el suboficial Osses de Carabineros, incluso se tuvo la fotografía de la patente de la camioneta tempranamente. Hay numerosos testigos que refieren que efectuó disparos. Es un hecho indubitado que tras ese control no se dirigió a su casa por la Avenida España, ruta que lo llevaría directo, sino que se desplazó por la Alameda hacia el sur, tomando el empalme con la carretera hacia el norte, y en esa intersección efectuó nuevamente disparos. Hay una serie de evidencias que así lo demuestran, fundamentalmente la unión del testimonio del señor Miranda que queda circunstancialmente detenido en su furgón patente KKTG33, cuando su vehículo recibe dos disparos, uno de los cuales quedó incrustado, fue rescatado y sometido a examen científico, el que demuestra que fue disparado desde el arma de Fuenzalida Calvo. Es un hecho indubitado también que en ese momento los disparos que efectuó éste hieren mortalmente a José Uribe Antipani, siendo muy importante la declaración del testigo Miranda, que dijo que lo vio, descartando la tesis de que pudiera ser herido con anterioridad por las armas de los militares, lo que fue ratificado por las otras versiones recogidas, y, por el trabajo impecable de los peritos aportados por el Ministerio Público. Al menos hay tres testigos no conocidos entre sí, por tanto, sin posibilidad de estar concertados, que coinciden en que desde una camioneta roja se efectuó disparos y acto seguido resulta la víctima herida de muerte. Alejandro González efectuó filmaciones con su celular y también desde un dron, pudiéndose apreciar el lugar y que a esa hora el número de personas presentes no pasaba las 50, como pudo verse; Miguel Neira que graba con su propio teléfono, y Cristian Miranda que aporta, además de su declaración, su vehículo con el proyectil, al que agrega a Nicolas González, que es relevante pues aporta un video donde se ve la parte inicial del suceso en que están los militares y luego otro en

que estos se retiran, retiro que permite que este testigo y sus acompañantes avancen en dirección a donde justamente momentos después es asesinado Uribe, detiene la grabación, y luego al reanudarse Uribe ya había sido herido y se encontraba próximo a fallecer. Esos cuatro testimonios son contestes y se unen con evidencia material que los respalda como son los videos y el proyectil, llevando como única tesis posible que los disparos efectuados por el acusado son los que asesinan a la víctima. Se contó como corroboración también las pericias balísticas que dan cuenta de la concordancia de los disparos de Fuenzalida Calvo con la herida mortal, y en el mismo sentido la autopsia. Es decir, uniendo cada una de las piezas del puzle se forma la figura completa que muestra que el encartado es el autor de los homicidios frustrados y del homicidio simple consumado, en que le cabe participación como autor. La incautación posterior de armas y municiones permiten establecer también los delitos objetivos de la ley de control de armas. La Defensa ha tratado de establecer que el fusil era una herencia familiar, como si eso lo eximiera, cuando la manera en que el arma llegó a poder del acusado, sin efectuar la inscripción correspondiente, es indiferente, no cambia el desvalor de la conducta y el reproche penal que esa conducta merece.

Respecto de la inimputabilidad por locura o demencia, en los términos del Código Penal, para lo cual se aportaron las pericias de la siquiatra Vilma Ortiz y la psicóloga Susana Pavié, quienes en sus palabras hicieron un juicio retrospectivo del estado en que se encontraba el acusado al momento de los hechos, lo que hacen cuatro meses después, hipotetizando que estaba inimputable. Pero quedaron muy expuestas ante el contraexamen, pues las conclusiones a las que arriban son diametralmente distintas al informe escrito que realizaron y que sirve para preparar el contraexamen, como reconocieron las mismas peritos. Al momento de declarar dicen que cuando los hechos ocurren el acusado estaba cursando una fase maniaca y al periciarlo, en enero del 2020, aún estaba cursando una hipomanía, y además hablaron de que al 21 de octubre cursaba un cuadro paranoico. Reconoce Vilma Ortiz que estas conclusiones son muy importantes para entender lo que ocurrió y que ninguna de las tres fue parte de su informe. Por eso, antes de discernir si lo que dice su peritaje es lo correcto o si lo señalado en el juicio lo es, lo cierto es que esto afecta verosimilitud. No es posible otorgarle verosimilitud a la perito

si dice algo sustancialmente distinto a lo consignado en su informe. No deja de llamar la atención, además, la concordancia entre las dos, es extraño que ambas no hayan consignado esas tres conclusiones en su informe y sí las dijieran en el juicio, es difícil de creer, como que se pusieron de acuerdo después. Son conclusiones nuevas, distintas, y el reproche formal que merecen es fundamental. Por otro lado, en cuanto al fondo, las peritos piden que hagamos valor ciegamente a su experticia, que no tiene aval en alguna prueba aportada. No hicieron test porque supuestamente porque era tan evidente el estado en que se encontraba el acusado que no era necesario. Además, hay inconsistencias con la evidencia aportada, porque el estado maniaco, que sería exultante, exuberante, no es refrendado por nadie en el juicio. Las declaraciones de la esposa del acusado y su hija no hablan de que antes de salir o al volver a la casa tuviera un estado de euforia, lo ven tranquilo, sale a ver a un amigo, lo ven para adentro, como dijo la cónyuge al ser entrevistada por la perito, y en el momento en que tiene contacto con personas en el curso de los hechos, con Osses, tampoco está en estado de descontrol, si hubiera sido así lo hubieran tomado detenido. No hay tal estado de euforia o manía. Tampoco lo encuentran así los policías que lo van a detener a su casa, lo encuentran durmiendo. Una de las consecuencias de la manía es que no se puede dormir. Tampoco lo ven con manía los paramédicos que lo vieron en el centro penitenciario de Curicó y Parral. Solo en el testimonio verbal ante el tribunal de las peritos, siendo desvirtuado por los peritos del Servicio Médico Legal.

Solicita la condena del acusado, siendo necesario que el ordenamiento jurídico actúe otorgando justicia a cada chileno que recurre a él.

Por último, en su **réplica**, expresó que cuando los hechos no acompañan en una causa la tentación es arrancar al derecho, y eso se ha visto en el alegado de la Defensa, en que la contundencia de la prueba ha permitido dar por acreditados los hechos, y por eso la recurrencia a la vía jurídica para intentar “escamotear” la responsabilidad. No es la primera vez que, en nuestro país, frente a una acusación de graves hechos, se intenta apelar a la incapacidad mental para eludir la responsabilidad. En la especie eso es

exactamente lo que ocurre. Se intenta hacer aparecer como inimputable a una persona que, de acuerdo a los propios testimonios aportados por la Defensa, en los días en que se produjeron estos hechos, negociaba contratos por más de 200 millones de pesos, contaba con el apoyo de su familia, como depusieron sus hermanos, que le brindaron su apoyo emocional y económico, y en esos testimonios también se colige que nadie pudo observar ese cuadro de manía que vieron las peritos Ortiz y Pavié, tampoco su contraparte, con la que negociaba respecto de las máquinas, el momento en que debía empezar a operar, etc. Más bien se acreditó básicamente una vida normal, que se casó, que hijos y negocios, en unos le fue bien y en otros no tanto, pudo construir una vida bastante privilegiada, con una gran casa, vehículo, lujosas vacaciones, con los sabores y sinsabores que todos tenemos. Reprocha la falta de coherencia de las pericias de la Defensa, por el hecho inaudito de que las conclusiones que se expusieron ante el Tribunal son distintas de las contenidas en sus informes escritos, las que quedaron en evidencia con sus propias declaraciones, y para salvar esa falta lo que hace el defensor fue citar estudios científicos para explicar la vinculación entre manía y otros términos psiquiátricos y justificar por qué no estaban en sus informes. Es decir, pretende incorporar prueba en el alegato de clausura. Si eran términos tan relevantes lo que tenía que haber hecho fue incorporar esa prueba en el momento oportuno. El estado maniaco del 21 de octubre y que permanecía en enero de 2020 como hipomanía nadie lo vio, ni la cónyuge, la hija, los policías que lo detuvieron, los paramédicos que lo recibieron en los recintos penales, los hermanos, la contraparte. Solo lo vieron las peritos y cuatro meses después, algo que nadie más fue capaz de ver. Y además lo ven 2 años después, en el juicio. Todo ello sin dejar constancia de ello en sus informes. El proceso penal tiene reglas para evitar la charlatanería, el acomodo de las conclusiones según convenga en el juicio, ése es el valor de exigir un informe y un testimonio escrito, para contrastar. Por eso pide que no sean considerados. A propósito de la corrección efectuada por el fiscal respecto de lo expuesto por el Defensor sobre la psiquiatra Villena, la inimputabilidad y la inimputabilidad disminuida son conceptos jurídicos que debe resolver el Tribunal, no hay una transferencia de competencias, y la Defensa pretende llevar al Tribunal a un hecho ridículo, que este empresario que tenía una vida normal, en un evento

que solo vieron dos profesionales, actuó en un estado de manía que lo hace inimputable. Esa conclusión lleva a la justifica a hacer un ridículo.

CUARTO: Adhesión a la acusación fiscal del abogado Julio Alex Herrera Rosales y sus argumentaciones en el juicio. Como se reseñó, el abogado Herrera Rosales, en representación de los querellantes Nicolás Francisco Espinoza Rojas y Ricardo Andrés Solís Opazo, se adhirió a la acusación del Ministerio Público. Aquel letrado sostuvo, en su **alegado de inicio**, que adhería a las palabras de inicio de sus colegas y, adelantándose a lo que planteará la Defensa, respecto a que su representado es loco o demente con el fin de disminuir su responsabilidad, esa tesis se basará en informes que son totalmente parciales, se trata de pericias contratadas por él con todos los recursos de que dispone; no hay un informe del Servicio Médico Legal que avale esa situación, y por ello no podrá acreditarse. Se trata de una persona que hacía su vida totalmente normal, que realizaba negocios, era un próspero empresario, y tenía un arsenal de armas en su casa, y hace mucho tiempo se preparaba no sabe para qué, algunas de ellas de grueso calibre como lo era un fusil, y llegado el momento las iba a utilizar. Nadie tiene eso si no es para usarlo. Como resultado de las acciones del acusado hiere a sus representados, junto al fallecido Uribe y una cuarta persona, Ayala, personas que, sobre todo Ricardo Solís, quedó invalidado de su brazo izquierdo, sin ninguna posibilidad de trabajar, es decir, ha sido un daño tremendo. El artículo 1 inciso segundo es claro, él dice que es loco o demente, pero es responsable de dicha situación penal, por lo que no podrá eludir su responsabilidad, y el único veredicto que puede adoptarse, al igual que el caso de un norteamericano responsable de homicidios frustrados, debe ser condenatorio, porque no lo hizo en una situación de locura, sin ser interrumpido por nadie.

En su **alegado final**, hizo nuevamente suyas las alegaciones de sus predecesores, indicando que se enfocaría en el dolo y la participación. Esta última se encuentra a su juicio claramente establecida en cuanto a los hechos que afectaron a sus representados, ubicándose a Fuenzalida Calvo en los lugares donde realizó disparos. El dolo homicida se establece por varios factores. Primero, su propia declaración ante el Ministerio Público,

además, él no disparó al aire, pues se contradice con los hechos, todos fueron directos, sin que algo se interpusiera, a la altura del pecho, del brazo o la pierna, ninguno fue producto de un rebote, por lo cual hay dolo directo de matar, el que resultó en el caso de Uribe. Además, las armas empleadas, es un experto en armas, no es un principiante, y así le fueron encontradas, no estaba aprendiendo a disparar. No hay tampoco un proceso síquico que descarte dicho dolo, pues el Servicio Médico Legal señala claramente que hay un descontrol de impulsos, los otros elementos son de carácter menor, y ello da cuenta que los disparos los realizó fría y calculadamente. Por lo tanto, no se ve diferencia con un delito común. Son actos encaminados a causar la muerte de cualquier persona. Lo importante es que dispare, va a ser responsable igual de esa acción, como se desprende del artículo 1. Sobre la situación mental, la perito del Servicio Médico Legal señaló que el pararse en la luz roja, manejar tranquilamente, parar a increpar a otra persona, su actuar antes, durante y posterior, en la cárcel se lo ve normal, no alterado, incluso con la policía cuando fue detenido; da cuenta que no estaba alterado, descartando un actuar loco o con imputabilidad disminuida. Estima que el único veredicto posible en este caso debe ser de culpabilidad respecto del homicidio frustrado de Nicolás Espinoza y Ricardo Solís.

Otorgada la palabra para **replicar**, nada agregó.

QUINTO: Adhesión a la acusación de la querellante Municipalidad de Curicó y sus argumentaciones en el juicio. El abogado **Juan Barrera Correa**, en representación de la Municipalidad de Curicó, se adhirió también a la acusación del Ministerio Público. En la **apertura**, la apoderada señora Espinoza tomó la palabra y expresó, que hace suyas las alegaciones de la Fiscalía de Curicó, agregando que las pruebas rendidas llevarán a establecer la culpabilidad de la persona imputada, debiéndose buscar la sanción más adecuada y que en derecho corresponda.

En el **cierre**, indicó que, sin perjuicio de lo señalado por el Ministerio Público y los otros querellantes, los que hace suyos, hemos podido apreciar que respecto del acusado se estableció claramente su participación en los ilícitos que se le imputaron, en base al análisis señalado y que por economía procesal no repetirá. Hace énfasis en los delitos por

los cuales la municipalidad de Curicó se querelló, y que compartió el Ministerio Público. El acusado, consciente de sus acciones, realizó actos reiterados considerados por él como la forma más idónea de reaccionar frente a las manifestaciones que ocurrían en diversas partes de la ciudad, siendo así como ese día 21 de octubre, portando la pistola CZ mencionada, dos cargadores y municiones de calibre compatible, se desplazó por arterias de Curicó y, sin razón suficiente, realiza diversos disparos, que dejaron con lesiones de distinta magnitud a tres víctimas, que sin siquiera conocer al imputado reciben balas por el solo hecho de encontrarse en el lugar. Así, Nicolás Espinoza recibió un impacto en su muslo izquierdo que le causó lesiones graves; Ricardo Solís en su recibió uno en su brazo izquierdo, sufriendo lesiones de mediana gravedad; y Miguel Ayala resulta con u trauma torácico. Estas personas aun no cumplían 30 años, por lo que la acción del imputado pudo haber puesto fin a la vida de tres jóvenes promesas. Aun así, tras el actuar doloso del acusado, este continua su camino, sin prestarle ayuda a las víctimas ni arrepentirse de sus actos aparentemente mortales y decide continuar su camino por avenida Manso de Velasco hasta ingresar a la carretera 5 sur, donde comete un nuevo ataque, esta vez hiriendo de muerte a una persona. Aunque su parte no se adhirió a este delito, su ocurrencia resulta fundamental para el correlato de los hechos. En la Reconstrucción de la escena, en la que el imputado no quiso participar, el perito Henríquez, de la PDI, mostró la forma cruel y despiadada en que aquel atacó a las víctimas en plena vía pública. Las tres víctimas acudieron al peritaje y explicaron la forma del actuar del imputado, su frialdad y poco arrepentimiento. Su relato concuerda íntegramente con los relatos de los testigos que estaban en el lugar de los hechos aquella jornada, y que fueron citados a declarar ante este tribunal. Estos hechos aclaran no solo la participación del imputado, sino la conciencia que tenía de su propio actuar, quien no solo efectuó disparos injustificados y aleatorios, sino que tras ejercerlos se dirigió a su domicilio, ubicado en Zapallar, donde, de acuerdo a su propio relato, llegó a comer, a beber y a dormir, dejando manifiesto su poca intención de socorrer a las víctimas. El testigo Miguel Neira indicó que el acusado huyó inmediatamente después de disparar contra el afectado José Uribe. Respecto de su participación en calidad de autor, los diversos medios probatorios expuestos acreditan que

no existió una colaboración sustancial en los hechos que se le imputan a don Francisco Fuenzalida Calvo, puesto que se contó con las diversas versiones entregadas, como un todo. No puede dejar de mencionar que el artículo 11 N°9 no resulta aplicable, pues la colaboración no fue tal, como dejó ver la prueba aportada. Quedó en evidencia, además, que las pocas declaraciones del imputado no aportaron nada relevante a esta causa, todo lo contrario, trató de confundir y eludir su responsabilidad. El hecho de no querer colaborar en instancias en que pudo hacerlo no hace más que dejar en evidencia su intención de dilatar el proceso. Finalmente, estima acreditados más allá de toda duda razonable los delitos imputados, a saber, homicidio frustrado del artículo 391 N°2 en relación al 7 del Código Penal, y el delito de porte ilegal de arma de fuego, establecido en el artículo 14 inciso primero de la ley 17.798, y por los cuales su parte solicita que se le apliquen las penas señaladas por el Ministerio Público y los querellantes, sin ningún tipo de atenuante y con expresa condenación en costas.

Otorgada la palabra para **replicar**, solo reiteró que adhería a lo expuesto por la Fiscalía.

SEXTO: Posición y argumentaciones de la Defensa. La Defensa planteó, en su **alegado preliminar** y en boca del letrado Mauricio González, que, en un Estado de Derecho Democrático como el nuestro, tanto la sentencia que debe dictarse como la justifica que imparta el Tribunal, deben basarse exclusivamente en las pruebas que en el juicio se rendirán, por más que la opinión pública, publicada en distintos medios de comunicación y redes sociales, tenga condenada a su representado desde los albores del procedimiento. Eso solo será posible si los acusadores cumplieran a cabalidad con aquel deber que les impone el artículo 340 y produzcan prueba unívoca, idónea, múltiple y de tal entidad que permita vencer la presunción de inocencia que ampara a Francisco Fuenzalida, alcanzando el estándar legal, es decir, más allá de toda duda razonable, lo que estima no estarán en condiciones de cumplir, más allá de las promesas escuchadas.

Desde el inicio de la investigación, con más prejuicios sociales y políticos que antecedentes concretos, algunos acusadores hablan de que él era un próspero empresario

y que el día de los hechos obró en plenitud de sus facultades mentales. Pero, con la prueba que se producirá, se establecerá que Francisco Fuenzalida tiene 62 años de edad, es técnico mecánico de profesión, casado con María Josefina González, fue padre de cinco hijos, cuatro de ellos actualmente vivos, y es una persona que nunca antes de estos hechos había sido sujeto de detención, formalización y menos condenado por delito alguno. La pregunta que surge naturalmente es entonces qué ocurrió ese 21 de octubre que ocasionó su detención y posterior formalización por los delitos de porte de arma de fuego y municiones y tres homicidios frustrados. Se refiere a esos delitos y no al homicidio consumado de José Miguel Uribe, pues fue un hecho público que él no fue originalmente sindicado de ese delito, recién el 11 de diciembre, fue ampliada su formalización para incorporar este otro hecho. Al inicio el Ministerio Público le atribuyó responsabilidad a un funcionario militar, Juan Carlos Reyes Araneda, quien estuvo en prisión preventiva casi dos meses, lo que incluso fue ratificado por el Corte de Apelaciones de Talca.

Yendo a lo que será la controversia, dirá, en primer lugar, que la afirmación sobre que su representado haya sido próspero empresario está muy lejos de la realidad y no pasa de ser un deseo que conviene a las pretensiones punitivas de los acusadores. Desde temprana edad él fue diagnosticado con una depresión severa, que se acentuó significativamente desde que uno de sus hijos, que eran cuatrillizos, fallece producto de un cáncer linfático a las 7 años. Su enfermedad, aparentemente inofensiva cuando es tratada, no es tal cuando se combina con un trastorno de personalidad afectivo bipolar, que le fue diagnosticado hace 20 años, no es algo que apareció el 21 de octubre de 2019. Recibió durante esos años en mayor o menor medida atención psiquiátrica, principalmente en Santiago, además del respectivo tratamiento farmacológico. Sin embargo, debido a su deficiente situación económica, a mediados del 2019, debió cambiarse desde médicos particulares en Santiago al sistema GES en Curicó, y en septiembre es atendido por un psiquiatra del sistema público, que confirma ese diagnóstico de depresión severa y bipolaridad, cambiando a su vez su medicación -aspecto que es muy importante- por medicamentos bioequivalentes, los que alcanzó a consumir alrededor de 3 semanas, pero al sentir que le hacían peor tomó la decisión de abandonarlos. Así estaba al momento de

los hechos. Es decir, por al menos 3 semanas no tenía medicación alguna ni tratamiento de sicoterapia. En el ámbito laboral, es cierto que en algún tiempo su representado fue un próspero empresario, llegó a tener cuatro empresas, pero producto de decisiones erróneas, coherentes con las fases maníacas de su trastorno, tuvo grandes pérdidas económicas, al punto que en los dos años anteriores a los hechos solo funcionaba una de sus empresas, y a duras penas, Fullmaq Limitada, cuyo giro era la prestación de servicios en el movimiento de tierras, trabajo que prestaba solo a medias y prácticamente a un solo cliente, una empresa agrícola de San Javier, pues contaba con máquinas retroexcavadoras antiguas, que constantemente quedaban en pane. Esos problemas económicos, a mediados del 2019, se veían acrecentados porque en ese tiempo tenía tres hijos en universidades particulares en Santiago, con los gastos que ello conlleva. A su vez, esos problemas y su enfermedad generaron severas discusiones con su cónyuge, de variada magnitud, hasta que tomó la decisión de separarse y poner fin de 34 años de matrimonio. Los continuos incumplimientos contractuales 2018 y 2017 provocaron que su cliente Agrícola HM, para la renovación del contrato que debía empezar a ejecutarse en septiembre de 2019, le exigió la compra de tres máquinas excavadoras nuevas. Don Francisco, que asistía poco y nada a su empresa en esa época, se apoyó en su hermano Gastón, quien sí era un próspero empresario y manejaba finanzas, el que lo asesoró, decidiendo comprar dos máquinas a través de un leasing por la suma de 200 millones de pesos. Con ese pago don Francisco esperaba no solo servir ese contrato sino su deuda histórica. Pero eso no ocurrió y nos conectamos aquí con el estallido social. Si bien llegó a acuerdo con el cliente, las máquinas no llegaron en la fecha convenida, que era a fines de septiembre, sino a mediados de octubre, y recibió ultimátum de la empresa de que debían estar operando en San Javier el lunes 21 de octubre de 2019. Sin embargo, como todos sabemos, el 18 de octubre comenzó el estallido social, y más allá de la legitimidad de la protesta, no podemos coincidir con la violencia que se desató, con barricadas, quemas y desordenes que se produjeron esos días. Las barricadas provocaron diversos cortes de carreteras, entre ellas la de Curicó al sur, lo que provocó que don Francisco ese lunes no pudiera despachar esas máquinas hacia San Javier, lo que provocó que el gerente de la Agrícola -vendrá al juicio Paulo Toro y

declarará profusamente al respecto- llamó esa tarde a don Francisco para decirle que el contrato se cancelaba definitivamente, por el incumplimiento y también porque la empresa revisaría las decisiones de inversión por el estallido social en desarrollo. En ese estado de agobio don Francisco llegó a su casa la tarde del lunes 21 de octubre, y en su hogar tuvo una nueva y muy dura discusión con doña Josefina. Acto seguido, él comenzó a ver televisión y redes sociales y tomó conocimiento de los violentos disturbios que se vivían en el país, no ajenos a Curicó. Dentro de esa inusitada violencia el 21 en la noche recibió información por WhatsApp de un amigo muy confiable, Mario Undurraga, que le informa que el Unimarc de avenida España, donde él con frecuencia iba a comprar, había sido saqueado, que el peaje de acceso a Curicó por esa avenida había sido quemado y que una turba de gente avanzaba hacia Zapallar con el mismo propósito, es decir, para saquear y quemar las casas del sector donde él vivía. Eso provocó su reacción y, sin pensarlo, sacó su pistola y en su camioneta se dirigió a Curicó desde Zapallar, por avenida España, donde confirmó que el Unimarc y el peaje estaban quemados, y al llegar a la intersección de la Alameda Manso de Velazco con Merced, se encontró con una turba violenta de gente enfrentándose con carabineros y estos absolutamente sobrepasados. Allí ocurrió que, tal como él declaró el mismo día, quedó detenido en ese semáforo por la gran cantidad de gente que obstruía su paso y los vehículos policiales atravesados en la calzada, momento en que él tomó su pistola 9 milímetros y a través de la ventanilla del copiloto efectuó 4 o 5 disparos para disolver la turba y poder salir del lugar. Esto lo reconoció unas horas después ante la PDI. Pero si habla de reconocer solo disparos es porque cuando declaró no vio ni advirtió haber herido a alguna persona. ¿Cómo llega él a ese cuartel policial? Esa madrugada, sin orden previa, funcionarios de la PDI llegan a su domicilio, él les permite el ingreso, le comentan que hay algunos heridos en la Alameda y que su camioneta estaba involucrada y le consultan por armas de fuego, y él las entrega. A diferencia de lo que dice el señor Herrera no se trataba de un arsenal, y el fusil incautado data del año 1902, que estuvo muchos años en manos de su padre y a su fallecimiento le fue entregado como una reliquia familiar. No tenía ningún otro fin. Además, él en su casa no solo entrega estas armas, sino que es invitado al cuartel policial, donde se encuentra con el fiscal señor Rojas

y, abogado que lo asista, renuncia a su derecho a guardar silencio y declara, esperando que se tramite la orden de detención. Es decir, pese a que en su camioneta pudo huir donde quisiera, él se fue a su casa y colaboró en todo momento y reconoció lo que había hecho. Eso no le gusta el Ministerio Público y propone elementos fácticos distintos, pero quedará claro que eso no fue así.

Respecto de los hechos que afectaron a Ricardo Solís, Nicolás Espinoza y Miguel Ayala, resulta improcedente calificarlos como homicidio frustrado, por una cuestión de congruencia y la naturaleza de las lesiones, se trata de delitos de lesiones y así se establecerá. Citará precisamente el fallo del caso del norteamericano condenado en Viña del Mar, que, a diferencia de lo mencionado por el colega Herrera, si bien el Tribunal oral dijo que era homicidio frustrado, la Corte Suprema invalidó ese fallo y dictó uno de reemplazo donde recalificó los hechos a lesiones. Alegará la falta de participación en dichos homicidios frustrados, misma postura que planteará respecto del homicidio consumado en la persona de Uribe Antipán.

En la preparación se solicitó consignar algunas palabras sobre la falta de responsabilidad penal por falta de culpabilidad. Esto no es tan simple como se propone, porque no es simplemente una cuestión de locura o demencia. Postula que su representado no podrá ser condenado por delito alguno, pues si bien es posible que se establezca algún hecho típico y antijurídico, no podrá establecerse que hay culpabilidad, por encontrarnos frente a una inimputabilidad. Esto hay que analizarlo a raíz de la teoría del delito y en particular de la teoría normativa pura que impera en nuestra doctrina y jurisprudencia y que resulta muy distante de estas referencias que se hacen a la locura o demencia. El análisis de la imputabilidad requiere un estudio mucho más fino, que expresará en la clausura, una vez rendida la prueba.

En su **alegato de clausura**, a su turno, indicó que, respecto de lo expuesto en la apertura con una relación a los hechos vinculados a la vida, negocios y enfermedad mental de su representado, estimó que ellos resultaron plenamente acreditados, con las consecuencias jurídicas que señalaría más adelante. Esta Defensa propone un análisis un

poco más jurídico que el que se ha hecho por los demás intervinientes y desde ese punto de vista partiría analizando los hechos que afectaron a las víctimas Ricardo Solís, Nicolás Espinoza y Miguel Ayala. Estima, como anunció, que corresponde un resultado diverso del homicidio frustrado propuesto por la fiscalía y sus adherentes, resultando más adecuado calificarlos como delitos de lesiones, y hay dos motivos para estimarlo así, uno procesal y otro de fondo. En lo procesal, el artículo 341 del Código Procesal Penal consagra el principio de congruencia, conforme el cual la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación, resultando prohibido para el Tribunal condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Para acreditar un hecho de homicidio deben describirse todos y cada uno de los elementos de ese tipo penal, y el problema es que los hechos descritos no se condicen con homicidio simple en grado de frustrado. El fiscal indica que el acusado circulaba en su camioneta portando una pistola, con la cual realizó disparos directamente contra un grupo de personas, resultando lesionadas esas tres víctimas. Pero en parte alguna de esta descripción fáctica se indica que haya disparado con la intención de matar o que haya puesto de su parte todo lo necesario para que la muerte se consumara o que esta no se verificó por causas independientes de su voluntad. Tampoco se indica que las heridas sufridas por las víctimas eran necesariamente mortales, o que las víctimas no fallecieron debido a los socorros médicos suficientes y oportunos que estas recibieron. En orden a ello no se puede configurar homicidio frustrado. En segundo término y desde una óptica sustantiva, estima que un adecuado examen del punto en cuestión exige efectuar su análisis a la luz de la teoría del delito, en especial en el ámbito del elemento tipicidad y más precisamente en sede de faz subjetiva del tipo penal, esto es, el dolo. Al efecto, se debe considerar que tanto la mayoría de la doctrina nacional, como también la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, sostienen que las etapas imperfectas de un delito como la frustración y la tentativa, solo admiten dolo directo, descartando el dolo eventual. El fundamento principal de esta doctrina se apoya en lo dispuesto por el artículo 7 del Código Penal, debiendo considerarse que, en el plano subjetivo, tanto el delito frustrado como la tentativa no tienen diferencia alguna. La tentativa, al exigir hechos directamente encaminados a la ejecución del delito, sólo se

realiza con dolo directo, con el propósito de lograr la consumación del delito, acá no basta que se represente el resultado y que lo acepte y en este punto es necesario señalar la sentencia dictada con fecha 17/2/2021 por la Excma. Corte Suprema, en la causa rol 134.189-2020, que acogió el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, que había decidido condenar al ciudadano norteamericano, que disparó en Reñaca en contra de una muchedumbre, como autor de un homicidio frustrado, de un homicidio tentado y de un delito de disparo injustificado. En este fallo la Corte acogió el recurso por la causal subsidiaria del artículo 373 letra b), anulando la sentencia definitiva y dictando la respectiva sentencia de reemplazo, condenando al acusado como autor de un delito de lesiones simplemente graves, de daños y de disparo injustificado. Leyó los considerandos 18° y 19° de dicho fallo. Por su parte, un adecuado análisis de la prueba rendida en juicio no permite tener por establecido, más allá de toda duda razonable, que el agente hubiere obrado con dolo directo, el solo disparo del arma no es suficiente para dar por acreditado ese tipo de dolo. En tal sentido, sin perjuicio del análisis que se hará a propósito de la incapacidad mental del acusado al momento de los hechos, se debe considerar que incluso en opinión de los peritos del Servicio Médico Legal presentados por la fiscalía la capacidad volitiva de don Francisco Fuenzalida se encontraba a lo menos disminuida o mermada, circunstancia esta que obsta a la constitución del dolo directo, en cuanto este exige conocimiento del hecho que integra el tipo, acompañado de la voluntad libre de realizarlo. Precisado el punto anterior, se debe abocar a determinar de manera más precisa qué tipo de lesiones corresponde a cada una de las víctimas. En tal sentido, el caso más simple es el del señor Ayala Salinas, cuyo pronóstico conforme el DAU respectivo fue de lesiones clínicamente leves. A su respecto, sostiene que dichas lesiones deben tipificarse como lesiones menos graves, conforme lo previsto por el artículo 399 del Código Penal, por constituir estas la regla general y no haberse descrito en la acusación una duración superior a 30 días, que permita una calificación diversa. Respecto de Espinoza Rojas, sus lesiones deben calificarse de simplemente graves, conforme lo previsto en el artículo 397 N° 2 del mismo código, toda vez que al ofendido se le provocó incapacidad por más de 30

días, sin que en la especie concurra alguna de las circunstancias previstas en el numeral 1 de dicho precepto legal. Y respecto de Solís Opazo, al igual que en el caso de Espinoza, entiende que sus lesiones también deben calificarse de simplemente graves, conforme a la norma citada, no así de graves gravísimas, porque en la acusación no se indica cuál de las 5 hipótesis del 397 N°1 concurriría en la especie y, por tanto, el principio de congruencia impediría su configuración, y en el caso de que se entendiera que la lesión a considerar es la alteración funcional a nivel de la mano izquierda, ella no tiene la entidad suficiente para tener por establecido, con el rigor que exige el artículo 340 del Código Procesal Penal, que dicha lesión lo haya dejado impedido de un miembro importante. Al efecto, conviene tener presente lo declarado por el médico legista Tirado Mercado, quien, en lo pertinente, señaló que el señor Solís solo presentaba una limitación o alteración funcional, más no una perturbación funcional, que es la que puede asociarse a quedar impedido de un miembro.

Siguiendo el análisis de los elementos exigidos por la teoría del delito, correspondería hacerse cargo de la culpabilidad del imputado al momento de los hechos, pero ello no resulta posible cuando no hay un hecho culpable, en este caso sostiene que la prueba en relación a la participación en los delitos de lesiones no tiene entidad suficiente para acreditar más allá de toda duda razonable que Fuenzalida Calvo sea el autor de los disparos que la noche del 21 de octubre de 2019 hirieron a cada una de las 3 víctimas lesionadas, todas en distintos sectores de la Avenida Manso de Velasco de Curicó. La insuficiencia de la prueba queda de manifiesto al analizar la prueba menos confiable y más subjetiva que es la testimonial, pues, aunque considera improcedente hacer una larga reproducción de ella, le parece que en el peor de los casos ha resultado probado que su representado esa noche transitó en la camioneta Toyota por la Avenida Manso de Velasco de Curicó y arterias adyacentes, sin embargo y salvo su propia versión -según la cual reconoce haber efectuado algunos disparos disuasivos, para dispersar la turba que se encontraba en esa avenida con Merced, sin haber herido a persona alguna- no hay ningún testigo que lo haya visto disparar y herir, partiendo por las 3 víctimas, y ello a pesar de que la mayoría de los testigos civiles eran parientes de los afectados o cercanos a ellos y no se condice con lo que ellos indicaron la noche de los hechos, en cuanto a que entre las 22 y

22:30 había un numeroso contingente de carabineros, entre 50 y 60 funcionarios, pese a lo cual ninguno de ellos declaró como testigo de los hechos. Cabe preguntarse si don Francisco disparó a tres personas en lugares diversos de la Alameda, ¿cómo es posible que ningún policía lo haya visto? Afirmamos esto porque una diligencia mínima del ente persecutor exigía haber impartido alguna instrucción para entrevistar a los carabineros que estaban presentes en el sitio del suceso. En este mismo sentido resulta curioso que al juicio no se haya traído al perito que realizó el análisis de las pruebas de residuos nitrados tomadas a los 60 funcionarios de Carabineros en la Comisaría de Curicó, a partir de las 8:00 AM del martes 22 de octubre de 2019, máxime si consideramos que la noche de los hechos muchos de esos funcionarios portaban pistolas 9 milímetros. Además, si se trataba de descartar la participación de carabineros en los disparos que hirieron a los 3 jóvenes, resulta cuestionable que se encarguen los peritajes a la misma institución. En el mismo sentido, la fiscalía incorporó múltiples videos del tránsito de la camioneta, sin embargo, en ningún video o foto se observa al acusado disparando hacia los lugares en que fueron impactados, ningún video lo ve siquiera. El perito balístico Daniel Cáceres, quien revisó los proyectiles retirados a los afectados Solís y Espinoza, concluyó que corresponden a partes de proyectiles balísticos encamisados, generalmente utilizados por pistolas y subametralladoras, pero dijo que no fue posible establecer sus respectivos calibres. Respecto del proyectil alojado en la espalda de Ayala, cuya imagen conoció el perito a través de una radiografía, recordemos que indicó únicamente que este resultaba compatible con un proyectil calibre 9 x 19 milímetros, a partir de ello y desde una óptica procesal, conforme lo dispone el artículo 340 citado, no resulta posible tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, que ese proyectil provino de la pistola del acusado.

Por otro lado, en relación a los hechos que afectaron a José Miguel Uribe, coincide que es un homicidio simple, y, haciendo la misma prevención anterior respecto de la imputabilidad, sostiene que hay duda razonable en relación a la participación de su defendido. Se debe ponderar en su exacta medida la prueba pericial practicada por el perito balístico a los 2 proyectiles que impactaron en la puerta del copiloto del furgón Fiat

que la noche de los hechos era conducido por Miranda, proyectiles que según determinó habrían sido disparados por la pistola 9 milímetros que voluntariamente entregó don Francisco a la PDI. Ese hecho acreditado, ¿permite concluir además, con el rigor que exige el artículo 340, que esa misma pistola fue la que le disparó a Uribe? estima que no. De acuerdo a la propia versión de Miranda, en el momento inmediatamente anterior a los disparos José Miguel Uribe había pasado por el costado izquierdo del furgón dirigiéndose hacia atrás del mismo; que en ese instante oye disparos y ve como las chispas de esos disparos rebotan en el pavimento, entre su furgón y la barricada, y a continuación escucha que dos disparos impactan en la puerta del copiloto. Esta dinámica nos permite colegir que el sujeto que hizo esos disparos lo hizo en dirección al suelo o a muy poca altura del mismo, única forma de explicar la presencia de chispas en el pavimento o la altura de los 2 orificios en la puerta. Dicho eso y por otro lado, entiende que no ha resultado probado en qué lugar se encontraba José Miguel Uribe al momento de ser impactado o hacia donde se dirigía, hechos que resultan importantes si consideramos que el orificio de entrada se encontraba en la cara lateral del hemitórax derecho: si el proyectil fue disparado desde el lado oriente de la carretera resultaría forzoso concluir que José Miguel caminaba en dirección norte, única forma de explicar que el orificio de entrada se ubicara a su derecha. La afirmación hecha por el PDI Veloso, en cuanto a que las manchas pardo rojizas que se fijaron en el sitio del suceso, según da cuenta la fotografía N°98 del informe fotográfico 263 incorporado, señalarían el lugar donde fue impactado Uribe, no pasan de ser una mera conjetura, puesto que lo único que indican esas manchas, es que éste estuvo o cayó en ese lugar. Además, el Ministerio Público intentó probar que había sido una pistola 9 milímetros la que había provocado la herida mortal a Uribe, ello principalmente a través de la declaración del perito balístico Eduardo Soto Valdés; sin embargo y más allá de descartar que la herida haya sido provocada por un proyectil 7.62 x 51, como el fusil que utilizaban algunos de los militares de la patrulla, lo cierto es que el orificio de entrada del proyectil, de 0,9 x 0,9 centímetros, no permitió establecer un calibre específico del arma empleada, atendida la naturaleza del tejido humano, añadiendo que de acuerdo a su experiencia ese tipo de orificios lo ha observado en armas de fuego tipo pistola, revólver o

subametralladora, calibre 9x17 milímetros, 9 x 19 milímetros, 9 x 23 milímetros, calibre .38 o .38.5, también llamado .38 especial. Consecuente con ello y entendiendo que no existe otra prueba de mejor calidad sobre el punto, es posible concluir que no se ha probado el calibre del arma que disparó el proyectil que impactó a José Miguel Uribe, ni menos que esa arma haya sido la pistola que entregó don Francisco a la PDI. Asimismo en relación a la declaración del testigo Ruiz, uno de los militares que integraban la patrulla, señaló haber escuchado disparos desde atrás del lugar en donde ellos se encontraban, es más el juez redactor le pidió precisión de donde venían los disparos y dijo que del sur, hacia atrás de donde ellos se encontraban, mismo hecho que es relatado por el PDI Veloso, quien le tomó declaración a casi todos los militares integrantes de la patrulla, a pesar de que solo recordó el testimonio de 2 de ellos que mencionan disparos, siendo uno el eximputado Reyes, quien no solo declaró haber oído disparos de una pistola, sino que además tuvo el atrevimiento de señalar que era una pistola 9 milímetros. Lo importante de estas declaraciones es que estos militares escucharon disparos en un momento en que aún estaban en la carretera, disparos que no provenían de sus respectivas armas, ni tampoco de don Francisco, puesto que según las pruebas del Ministerio Público su camioneta habría llegado a la carretera después que se habían ido los militares, la camioneta blanca dirigiéndose hacia el norte y el bus ingresando hacia la ciudad. Conforme con lo expresado, es posible sostener que en este sitio del suceso había otra arma de fuego distinta a la del acusado y de los militares.

En relación al delito de daños a la camioneta y porte y tenencia de armas de fuego y municiones, atendida la tesis de inimputabilidad, solo dirá que son hechos típicos y antijurídicos, mas no culpables, pues resultó acreditado que desde el año 2008 mantenía en su poder un fusil Máuser, el que le fuera entregado por su madre a la muerte de su padre y que el acusado la mantuvo en su casa desde ese tiempo hasta el año 2019, en que la entregó a la PDI.

Antes de argumentar sobre la inimputabilidad de don Francisco y considerando que hay hechos que sirven de sustrato fáctico para esa tesis, resaltó las declaraciones

prestadas en juicio por Manuel Gamboa, Mario Undurraga, Oscar Fuenzalida, Gastón Fuenzalida, Josefina Fuenzalida y José Pablo Toro, con las cuales se probó que Francisco Fuenzalida Calvo tiene 62 años, es técnico mecánico de profesión, se casó con doña María Josefina González, con quien tuvo 5 hijos, siendo una persona que nunca antes de los hechos que nos convocan había tenido problemas con la justicia. También se probó también que hace mucho tiempo él fue diagnosticado con una enfermedad mental, trastorno afectivo bipolar, lo que originó que a lo menos durante los últimos 10 años recibiera atención psiquiátrica particular en Santiago, además del respectivo tratamiento farmacológico, y que a mediados de 2019 y debido a dificultades económicas que padecía, lo obligaron a cambiarse al sistema público a partir de septiembre de ese año, cambiándosele los fármacos, que si bien mantenían el mismo principio activo, él los dejó de consumir los primeros días de octubre de ese año porque consideró que le hacían mal, estaba más irritable, más peleador, más mal genio. Asimismo, se probó que don Francisco llegó a tener 4 empresas, sin embargo y producto de decisiones erróneas, coherentes con las fases maníacas de su trastorno, tuvo grandes pérdidas económicas y en los últimos años solo funcionaba una de ellas, Fullmaq, la que prestaba trabajos solo a medias y mal, principalmente a una empresa agrícola ubicada en San Javier, pues solo contaba con máquinas excavadoras antiguas, que presentaban continuos problemas mecánicos, retrasando con ello las operaciones de dicha empresa. Estos problemas económicos, que se veían acrecentados con los gastos que implicaba tener a 3 de sus hijos estudiando en universidades privadas en Santiago, le provocaban frecuentes estados de angustia, afectando sus relaciones familiares, especialmente con su cónyuge, con quien tuvo múltiples discusiones y problemas. Fue así que los continuos incumplimientos contractuales provocaron que su principal cliente, Agrícola HN, le exigiera la renovación de las máquinas excavadoras para el periodo que comenzaba en octubre de 2019. Don Francisco, asesorado por su hermano Gastón, llegó a la conclusión que la única salida económica que tenía era sobre endeudarse y a través de un leasing comprar 2 excavadoras, por un valor cercano a los \$200.000.000, y con el pago que recibiría por esos servicios a su vez podría pagar el leasing de las máquinas nuevas y servir la deuda histórica que tenía.

Sin embargo, si bien llegó a acuerdo con Agrícola HN, lo cierto es que las máquinas nuevas no llegaron en la fecha convenida con el cliente, el último plazo convenido fue lunes 21 de octubre de 2019. Pero, como todos sabemos, el 18 de octubre comenzó en Chile el estallido social, con protestas, desórdenes públicos, barricadas y corte de carreteras, por lo que ese día no pudo enviar las máquinas, lo que ocasionó que José Pablo Toro lo llamara para decirle que el negocio se cancelaba. Con ese estado de agobio llegó a su casa en la tarde, teniendo un nuevo problema con su esposa por el corte de flores, y por las redes sociales comenzó a recibir noticias acerca de los violentos disturbios que se producían en todo el país, Curicó inclusive. Ya en la noche, se enteró que el supermercado Unimarc de Avenida España había sido saqueado e intentado ser quemado, que el peaje de acceso desde la carretera había sido quemado y que una turba de gente avanzaba hacia el sector de Zapallar, con el fin de saquear y quemar las casas del sector. El conjunto de hechos expuestos, constituyeron una especie de tormenta perfecta en su siquis, provocando como reacción inmediata que don Francisco fuera al segundo piso a buscar su pistola 9 milímetros, subiera a la camioneta y se fuera a Curicó, ingresando por Avenida España, constatando que era efectivo lo que le habían contado acerca del peaje y del Supermercado Unimarc, el mismo al que él iba frecuentemente a comprar. De ahí avanzó hacia la Avenida Manso de Velasco, encontrándose con Carabineros enfrentados a una muchedumbre que lanzaba piedras y palos, entre otros elementos. Lamentablemente él quedó detenido en la esquina de la Alameda con calle Merced, sin poder avanzar, por la gran cantidad de gente que obstruía el paso y también por los vehículos policiales atravesados en la calzada. Fue en ese momento y con el fin de dispersar a la turba que don Francisco tomó la pistola y realizó alrededor de 4 o 5 disparos hacia arriba, por la ventana del copiloto, disparos que reconocería unas horas después cuando prestó declaración voluntaria, sin abogado, en presencia del fiscal y en dependencias de la PDI de Curicó.

Señalado lo anterior y haciéndose cargo de las pericias, hay ciertos elementos o conclusiones comunes que resulta necesario precisar y destacar. No existe controversia alguna sobre que al momento de los hechos y a lo menos desde unos 10 años antes don Francisco padecía la enfermedad mental o siquiátrica que se denomina trastorno afectivo

bipolar; y que los 4 peritos coinciden en concluir que las capacidades cognitivas de don Francisco se encuentran conservadas y que sus facultades volitivas, al momento de los hechos, se encontraban afectadas. La diferencia relevante está en que los peritos presentados por el Ministerio Público concluyen que hay un conjunto de factores, denominados estresores, tanto de carácter crónico como agudos, que influyeron para que su capacidad de autodeterminarse se viera disminuida o mermada. Desde el punto de vista médico legal y utilizando las palabras de la médico siquiatria del Servicio Médico Legal de Rancagua, María José Villena, estaríamos en presencia de una imputabilidad disminuida. Entre los estresores crónicos que mencionaron estos peritos podemos citar los problemas económicos que don Francisco arrastraba hace largos años y sus problemas matrimoniales; entre los estresores agudos se mencionó la cancelación del negocio de las máquinas nuevas, el mismo día en que ocurrieron los hechos. Se indicaron también, especialmente por el psicólogo del Servicio Médico Legal, 3 elementos adicionales: factores ambientales como el estallido social, su patología del ánimo y características o rasgos de su personalidad, tales como su irritabilidad, impulsividad y narcisismo. Este mismo perito concluye que el relato proporcionado por don Francisco presenta consistencia interna y externa, que se le aplicaron 2 test que sirven para detectar la simulación y/o exageración en el relato y que de las 7 escalas, ninguna arrojó simulación de síntomas. Para la médico siquiatria doña Vilma Ortiz y la psicóloga Susana Pavié, en cambio, al momento de los hechos en investigación, don Francisco se encontraba descompensado de su patología de base, con el juicio de realidad alterado, siendo incapaz de diferenciar lo lícito de lo ilícito, ni de autodeterminarse conforme a su voluntad. Ambas coinciden en concluir que al momento de los hechos don Francisco cursaba una fase maniaca de su trastorno. En palabras de la señora Ortiz, don Francisco era inimputable al momento de los hechos investigados. Acá no hay ninguna tercera opción. En este caso hay que ver otros factores y uno de ellos es la expertís de los peritos. ¿Cuál es la experticia de la siquiatria del Servicio Médico Legal? solo sabemos que trabaja en el Servicio Médico Legal de Rancagua, no sabemos hace cuánto tiempo, si era titular o suplente y cuál era su experticia en el ámbito forense. A diferencia de los peritos de la Defensa, con más de 20 años de expertís y de

evaluación de imputados en el instituto Horwitz, teniendo presente que en Chile no existe otro centro psiquiátrico como lo es éste, más allá de haber sido una pericia particular, ellas usaron la misma metodología que usan siempre. En segundo término, hay que procurar que la evaluación se realice en una fecha lo más próxima posible a la ocurrencia de ellos hechos, pues se trata de indagar cómo se construyó el pensamiento del sujeto, y aquí tenemos que se hicieron las entrevistas el 19 de enero y el 1 marzo del 2020, es más oportuno, no casi un año después como fue la del Ministerio Público. Resulta más oportuna la de la doctora Ortiz, pues pudo observar directamente al evaluado, parecido a la intermediación, pudiendo observar por sus actitudes conductuales que cursaba una hipomanía. Al respecto, tanto el Ministerio Público como el querellante particular le han restado valor diciendo que no empleó la palabra hipomanía, pero ello no es atendible porque ambas peritos dijeron se describen toda la sintomatología observada y que les permitió arribar a dicha conclusión, a saber: escasa modulación afectiva, conducta social inadecuada, impulsividad, inquietud sicomotora, irritable, un relato autobiográfico y atemporal, con algunas fallas de memoria, presenta ideas sobrevaloradas de daño y perjuicio al momento de hacer el relato de los hechos. Todos estos elementos son característicos de una hipomanía, conforme los conocimientos científicamente afianzados, según se lee en los instrumentos DSM-5 y CIE 11, que son manuales estandarizados que son ampliamente utilizados a nivel internacional, para efectos de la clasificación y diagnóstico de los trastornos mentales. Otro tanto ocurre cuando las peritos señalan que al momento de los hechos don Francisco se encontraba psicótico, cuestionando los persecutores, al menos uno de ellos, que este concepto no estuviere literalmente consignado de ese modo en el informe escrito. Sin embargo, ambas aclaran que, al estar cursando un episodio maniaco con el juicio de realidad alterado, el sujeto se encuentra psicótico. Finalmente, ambas peritos coinciden en concluir que a lo menos desde un mes antes de los hechos, especialmente a partir del 18 de septiembre de 2019, don Francisco estaba cursando un episodio maniaco, que se evidenciaba con el aumento del mal humor y mal genio, además de frecuentes discusiones con sus más cercanos, información que fue confirmada a través de la entrevista a doña Josefina, cónyuge de don Francisco. En

relación al día de los hechos y como expresiones evidentes de la fase maniaca y de la descompensación de su patología siquiátrica, la doctora Ortiz indica que don Francisco sufrió una escalada que partió con la irritabilidad y el enojo por los hechos relacionados con el estallido social, pasando desde ahí al pánico y avanzando hasta la paranoia, comenzando a mirar la situación desde la exaltación anímica, siendo el detonante la destrucción de sus máquinas y la existencia de la turba que avanza. Desde allí, todas las acciones ejecutadas por él se encuentran embargadas por esta situación y por la paranoia, por la sensación de daño que va a padecer; presenta además una autoevaluación sobredimensionada, típico de la fase maniaca, que se evidencia en aquel pensamiento de que nadie hace nada y que él puede hacer algo en contra de esa turba.

En conclusión y conforme lo expresado, coincidimos con los persecutores en que no toda persona que padece un trastorno afectivo bipolar y que se encuentra en fase maniaca tiene interferida su voluntad, al punto de hacerlo inimputable y eximirlo de responsabilidad. Lo que sostenemos, atendido el mérito de los hechos probados, es que don Francisco se encontraba descompensado de su enfermedad siquiátrica y que el día de los hechos se conjugaron múltiples factores para que pasara desde esa descompensación hacia la exaltación del ánimo, alterando con ello su juicio de realidad, lo que en definitiva le impidió autodeterminarse conforme a su voluntad. Por lo tanto, en la especie, don Francisco Fuenzalida debe ser considerado inimputable al momento de ocurrir los hechos que se le atribuyen, solicitando que en definitiva se dicte veredicto y sentencia absolutoria, respecto de todos y cada uno de los ilícitos que se le atribuyen.

Finalmente, ejerciendo su derecho a **réplica**, expuso que el fiscal dijo que a su entender no era posible entender establecida una inimputabilidad o una imputabilidad disminuida, fundado en que si bien los peritos del Servicio Médico Legal ha expuesto que los elementos ambientales estresantes, la personalidad del acusado unido al trastorno afectivo bipolar aparentemente descompensado por voluntad propia, ello afectaría en grado leve la voluntad del acusado, lo que a su juicio no afecta la capacidad de discernir la ilicitud de su actuar y autodeterminarse de acuerdo a ese conocimiento. Pero quiere ser

enfático en que el señor Fuenzalida Calvo era inimputable al momento de los hechos. No quiere caer en expresiones como escamotear responsabilidades, que el tribunal haga el ridículo o caer en charlatanería, expresiones que sí son propias de cuando el fondo jurídico no permite hacer un adecuado estudio de los antecedentes. Lo dice porque cuando el sicólogo Valdés aborda este punto, expresa no solo lo contrario de lo que dijo el fiscal en la clausura, sino hoy en su réplica, ya que en la pista 1, minuto 45 con 50 segundos, este perito dijo que en el imputado se encuentran presentes tres factores que modulan su conducta y autodeterminación, los acontecimientos vitales estresantes, variables de su personalidad y el trastorno referido que es la patología del ánimo. Y también dijo que estos tres factores provocaron que ese día su impulsividad estuviera afectada de modo importante. El fiscal le pidió establecer un porcentaje o valor, a lo que Valdés respondió que era difícil, requiriendo un estudio de casos que no era posible hacerlo, sin perjuicio de lo cual era posible teorizar con que la patología del ánimo pudiese cargar con un tercio del factor, pero las variables ambientales y de personalidad tienen una incidencia mayor, es decir, aun superior a ese tercio. Decir, como lo hace el fiscal, que tenían un efecto leve, es hacer un análisis parcial y sesgado de la información. En el caso de la siquiatria señora Villena, llega a la misma conclusión, siendo importante oír a partir del minuto 24 de la pista dos de su declaración, donde al fiscal le responde respecto a la posibilidad de cuantificar la incidencia, que la verdad es que esto no funciona así, que podamos darle un porcentaje, se evalúan factores que inciden y se van sumando, y explica cómo influyen esos tres factores, concluyendo más adelante con la imputación disminuida. El fiscal dijo que la defensa no se hacía cargo de algunas de sus pruebas. Veamos el caso de Miguel Ayala, que es el testigo que llegó en prisión preventiva por un robo con intimidación, quien dijo en juicio que vio disparar a un sujeto en su contra desde una camioneta roja, pero los acusadores olvidan que hay información entregada en el juicio a través de la policía Marcela Sánchez, en cuanto a que estuvo en el hospital y entrevistó a esta persona, quien le dijo que el autor del disparo bajó desde el asiento de atrás de una camioneta roja conducida por un carabinero, con un acompañante carabinero. Al fiscal y querellantes se les olvido ese testimonio. Además, conforme a la fijación fotográfica de su versión en

febrero de 2020, en la reconstitución de escena, este ubica la camioneta desde donde se efectuó el disparo en Manso de Velasco poniente, a escasos metros del servicentro Facaz y del Unimarc, lo que resulta curioso e ilógico, porque significa que el sujeto disparó con total impunidad al lado de Carabineros, los que no vieron ni hicieron nada. Carmen Salinas, testigo y tía de Ayala, pese a ser tan importante porque dice haber visto al sujeto disparar, recién aparece en la investigación cuatro meses después, la que claramente sabía de los hechos porque es tía de Ayala e incluso vivía con él. Además, ella indica que el sujeto disparó desde la camioneta hacia el sur, pero curiosamente ninguno de los tres ofendidos salieron heridos en ese lugar y nunca se supo de otra persona herida en ese sector.

Respecto de las conclusiones del acusador particular, no han venido a este juicio a escamotear nada, sino a ejercer las facultades que la ley les entrega, que se respete el debido proceso y que el tribunal pondere todas las pruebas conforme a los artículos 297 y siguientes. No es problema suyo que al colega le moleste que levante tesis jurídicas o que no conozca el CIE 10 o el DSM4 o 5, que contienen descripción de patologías siquiátricas, que constituyen conocimientos científicamente afianzados. Ese sí sería un ridículo procesal, el aportar esos instrumentos. El colega dice que las peritos arribaron en juicio a conclusiones diametralmente distintas de lo que decía su informe, y eso afecta su credibilidad y verosimilitud. Pero se pregunta ¿cuáles son las conclusiones distintas? Porque la conclusión es bien clara, don Francisco se encontraba descompensado de su patología de base, con el juicio de realidad alterado, siendo incapaz de diferenciar lo lícito de lo ilícito. Explicaron, incluso, cuales eran los elementos que configuran cada cosa, destacando que lo importante es aquí el estado síquico de él al día 21, lo que explicaron las peritos casi de manera majadera, y que todos esos elementos eran constitutivos de un cuadro maniaco. Se argumentó majaderamente la falta de test, que no permiten corroborar las conclusiones. Hay dos peritajes destinados a descartar la simulación o la exageración, que no se hicieron por las peritos Ortiz y Pavié y sí por los profesionales del Servicio Médico Legal, pero las conclusiones son que en ninguna de las 7 escalas se apreció simulación o exageración. ¿eso afecta las conclusiones de sus peritos? De ninguna manera.

Se hicieron dos más pruebas para descartar daño orgánico cerebral o algún problema de inteligencia, pero ello tampoco altera sus conclusiones, porque el problema no era cognoscitivo sino volitivo. No tenía sentido realizarlo porque no observaron ningún problema en esa área. Se hace caudal por el mismo querellante que nadie observó elementos de la fase maniaca, pero olvida que los familiares están contestes del mal genio, malestar emocional y discusiones que se venían produciendo desde el 18 de septiembre, en cambio dice que estaría negociando, pero esos negocios se finiquitaron en agosto y el peso de la negociación lo hizo Gastón Fuenzalida, que dijo que don Francisco solo puso la firma, y el contrato se ejecutaría en octubre. El estado de manía puede no estar descompensado, lo que incide es que los factores gatillantes se presentan a partir del 18 de octubre. Todos olvidan a un testigo de la fiscalía, sin vínculo con la Defensa, Dani Bravo, que da cuenta de dos eventos, cuando se cruzan en la Alameda y le dice “que andai grabando, sapo...”, y le saca la madre; y en un segundo hecho es explícito en que la persona estaba muy eufórico, alterado y agresivo. Eso precisamente es propio de la fase maniaca. Es la púnica persona que lo ve y que da cuenta de cómo estaba al momento de los hechos. Que frente a carabineros se comportara tiene que ver con el especial cariño que tiene por esa institución. Acerca del dolo homicida, el mismo fallo mencionado, se desarrolla en los considerandos 21 y 22. Finalmente, en relación a lo que cita el colega de la municipalidad, la cita del artículo 14 de la ley de control de armas resulta improcedente, las armas materia de este juicio están reguladas en el artículo 2 letras b y c; y el 14 dice relación con las del artículo 3. No tiene nada que ver ese tipo penal, máxime cuando el colega se adhirió a la acusación fiscal.

SÉPTIMO: Versión del acusado. **Fuenzalida Calvo**, informado de sus derechos, renunció a su derecho a guardar silencio y prestó declaración en la audiencia del juicio oral, en la oportunidad reservada para la prueba ofrecida por su Defensa, entregando su versión de los hechos materia de la acusación.

Así, declaró inicialmente que se iba a referir a los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2019 y que es inocente de la mayoría de los cargos que le imputan el querellante y la

Fiscalía. En esa época vivía en su casa con su familia compuesta por su señora Josefina y tres de sus hijos, con la salvedad que dos estudiaban en Santiago, pero venían normalmente a la casa el fin de semana. Su dirección se la reserva, pero es conocida en el Tribunal. Trabajaba en una empresa de arriendo de maquinaria para movimiento de tierras, en la comuna de Lontué, a unos 10 o 12 kilómetros de su casa. Desde hacía bastante tiempo, lamentablemente, no le estaba yendo bien en lo comercial o económico, producto de malas decisiones tomadas por él, que habían complicado enormemente el desenvolvimiento de su negocio y también personalmente, en su estado anímico; todo lo que conlleva atravesar una crisis así. Por ejemplo, en una errada decisión, se fue a trabajar al norte en minería, conociendo nada del tema. Se arriesgó pensando que era una solución salvavidas, pero, por mucho que luchó para que resultara, fue un fracaso, solo consiguió traspiés y terminó quebrando. Por eso tuvo que regresar a Curicó en calidad de estropajo, anímicamente destrozado, con falta de interés por las cosas, anulada su esencia y forma de ser. Después tuvo una crisis de nervios y tensión y debió operarse de la columna, venía en crisis de ella, tenía cero movilidad. Le costó mucho recuperarse, cuesta decirlo y asimilarlo, debía luchar con todas las cosas que tenía que hacer para seguir viviendo. Una vez recuperado físicamente, se vio obligado a tratar de sacar su negocio de maquinaria, que es el que realmente domina y era su fuente. Esto le conllevó muchos sinsabores, peleas y malos ratos con sus hijos y su señora. Económicamente le exigían, por costumbre y necesidad, lo que conllevaba su preocupación de seguir funcionando, también por la gente que trabajaba con él, ya que más de 12 familias dependían de ese trabajo. Le significó un gran desgaste anímico tener que salir a flote como fuera, dentro de los marcos de la ley. En esa fecha y producto de esa situación tuvo dos grandes peleas con su señora, además de las típicas que podían tener tuvo dos hitos: uno porque él le dijo que no quería seguir tomando remedios, ya que consideraba que le estaban haciendo mal, esto a principios de octubre de 2019; y un problema doméstico, cualquier cosa era motivo de discusión, pero esta vez fue porque él le intervino su jardín, que era como su camposanto, solo de ella. Sufre desde hace muchos años depresión severa y trastorno afectivo bipolar, motivo por el cual estuvo en tratamiento con siquiatra mucho tiempo, con distintos doctores, desde

bastante joven. Lo llevó su madre al primer siquiatra, en la infancia, pero ya adulto, casado, se atendió en Santiago con el doctor Juan Pablo Díaz, por cinco o seis años, pero en forma interrumpida, fue poco constante ya que cuando se normalizaba, lo olvidaba. Ese doctor lo derivó a su colega Gustavo Guzmán, siquiatra también, que lo atendía cada un mes o dos, dependiendo de las crisis del momento, coincidiendo los dos en el diagnóstico indicado, para el cual fue recibiendo medicamentos que no recuerda, es súper dejado y dejaba en manos de su señora que la apoyara en comprarlos, dosificarlos y proporcionárselos, al principio día a día, después con pastilleros con cada dosis. Dejó a ese doctor porque un amigo, Juan Astaburoaga, le recomendó a su siquiatra con el que había funcionado teniendo lo mismo, el doctor Jorge Barros, en Santiago, que fue su último doctor particular. Era serio, de pocas palabras, preciso y le diagnosticó la misma enfermedad. Después de pruebas y exámenes de sangre y distintos remedios llegó a recetarle 4 remedios que tomó por años: Valcote, Wellbutrin, Effexor y Seroquel. Era su señora la que se los daba y para asegurarse que los tomaba se los daba día a día; cuando él salía más de un día llevaba su pastillero. Estuvo con Barros como 7 años. Como decía, le costó mucho recuperarse y los bancos no perdonan, por lo que tuvo que vender máquinas, achicarse y hasta conseguir plata con su familia, todo para evitar un trágico desenlace. A raíz de eso decidieron con su señora dejar al doctor Barros en Santiago, por lo que económicamente significaba ir a verlo, consultas, viajar, etc., y recurrieron al GES. Ella hizo los trámites con la Isapre; pese a tener conflictos ella siempre lo apoyó. Hicieron el proceso y lo llevaron a una doctora en medicina general, quien lo derivó con un siquiatra del mismo GES, nombrado por ella. Tuvo una primera entrevista con él donde le diagnosticó también depresión y trastorno afectivo bipolar, para lo cual le recetó remedios bioequivalentes -hasta ese momento no había escuchado de ellos ni sabía nada al respecto- cambiándole los remedios indicados que estaba tomando, manteniéndole solo el Seroquel, no sabe si la misma dosis. Tomó esos remedios menos de un mes y le dijo a su señora que quería dejarlos porque notaba que le hacían peor, se notaba con desánimo, sin impulso, fuera de sí, con sensación de estar solo respirando. Eso junto con el tema de la pelea que implicó lo del jardín, indignó mucho a Josefina, quien le dijo que si él dejaba sus remedios

ella no se preocuparía más de ayudarlo en ese sentido, “lo mandó a la punta del cerro” y junto con eso le dijo ella unas cuantas verdades duras. Piensa que ella tenía acumulado ese desahogo. La pelea fue por intervenir su jardín, que para ella fue como quemarla, y él concluyó que la única solución era separarse, no veía otra alternativa. Por ello empezó a buscar dónde irse a vivir solo, con la salvedad de no tener la liquidez para montar una segunda casa. Consiguió un amigo que lo invitaba a vivir a su casa, pues estaba solo, pero no lo concretó porque se vinieron las cosas encima. La calidad de su relación de pareja y de vida era muy mala, se daban conflictos con ella, también con sus hijos, laborales, financieros; era una carga pesada que debía afrontar, había que seguir viviendo, comiendo y pagando. Tuvo la posibilidad de un negocio que podía ser su salvación, precisamente en el rubro de las maquinarias que era su fuerte, pero para poder hacerlo debía cumplir exigencias muy difíciles dada la situación por la que pasaba. El trabajo consistía en una labor agrícola en una empresa relativamente grande por un proyecto extenso, de dos años, lo que para él era fantástico, porque los trabajos siempre eran puntuales, más chicos. Le pedían como condición tener equipos nuevos. Había atendido a esa empresa en temporadas anteriores y habían tenido problemas de cumplimiento de su parte por los plazos, lo que significaba para ellos mayores costos de operación y para poder cumplir las etapas. Se empieza con el destronque y despeje de los campos que antes no han sido cultivados, después se hace una excavación para hacer zanjales de instalación de riego tecnificado, por cuadrículas, y después viene la confección de las hileras y camellones, y para todo se requiere cumplir ciertas fechas para después poder plantar. No se puede plantar en rulo si primero no hay agua. Entonces la empresa le dijo que si quería participar necesitaba máquinas nuevas. Él dijo que sí, pero sin asumir la realidad de poder conseguir más financiamiento, ya que ya tenía una mochila económica bastante pesada. Le contó a su hermano y un amigo, invitándolos a participar del negocio, este no pudo, su hermano sí, quien intervino de buena forma para ver alternativas de financiamiento, los números dicen una cosa, pero había que ver la garantía, y una firma como aval lo solucionaba. Necesitaba cumplir teniendo cuatro máquinas, pero eso era una enormidad, más bien haciendo un gran esfuerzo podía optar a dos. Buscó alternativas y le propuso a la empresa

poner dos máquinas antiguas, de las que no eran confiables por las fallas que presentaban, y dos nuevas, y para disminuir las deficiencias de las primeras otra para poder reemplazarlas, y logró que se lo aceptaran. Y empezó el pedaleo para conseguir el financiamiento para las dos máquinas nuevas, lo que consiguió con leasing. Había que pagar un pie al contado y el resto en mensualidades. Eso pudo hacerlo, lamentablemente más tarde de lo que debía. Ellos querían partir el 1 de octubre, pero por la demora en conseguir el pie pasaron dos o tres semanas, llegando a Curicó recién la víspera del estallido social, el viernes. Ya había puesto sus máquinas viejas, que trabajaban y quedaban en pane, como era su rutina. Se alistó a despachar las nuevas a terreno previo a instalarles ciertas protecciones para salir a trabajar. El día lunes 21 se levantó temprano, partió al taller para apurar que salieran lo antes posible, tenían coordinados camiones para el traslado, pero no aparecían, y al llamarlos uno de los choferes le dice que no se atreve a hacer el flete producto de los cortes de carreteras y desmanes que se estaban produciendo, trató de convencerlo que de día no pasaba nada y diciéndole que le mejoraba la tarifa, pero le dijo que no, era su camión; el segundo estaba atrasado en un viaje a la costa y le dijo que en la tarde podría estar allí. Ya le había dado todas las explicaciones y convencido al gerente de la empresa mandante y el último plazo en que habían quedado era el lunes en la mañana, y como a las 3 y media de la tarde, no se pudieron comunicar antes, le devolvió el llamado, diciéndole que cortaba de raíz el tema, “lo siento, no puedo esperar más”, le dijo, “tengo a mi jefe y debo darle explicaciones, ya no puedo permitir más excusas, retira tus máquinas en el terreno y no me mandes las nuevas”. Con esa noticia con suerte logró seguir respirando, había sido una “ultrajugada” de negocios, que le permitiría servir sus deudas, pagar a su gente, seguir viviendo y pagar el crédito nuevo, y de un minuto a otro se encontraba sin nada. Sin avisarle a nadie de su oficina se fue a su casa, a su guarida, donde siempre se refugiaba, el segundo piso de su casa, tratando de dormir para borrarle de algún modo esa presión. Los términos del corte de relación con el gerente, Pablo Toro se llama, habían sido duros y no veía posibilidad de revertirlo. Trató de dormir, le gusta hacerlo, pero con la espada de Damocles encima no lo logró, la presión era demasiada y salió al jardín a desconectarse, y vio ramas desordenadas y con una tijera podó algunos

ganchos y flores fragantes que duran pocos días, sin medirse, haciendo limpieza, como lo había hecho más de una vez. Y en ese momento llegó su señora y lo pilla con este cuadro, que produjo el tremendo desahogo de ella, le dijo pesadeces, que era flojo, que no se levantaba, que era irresponsable con los quehaceres, que no se preocupaba de las máquinas... una cantidad de bollos en la cabeza que se preocupó. Era lo que había. Se fue a su pieza, prendió televisión para distraerse, no usa reloj, sintió que llegó su hija Josefina, que llegó de Santiago donde estudiaba, igual que César. Bajó a estar con ella, esta le contó de sus cosas, la universidad -estudiaba agronomía- y le contó lo que había visto en las barricadas y protestas, y prendieron la televisión para ver. Él sentía que la situación era grave, porque podía venir una crisis económica y política, y aunque está de acuerdo en las causas de fondo de la manifestación social, no lo estuvo en la forma cómo se desvirtuaba por algunos, los más violentos y extremos. Protestar es lícito, pero entorpecer o destruir el mobiliario público, los supermercados, las farmacias, no. Y principalmente lo que le sucedía al personal de Carabineros, que eran víctimas de ataques extremos e injustificados, ellos “hacían su pega”, no son parte ni de la solución ni de la culpa. Le afectaba especialmente ese punto porque él estaba tratando por largo tiempo de ingresar al Círculo de amigos de Carabineros, los Alguaciles, lo intentó por un año o año y medio. Exigían una cantidad grande de requisitos y papeles. Por ejemplo, si uno quiere entrar a uno de esos círculos, debe ser aceptado por el 100% de los integrantes. También se le ven los antecedentes penales, comerciales, no tener Dicom, casi no haberle pegado a la guagua. Son requisitos bien pensados para que participe gente con principios morales asentados. Por tanto, le afectaba mucho lo que les pasaba a los carabineros, era injusto, no podían defenderse porque los acusaban de atentar los derechos humanos y a muchos los terminaban echando o quedaban presos. En la tarde noche de ese día recibe un WhatsApp de su amigo Mario Undurraga, quien estaba interesado en el asunto de las máquinas porque gestionaba el seguro de su traslado, y le contesta que le fue pésimo, éste lo llama y ahí le cuenta lo que pasó, explicándole los problemas que tuvo y lo que dijo el chofer del camión sobre las carreteras cortadas. Ahí su amigo le cuenta que en Curicó estaba quedando la embarrada, que manifestantes habían incendiado el peaje de avenida España,

que el supermercado de ese sector lo saquearon y cosas así. Al escuchar eso le refuerza la sensación de injusticia de la forma en que se manifestaban. También le comentó que se comentaba que un grupo de manifestantes iba al sector oriente con el fin de producir alteraciones y daños. Él pensó que desde el paso bajo nivel de Avenida España con la carretera al oriente hay dos strip center, además de casas, y eso hace que pase de la molestia a la rabia, le hace un “clic” en él. Y sin decirle nada a nadie, va a su pieza, toma un banano donde guardaba su pistola y sale en su camioneta para ir al centro. Su hija le preguntó dónde iba y le respondió que iba donde su amigo. Entonces va hacia el centro desde Zapallar, ve el peaje de Avenida España efectivamente quemado, luego ve el supermercado con los vidrios quebrados, las cortinas rotas y todo desordenado -no vio fuego ni humo- y más al centro ve gente corriendo. Llega a Manso de Velasco con calle Merced, cruza y a la altura del bandejón central de la Alameda había gente tirándole cosas a Carabineros y éstos les contestaban, y él quedó al medio, ahí llegaron furgones y vehículos de Carabineros y se empiezan a bajar fuerzas especiales, por lo que le fue imposible atravesar la Alameda. se lanzaban palos y piedras, había humo y olor a bombas lacrimógenas, vio que Carabineros se parapetaron en unos plátanos orientales y disparaban con escopetas, él no tenía cómo salir y le dio bastante pánico, se preocupó muchísimo, no le interesaba en absoluto lo material pero sí que le pasara algo a él. En ese momento abrió la ventana del lado del copiloto y disparó hacia arriba, con su mano derecha, considerando el marco de la ventana, lo que hizo para dispersar un poco la turba y poder avanzar. Así pudo hacerlo y dobló a mano izquierda para salir hacia el sur, no siguió hacia al frente porque estaban los furgones policiales. Estaba alterado, excitado, fuera de sí, no dándose bien cuenta lo que pasaba o en qué se había metido. Ahí se dio unas vueltas, desconoce el circuito que hizo, y ve en Manso de Velasco con Estado que, de espaldas al sur, mirando al Unimarc, estaba una persona filmando con su teléfono, lo que asoció a las personas que se dedican a hacer tomas que sirven después para un uso malintencionado de cómo los carabineros torturan, maltratan o atacan. Se pasó esos rollos, por lo que se bajó de su camioneta y lo enfrentó, no en buenos términos, estaba alterado, no estaba siendo cuerdo. Y mientras estaban en ese alegato o conato, carabineros que

estaban en el estacionamiento del Unimarc, en protección de ese supermercado que ya había sido atacado, se acercaron, dos o tres, iban con casco y chalecos antibalas, eran de la comisión civil, y le piden su cédula de identidad, la revisan con una maquinita como un teléfono celular, para obtener su información, y le dicen “váyase de aquí, no tiene nada que estar haciendo”. Ahí se dio cuenta que la situación era muy complicada, lo que había vivido. Además, escuchó que por la radio les daban la orden de replegarse, porque la situación se tornaba más grave. Se preocupó de sus hijas ahora, que habían quedado solas en la casa hace rato y decidió regresar. Llegó lo antes que pudo, de manera robótica, verificó que estuvieran bien y se acostó, estaba demasiado agotado por la tensión del día. Trató de dormir, no pudo, por lo que tomó una pastilla con la que lo logró. Más tarde, tipo 5 de la mañana, sonó el timbre y era la PDI que se presentaba producto que investigaban hechos en la Alameda, los hizo pasar, no tenían orden de ingreso, estuvieron conversando, le preguntaron sobre su eventual participación y le contó que había estado ahí y que hizo disparos al aire. No sabe en qué declaración se dijo que había disparado a matar, a quemarropa, eso es falso, porque disparó al aire. Le preguntaron si sabía de unos heridos en ese lugar y dijo que no tenía idea, que no había visto a nadie herido, le preguntaron si tenía armas y se las mostró, de manera voluntaria, una pistola marca CZ calibre 9 mm, una escopeta calibre 12 y les mostró que tenía un arma antigua, una reliquia familiar a la que le tenía mucho aprecio. Esta había sido de su abuelo y se la conoció a su padre de toda la vida, el que afortunadamente se la dejó a él. Se la entregó su madre alrededor de un año después de la muerte de su padre, cuando ella lo consideró oportuno y repartió algunas cosas. Esa vez le entregó el arma y una caja de municiones muy antigua, gran cantidad de esas balas no reventaban, estaban húmedas, revenidas. No las quiso botar, no supo qué hacer con ellas. El arma nunca la usó como defensa, siempre la tuvo como reliquia. No es el tipo de persona que “tira la piedra y esconde la mano”, sabe darse cuenta y reconocer los errores, y si dice algo es porque es la verdad. Dan fe de eso, a modo de ejemplo, personas que trabajan con él hace 40 años, amigos de toda una vida, desde los cinco años.

Examinado por su defensor señor González, explicó que la PDI llegó a su casa a las 5 de la mañana del día 22 de octubre de 2019, y estuvo no más de media hora. Los

primeros minutos conversaron en la reja, ellos se identificaron a través del citófono, luego salió su señora y los hizo pasar. No tenían orden judicial o del fiscal para ingresar a su casa, les preguntó y le dijeron que no, pero le pidieron pasar, se imagina que verificar lo que estaban hablando, y para consultarle por armas. Ese día se llevaron, para sorpresa suya, tres armas: la pistola CZ, la escopeta Maverick y la carabina Máuser. La escopeta tiene inscripción a su nombre y no tiene problema. La carabina Máuser es la misma exhibida en el juicio, era herencia familiar, la recibió de su madre el 2008, su padre murió el 2007, fue en una comida familiar en Santiago. En esa ocasión la desarmó, le sacó el cargador, el percutor, el martillo que es fácil sacar, la envolvió y se la llevó a su casa que es la misma donde fue incautada al entregarla voluntariamente. Se las entregó armada, la armó como al día siguiente de recibirla. Jamás la usó como arma. La pistola CZ era calibre 9 milímetros y su origen está en un trueque que hizo con un amigo, la recibió como parte de pago de unos repuestos de maquinarias, vio que estaba en buen estado. Esto fue hace como 30 años. Le entregó un solo cargador y sin cartuchera o algo que la portara. La pistola no estaba a nombre del que se la entregó, Enrique Marchant, que le dijo que se la había comprado a otro fulano, y se preocuparía del tema de la transferencia; le insistió después, pero no ocurrió. Al dueño anterior lo ubica, se llama Francisco Socías, y le dijo que tenía perdidos los documentos, por lo que no se hizo la transferencia. Le preguntaron también por elementos para disparar, balas o cartuchos. La pistola tenía en el cargador 5 municiones, que les entregó a los policías, y además les entregó cuatro vainas que había recogido del interior de su camioneta y había dejado en un pote de papas fritas en la cocina. En la escopeta también iban cinco tiros y los entregó, estaba apoyada al lado de su velador. La PDI entró a su dormitorio, habría que ser ciego para no verla, pero la carabina estaba en su estuche abajo y se las mostró, y ahí se la llevaron. Después de eso lo llevaron al cuartel, la señora a cargo, Sánchez, le dijo que tenía que acompañarlos para declarar. No le preguntó si podía hacerlo. No le advirtieron que tenía derecho a guardar silencio y si lo hicieron fue como una conversación. Llegaron rápido al cuartel, pero pasaron a solicitud suya por el sitio donde había disparado, les dijo que se pusieran más lejos para que con la luz vieran si había más vainas, él también se bajó, pero no encontraron ningún otro

elemento. Llegaron cerca de las 6 al cuartel. Allí lo pasaron donde había otros funcionarios y la funcionaria Sánchez se sentó en su computador y le preguntó qué había pasado, mientras escribía. Preguntó si tenía derecho a un abogado, pero no le respondieron nada. Estaba en eso, declarando frente a un escritorio, en una sala con otros escritorios y funcionarios, cuando llegaron militares a declarar. También llegó el fiscal señor Rojas, presente en el juicio, como a las 7, cree, lo que demoró en declarar. Recuerda que éste preguntó a la señora Sánchez y otro funcionario qué se sabía de los heridos, y le dijeron que un colega llamó al hospital y le dijeron que no había peligro de muerte. Escuchó que uno estaba grave, uno menos grave y otro leve, sin saber distinguir lo técnico. Rojas dice en ese momento “mañana a medio día este hombre queda libre”. Y firmó el acta con la declaración, la que no leyó ni se la leyeron. Pidió tiempo para conseguirse un abogado, pero para no tener dilatado el asunto firmó, y a los tres minutos apareció el abogado. Al otro día no quedó en libertad. En un minuto escuchó que en una declaración alguien mencionó que no estuvo detenido en la PDI, pero aclara que sí estuvo en un calabozo, aunque en la tarde sí hubo un acto de deferencia cuando lo sacaron a ver un partido en la sala de atención de público. No recuerda en qué momento le informaron que estaba detenido, debe haber sido después que llegó el fiscal. Respecto de los medicamentos, tres se los cambió el doctor Barrantes, el del GES. En esa época no sabía los nombres de los remedios ni para qué servían, solo le decía a su señora que le pasara el garrote para dormir y el para activarse. En un momento fue donde el doctor Barrantes, esperó cerca de 20 minutos o media hora, pero no lo atendieron y se fue. A Barrantes lo vio por primera vez a mediados de septiembre, ahí le cambió los medicamentos, le dio muestras y después compraron lo necesario; la segunda fue al ir y esperarlo, pero no lo vio, eso fue como el 10 de octubre; le había manifestado a su señora que no quería seguir tomando los remedios a principios de octubre, es decir esta segunda vez ya no tomaba los medicamentos; y la tercera vez que fue a verlo fue el día 17 de octubre, su señora le había dicho que tenía hora y fue, le manifestó su parecer con los remedios y le pidió que se los cambiara, le dijo que se sentía peor, pero le contestó que volver atrás con los remedios que tomaba antes a través del GES no se podía, solo si seguía en forma particular. Después de estar detenido retomó

el tratamiento, empezó a recibir de parte de su señora lo que había estado tomando con anterioridad. Cuando le dijo a principios de octubre que no quería seguir tomando los remedios ella “lo mandó a la punta del cerro”, se descargó. Volvió a tomar los medicamentos calcula que desde el día 22, estando en la PDI, no recuerda si le dio la dosis correcta, le dio lo que tenía solamente. Es decir, estuvo sin medicamentos desde principios de octubre hasta esa fecha. Respecto a atención profesional, una psicóloga estuvo atendiéndolo alrededor de seis meses, desde mediados de diciembre de 2019, es decir, ya estando preso. Era una psicóloga de Talca, Beatriz Cornejo, ella iba al CCP de Parral a atenderlo cada 10 o 15 días. Al terminar con ella lo empezó a atender una psicóloga de Santiago vía Zoom, Marcela Lechuga, con la que se atendía más frecuente, martes y jueves, todas las semanas, por más de un año, hasta empezar el juicio, después no pues no ha tenido tiempo. Respecto del tratamiento farmacológico lo ha cumplido, su señora se lo traspasó a Gendarmería en la cárcel de Curicó y después en forma interna a la paramédico de Parral, señorita Elizabeth. En cuanto al negocio que empezaría, era particularmente bueno porque era por dos años, eso no era común, la prestación de servicios con su maquinaria era variable, de uno o dos meses, pero el proyecto de esta empresa era mucho más largo, de plantación de avellano europeo, era la agrícola HN. Operó con esta como desde el año 2017 o 2018, a veces facturaba para agrícola Chicureo, y otras a HN, dependiendo del terreno, era un consorcio. El gerente era Pablo Toro Catalán y en esa conversación del 21 de octubre él fue muy tajante y violento en decirle que estaba fuera del proyecto. Luego conversaron un poco y le explicó que además del atraso suyo en partir los socios de la compañía estaban reevaluando el negocio por las eventualidades que pudieran ocurrir, refiriéndose al estallido social. Respecto de su ingreso al círculo de alguaciles de carabineros, no alcanzó a hacerlo, le pedían documentos, cuando los presentaba le pedían otro y siempre tenía un problema, como la foto o que no estaba vigente, se juntaban una vez al mes y se dilató, aunque participó en dos o tres reuniones, en un asado y en la instalación de un monolito a un carabinero muerto por unos terroristas en la cordillera. Nunca juró ni asumió, aunque lo intentó.

Interrogado por el fiscal señor Guajardo, precisó que el 21 de octubre decide salir

de su casa, toma un banano con su pistola y su camioneta y sale, eso fue rondando las 10 de la noche. Mantenía la pistola en el banano, en la parte de abajo de su velador, tapado con libros, semioculto para que no se viera, por sus hijos y nietos. Adentro del banano estaba su pistola y dos cargadores, uno vacío y otro con cerca de 10 balas, que es lo que dijo en la declaración. La pistola era marca CZ, no estaba inscrita a nombre suyo, fue la que dijo que recibió en un trueque de su amigo Marchant. Este le dijo que tampoco estaba inscrita a nombre de él sino del que se la vendió y que se preocuparía de llevarle el padrón o llevársela inscrita; no sabía sobre eso y si un tercero puede inscribirla a nombre de otro. En esos 30 años que tuvo la pistola nunca la regularizó, pese a insistirle. Por eso ubicó al dueño señor Socías que le dijo que no tenía los papeles. Antes tuvo una pistola inscrita y recuerda que tuvo un padrón. Marchant le entregó la pistola con un cargador y nada para guardarla. El segundo cargador se lo consiguió bastante tiempo después. Su interés en recibirla fue porque tenía en ese tiempo una faena forestal con bastante gente y no existían sistemas de pago electrónicos y había gente del sector, mapuches también, y la forma de pagarles era en efectivo, eran millones de pesos, y esto era en sectores muy alejados y por su seguridad pensó en tener esa pistola; afortunadamente nunca lo asaltaron ni debió usarla. Después quedó allí. Nunca pensó en usarla en algo como lo que pasó aquí. Por sus antecedentes personales, a los 60 años de vida nunca jamás tuvo algún problema relacionado. Además de las 10 balas no tenía balas en la pistola. No recuerda si en la casa tenía más municiones calibre 9 mm, sí de la escopeta que le fue incautada, y de la carabina, las que se las llevaron en una segunda ronda. Siempre manejaba la pistola sin el cargador, por seguridad, y nunca la tenía con bala pasada. Antes de salir revisó y por eso sabe la cantidad. Entiende que el cargador de esa pistola permite 15 más la recámara, o 16 más la recámara. Salió de su casa en Zapallar en la camioneta, la misma que ha salido en las fotos que se mostraron. Es de propiedad de su empresa Francisco Fuenzalida Maquinarias Limitada, o Fullmaq. El dueño de esa empresa es él. Sobre si esa camioneta tiene alguna característica especial que la distingue de otros vehículos similares, indicó que no de otra minera, pero de otras de ciudad o campo sí, el famoso tuvo negro que sale por el costado, que chupa el aire que consume el motor. Esa noche iba solo. Su ruta fue entrar a Curicó

por avenida España, lo primero que le llamó la atención, aunque podía ser coincidencia, es que no se veía tráfico vehicular, pasó el paso bajo nivel y el peaje de acceso estaba quemado, no incendiándose en ese momento, desconoce la hora en que sucedió. Siguió por avenida España y al pasar por el supermercado Unimarc se notaban los vidrios rotos, las rejas descerrajadas, había gente mirando y se notaban cosas en el suelo. Pasó lento para ver los detalles y comprobó que la información que le llegó y la foto que recibió por WhatsApp era efectiva. Continuó por la calle atrás de la Alameda, Rene León, y dobló hacia la Alameda, llegando al costado del Unimarc. Vio gente apurada, algunos corriendo hacia la Alameda, desconoce su origen, destino o intención. Algunos de ellos iban con mochila y otros con gorro, que es la moda. En la Alameda norte no hay semáforo, sí en la poniente con Merced, y coincidentemente al querer pasar la luz se pone roja, pero era más trascendente la turba de gente que corría y tiraban cosas, se sentían como explosiones o disparos, no sabe si bombas lacrimógenas, no para por el semáforo sino por la gente, y llegan 4 o 5 vehículos policiales desde donde se bajan funcionarios tipo “tortugas ninjas”, con cascos y botas. Quedó en el bandejón central, desde el medio al poniente, teniendo vista hacia la izquierda una hilera de árboles grandes que son plátanos orientales, los carabineros se parapetaron ahí y veía como disparaban con armas largas hacia el norte, como por encima de donde estaba parado. Desconoce si dentro de los sonidos había pistolas o armas cortas disparando. La gente les tiraba palos, piedras, botellas, lo que hubiera. En ese momento le dio temor de verse enfrentado a que le pasara algo y atinó, en una decisión rápida, a abrir la ventana y, para salir de ahí, disparó al aire, sentado en la camioneta, todo lo que pudo subir considerando el ancho y alto de la ventana. Jamás pensó en disparar para herir o matar, simplemente lo hizo para producir bulla, para poder salir. Ante ese escenario pudo efectivamente moverse, no pudo cruzar Merced porque estaban los vehículos, pero sí dobló a la izquierda hacia el sur. Pensaba salir de eso, no quería estar allí. Explicó que justamente para evitar problemas se había ido por la calle Rene León, para llegar al Unimarc, donde está el monumento de Luis Cruz Martínez. Cuando estaba detenido en el bandejón central advirtió que había bastantes personas, no sabe número, la mayoría al lado derecho de él. La gente se movía, arrancaban, volvían a

tirar cosas, luego se escondían. La camioneta estaba como al medio, entre carabineros y los manifestantes. Ahí baja el vidrio del copiloto y disparó hacia el norte, el vidrio era eléctrico. Hizo tres o 4 disparos. Y se produjo el efecto que esperaba, la apertura de la aglomeración que requería para salir. Pudo hacerlo antes, pero atropellando gente, y además había otros vehículos. Al salir la gente quedó sin algo que los protegiera. No recibió algún daño en su vehículo o en su persona, aunque pudo haber algún rayón o hendidura intrascendente. Ahí tomó por la Alameda hacia el sur. Cuando estuvo en medio allí sintió miedo por su integridad, más si no tenía nada que ver. Al salir sintió más alivio de ese temor, ya no estaba en el núcleo del conflicto. En su mente se dirigía hacia el sur para salir del centro, y ahí vio a la persona que estaba filmando, Dani Bravo, a quien no conocía, pensó que era de esas personas que grababan a Carabineros para después acusarlos. Lo vio en la esquina de Estado con Alameda, estaba de espaldas a la bomba, mirando hacia el norte, al Unimarc, y se dio la vuelta por Argomedo, luego Chacabuco y volvió por Estado de nuevo hacia la Alameda, y lo enfrentó, se estacionó, se bajó y le dijo qué hacía ahí, por qué lo hacía, quién le pagaba; no quiere repetir los epítetos. Ahí llegan carabineros de la SIP con el fin de evitar que pasara a mayores y le piden su identificación. En el juicio se enteró que esa persona se llama así, no sabía nada de él y entiende ahora que era comunicador social. Antes de esa oportunidad no recuerda si se topó con él. Se paró porque lo vio grabando a Carabineros. Estos consultaron su cédula en una maquinita. Le dijeron que se fuera para su casa. Eso lo conectó con el tema de sus hijas, que estaban solas, su señora había salido, no sabe cuándo volvía. Por eso atinó a irse, preocupado por encontrarlas bien. Y así lo constató al llegar, y se acostó evitando otro enfrentamiento con su señora. El fiscal le preguntó qué calle tomó para irse a su casa, indicando que no lo recordaba. Normalmente viaja por Avenida España saliendo para Curicó, porque vive en el sector de Zapallar. Recuerda que estuvo con Carabineros, estaba en shock por lo que había pasado y su preocupación fueron sus hijas. Al llegar no conversó con ellas ni les contó nada, se fue a acostar, era algo común para ellas cuando llegaba. No recuerda ese trayecto. Se toma una pastilla para dormir y así lo puede hacer. Su señora lo fue a despertar al sentir el timbre, estaban separados de dormitorios. Ella estaba con su madre

de 90 y tantos años viviendo con ellos y vivía preocupada de atenderla, por lo que estaba más atenta. Nunca en su casa han tenido llaves y estaba la costumbre de tocar el timbre. Él despertó “semigrogi” hasta que ella dice que eran de la PDI. No le contó nada, le dijo que él iba a ver, para que no se enterara. Como estaba helada la noche se puso ropa, salió, le dijeron si podían pasar, preguntó ¿tienen orden?, respondieron que no, le dijeron ¿pero, podemos pasar?, y él los hizo pasar. Ahí su señora apareció con bata, pasaron y preguntaron y pasó lo que ha dicho. Le preguntaron por armas y les entregó la pistola CZ, la tenía en la casa, en su dormitorio, dentro del banano cerrado. También estaban los cargadores dentro, fuera de la pistola, con 5 municiones en uno y el otro vacío. También les muestra y entrega la escopeta. Le preguntaron por municiones y les entregó lo que tenía la pistola, lo que tenía la escopeta y lo que tenía la carabina, según recuerda, no recuerda que tuviera munición. La escopeta al parecer tenía una en la recámara. Después acompaña a la policía al cuartel, pues entendió que tenía que hacerlo, no le dijeron que era obligatorio, si quería cooperar o que estaba detenido. Le dejaron vestirse y salieron. En su camino fueron a ver si encontraban vainillas, que no encontraron. En el cuartel alcanzó a tomar contacto con un abogado, al llamarlo no estaba con el teléfono prendido, fuera de área decía, insistió hasta que le contestó, le comenta que no es su área, es civil, se llama Manuel Cabrera, y que le iba a hacer contacto con un abogado especialista en penal, eso demoró hasta que se produjo lo que contó. Habló con Cabrera faltando para las 7. Posterior llegó un abogado al cuartel, se paró al lado suyo, le dijeron que era su abogado, pero no lo conocía, le dijo que Cabrera contactó a un colega que no podía y ese lo mandó a éste. Había firmado hace poco, casi fue para pensar que estaba esperando detrás de la puerta ingresar. No pudo explicarle la situación. Esto fue sentado frente a la señora Sánchez. En esa misma sala había militares declarando, no sabe de qué hablaban, estaba absolutamente preocupado de lo suyo. Esa noche escuchó disparos y no sabe si murió alguna persona, no era su tema. Se dice que ésta persona falleció entre las 10 y 11 de la noche, pero eso no lo sabía, él estuvo en el centro, luego volvió a su casa, durmió y después estuvo con la policía, malamente podría haberse informado. Consultado sobre si escuchó -en el juicio- que se encontraron dos balas en un vehículo en la carretera, que se

hizo un estudio comparativo y fueron disparados por su pistola, frente a lo cual es posible que haya tomado otro camino y él haya disparado, respondió que no lo recuerda.

Preguntado a su turno por el abogado querellante señor Norambuena, expresó que la única persona que manejó la camioneta roja marca Toyota patente HVLD26 fue él; él era quien andaba en ella, la manejó en el trayecto que describió hasta irse a su casa. No sabe si la PDI se la llevó ese mismo día. Por otro lado, él también fue quien portó el arma de fuego referida, la pistola CZ, y fue la única persona que ese día 21 de octubre de 2019 disparó esa pistola en distintas oportunidades; nadie más la tuvo. Vuelto a ser preguntado sobre cómo explica los impactos que tiene el vehículo marca Fiat que emanan de la pistola que él tenía, indicó que eso es algo que no sabe. Añadió que al momento de salir de su casa conversó previamente con su hija y le dijo que iba donde un amigo, para no preocuparla, pero eso no era verdad. No recuerda cómo regreso a su casa después de conversar con Carabineros. Respecto a qué le dijo a la policía y al fiscal sobre por dónde regresó a su casa, no lo recuerda, le parece haber escuchado que alguien dijo que mencionó Avenida España, pero eso no lo dijo. Al parecer la policía Sánchez. Repite que esa declaración la firmó sin leerla. Le habían dicho que quedaría libre al día siguiente. Respecto a que durante el juicio se vieron imágenes sobre que la camioneta roja tomó la salida de la Ruta 5 sur hacia el norte, no lo puede explicar, no lo recuerda. Puede ser que en esas imágenes del trayecto fuera su camioneta. Agregó que se negó a participar de la Reconstitución de Escena por temor a las posibles agresiones que pudiera sufrir, dada la cantidad de gente involucrada. No es efectivo que se negó a hacerse exámenes siquiátricos del Servicio Médico Legal, fue a ver a la siquiatra forense a Rancagua y a Talca al psicólogo forense, los que declararon hace un par de días en el juicio. Consultado sobre si después de la declaración del día 22 de octubre ante la funcionaria Sánchez guardó silencio ante la fiscalía, señaló que no recuerda, vino muchas veces a Curicó, cree que -la del juicio- es la tercera vez que vino a declarar, a Rancagua fue como tres oportunidades, a Talca como cuatro. Ante el fiscal no lo niega, pero no recuerda. Este abogado le terminó preguntando si disparó la pistola marca CZ y lesionó a Ricardo Solís, ante lo que dijo que no vio haber disparado a éste, disparó al aire; tampoco a Nicolás Espinoza ni al señor Ayala. Y menos

aún en la carretera haberle disparado al señor Uribe causándole la muerte, pues no recuerda haber pasado por ahí ni haber disparado.

Finalmente, ante nuevas consultas del defensor conforme lo faculta el artículo 329 del Código Procesal Penal, explicó que cuando disparó al costado derecho suyo, en el bandejón central, lo hizo hacia el norte, y hacia arriba lo que más pudo. La gente se dispersó y pudo salir, porque eso era lo que obstaculizaba su paso. Al salir la gente quedó sin escudo, sin nada que los protegiera. Entendiendo que la Alameda en esa parte es más ancha que una arteria normal, disparó hacia el norte, la gente atacaba a Carabineros de norte a sur, y Carabineros los repelía de sur a norte, y en ese sentido la camioneta les servía a los manifestantes como parapeto, no sabe si de las balas o perdigones, lo que fuera, Carabineros no lanza palos o piedras. Al salir no quedó algún vehículo detrás suyo, por eso entiende que quedó el campo abierto entre manifestantes y Carabineros. No le había pasado antes eso en su vida, fue como si toda su vida pasara en cinco segundos, pensó en sus nietos, todo lo que implicaba que la cosa pasara a mayores, quedó choqueado. En el evento con Dani Bravo estaba exaltado, alterado, descolocado, fuera de sí, viendo que esta cosa crecía. Su intención fue encararlo por la situación de Carabineros. Trató de ser alguacil porque tiene admiración por Carabineros y piensa que las personas que los filman eran mal intencionadas. Explica su estado de ánimo por la situación que estaba viviendo, descontrolado, sin sus remedios, y algo gatilló que se pusiera demasiado alterado. A esa persona le dijo por qué hacía eso, quién lo mandaba o le pagaba para hacer eso, y otros epítetos, este no le contestó y se dedicó a filmarlo, y había gente junto a él que le contestaba.

A su vez, en la oportunidad reservada durante el juicio para sus **palabras finales**, nada añadió.

OCTAVO: Convenciones probatorias. Los intervinientes no arribaron a convenciones probatorias.

NOVENO: Prueba rendida en el juicio. En la audiencia de juicio el **Ministerio Público**, con el fin de sustentar su acusación, aportó múltiples pruebas, siendo así como hizo comparecer a declarar en calidad de testigos a los siguientes (entre paréntesis se consigna el número de orden original en la prueba testimonial ofrecida): Carmen Victoria Salinas Cea (21), Clara Glafira Noemí Salinas Cea (20), Miguel Andrés Hernán Ayala Salinas (19), Nicolás Francisco Espinoza Rojas (16), Rixio Sánchez Medina (51), Ricardo Andrés Solís Opazo (17), Karolain Yosett Suazo Narváez (18), Eduardo Rolando Contreras Ramírez (2), Ignacio Valeria Reyes (49), Marcela Sánchez Torrejón (43), Fernando Matus Urrea (42), Cristian Humberto Miranda Miranda (22), Alex Eduardo Muñoz Garcés (37), Sergio Humberto Osses Arenas (3), Dani Alexis Bravo Maturana (29), Alejandro Andrés Muñoz Moraga (36), Miguel Ángel Neira Neira (35), Gonzalo Andrés Solís Muñoz (7), Sergio Opazo Flores (6), Cristian Felipe Ruiz Cid (10), Bernardo Veloso Rojas (41), Nelson Octavio Uribe Álvarez (40) y Claudia Belén Pezo Sáez (39).

También presentó a declarar como peritos a los siguientes (entre paréntesis se consigna también el número de orden original en la prueba pericial ofrecida): Jorge Rodrigo Guzmán Martínez (7), funcionario Lacrim Temuco, sobre el informe pericial de sonido y audiovisual N°195/2019; Saúl Tirado Mercado (1), médico del Servicio Médico Legal de Curicó, sobre el Informe de Autopsia 174-19 realizado al occiso José Miguel Uribe Antipani, Informe de Lesiones 248-2019 realizado a Ricardo Solís Opazo, e Informe de Lesiones 249-2019 realizado a Nicolás Espinoza Rojas; Ricardo Andrés Henríquez Fuenzalida (2), perito fotógrafo del Lacrim Talca, sobre los informes planimétricos 263-2019 y 42-2020; Eduardo Soto Valdés (4), perito sección balística del Lacrim, respecto del informe pericial balístico 1349-2019; Germán Tapia Coppa (6), médico cirujano criminalista de la PDI, sobre el informe pericial médico criminalístico 143; Daniel Cáceres Aravena (5), perito sección balística del Lacrim, sobre los Informes periciales balísticos números 122/2019, 11-2020, 41-2020 y 73-2020; Jonathan Andrés Valdés Estay (15), sicólogo forense del Servicio Médico Legal de Talca, respecto del informe psicológico N°18-2020 realizado al acusado; María José Villena Cabrera (16), médico psiquiatra forense del Servicio Médico Legal de Rancagua, sobre el informe N°6-2020 relativo a la pericia psiquiátrica practicada al

encausado; y Claudia Cáceres Fuenzalida (17), perito social del Servicio Médico Legal de Rancagua, sobre informe complementario de indagación de antecedentes médicos del acusado N°6-2020.

Además, aportó, a través de su lectura extractada, prueba documental consistente en las siguientes piezas (se indica el número con el que fueron incorporados, en general respetando la numeración original, omitiendo los que no se incorporaron):

1) Datos de atención de urgencia (DAU) emitido por el Hospital de Curicó, correspondiente a la víctima José Miguel Uribe Antipani, de fecha 21 de octubre de 2019.

3) Datos de atención de urgencia (DAU) emitido por el Hospital de Curicó, correspondiente a la víctima Nicolás Francisco Espinoza Rojas, de fecha 21 de octubre de 2019.

4) Evolución de paciente en observación, emanado del Hospital de Curicó, correspondiente a la víctima Nicolás Francisco Espinoza Rojas.

6) Datos de atención de urgencia (DAU) emitido por el Hospital de Curicó, correspondiente a la víctima Ricardo Andrés Solís Opazo, de fecha 21 de octubre de 2019.

7) Datos de atención de urgencia (DAU) emitido por el SAR Aguas Negras de Curicó, correspondiente a la víctima Miguel Andrés Hernán Ayala Salinas, de fecha 21 de octubre de 2019.

8) Datos de atención de urgencia (DAU) emitido por el Hospital de Curicó, correspondiente a la víctima Miguel Andrés Hernán Ayala Salinas, de fecha 22 de octubre de 2019.

9) Evolución de paciente en observación, emanado del Hospital de Curicó, correspondiente a la víctima Miguel Andrés Hernán Ayala Salinas.

10) Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.N.V.M. respecto del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa patente única HVLD-26.

11) Documento consulta registro de control de armas y explosivos, emanado de la Dirección General de Movilización Nacional (en adelante DGMN), respecto del acusado Francisco José Fuenzalida Calvo.

12) Documento emanado del Hospital de Curicó, de fecha 22 de octubre de 2019, relativo al paciente Ricardo Solís Opazo, en el cual se informa el resultado del examen de tomografía computada realizado al mismo.

13) Epicrisis del paciente Ricardo Andrés Solís Opazo emanada del Hospital de Curicó.

14) Epicrisis correspondiente al paciente Nicolás Francisco Espinoza Rojas emanada del Hospital de Curicó, de fecha 28 de octubre de 2019.

15) Epicrisis Multiprofesional correspondiente al paciente Nicolás Francisco Espinoza Rojas emanada del Hospital de Curicó.

16) Oficio de la Autoridad Fiscalizadora de Curicó emitido con fecha 19 de noviembre de 2019 en relación a consulta efectuada respecto del acusado.

21) Reporte de armas que da cuenta de las armas inscritas a nombre de Francisco José Socías Reyes, emanado de la DGMN.

22) (se corrió la numeración al incorporarlo, pues el 21 estaba repetido) Reporte de armas que da cuenta de las armas inscritas a nombre del imputado Francisco José Fuenzalida Calvo, emanado de la DGMN.

23) (era el 22) Reporte de armas que da cuenta de las armas inscritas a nombre de Gastón José Oscar Fuenzalida Navarrete, emanado de la DGMN con fecha 23 de octubre de 2019.

24) (era el 23) Protocolo operatorio N°265211, emitido por el Hospital de Curicó, respecto de la víctima Nicolás Francisco Espinoza Rojas.

25) (era el 24) Informe de la autoridad fiscalizadora de Curicó N°6442/3954/2019 y

sus anexos. Y,

26) (era el 25) Informe de la autoridad fiscalizadora de Curicó N°6442/4250/2019 y sus anexos.

Finalmente, incorporó como otros medios de prueba y a través de su reconocimiento y explicación por las personas que se dirán, los siguientes (se indica numeración original):

1) Set de 2 fotografías que dan cuenta de las maniobras realizadas por personal médico en la persona de la víctima José Miguel Uribe Antipani.

2) Set de 24 fotografías que forman parte del informe de primeras diligencias realizadas por la PDI.

4) Una lámina que contiene dos imágenes que ilustran las lesiones encontradas en la víctima Jose Miguel Uribe Antipani y que forma parte del informe médico legal de autopsia N°174-19.

5) Dos fotografías de las radiografías que dan cuenta de las lesiones de la víctima Nicolás Francisco Espinoza Rojas.

6) Set de 6 fotografías obtenidas por la PDI, correspondientes al vehículo y especies incautadas al imputado Francisco José Fuenzalida Calvo.

7) Set de 2 fotografías obtenidas por la PDI, correspondientes al sitio del suceso ubicado en Avenida Manso de Velasco.

8) Tres fotografías de las radiografías que dan cuenta de las lesiones de la víctima Nicolás Francisco Espinoza Rojas.

9) Siete fotografías que dan cuenta de las lesiones de la víctima Nicolás Francisco Espinoza Rojas.

10) Dos fotografías de las lesiones de la víctima Miguel Andrés Hernán Ayala Salinas.

13) Set de 7 imágenes obtenidas por la PDI de las grabaciones realizadas por el testigo Nicolás González Iturriaga.

14) Set de 15 fotografías del vehículo placa patente KKTG33 y de los proyectiles encontrados en el móvil, obtenidas por la PDI.

15) Set de 104 fotografías que forman parte del informe pericial fotográfico N°263/019.

18) Set de 47 imágenes obtenidas de diversas cámaras de vigilancia y seguridad, obtenidas por la PDI.

20) Set de 8 fotografías obtenidas por la PDI, del vehículo utilizado por el acusado Fuenzalida Calvo, placa patente única HVDL26.

21) Un disco que contiene 143 fotografías del procedimiento de autopsia N°174-2019, de la víctima José Miguel Uribe Antipani, con su respectiva cadena de custodia.

22) Set de 34 fotografías que dan cuenta de ubicación de las cámaras de seguridad que captaron imágenes relativas a los hechos investigados, obtenidas por la PDI.

23) Set de 9 fotografías que forman parte del informe pericial balístico N°1349-2019.

24) Set de 4 fotografías que forman parte del informe pericial balístico N°122-2019.

27) Un disco que contiene grabaciones e imágenes de los hechos investigados y que fueron recopilados en redes sociales por la PDI, NUE 5173742.

28) Un disco que forma parte del informe pericial de sonido y audiovisual Lacrim Temuco N° 195/019.

29) Set de 14 fotografías que forman parte del informe pericial balístico N° 11/020.

30) Set demostrativo fotográfico compuesto de 8 láminas, que dicen relación con el sitio del suceso ubicado en la Avenida Manso de Velasco de Curicó.

33) Un disco que contiene dos grabaciones y una fotografía facilitados por el testigo Dany Bravo Maturana.

35) Set de 95 fotografías que forman parte del informe pericial fotográfico de reconstitución de escena N°042/020 de Lacrim Talca.

37) Un disco que contiene grabaciones obtenidas por el testigo Miguel Ángel Neira Neira, con su respectiva cadena de custodia, NUE 1938949.

39) Set de 16 imágenes que forman parte del informe pericial balístico N°41/020.

40) Set de dos ilustraciones y una fotografía, que forman parte del informe pericial balístico N°73/020.

42) Set de 46 fotografías que corresponden al informe de presentación gráfica, realizado por la PDI.

44) Restos de objeto metálico (trozo de proyectil deformado) extraído del cuerpo de Nicolás Francisco Espinoza Rojas, con su respectiva cadena de custodia.

45) Un pendrive marca Kingston que contiene imágenes y grabaciones obtenidas de diversas cámaras de seguridad tanto municipales como de varios inmuebles particulares, ubicados en las inmediaciones de los sitios del suceso, con su respectiva cadena de custodia, NUE 5949091.

47) Un disco que contiene fotografías y videos obtenidos por el testigo Alejandro Andrés Muñoz Moraga, NUE 5949195, con su respectiva cadena de custodia.

48) Una radiografía dorsal AP y dorsal LAT, correspondiente a la víctima Miguel Ayala Salinas, NUE 5949074.

49) Un disco que contiene presentación de circulación de vehículos involucrados en estos hechos y análisis de los sitios del suceso, obtenidos de diversas cámaras de vigilancia, realizado por la PDI.

50) Un fusil SIG, serie 1964, con su respectiva cadena de custodia.

51) Un cargador y 18 cartuchos calibre 7.62, dos de ellos fueron percutidos durante la prueba de funcionamiento, todos asociados al fusil SIG, serie N°1964, con su respectiva cadena de custodia.

52) Una pistola marca CZ, modelo 85, calibre 9 mm, serie N°A2773, dos cargadores y cinco cartuchos 9 mm, con su respectiva cadena de custodia.

53) Cuatro vainillas percutidas calibre 9 mm, con su respectiva cadena de custodia.

54) Un trozo de encamisado de proyectil balístico calibre 9 mm, con su respectiva cadena de custodia.

55) Una escopeta de repetición, calibre 12, marca Maverick, modelo 88, serie N°MV55165H, y cinco cartuchos calibre 12, con su respectiva cadena de custodia.

56) Un fusil marca Máuser, modelo 1912, serie N°69148, junto a un estuche de transporte, con su respectiva cadena de custodia.

57) 240 cartuchos calibre 7 mm, con su respectiva cadena de custodia.

58) 10 cartuchos calibre 7x57 mm, con su respectiva cadena de custodia.

59) 30 cartuchos de escopeta, calibre 12 mm, con su respectiva cadena de custodia.

60) Set de once fotografías que forman parte del cuadro gráfico demostrativo del camión placa patente única FSSB-70. Y,

62) Dos proyectiles balísticos encamisados y deformados, extraídos desde carrocería de vehículo marca Fiat, placa patente única KKTG-33, con su respectiva cadena de custodia.

Por otro lado, la **parte querellante y demandante civil** representada por los señores Guajardo y Norambuena presentaron como prueba propia únicamente los documentos consistentes en Certificado de nacimiento del menor Máximo Baltazar Uribe Pezo; Certificado de defunción de José Miguel Uribe Antipani; y Certificado de nacimiento de José Miguel Uribe Antipani; todos emitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

A su turno, los **otros querellantes** no aportaron pruebas propias.

La **Defensa**, por su parte, presentó como prueba independiente a los testigos Manuel Antonio Gamboa Morán (Nº8 de su prueba), Mario Enrique Undurraga Castelblanco (20), Óscar Gonzalo Fuenzalida Calvo (14), Oscar Gastón Fuenzalida Calvo (17), María Josefina Fuenzalida González (3) y José Pablo Toro Catalán; y, como peritos, a la psicóloga Susana Beatriz Pavié Cid y a la psiquiatra Vilma Ortiz Torres, quienes se refirieron al informe y evaluación pericial psicológica y psiquiátrica efectuada a Francisco Fuenzalida Calvo. Ello sin perjuicio de contar con la declaración del mismo acusado.

El resto de las pruebas ofrecidas no fue presentado.

El tenor expreso de todas esas declaraciones y la incorporación verbalizada de las otras pruebas quedó grabado en el respectivo registro de audio de la audiencia.

DÉCIMO: Decisiones del Tribunal y marco de la discusión. Como se dio a conocer en el veredicto dictado al término del juicio, este Tribunal ya decidió, por unanimidad, condenar al encartado Francisco José Fuenzalida Calvo por su responsabilidad en calidad de autor ejecutor de 3 homicidios simples, en grado de frustrados, que afectaron a Ricardo Andrés Solís Opazo, Nicolás Francisco Espinoza Rojas y Miguel Andrés Ayala Salinas; el homicidio simple, consumado, de José Miguel Uribe Antipani; dos delitos consumados de porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones; y daños simples, perpetrado en perjuicio de un vehículo de la empresa Lizcal S.A.

Se tuvo presente para así decidir que el conjunto de la prueba aportada permitió

acreditar sustantivamente los elementos fácticos descritos en la formulación de cargos del Ministerio Público y la acusación particular, respectivamente, y con ello la calificación jurídica y grado de participación culpable antes señalados, destruyendo la presunción de inocencia que ampara a todo acusado.

Procederemos enseguida a realizar un análisis de la prueba aportada por el Ministerio Público y el acusador particular, así como de los planteamientos que realizaron estos y los demás querellantes que adhirieron a la acusación oficial, para valorarla en el sentido que propusieron y para desatender la versión del acusado y la prueba de descargo, y asimismo lo que en contraposición señaló la Defensa, que pidió la absolución de su representado de todos los cargos, sobre la base de dos líneas argumentales, la primera, por concurrir a su respecto la causal de exculpación del artículo 10 N°1 del Código Penal, la que abordaremos posteriormente, y la segunda, por insuficiencia probatoria en cuanto a los hechos y especialmente la participación de su representado, planteando, subsidiariamente, una eventual recalificación jurídica de los tres homicidios frustrados a delitos de lesiones.

Desarrollaremos para ello, primeramente y por separado, la prueba de los hechos atinentes a cada uno de los cargos y exponiendo cómo es que se establecieron los diversos delitos y la autoría del encartado, para luego plasmar las conclusiones fácticas y jurídicas de las decisiones condenatorias enunciadas, y, a continuación, abordaremos la discusión y la prueba brindada sobre dicha causal de exculpación.

Terminaremos abocándonos a todos los aspectos relativos a la determinación de las penas a imponer y su forma de cumplimiento y abordando lo relativo a la acción civil deducida.

UNDÉCIMO: Análisis de las pruebas aportadas con relación a los cuatro cargos por homicidio, argumentos de las partes y conclusiones. El Ministerio Público y los dos querellantes que adhirieron a su acusación, propusieron, en primer lugar, que Fuenzalida Calvo debía ser sancionado por su autoría en los homicidios simples, en grado de

frustrados, de Ricardo Solís, Nicolás Espinoza y Miguel Ayala, a quienes habría disparado con un arma de fuego en el sector de la Alameda Manso de Velasco de Curicó; en tanto que los mismos acusadores más la parte acusadora particular indicaron que el encartado también era responsable de la muerte de José Uribe, en el sector de la carretera 5 sur, a la altura del acceso sur a Curicó, todo ello en circunstancias en que se encontraban junto a muchas otras personas participando de las manifestaciones producidas la noche del 21 de octubre de 2019.

El Tribunal, por ende, se vio ante la tarea de ponderar la prueba aportada y la declaración prestada en el juicio por el propio acusado, a fin de verificar si se acreditaban los presupuestos fácticos centrales descritos en la formulación de cargos y con ello los elementos tipificados en el artículo 391 N°2 del Código Penal, que contempla la figura residual del homicidio simple y que en este caso se invocó por aquellos acusadores en grado de ejecución frustrado en los tres primeros casos y consumado en el cuarto, es decir, *1) una acción dolosa de una persona capaz de producir la muerte de otra, en este caso de cada uno de los cuatro afectados, 2) que dicho resultado efectivamente se concretó, en el caso de Uribe, y que no produjo respecto de los otros por causas independientes de la voluntad del hechor, y 3) que haya una relación de causalidad entre esa acción y el potencial resultado, descartando cualquier otra concausa.*

En primer término, diremos que estos jueces apreciamos que no hubo controversia entre los intervinientes del juicio sobre que estos sucesos sometidos a la decisión del Tribunal ocurrieron en un contexto fáctico preciso, el día 21 de octubre de 2019, aproximadamente entre las 22:00 y 22:30 horas, en una primera etapa en la Alameda Manso de Velasco de Curicó, en un tramo de unas tres cuadras que comprende, de norte a sur, por el lado poniente, las calles Merced, Estado y Argomedo, que cruzan esa avenida, en tanto que hacia el oriente esas calles se llaman distinto, correspondiendo a Historiador René León, Carrera y San Francisco, respectivamente. Asimismo, también prontamente se apreció falta de discusión sobre que la segunda etapa de los sucesos de esa jornada se desencadenó en el sector de la carretera 5 sur, a la altura del acceso sur a Curicó, alrededor

de las 22:30 horas o pocos minutos después. Todo ello fue ratificado con la prueba de cargo y, en general, algunos de sus elementos, por el propio acusado.

1.- En cuanto a la existencia de una acción dolosa de una persona capaz de producir la muerte de otra, en este caso de cada uno de los cuatro afectados

A su vez, en cuanto al primer elemento del tipo penal enunciado, los mismos soportes informativos permitieron establecer, más allá de toda duda razonable, el hecho central de este primer capítulo de la imputación, cual es que, en las circunstancias de lugar y tiempo indicadas, los cuatro afectados recibieron un impacto balístico cada uno, recibiendo atención médica momentos más tarde y quedando los tres primeros con diversas lesiones, mientras Uribe dada la gravedad de las suyas falleció prácticamente en forma inmediata.

Así, respecto de **Ricardo Andrés Solís Opazo**, se contó con su declaración en el juicio, quien indicó, en síntesis, que el 21 de octubre de 2019 en la noche se encontraba junto a su señora Karolain y su hija en la Alameda de Curicó con calle Estado, en el Juzgado de Letras que está frente al Unimarc, observando cómo sujetos golpeaban sus cortinas para intentar abrirlo, cuando llegan los carabineros, oye varios disparos y su señora le dice que se vayan, en eso siente un “corrientazo” en la mano, como que le “chupó los tendones” y le saltó mucha sangre, su señora trató de parar un auto que pasaba, pero no le hizo caso, por lo que se hizo un torniquete con su polerón y corrieron al hospital. Añadió que al llegar a calle San Francisco ven pasar muy rápido una camioneta roja que le llamó la atención porque tenía un tubo negro para arriba. En el hospital lo atendieron ese día y le dijeron que tenía una bala, le hicieron limpieza y otras cosas, después lo han operado hartas veces, pero igual no puede mover bien su mano izquierda ni tomar nada bien, tiene el 90% malo. Eso le ha provocado grandes problemas, se siente inútil, depende de la ayuda de otras personas y hasta ha pensado en quitarse la vida. Mostró en el juicio su antebrazo izquierdo donde se vieron diversas cicatrices.

Respecto de la camioneta, indicó que podría reconocerla, y así lo hizo al exhibírsele

la **evidencia fotográfica N°20**, fotos 1 y 2, por su color y sobre todo el tubo negro, donde efectivamente se apreció un vehículo de esas características. Terminó aclarando que no vio quién le disparó ni desde donde.

En concordancia con él escuchamos a **Karolain Yosett Suazo Narváez**, quien también indicó que ese día habían salido con su pareja, Ricardo Solís, y su hija y una amiga de ésta, a los juegos de la Alameda, estuvieron en el cerro Condell y luego caminaron hacia el sur, y en el Unimarc vieron a un grupo de gente que quería entrar y le dijo a Ricardo que se fueran, por lo que podía pasar. Estaban en el Juzgado de Letras y Ricardo le dijo que le habían pegado en el brazo, se da vuelta y lo mira, se sentían los carabineros lejos y escuchó disparos, pero a ella le extrañó, ¿cómo, si están lejos?, no podían haber sido ellos, ahí le mira el brazo y tenía demasiada sangre, ante lo cual ella se para al medio de la calle con la niña, pero ningún vehículo lo quería ayudar. Él se hizo un torniquete y corrieron al hospital, donde lo pasaron a sala de reanimación. En eso llegó un niño llamado Nicolás con una herida en la pierna, comentaron que una camioneta roja era la que percutaba los tiros en la Alameda y vio un par de videos en redes sociales sobre eso. Como 15 minutos después llegó otro joven herido en la carretera, muy mal, sacaron a Ricardo y pasaron al joven, el que luego falleció. Como a las 2 a Ricardo lo pasaron a pabellón para sustraerle la bala y hacerle limpieza. Ricardo le comentó al salir que cuando iban corriendo vio muchas veces una camioneta roja con un tubo negro para arriba, le llamó la atención, pero ella no la vio, solo en los videos, era roja, grande y tenía un tubo, era la única de esas características en el sector, y las personas en el hospital empezaron a comentar que los disparos venían de una camioneta roja.

Agregó que como familia están muy mal sicológicamente, él sobre todo, deben apoyarlo, no puede abrocharse el pantalón ni comer solo, depende de otra persona. Fueron a ver médicos, pero no lo quieren volver a operar porque las veces que lo operaron le hicieron más daño.

Por su parte, **Nicolás Francisco Espinoza Rojas**, expresó que el 21 de octubre de 2019 asistió a la marcha que se realizaba en Curicó, andaba con 5 amigos, de ahí fueron al

cerro y luego caminaron a casa por la Alameda en dirección sur, por el lado poniente. Al llegar a Merced con Manso de Velasco se percataron que había gente tratando de ingresar al Unimarc, se sentó en la berma cerca de la estatua de Bernardo O'Higgins, llegaron Carabineros, tres furgones y dos camionetas con colores institucionales, se bajaron y dispararon perdigones para dispersar a la gente. Ahí él se paró para irse, por el miedo, y al darse vuelta sintió una electricidad en su pierna izquierda y cayó, se arrastró, al mirar ya no estaban los vehículos, sus amigos lo socorrieron, tomó su teléfono, eran las 10:11, llamó a su mamá y le dijo que le dispararon hace 10 minutos. Llamaron la ambulancia, justo iba pasando una que venía de Licantén, la detuvieron y los paramédicos le inmovilizaron pierna y lo llevaron al hospital. Allí le sacaron radiografías donde se veía que tenía una fractura en el fémur y un fragmento de bala. Al otro día lo operaron, estuvo una semana hospitalizado y 15 en su casa en hospitalización domiciliaria, y le hicieron sesiones de kinesiología para recuperar la movilidad, pero no pudo volver a trabajar en lo que hacía antes, maestro enfierrador, porque requería mucho esfuerzo físico.

Explicó que lo lesionaron en la pierna izquierda, ingresó la bala por lado externo, el izquierdo, y salió por dentro, por el lado derecho, y mostró aquello al exhibírsele la **evidencia fotográfica N°9**, en que reconoció imágenes de su pierna. También se le exhibió la **evidencia fotográfica N°8**, que identificó como imágenes de las radiografías que le sacaron en el hospital, donde se ve su fémur y el fragmento de bala que le quedó, y luego cómo quedó su pierna después de la operación, con los pernos que le colocaron para afirmar el hueso, uno en la pelvis y otro en la rodilla para afirmar el fierro que tendrá de por vida.

Finalizó aclarando que no vio a carabineros dispararle y entiende que ellos no lo hicieron porque tenía una bala y el médico del hospital le dijo que carabineros solo disparaba balas de goma. No sabe quién le disparó o de dónde vino la bala. En este punto, confrontado con una declaración que le tomaron esa noche en que había señalado que desde una camioneta roja de carabineros le dispararon, indicó que eso no era así, que estaba confuso y herido.

A su turno, **Miguel Andrés Ayala Salinas**, declaró que andaba en la Alameda con su mamá, su hermano chico y su tía Carmen, se habían bajado del auto y se topó con unos amigos, y fue con ellos al Unimarc. Cuando empiezan las protestas aparece una camioneta roja un tubo de plástico negro que le salía por el lado y empieza a disparar, él pensó que eran balas de mentira, y, cuando se alejaba, de repente le llega un impacto en la espalda, él va donde su mamá y le dice que le habían pegado un balazo de goma, según él, pero le dolía mucho, iba vomitando y convulsionando, ahí se van a su casa donde se desmaya y lo levantan para ir al Poli, y allá un médico le dan la noticia que tenía una bala alojada en el cuerpo, a 15 centímetros del corazón, no era una bala de goma. Cuando recibió el tiro estaba al lado izquierdo de la estatua con la espada, mirando al supermercado y hacia la carretera, al medio de la Alameda. Al principio pensó que le habían disparado carabineros que estaban más allá, ya que oyó disparos y éstos lanzaban bombas lacrimógenas, y que la camioneta roja también era de carabineros, pero no era así. Vio al chofer que disparaba a una distancia como de la calle a la mitad de la Alameda. La camioneta estaba detenida, al lado de la Shell y una compraventa.

Ayala ilustró su relato con las imágenes de la **evidencia fotográfica N°10** que se le exhibieron, donde reconoció dos fotos que se le tomaron donde aparece él y el lugar del impacto. También se le mostró la **evidencia fotográfica N°48**, en que reconoció una radiografía donde se ve la bala donde aún está alojada en su espalda, sabe que es suya porque se la dio el doctor en el hospital y él se la pasó a la policía.

Aclaró que donde se encontraba había más personas peleando con los carabineros y había visto antes la camioneta roja en el lugar, la que se dio dos vueltas a la manzana.

Se le exhibió a continuación la **evidencia fotográfica N°20**, donde reconoció en sus 8 fotografías la camioneta, especialmente por su color y el tubo que dijo, aunque no logró ver su patente.

Consultado por el defensor, indicó que declaró esa noche ante la policía en el Hospital de Curicó, pero no recuerda lo que dijo, por lo que se le exhibió su declaración

para refrescar memoria, la que reconoció, donde señaló: *“Respecto de la persona que disparó, debo decir que solo lo vi de lejos, no recuerdo su cara, si podría recordar su ropa, este se bajó de una camioneta roja, que cuando empezaron a saquear el Unimarc llegó al lugar, la pararon al medio de la calle, esta era conducida por un carabinero, su acompañante también era carabinero, de eso estoy seguro porque los vi vestidos con uniforme de carabineros, presumo eso porque era verde, y desde el asiento posterior se bajó un tercer hombre de civil, con jeans, no recuerda cómo vestía hacia arriba, y con un arma empezó a disparar al que le llegara, uno de esos tiros me llegó a mí”*.

Terminó indicando que actualmente se encuentra en prisión preventiva en el CCP de Curicó, con causa pendiente por robo con intimidación y violencia.

Vinculado a su testimonio oímos el de **Carmen Victoria Salinas Cea**, la que señaló que, no recuerda la fecha, pero en su casa se pusieron de acuerdo para venir con su hermana Clara Salinas y su sobrino Miguel Ayala a la Alameda a las manifestaciones. Ella venía manejando, se estacionaron frente a la funeraria Galdámez, dejaron el auto ahí y caminaron hasta el Unimarc que queda en la Alameda, su hermana se subió a los juegos para ver lo que estaba pasando, porque lo estaban abriendo. Llegó Carabineros a echar a la gente que estaba rompiendo el Unimarc, y toda la gente salió corriendo. Esta pensó que si corría la perseguirían, así es que se fue caminando. De repente pasó su sobrino Miguel corriendo por delante suyo, cruzó la calle donde está la bencinera Petrobras, venía con más gente, ella quedó parada en la ciclovía, y entonces vio una camioneta de color rojo que paró casi frente a ella y el chofer con la mano izquierda afirmaba el volante y en la derecha tenía una pistola color negro oscuro, la que apoyó sobre la otra mano y disparó cuatro o cinco tiros (hace gesto para graficarlo), es decir, cruzó su brazo derecho por sobre el izquierdo, y disparó en dirección a la carretera, donde había mucha gente corriendo. Esa camioneta roja tenía un tubo negro por fuera y una reja negra en la parte de la cabina hacia atrás, era lo más particular. En ella iba solo una persona, un caballero que notó bajo, porque no se veía tan alto, lo vio de perfil y se lo notaba con pelo a la altura de las orejas y calvo hacia arriba.

Indicó que lo podía reconocer y así lo hizo en el televisor de la sala de audiencia

durante el juicio, señalando al acusado Fuenzalida Calvo.

Luego la camioneta siguió para la carretera y ella recibe una llamada de su sobrino Miguel, diciendo que le dispararon y que por favor lo fuera a ver. Le cortó y llamó a su hermana Clara, contándole, fue a buscar corriendo su auto y al volver ve la misma camioneta por el costado izquierdo -habían pasado como 10 minutos-, ya sabía que era el que estaba disparando, se le pasó por la mente chocarlo, pero no lo hizo porque podía quedar parada y él andaba con arma, así es que siguió y encontró a Miguel en una plazoleta de la avenida España, viendo que tenía una herida en la zona de la paleta, del lado del brazo izquierdo atrás. Su hermana le dijo a Miguel, su hijo, que se dejara de quejar porque pensó que era un perdigón disparado por Carabineros, pero Miguel dijo que le dolía mucho. Al volver a su casa pasaron de nuevo por la Petrobras y vieron la misma camioneta del señor que andaba disparando. También se cruzaron con un auto contra el tránsito que pedía paso porque llevaban un herido. Como a Miguel le dolía mucho, fueron al SAR, donde lo derivaron al hospital porque no era un perdigón lo que tenía sino una bala, y allí estaba el auto con la persona que también le habían disparado, y que ya había fallecido. También se encontraron con un chico que tenía la mano herida y la esposa del niño que había fallecido.

Respecto de la camioneta roja, la reconoció al exhibírsele la **evidencia fotográfica N°20**, indicando que la recordaba especialmente por el tubo y la reja negros que tiene.

Precisó que la persona disparó con una pistola, aprendió a distinguirla porque hizo el servicio militar, donde le enseñaron de armas; y lo hacía las personas, no al aire, porque hubiera estado la pistola más inclinada hacia arriba, pero la tenía a la altura de la ventana de la camioneta.

Sobre cuándo declaró sobre este asunto, no lo hizo esa noche o al siguiente sino para la reconstitución de escena, es decir, meses después de los hechos.

Esta testigo se apreció que entregó información certera, pues a sus detalles y coherencia se pudo sumar, como veremos, que dio una versión sostenida en el tiempo, que

ratificó e ilustró en una diligencia de reconstitución de escena realizada en febrero de 2020, y que su versión encontró correlato en diversas otras pruebas. Las descripciones que hizo, los detalles entregados -por ejemplo, sobre que supo que el arma era una pistola ya que sabía diferenciarla de otras armas, por haber hecho el servicio militar- y especialmente las razones sobre por qué identificaba la camioneta en las imágenes que se le exhibieron y al acusado presente en la audiencia, fueron estimados factores potentes para asignarle credibilidad.

La Defensa cuestionó a esta testigo diciendo que recién “apareció” en la investigación meses después de los hechos, en febrero, cuando se hizo la reconstitución de escena, dando a entender que como tía de Ayala pudo tener interés en beneficiarlo y toda vez que ya circulaba mucha información sobre el caso por redes sociales. Si bien fue efectivo ese tiempo y resulta plausible la desconfianza del defensor, no pasó de una especulación, sin base en la prueba, ya que un interés por mentir no tuvo aval alguno, y tampoco que haya inventado su presencia en el lugar o lo que dijo haber advertido por sus sentidos, apreciándose, adicionalmente, que ha mantenido esencialmente su relato en el tiempo y su precisa sindicación del acusado, lo que constituye otra razón para confiar de su testimonio.

Clara Glafira Noemí Salinas Cea, por su parte, también testificó e indicó que salieron a la marcha de la Alameda con su hijo Miguel y su hermana Carmen, dejaron el vehículo estacionado bien lejos, llegaron a donde está el Unimarc estaban tratando de abrir y como había mucho desorden se quedaron en los juegos, mirando. Llegaron carabineros, se sintieron balazos, ella estaba arriba de los juegos y su hermana y su hijo estaban abajo, había mucha gente, se bajó y caminaron a un monumento que hay, se quedaron allí, había mucha gente y con los disparos se esparcieron, se quedó casi sola, al lado había una camioneta roja, pensó que eran carabineros de civil que disparaban, tiraron bombas lacrimógenas, pensó que dispararon balines, lo de siempre. Pasó un momento que se le perdió su hermana y su hijo y luego ésta la llama contándole que a su hijo le habían disparado, se juntaron y Miguel decía que le dolía mucho, esta testigo pensaba que solo

era un perdigón y que no se quejara, pero por el camino él insistía que le dolía. Al dar la vuelta en U su hermana le dice que había un hombre en una camioneta roja disparando, ella dijo que lo siguieran, pero esta dijo que no, le dio miedo, estaba peligroso y siguieron como yendo por la Alameda hacia arriba, y al tratar de meterse a Aguas Negras chocaron con un vehículo, que enseguida se metió hacia el hospital, ellos siguieron hasta la casa y vieron en las redes sociales que habían disparado a varias personas, su hijo le pidió que le revisaran y al sacarle la ropa tenía un hoyo negro quemado que le traspasó todo, y como insistió tanto lo llevaron al SAR, y el médico le cuenta que le había entrado una bala, no un perdigón, que le había pasado entre dos costillas, y que tenían que hacerle exámenes. Se los hicieron y afortunadamente no le había tocado ningún órgano, la bala estaba detrás de una costilla, le dieron algo para el dolor y le dijeron que se lo llevara para la casa. Aún tiene la bala en la espalda, le costó mucho volver a hacer su vida normal, era deportista, y después no podía hacer mucho peso o tomar su hija en brazos, por lo de la bala.

Aclaró que su hermana le mencionó que una camioneta andaba disparando y ella misma la vio, era una roja y le sobresalía un tubo negro, la vio cuando estaba en los juegos.

Se le exhibió la **evidencia fotográfica N°20**, ya mencionada, y reconoció en la imagen 1 la referida camioneta, la que solo vio de frente.

Los relatos de los indicados testigos se apreciaron suficientemente claros, coherentes, precisos y detallados como para ser estimados una fuente importante de información para la resolución del caso, destacando desde ya que coinciden entre sí respecto a indicar que se encontraban en un mismo contexto fáctico, presenciando los eventos en curso en la Alameda de Curicó esa noche del 21 de octubre de 2019 cuando se realizaban manifestaciones y desórdenes públicos, y dando cuenta de cómo percibieron -y sufrieron- los disparos que todos ellos atribuyeron al conductor de una camioneta roja, la que varios identificaron en las imágenes exhibidas. Ya abordaremos los cuestionamientos al respecto de la Defensa.

A su vez, sus percepciones encontraron correlato en diversas otras pruebas, como

ocurrió con las imágenes indicadas, por ahora respecto de la camioneta aludida por ellos y las lesiones de los afectados, lo que se complementó con los múltiples antecedentes médicos aportados, y, también, con la explicación de las diligencias y recopilación de evidencias por la policía.

En el primer sentido, declaró en el juicio **Rixio Sánchez Medina**, médico del Hospital de Curicó, quien señaló que en el contexto del estallido social se recibieron diversos heridos de diferente gravedad en el hospital, uno con riesgo vital y que luego falleció -José Miguel Uribe Antipán- y otros tres sin ese riesgo, todos por arma de fuego. Uno de estos -Ricardo Solís Opazo- tenía una herida penetrante por arma de fuego en el antebrazo izquierdo, era un traumatismo con fractura expuesta de cúbito y radio, que le provocó deformidad y limitación funcional en esa mano, quedó hospitalizado a cargo del traumatólogo y fue operado tres veces.

Se le exhibió el **documento N°6 ofrecido** y reconoció el **DAU del Hospital de Curicó correspondiente a la víctima de Ricardo Solís Opazo, emitido el 21 de octubre de 2019**, a las 22:17 horas, donde se consignó que presentaba una herida de arma de fuego en antebrazo izquierdo con entrada y salida de proyectil, y se le diagnosticó fractura de “otras partes” del antebrazo, traumatismo músculo esquelético, de pronóstico mediana gravedad.

Otro paciente al que atendió fue uno de apellido Espinoza, quien tenía una herida por arma de fuego en la pierna izquierda a la altura del muslo, con fractura del fémur, deformidad e impotencia funcional.

Y el tercero tenía una herida por arma de fuego en el tórax, solo tenía orificio de entrada, el paciente llegó respirando bien, no parecía que el proyectil hubiera penetrado a cavidad torácica y por tanto no entrañaba lesiones graves, se le hicieron exámenes y en la radiografía lo observó y se demostró que estaba por fuera de esa cavidad, en partes blandas, no entró donde estaban sus órganos vitales. Por eso no tuvo lesiones graves, aunque -opinó- siempre una lesión por arma de fuego en el tórax debe considerarse lesión

grave. Aquí afortunadamente no penetró en esa cavidad, influido por el trayecto del proyectil y la posición de la persona, la que tuvo mucha suerte.

En todos los casos las características de las heridas daban cuenta que se habían producido por arma de fuego, ya que eran de pequeño diámetro, de uno o dos centímetros, con bordes regulares dados por la pólvora y nube de gases, con lesiones más severas en profundidad que en superficie, y porque tenían trayecto de salida.

En la misma línea, el fiscal aportó, mediante su lectura extractada, los **documentos 7, 8 y 9**, correspondientes, respectivamente, al **Dato de atención de urgencia (DAU) emitido por el SAR Aguas Negras de Curicó, correspondiente a la víctima Miguel Andrés Hernán Ayala Salinas, de fecha 21 de octubre de 2019**, a las 23:40 horas, en que señala que el paciente ingresó por una herida en la espalda, pared posterior del tórax, por bala o perdigón, siendo derivado al Hospital Base de Curicó; al **DAU emanado del Hospital de Curicó, correspondiente al mismo Miguel Ayala Salinas**, de fecha 22 de octubre de 2019, a las 00:09 horas, donde se consignó que el paciente venía derivado del SAR Aguas Negras por herida de bala en pared posterior del tórax sin salida de proyectil, no penetrante, pronóstico Leve; y a uno titulado **Evolución de paciente en observación**, emanado del mismo Hospital y relativo a la misma víctima, fechado 22 de octubre de 2019 a las 9:13 horas, donde se da cuenta que presentaba un traumatismo torácico por proyectil sin orificio de salida, que señala sus atenciones y exámenes, entre ellos un TAC de tórax, que indicaba que se apreciaba un elemento metálico adyacente al noveno espacio intercostal.

También se aportaron, respecto de las atenciones prestadas a Nicolás Francisco Espinoza Rojas, los **documentos 3, 4, 14, 15 y 24**, consistentes en el **DAU emitido por el Hospital de Curicó el 21 de octubre de 2019**, a las 22:27 horas, donde se indica que paciente fue recibido herido por arma de fuego en muslo izquierdo, con entrada y salida de proyectil, diagnosticándosele una fractura de la diáfisis del fémur de esa pierna, de pronóstico grave; **Evolución de paciente en observación, emanado del aquel hospital respecto de Espinoza Rojas, fechado el 26 de noviembre de ese año**, en que se detalla

atenciones brindadas luego de su ingreso, que se le tomó radiografía, evaluó por traumatólogo y practicó aseo quirúrgico, entre otras; **Epicrisis** correspondiente a Espinoza del mismo hospital de fecha 28 de octubre de 2019, que consigna ingresó el 22-10-2019 y egreso en la fecha indicada; **Epicrisis Multiprofesional** correspondiente al mismo, del referido establecimiento, dentro de cuyos antecedentes señala que ingresó al hospital el 22-10-2019, luego ingresó a hospitalización domiciliaria el 28-10-2019 y finalmente egresó definitivamente el 11-11-2019; y **Protocolo operatorio N°265211**, emitido por el Hospital de Curicó, respecto de Espinoza, en que se lee que fue intervenido quirúrgicamente el 24 de febrero de 2020 para extraerle un proyectil desde el muslo izquierdo, sin requerir hospitalización.

De la misma forma se incorporó, además del DAU ya mencionado, emitido respecto de Ricardo Solís, los **documentos 12 y 13**, consistentes en **Resultado del examen de Tomografía Computada** realizado al mismo y **Epicrisis** de ese paciente, que registra fecha de ingreso 22-10-2012 y fecha de egreso 28-10-2019, todos emanados del Hospital de Curicó, que ratifican la información antes señalada.

El médico Rixio Sánchez y los citados documentos, de esta manera, ratificaron las atenciones practicadas a las víctimas esa noche en el Hospital de Curicó y sus respectivos diagnósticos, corroborando que se encontraban heridos por proyectiles de arma de fuego en las zonas indicadas. Asimismo, la fecha y hora de sus atenciones coincide con lo que ellos también expresaron. Todo ello dio credibilidad a sus relatos.

En esa línea, contamos con la declaración prestada por **Saúl Tirado Mercado**, perito del Servicio Médico Legal de Curicó, quien señaló haber practicado informes de lesiones respecto de dos de los tres afectados, sin perjuicio que también hizo la autopsia del fallecido Uribe Antipani, que analizaremos más adelante.

Así, en resumen, expuso que en su informe de lesiones 248-2019 realizado a Ricardo Solís Opazo, este le manifestó en la anamnesis que el 21 de octubre de 2019, aproximadamente a las 21:50 horas, recibió un disparo por arma de fuego por una persona

que iba en una camioneta roja. Tuvo a la vista el DAU del hospital local donde se indicaba una fractura del radio izquierdo por proyectil de arma de fuego. El peritado aporta TAC de miembro superior izquierdo que indica fractura conminuta del tercio medio del radio, y Epicrisis, donde se señala que esta persona ingresó por herida por bala en antebrazo izquierdo, siendo llevado a quirófano donde le hacen lavado, reducción y osteosíntesis, describiendo que no hay lesión vascular, pero si compromiso del nervio mediano izquierdo. En su examen observó que ese brazo venía inmovilizado con cabestrillo y al retirarlo tenía una cicatriz lineal posquirúrgica, limitación funcional a la movilidad, disminución de la fuerza muscular y limitación para la flexo extensión de los dedos 1 al 4 de esa mano.

Su diagnóstico fue una fractura conminuta del radio izquierdo, manejada quirúrgicamente, y lesión del nervio mediano, y concluyó que el mecanismo de la lesión era por arma de fuego, de carácter grave, con tiempo de incapacidad y curación mayor de 31 días, con secuela por alteración funcional de la aprehensión de la mano izquierda por la lesión del nervio mediano, lo que corroboró al hacer un examen de término de lesiones el 8 de septiembre de 2020, sin observarse mejoría ya que no se trató a tiempo. En su opinión esta persona quedó con una limitación funcional de esa mano, no con incapacidad, él no podía tomar algo con su mano izquierda, lo que limita sus posibilidades en la vida normal.

Tirado explicó a continuación el informe 249-2019 realizado a Nicolás Espinoza Rojas, que, en su anamnesis, señaló que el 21 de octubre de 2019, aproximadamente a las 22:00 horas, se encontraba en la Alameda de Curicó y recibió una herida por arma de fuego en su muslo izquierdo, cuando miraba el procedimiento de Carabineros por las manifestaciones que ocurrían en el sector. Tuvo a la vista la Epicrisis del Hospital de Curicó, donde se reporta una fractura del tercio medio del fémur izquierdo y que fue llevado a lavado del área afectada, ostiosíntesis y clavoendomedular; y una radiografía donde se visualiza una fractura conminuta en esa parte y fragmentos metálicos en los músculos. A su examen apreció que el paciente ingresa usando un par de muletas por limitación para movilizarse, tenía varias cicatrices en el muslo izquierdo y efectivamente

tenía esa limitación para caminar en la pierna izquierda. Su diagnóstico fue que tenía una fractura conminuta del fémur izquierdo, manejada quirúrgicamente, y concluyó que su mecanismo causal es proyectil de arma de fuego, carácter grave, tiempo de curación e incapacidad mayor de 31 días. Lo volvió a evaluar para determinar secuelas el 8 de septiembre de 2020 y el paciente ingresa cojeando, la limitación funcional ha mejorado y corrobora el diagnóstico y las conclusiones referidas, resaltando que presenta secuelas en cuanto a alteración funcional en la marcha del miembro inferior izquierdo -la fractura conminuta hacía que el hueso no quedara de la misma medida- y estéticas corporales, ambas en carácter permanente. Aunque esta no era una perturbación, que equivale a incapacidad, sino solo una alteración funcional.

El doctor Tirado dio cuenta de esa manera de los antecedentes y el examen que hizo de los lesionados Solís y Espinoza, ratificando los diagnósticos indicados y su mecanismo causal, en línea con lo que ellos habían señalado, añadiendo factores relevantes para entender la magnitud de sus lesiones y las secuelas que sufrieron, aspectos que también son coincidentes y que tomaremos en cuenta, más adelante, al hablar del daño causado.

Por otra parte, contamos con el atestado de **Eduardo Rolando Contreras Ramírez**, quien señaló ser funcionario de Carabineros y que ese día alrededor de las 23:40 horas andaba de servicio con la sargento segunda Mónica Veloso, cuando reciben un comunicado de la Cenco de Curicó sobre que había llegado al hospital un sujeto con una herida de proyectil, trasladándose hasta allí. donde encuentran a gran cantidad de manifestantes, decían que eran amigos del que estaba dentro. Pudieron ingresar y hablar con el médico de turno, de apellido Sánchez, que les informó que llegó una persona de sexo masculino con una herida de entrada y salida de proyectil en el tórax, por lo que le dio cuenta al fiscal para generar el parte. Establecieron la identidad del joven como José Miguel Uribe Antipani, que estaba manifestándose en la ruta cuando recibió un proyectil balístico. Buscaron testigos, en el exterior estaba José González, quien dijo que era amigo de Uribe y se encontraban manifestando en Manso de Velazco a la altura de la ruta 5 sur,

cuando pasa un bus con militares, uno de los cuales desciende y efectúa disparos, y a los pocos minutos su amigo se desvanece presentando un impacto; y Daniela González Celis, quien estudiaba para Tens y le prestó primeros auxilios. Ubicaron un vehículo Nissan Sail celeste, que llegó con el muchacho al hospital. Entrevistaron en el hospital a la Tens Bernardita Vergara Valenzuela, que declaró que jóvenes habían llegado haciéndole reanimación, le hicieron primeros auxilios, pero el afectado venía sin vida. Añadió este testigo que vio por las redes sociales un video del joven al interior del hospital, sobre cómo lo estaban reanimando, tomándole fotografías, las que adjuntó al parte policial y las reconoció cuando se le exhibió la **evidencia fotográfica N°1**.

Mientras verificaban la información referente a esa persona llegaron otros jóvenes heridos por proyectiles balísticos, entre ellos Nicolás Espinoza Rojas, que dijo que también estaba observando en Manso de Velasco a la altura de calle Merced los saqueos que ocurrían en el supermercado, andaba con hermanos y amigos, y observan que llegan dos camionetas y un furgón de carabineros, desciende uno con escopeta larga y dispara a las personas que estaban saqueando, en eso se levanta para irse y siente fuerte dolor en pierna izquierda, observa que tenía entrada de proyectil, sus amigos se desesperan para pedir ayuda y en eso pasaba una ambulancia, la detienen y lo trasladan al hospital. Verificó que esta persona tenía lesiones graves teniendo a la vista el DAU respectivo que adjuntó al parte junto con fotografías de la fractura de diáfisis del fémur que presentaba, que reconoció al exhibírsele las **dos imágenes de la evidencia N°5**.

Citamos a Contreras porque fue el primer policía que entregó información sobre los sucesos, tomando conocimiento de los heridos en el Hospital Base de Curicó, y el contexto en que lo hizo, siendo el conector entre los relatos de los tres primeros afectados y la constatación médica que se hizo de que efectivamente habían sido lesionados por arma de fuego. A su vez, también fue el primero en dar cuenta del otro afectado por disparos aquella noche, quien lamentablemente falleció.

En este punto, desde ya diremos que se acreditó la muerte de José Miguel Uribe Antipani, cuyo deceso se verificó aquella noche del 21 de octubre de 2019, a las 22:45 horas

en el Hospital de Curicó, según dio cuenta su **certificado de defunción emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación**, incorporado como **documental 3 por la parte acusadora particular**, donde se consignó como su causa oficial de muerte una anemia aguda por herida penetrante en cavidad torácica por proyectil de arma de fuego. Esos antecedentes, por cierto, fueron coincidentes con todo el resto de la prueba, en especial con lo declarado por el **médico Rixio Sánchez Medina** y el **documento N° 1 aportado, el DAU emitido por el Hospital de Curicó relativo a la atención de Uribe Antipani el día 21 de octubre de 2019**, a las 22:27 horas, que dieron cuenta de su recepción en aquel recinto esa noche, sin signos vitales, realizándole maniobras de reanimación, pues tenía una herida penetrante en tórax con orificio de entrada en hemitórax derecho y salida en el otro, quien en definitiva no sobrevivió; y lo expuesto por el perito del Servicio Médico Legal de Curicó, El médico del Servicio Médico Legal de Curicó ya mencionado, **Saúl Tirado Mercado**, indicó haber practicado la autopsia al cadáver de Uribe Antipani, el 22 de octubre de 2019, emitiendo al efecto el Informe de Autopsia N°174-19. En síntesis, éste explicó haber constatado que, sin perjuicio de algunas lesiones menores en la cabeza, presentaba en el tórax una herida penetrante transfixiante de derecha a izquierda, con orificio de entrada de 0,9 centímetros de diámetro, de bordes regulares invertidos con anillo contusivo concéntrico, y de salida de 1,8 por 1,2 centímetros, de bordes irregulares revertidos, compatibles con lesiones producidas por arma de fuego y que lesionaron de ese modo, entre otros órganos, los pulmones y el corazón, produciendo una gran hemorragia. Concluyó que la causa de muerte fue una anemia aguda debido a herida penetrante transfixiante por arma de fuego que produce las lesiones descritas, compatibles con antecedente de homicidio. Las lesiones halladas implicaron que aun con socorros médicos oportunos y eficaces era imposible salvar su vida. Tirado explicó que se le instruyó aplicar en este caso también el protocolo de Minnesota, y descartó que existieran lesiones por tortura. Ilustró todo lo explicado al exhibírsele la **evidencia N°4**, consistente en dos dibujos de perfil del cuerpo humano, uno con vista desde la derecha y el otro desde la izquierda, donde indicó los lugares donde se situaban los orificios de entrada y salida del proyectil, en el tórax bajo la axila derecha e izquierda, respectivamente; y las **143**

imágenes de la evidencia fotográfica N°21, correspondientes a la autopsia, destacándose entre todas ellas la 19, en que indicó el orificio den entrada, la 20, en que mostró el de salida, y la 40 y 49, donde se indicó el recorrido del proyectil transfixiando los diversos órganos, resultando el resto de las fotos exhibidas en el juicio manifiestamente innecesarias, por sobreabundancia o impertinencia, para ilustrar tal pericia.

De esta forma, el informe de Tirado Mercado, apoyado en las imágenes indicadas y coherente con la demás evidencia corroboró que la causa de muerte de Uribe Antipani fue la herida por proyectil balístico que recibió, al dar lugar a procesos biológicos que eran imposibles de revertir, aun con socorros médicos oportunos y eficaces.

Sobre los antecedentes expuestos y en línea con la acreditación de la acción homicida, se recibieron también los testimonios de diversos funcionarios de la PDI a cargo de las labores investigativas, a saber, **Marcela Sánchez Torrejón, Ignacio Valeria Reyes, Fernando Matus Urrea, Cristian Humberto Miranda Miranda y Bernardo Veloso Rojas**, sumados a los peritos y las fotografías, videos y evidencias materiales que exponremos, que corroboraron primeramente la información relativa a la existencia de los hechos descritos y que tenían como centro que esas cuatro personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego.

Es decir, en el análisis preliminar que efectuamos ya podemos concluir que se verificó una acción realizada por una persona consistente en disparar un arma de fuego en contra de las víctimas, y a ello podemos sumar que esa acción era a todas luces idónea para matar, pues, conforme a las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, el disparar un arma de fuego y que se genere el correspondiente lanzamiento de un proyectil balístico puede, efectivamente, causar lesiones de tal envergadura en una persona, que sin dudas la puede matar, como tristemente quedó comprobado en este caso además, en que una de las víctimas falleció a causa directa del impacto recibido, como se constató por el forense Saúl Tirado y se consignó en su certificado oficial de fallecimiento. Ello nos lleva a que, objetivamente, los otros tres afectados, que fueron igualmente impactados por proyectiles balísticos,

pudieron morir, pero sus lesiones no fueron de tanta gravedad, afortunadamente, lo que no resta seriedad ni verosimilitud a que esos disparos pudieran matarlos. A mayor abundamiento, el médico Rixio Sánchez, recordemos, al constatar que el proyectil alojado en el cuerpo de Ayala no había lesionado órganos vitales, señaló que éste había tenido mucha suerte, asociándolo evidentemente con el azar que hizo que no le afectara alguno de esos órganos, porque ello lo habría matado, en lo que, desde el sentido común, concordamos estos jueces.

Pero, para que exista un delito de homicidio, la acción humana dirigida objetivamente a matar debe haber sido realizada subjetivamente también con ese fin. En ese sentido, frente a la pregunta si, el ejecutor de los disparos tuvo **dolo de matar**, es decir, ejecutó esa acción idónea para matar con conocimiento e intención, sin perjuicio que no hemos hablado aun de la participación concreta del acusado, pudimos responderla afirmativamente a partir de los siguientes presupuestos:

1° El uso de aquella arma de fuego, que como tal era apta para matar y se demostró al haber dado muerte a Uribe Antipani, según acabamos de indicar;

2° Que la misma fue dirigida al dispararla directamente contra las víctimas, lo que se desprendió de los referidos testimonios de Carmen Salinas, cuando dijo que el chofer de la camioneta roja disparó cuatro o cinco tiros hacia donde había mucha gente corriendo, lo que coincide con lo expuesto por Miguel Ayala, que alude también a varios disparos dirigidos hacia el lugar donde él estaba; a su vez, en los eventos de la carretera, los testigos Cristian Miranda Miranda y Bernardo Veloso Rojas, entre otros, coincidieron en que luego de que se escucharan disparos dos de ellos alcanzan el vehículo del primero, situación que objetivamente se comprobó con la pericia expuesta por Daniel Cáceres Aravena, como ya detallaremos. Por tanto, la dirección de los disparos de la pistola fue hacia las víctimas, por supuesto no pudo ser una casualidad que les alcanzaran, aspecto que la realidad descartó, pues cuatro víctimas fueron heridas por ellos. Al respecto, no fue creíble, en muchos sentidos, lo expuesto por el acusado Fuenzalida Calvo al justificar su conducta esa noche diciendo que había disparado solo 3 o 4 tiros en la esquina de calle Merced con la

Alameda, y que lo hizo hacia arriba, sin pretender herir a nadie y solo para dispersar la turba que le hizo sentirse amenazado, antes que todo, porque se comprobó como veremos, que él no efectuó solo 3 o 4 disparos exclusivamente en un momento, sino que muchos más, atendidos los lugares en que fueron heridos los afectados, y jamás se situó en el sector del acceso sur a Curicó, menos efectuando allí disparos, donde resultó herido mortalmente Uribe Antipani. Ya ahondaremos sobre todo eso, bastando resaltar aquí que no hubo evidencia alguna, tampoco la eventual credibilidad del acusado, como para que se levantara alguna duda que descartara la dirección dolosa de los disparos.

3° Que los disparos no solo fueron dirigidos contra las víctimas, sino hacia zonas del cuerpo donde se encuentran órganos fundamentales para la vida, que de herirlos con una alta probabilidad terminarían por causarles la muerte. De allí que Uribe Antipani haya sido herido en el tórax y resultara muerto, y que Ayala también lo fuera en esa zona, por la espalda, y el médico Sánchez que lo atendió calificara como mucha suerte el que no haya resultado afectado en algún órgano vital. Solís, por su parte, recibió el impacto en su antebrazo izquierdo, también en la parte superior del cuerpo; y Espinoza, si bien fue herido en el muslo izquierdo, indicó que él estaba agachado y se dio vuelta para pararse cuando recibe el impacto, lo que denota que el tirador le apuntó también al cuerpo. Y,

4° Que el hechor ejecutó diversos disparos, algunos por ráfagas, y en distintos lugares, evidenciando un propósito persistente de matar y, de hacerlo, con el mayor número de personas que pudiera. Como vimos, disparó al menos en el sector de la Alameda de Curicó con calle Merced, donde se ubica Nicolás Espinoza; en calle Estado con la Alameda, donde estaban Ricardo Solís y Miguel Ayala, y en el acceso sur a Curicó, donde fue alcanzado Uribe Antipani, sin perjuicio de otros lugares, repitiendo en cada uno más de un disparo, como oyeron los tres lesionados sobrevivientes y otros testigos en los sucesos de la Alameda, y el aludido Miranda, más Alejandro Muñoz Moraga y Miguel Ángel Neira Neira en lo ocurrido en el acceso sur a Curicó, donde vieron los disparos del conductor de la camioneta roja hacia las personas que estaban allí, entre otros que indicó el policía Bernardo Veloso. A mayor abundamiento, así lo oímos en el video N°1 de la

evidencia N°27, exhibido durante la declaración del policía Ignacio Valeria Reyes. El mismo Fuenzalida Calvo, como hemos mencionado, reconoció que efectuó 3 o 4 disparos, aunque en un solo sector, el de la Alameda con Merced; reconoció, también, que portaba dos cargadores de municiones, lo que implica que efectivamente pudo efectuar varios disparos. En todos los casos, esos múltiples disparos ciertamente pudieron herir aun a más personas, por ejemplo, a quienes estaban junto a Ricardo Solís y Nicolás Espinoza, o al testigo Cristian Miranda que estaba en su furgón cuando éste recibió dos impactos balísticos que, para su fortuna, dieron en parte de la estructura más sólida de su vehículo y no lo alcanzaron; lo que, a todas luces, sin perjuicio de hacer más peligroso y reprochable el obrar del tirador, dejó patente su intención de matar.

A su turno, más allá de los argumentos del defensor señor González respecto a por qué no podía ser sancionable un homicidio frustrado con dolo eventual, que no analizaremos por inoficioso, sus planteamientos en cuanto a que no había dolo directo también fueron desestimados. Como dijimos, no se infirió solo del tipo de arma utilizada sino de esos otros aspectos concurrentes en el caso concreto, y que, para estos jueces, nos llevaron a concluir inequívocamente el dolo directo.

Se comprobó en base a todo lo razonado el primer elemento de los delitos de homicidio.

2.- En cuanto a que el resultado muerte efectivamente se concretó, en el caso de Uribe, y no se produjo respecto de los otros 3 afectados por causas independientes de la voluntad del hechor.

Al respecto, como vimos, la muerte de la víctima, cuando el homicidio es consumado, se acreditó en el caso del afectado José Miguel Uribe Antipani, según su **certificado de defunción emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación**, incorporado como **documental 3 por la parte acusadora particular**, que dio cuenta que falleció el 21 de octubre de 2019, lo que se complementó tanto por lo expuesto por el **médico Rixio Sánchez Medina**, el **documento N° 1 aportado consistente en el DAU**

emitido por el Hospital de Curicó relativo a la atención de Uribe Antipani el día 21 de octubre de 2019; y, especialmente, la exposición del perito del Servicio Médico Legal de Curicó, **Saúl Tirado Mercado**, quien indicó que luego de haber practicado la autopsia al cadáver de Uribe Antipani concluyó que su causa de muerte fue la herida por proyectil balístico que recibió, al dar lugar a procesos biológicos que eran imposibles de revertir aun con socorros médicos oportunos y eficaces.

A su vez, respecto de los homicidios en grado de frustrados, ese segundo elemento del delito se traduce, con arreglo al artículo 7 inciso segundo del Código Penal, en que el hechor haya realizado todo de su parte para que la muerte se consumara, pero no se verificó por causas independientes de su voluntad. Primero debemos decir que, en un homicidio frustrado, es concebible la existencia de diversas hipótesis y muchas de ellas pueden implicar que la víctima no tuviera herida o lesión alguna. Imagínese, solo como ejemplo, la acción de un tercero que empuja al tirador justo en el momento que accionaba el gatillo de su arma de fuego y no acierta en su blanco, o que hace lo propio con la víctima, que al moverse evita el impacto de la bala que iba dirigida contra ella; o bien, un caso más cinematográfico de la bomba que se desactiva segundos antes que explote. Por tanto, que existan o no lesiones no es consecuencia necesaria de una acción homicida que resulte frustrada. Sin embargo, si se han producido lesiones, ciertamente pueden resultar indiciarias de tal acción y del dolo homicida, como ya analizamos, lo que es más evidente cuando lo que interrumpe el curso causal iniciado por el hechor se produce estando ya herida la víctima, a quien se prestan socorros médicos oportunos y eficaces. La Defensa puso hincapié en el juicio, respecto de Solís, Espinoza y Ayala, que ninguna de sus lesiones generadas por los impactos balísticos que recibieron era por si sola mortal, vale decir, que podrían haberles causado la muerte sin la atención médica que se les prestó, y encontró aval en las opiniones de los médicos que escuchamos, sobre todo del perito señor Tirado. Pero, convengamos, una persona puede morir desangrada, conforme a las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, al generarse un proceso biológico que desencadena en una anemia aguda y un paro cardiorrespiratorio, situación que no alcanzaron a vivir precisamente porque buscaron atención médica

inmediata, con desesperación en el caso de Espinoza y Solís, y habiendo este último también contribuido a su propia salvación con la acertada maniobra de torniquete que se efectuó. Tales maniobras de asistencia médica por cierto que no dependían de la voluntad del hechor y claramente condujeron a evitar el resultado deseado por éste. Además, se apreció que de la dinámica acreditada sobre cómo se realizaron los disparos, pudimos apreciar que fueron hechos desde el interior de la camioneta en que transitaba el autor hacia las personas que se encontraban a pie en sus alrededores, a cierta distancia, y ya sea con el vehículo o las personas en movimiento, lo que seguramente incidió en que el tirador no pudiera acertar con más precisión. El azar jugó su papel, para fortuna de Solís, Espinoza y Ayala, y desventura de Uribe. Con todo, se apreció que el sujeto activo procuró al máximo con sus acciones asegurar la consumación -el hecho se encontraba subjetivamente consumado- lo que no se produjo en los tres primeros casos por otras situaciones, que no dependían de su voluntad, lo que determina que estemos ante un grado de ejecución frustrado.

Se verificó de esta manera el segundo de los elementos del delito de homicidio.

3.- En cuanto a que exista una relación de causalidad entre la acción y el potencial resultado de muerte.

Finalmente, en cuanto al tercero, la relación de causalidad entre la acción de disparar y el resultado, consumado o frustrado, resultó manifiesto de la dinámica acreditada con los medios probatorios analizados, pues el curso causal iniciado por el agente al disparar contra las víctimas estuvo dirigido a matarlas, y de haberlo conseguido, como ocurrió respecto de Uribe Antipani, solo pudo atribuirse a tal acción, descartando cualquier otra explicación o concausa, por ejemplo, una actividad de la víctima u otra persona que influyera en la mayor eficacia de los disparos, la falta de atención médica oportuna o una enfermedad preexistente o intrahospitalaria, nada de lo que encontró asidero en la prueba, al punto que aun la Defensa no especuló al respecto.

Corolario de todo lo analizado y fundamentado es que se acreditaron los hechos

propuestos por los acusadores para configurar los tres delitos de homicidio simple frustrado en las personas de Ricardo Andrés Solís Opazo, Nicolás Francisco Espinoza Rojas y Miguel Andrés Ayala Salinas, y el delito de homicidio simple consumado en la persona de José Miguel Uribe Antipani.

En cuanto a la participación del acusado en los cuatro delitos de homicidio.

Respecto a la **participación culpable atribuida al acusado Fuenzalida Calvo** como autor ejecutor de los cuatro homicidios, se valoraron las mismas pruebas reseñadas y todo el resto de las que se brindaron en el juicio y que directamente lo incriminaban, así como la información que permitió construir en su contra una serie de indicios.

La fiscalía, al respecto, aportó múltiples pruebas.

En esa línea, **Marcela Sánchez Torrejón**, subcomisaria de la PDI, expuso que como subjefa de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Curicó, el 21 de octubre de 2019, alrededor de 23:55 horas, el fiscal Jaime Rojas solicitó a su personal para hacerse cargo de una agresión por arma de fuego contra dos personas que estaban en el Hospital de Curicó, pero por hechos ocurridos en la Alameda. En la Carretera 5 sur otros funcionarios de su unidad estaban en otro procedimiento.

Fue así como junto a los funcionarios Farías, Vidal y Aliaga concurren primero al hospital a recabar los primeros antecedentes de las personas lesionadas, percatándose que había muchas personas y habían llegado varios lesionados y un fallecido. Ante las dificultades solo pudieron recoger relatos breves, entrevistando a Ricardo Solís, quien dijo que andaba con su pareja Karolain, su hija y una amiga de esta, paseando por la Alameda y ven que encapuchados estaban tratando de saquear el supermercado Unimarc, y al ir caminando a la altura del Juzgado de Letras escuchan disparos y siente un fuerte dolor en el brazo izquierdo, se hace un torniquete y corren al hospital. Se recabó el respectivo DAU que decía que presentaba herida por arma de fuego en antebrazo izquierdo, iba a ser intervenido, su pronóstico era de mediana gravedad. Además, se recepcionó con cadena de custodia un fragmento de encamisado extraído. También entrevistaron a Nicolás

Espinoza, que dijo que andaba con amigos en la marcha convocada, luego fueron al cerro Condell y a las 21:45 volvían por la Alameda cuando ve desmanes en el supermercado Unimarc, llegan tres furgones de carabineros y dos camionetas y un carabinero comienza a disparar, producto de temor deciden irse, se para y siente fuerte dolor, estaba herido, compañeros detienen una ambulancia que pasaba y lo llevaron al hospital. El DAU señalaba que tenía herida por arma de fuego y fractura de diáfisis del fémur de la pierna izquierda e iba a ser intervenido, con pronóstico de gravedad. Se recepcionó también cadena de custodia con pedazo de proyectil extraído a este joven.

Cuando estaban en esas labores se presentó en el hospital otra víctima, identificada como Miguel Ayala Salinas, quien señaló que junto a unos hermanos y su madre concurre a presenciar las marchas, alrededor de 21:45 a 22 horas, llegan hasta los juegos ubicados frente al Unimarc, su mamá ve que lo estaban saqueando, él ve que llegan carabineros y lanzan lacrimógenas, por lo que salen corriendo, y pasando por la rotonda de Estado con la Alameda escucha disparos y él cae al suelo con fuerte dolor en su espalda. La gente decía que eran perdigones, que no era un arma complicada, pero él sentía bastante dolor y no podía respirar. En ese lugar había otro lesionado en una de sus manos. Se van a su domicilio, donde insiste a su madre en su fuerte dolor, esta decía que era balín, pero al revisarle la espalda tenía un orificio, por lo que lo llevan al SAR de Aguas Negras, le toman radiografía y el facultativo le informa que tenía una herida por arma de fuego, siendo trasladado al Hospital de Curicó, donde se confirma su lesión y que no tenía algún órgano dañado. Policías tomaron conocimiento del DAU, que indicaba herida por arma de fuego en región posterior del tórax, de carácter leve, siendo dado de alta.

Ayala le señaló además que recordaba que no vio bien quien le disparó, pero que en la Alameda poniente, donde está el servicentro Facaz, había aparecido una camioneta roja, grande y que tenía un tubo negro en el costado del copiloto, del que una persona disparó, y con esos datos detectives fueron a la Primera Comisaría de Curicó, a la Central de Cámaras, para ubicar ese vehículo, conversando con carabineros que habían estado cerca del supermercado, y a raíz de eso los llama por teléfono Sergio Osses, jefe de la SIP,

contándole que había visto una camioneta con esas características, en calle Estado cerca del Lubricentro Facaz, donde había un hombre de contextura gruesa increpando a un grupo de personas, él fue para calmarlo, le pide su cédula de identidad y era de apellido Calvo, y del otro joven no recordaba apellido, pero tenía ausencia de un ojo y era un comunicador social, quien saca su celular y graba la patente de la camioneta. Como reciben orden de replegarse e irse a la unidad policial, dejan ese procedimiento, pero luego contactó a este comunicador pidiéndole la grabación con la patente, pudiéndola corroborar con la central de cámaras, y correspondía a la HVLD26, siendo una camioneta roja, marca Toyota modelo Hilux.

De esa manera pudieron obtener información de su propietario y el domicilio de éste, a donde acudieron algunas horas después de los hechos, ya en la madrugada del día 22 de octubre de 2019, domicilio ubicado en el Camino Los Cristales, kilómetro 0.8, sector Zapallar de la comuna de Curicó. En esa oportunidad entrevistaron al acusado, quien colaboró en todo momento, admitiendo en primer lugar haber efectuado disparos mientras transitaba por la Alameda en la camioneta aludida, y entregándoles aquellas evidencias que mantenía en su poder, en concreto, una pistola marca CZ, calibre 9 milímetros, modelo 85, serie A2773, más dos cargadores y cinco cartuchos del mismo calibre, así como cuatro vainas correspondientes a cartuchos ya percutidos que había recogido desde el interior de su camioneta. También entregó en esa ocasión otras especies, lo que se complementó con otra diligencia de incautación realizada el 26 de octubre de ese mismo año, cuando el encartado ya estaba en prisión preventiva, lo que abordaremos a propósito de los delitos de armas que se le imputaron. El mismo día 26, con orden judicial, se incautó también la mencionada camioneta Toyota Hilux roja.

Sánchez reconoció los elementos señalados al serle exhibida la **evidencia fotográfica N°6**, fotos 1 a 4, donde apreció la camioneta, la pistola, cargadores, municiones y vainillas ya percutidas, y las **evidencias materiales números 52 y 53**, correspondientes a la misma pistola y accesorios.

El Ministerio Público aportó también el **documento N°10** de su prueba, consistente

en un **Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.N.V.M.** respecto del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa patente única HVLD26, que aparecía registrado a nombre de Francisco Fuenzalida Maquinarias Limitada, propietario que, aunque se trata evidentemente de una sociedad, posee el nombre del acusado, lo que da crédito a la conexión de información que hizo la subcomisaria Sánchez para ubicarlo.

Esta testigo indicó asimismo haber tomado declaración o presenciado la que tomó el fiscal a diversas otras personas, entre ellas a la pareja de Solís, Karolain Suazo, que coincidió con él; a los acompañantes de Espinoza, Dayan Sáez, Camilo Quevedo, Alex Contreras y Venus Sáez, quienes describen al igual que el primero los desmanes en el Unimarc, la presencia de Carabineros, que estos disparan a la multitud y que al huir su amigo Nicolás les dice que estaba herido, aclarando los dos últimos que escucharon que la gente comentaba en el hospital que desde una camioneta roja habían disparado, aunque ellos no la vieron ni a quien disparó a Nicolás; y a los que mencionó Ayala, su madre Clara Salinas Cea y su tía Carmen Salinas Cea, las que indicaron sí haber visto la camioneta roja y en especial Carmen haber observado desde su interior a un sujeto que disparó una pistola, la que reconoció porque conocía de armas ya que había hecho el servicio militar, describiendo al sujeto y más tarde reconociéndolo, cuando se le exhibió un set fotográfico, como el imputado Fuenzalida Calvo.

Del testimonio de la subcomisaria Sánchez, por de pronto, podemos ya extraer una confirmación de lo que narraron los tres afectados y demás testigos presenciales indicados, en torno a los disparos por arma de fuego que sufrieron mientras se encontraban en la Alameda de Curicó, en las inmediaciones del supermercado Unimarc que se ubica en la esquina norponiente de esa avenida con calle Estado, aquel 21 de octubre de 2019, alrededor o pocos minutos después de las 22 horas, y que el autor era el conductor de la aludida camioneta roja, con el tubo negro que le sobresalía por el lado del copiloto.

Como ella expresó, dentro de sus diligencias recabó en el Hospital de Curicó dos evidencias balísticas, cuales fueron los trozos de proyectil extraídos desde los cuerpos de Ricardo Solís y Nicolás Espinoza, que, como dijo, fueron remitidos a pericia.

Al respecto se aportó la exposición del perito balístico del Laboratorio de Criminalística de la PDI **Daniel Cáceres Aravena**, quien realizó diversos estudios de evidencia para esta causa, el primero de ellos plasmado en su **informe pericial balístico N°122/019**, elaborado el 29 de noviembre de 2019, que tenía que ver, en lo pertinente, con determinar la aptitud para el disparo de la pistola marca CZ, calibre 9 milímetros, modelo 85, serie A2773, y cinco cartuchos 9 milímetros, sobre las que realizó las pertinentes pruebas de funcionamiento y disparo, concluyendo que todos eran aptos para el disparo, siendo a su vez los cartuchos compatibles para ser disparados con esa arma. Complementó su exposición reconociendo las evidencias peritadas al exhibírsele la **evidencia fotográfica N°24**, compuesta de imágenes 1 y 2, donde reconoció la aludida pistola y los cartuchos aludidos, y, también, reconoció esas especies al exhibírsele la **evidencia material 52**.

Asimismo, señaló haber evacuado el **informe pericial balístico N°41/020**, de 8 de mayo de 2020, para el cual se le remitió nuevamente la pistola CZ que ya había examinado, acompañada de tres cartuchos indemnes, además de un trozo de proyectil balístico al interior de un tubo plástico rotulado Ricardo Solís Opazo, era parte de un proyectil encamisado con deformación, se visualizaba solo parte de un campo y una estría por lo que difícilmente se podía establecer calibre; una placa de imagenología al interior de un sobre de papel café, que mostraba dos imágenes de un proyectil alojado en el cuerpo de una persona identificada como Miguel Ayala Salinas; y un trozo de proyectil balístico encamisado, deformado, al interior de un frasco de plástico rotulado como Nicolás Espinoza Rojas, era parte de la ojiva de un proyectil, viéndose solo parte de un campo y una estría, tampoco se estableció calibre. Cáceres reconoció esas especies al exhibírsele la **evidencia fotográfica N°39**, compuesta de 16 imágenes, específicamente en las fotografías 1, 2, 12, 13 y 14; y la **evidencia material 44, 48 y 54**.

Según explicó, realizadas las pruebas de funcionamiento con la pistola CZ y dos de los cartuchos remitidos y verificados procesos eficaces de percusión y disparo, intentó visualizar si podía efectuarse una comparación con los trozos de proyectil extraídos de Nicolás y Ricardo, pero dada la escasa superficie de los mismos y porque además

presentaban huellas terciarias, generadas después del proceso de disparo, concluyó que no se puede afirmar o descartar que hayan sido disparados con el cañón de esa pistola periciada, ya que por tener poca superficie ni siquiera se puede establecer el calibre. A su vez, respecto de la placa de imagenología de Ayala, se le remitió para poder establecer el calibre e inferir qué tipo de arma pudo disparar ese proyectil, frente a lo cual hizo el análisis morfológico y la medición, estableciendo que es compatible con un arma calibre 9 milímetros que pudo formar parte de un cartucho 9 por 19 milímetros.

Conforme a Cáceres, entonces, el arma y cartuchos de munición que revisó se encontraban aptos para el disparo, lo que avala que esa arma pudo efectivamente dispararse y herir a las víctimas; no pudo afirmar o descartar que provinieran de esa pistola los trozos de proyectil balístico obtenidos desde los cuerpos de Ricardo Solís y Nicolás Espinoza; y, en cuanto a imagenología de Ayala, el análisis morfológico y la medición que hizo del trozo de proyectil que visualizó dijo que era compatible con un arma calibre 9 milímetros, lo que dio mayor fuerza a la versión de los testigos y de Ayala en particular.

Por su parte, declaró **Ignacio Valeria Reyes**, subcomisario de la PDI, BH Metropolitana, el que dijo haber realizado diligencias por un requerimiento de la BH de Curicó en noviembre de 2019, en que se le solicitaba recopilar la mayor cantidad de información relacionada al fallecimiento de José Uribe Antipani, en especial en las redes sociales de internet, lo que llevó a la Brigada de Cibercrimen a evacuar el informe 3.125 confeccionado por este testigo, en el que se relata que se obtuvo seis videos de Facebook y YouTube, además de una planilla Excel con los comentarios a uno de los videos y publicaciones que se obtuvieron. Toda esa información se guardó en un disco compacto con cadena de custodia, que fue remitido a la BH de Curicó, que reconoció al exhibírsele la **evidencia N°27**, así como los **6 archivos multimedia y uno de Excel** que se reprodujeron: en el video N°1 se apreció la Alameda de Curicó, se ve personas, uno en bicicleta, otro escondiéndose detrás de un árbol, en un momento pasa una camioneta roja frente a quien grababa, sale de la escena y se escuchan varios ruidos asimilables a disparos, enfocando

nuevamente el camarógrafo en dirección a la derecha, donde se aprecia que va la camioneta y al fondo se aprecia un letrero de Petrobrás. En el video N°2 se escucha el testimonio de un joven, Daniel González, sobre que estaban en la barricada, llegan los militares en un bus y una camioneta blanca, les levantan las manos pero disparan munición de salva o balines, él muestra un dedo vendado y dice que le llegó un balín, luego ve que la camioneta sigue por la carretera y el bus entra a Curicó por donde está el Servicio Médico Legal, como a los 5 minutos escucha disparos y cuando huían saltando las barreras aprecia que su compañero es herido, le toma el pulso, lo llevan a hospital, pero murió. Termina diciendo que dispararon y se fueron, esto no puede quedar así. En el video N°3 se aprecia la carretera, una fogata, pasan vehículos y personas detienen un camión, luego se escucha “mataron a un güeón”, y otra voz que dice “andaba una camioneta roja”. En el video N°4 se escucha “llamen una ambulancia”. En el video N°5 se aprecia un taco en la carretera, se enfoca una persona con casco y vestimenta tipo militar y se escuchan comentarios y gritos de fondo, el grabador se acerca y se interrumpe, luego dice “hay un compa caído, llamen ambulancia”. Y en el 6 se ve como entre varias personas toman a una y se enfoca manchas en el suelo, al parecer de sangre, se escuchan gritos, lo suben a un vehículo gris y se va con él. A su vez en el archivo Excel indicó que había una compilación de datos relacionados al video N°3, los usuarios de Facebook que visualizaban el video podían publicar textos, y a través de una herramienta informática se extrajeron esos comentarios. Se menciona camioneta roja en fila 28 por usuario José Cáceres Olmedo, pero no recopiló información sobre quien es esa persona y si efectivamente es su nombre.

Nos referiremos a estas evidencias más adelante.

Otro agente que declaró sobre las diligencias policiales fue **Fernando Matus Urrea**, subcomisario de la PDI de Curicó, miembro de la Brigada de Homicidios, quien explicó que la noche del 21 de octubre de 2019 el fiscal les solicitó la concurrencia al hospital local por tres personas lesionadas por proyectil balístico en la Alameda, y por otra fallecida, por lo que el jefe creó dos equipos, abocándose este al fallecido José Uribe Antipani. Le

correspondió examinar el cadáver, el que presentaba una herida por proyectil balístico. Recibieron información de que habría militares involucrados y un vehículo particular de color rojo, igual que respecto de las personas lesionadas en la Alameda y que investigaba la subcomisaria Sánchez. A él se le encomendó recabar antecedentes gráficos objetivos para la investigación, pues conocía los software de video relacionados con las cámaras de seguridad. Recopiló grabaciones de diferentes lugares de Curicó, supermercados, centros de carga de combustible, locales particulares, jardín infantil, entre otros, dedicándose a hacerles un análisis exhaustivo que demoró varios días. Manejaban un rango horario y gracias a eso se obtuvo segmentos de los videos y pudo establecerse que el homicidio ocurrido en la carretera tenía relación con las personas lesionadas en la Alameda. Los videos compilados se enviaron al Ministerio Público, reconociendo el soporte en la **evidencia 45**.

Explicó lo que pudo recabar, en primer lugar, en la **evidencia 42** que se le exhibió, compuesto de 43 fotografías (eran 46 originalmente), donde reconoció los vehículos que indicaban los testigos, primero una camioneta Nissan blanca (fotos 1 y 2) y un bus Hyundai blanco (fotos 3 y 4) en el que se trasladaban militares, y una camioneta Toyota roja (fotos 5, 6 y 7) con características bien especiales: era doble cabina, tenía un tubo en el costado del copiloto y llantas grises estrelladas. Esta camioneta estaba originalmente vinculada a las personas lesionadas en la Alameda y gracias a las cámaras se la vinculó al homicidio. En las siguientes fue explicando los lugares en que había cámaras desde donde obtuvieron videos, intercalándose imágenes de lo que se veía en los videos, tomadas esa noche, con las de los sitios en que estaban las cámaras, tomadas de día. Describió de esta manera las cámaras del Unimarc de Manso de Velasco con Estado (foto 8), dos ubicadas en el Servicentro Facaz de esa misma intersección, frente al supermercado Unimarc, costado sur poniente (foto 9). Luego se ve el recorrido de la camioneta roja del señor Fuenzalida Calvo que circula por Manso de Velasco hacia el sur, tomando dirección al oriente por la rotonda frente al Unimarc (10) y en la 11 se ven tres personas caminando por el servicentro, las que se tapan los oídos, infiriendo que en ese momento se efectuó un disparo en el sector de la Alameda. En la 12 y 13 se retoma el seguimiento de la camioneta

con una cámara del tribunal laboral, se ven las llantas estrelladas, toma la rotonda al oriente, y en concordancia con el disparo se ve que personas huyen del bandejón central de la alameda al norte y oriente. En la 14 se muestra que continúa el recorrido por calle Carrera, donde se ubica un jardín infantil en que se recopiló grabaciones. En la 15 indicó que se ve claramente la camioneta roja con las llantas y toma de aire. La 16 muestra cámaras en el Unimarc por el costado de calle Estado. La 17 muestra que la hora de las cámaras es la real en que ocurrieron los hechos, ese año se hizo cambio de hora por lo que varias cámaras tienen desfase de horario, y en esta se observa cómo vuelve la camioneta por calle Estado al oriente. 18: otra cámara del Unimarc por calle Estado. 19: se ve que hay vehículos de Carabineros y la camioneta roja llega al lugar y se mantiene varios minutos. Allí estaba el comunicador social Dani Bravo que estaba grabando lo que ocurría, Marcela Sánchez le menciona que Bravo graba la camioneta obteniendo la patente, por lo que pudo individualizarse quién era el dueño. Además, allí había un vehículo de la SIP que se dirige a las personas que conversaban y hace un control policial al señor Fuenzalida Calvo, pudiendo establecer que estaba solo y conduciendo la camioneta ese día. La hora que se ve es la correcta (en este video aparece que son las 22:20 horas). La 20 muestra otra grabación, del servicentro Facaz hacia el supermercado. 21: ángulo contrario, se ve la camioneta que permanece varios minutos hasta que reinicia marcha. 22: Desde la cámara que graba hacia la Alameda se observa cuando reinicia la marcha. 23: se ve camioneta roja que dobla por Manso de Velasco oriente hacia el norte, se pierde un minuto y vuelve a aparecer por Manso de Velasco poniente, siendo grabada por la cámara del supermercado Unimarc, pudiendo inferir que dobló a los pocos metros, seguramente en calle Merced, que es la siguiente; esto a las 22:28 horas. 24: Aquí hay un desfase de minutos, pero se puede establecer que es la camioneta porque con el programa usado pudieron ampliar la imagen, observando las llantas y la toma de aire negra por el costado del copiloto. Además, ven los vehículos que van antes y después, permitiendo ver que iba avanzando a velocidad constante. 25: Continúa recorrido la camioneta por Manso de Velasco hasta el servicentro copec que está en la esquina de esa avenida con San Martín, donde también hay cámaras. 26: había cámaras con desfase o calidad menor, como ésta, pero en la grabación en vivo, en

movimiento, se observa que es la camioneta, se ve que es roja, doble cabina y la silueta del tubo, y los otros vehículos. En la 27 se ve el mismo servicentro, hay otra cámara mira a la esquina, esta es su ubicación. 28: se ve ese otro ángulo y entrando la camioneta, por lo que hizo el recorrido desde calle Estado llegando a san Martín, donde continua hacia el sur. 29: encontraron un local Protege en Manso de Velasco N°35, con una cámara. 30: grabación de esa cámara en blanco y negro, pero de buena calidad, se ve la camioneta con su toma de aire. 31: cámara del domo de la Municipalidad de Curicó, a color. 32: esa cámara tiene ángulo más amplio, pero permite establecer que la camioneta roja va por Manso de Velasco, toma el desvío para llegar a la plazoleta Jamaica que está junto a la carretera y ahí va hacia el norte. 33: videos entregados por testigo Nicolás González, muestran que había gente reunida en la carretera por el estallido social, había barricadas que mantenían el paso bloqueado a la salida de la rotonda hacia la ruta 5 sur, allí había varias personas observando, este testigo grabó la camioneta blanca de los militares, les llamaba la atención a la gente que se bajaran. 34: siguiendo recorrido, frente a esa rotonda esta la Asociación de Dueños de Camiones de Curicó, ASODUCAM, y hay una cámara que graba a ese lugar. 35: Ese es el ángulo que graba la cámara y se ve a camioneta de Fuenzalida Calvo que pasa. Tenía una hora de retraso, los minutos estaban bien, serían las 22:29. 36: En el mismo lugar había otra cámara con ángulo más amplio de la rotonda. 37: lo que les entrega esa cámara es que se puede observar el ingreso de los vehículos desde la ruta 5 sur a Curicó por la misma rotonda y se puede ver cerca de la hora que va la camioneta en su recorrido y en pocos segundos llega a la ruta. La hora correcta sería las 22:29:06. 38: mismo ángulo de grabación, pero se observó el ingreso del bus de los militares a la ciudad de Curicó, se estableció que era ese bus por el diseño que tiene a ambos costados. Entre que salió la camioneta de Curicó a la carretera y salió el bus hay 12 segundos. 39: Cámara de tienda Protege, con desfase de tiempo, pero permite ver continuación del ingreso del bus a Curicó, con velocidad constante, no se detiene, continúa por la Alameda. En la 40 se observa el Gimnasio Pura Sangre CrossFit, ubicado por la carretera camino a Zapallar, también se obtuvo su grabación. 41: En esa cámara se pudo observar a la camioneta del imputado ingresando desde la carretera y que toma la caletería rumbo a Zapallar. 42: otro

ángulo del mismo gimnasio. Y, 43: con dos ángulos de las cámaras del gimnasio se estableció que era la camioneta y da recorrido completo desde Manso de Velasco con Estado, que avanza por la Alameda al sur, toma la rotonda hacia el norte, avanza por carretera y luego por caletería oriente camino a Zapallar.

Matus refirió también las imágenes proporcionadas por el testigo Nicolás González, donde se puede observar la camioneta y el bus de los militares en la ruta 5 Sur, son dos fragmentos de video, se observa a los militares abajo de la camioneta, luego suben y avanzan al norte, y el bus que ingresa a Curicó como vimos en las cámaras de la asociación de dueños de camiones. Sobre esto hizo un análisis gráfico. Se le exhibió la **evidencia fotográfica N°13**, compuesta de 7 fotos, en la que reconoció el bus de los militares en la carretera, algunos militares suben a él y luego entra a Curicó, donde está la rotonda Jamaica, y otros se suben a una camioneta blanca que se va hacia el norte. En la 6 en particular se ve cómo avanzan los vehículos cuando se despejó la ruta, después se forma otra barricada y queda de los primeros una camioneta de la empresa Lizcal, blanca con letras rojas. La 7 corresponde al segundo video, cuando ya hubo un disparo y hay una persona herida.

Añadió que dentro de las diligencias ya tenían ubicada la camioneta con el señor Fuenzalida Calvo en ese lugar saliendo por la rotonda para la carretera, por las cámaras, pero faltaba situarlo disparando en ese lugar. Ya sabían que se lo había situado disparando a los jóvenes en la Alameda y se tenía el arma que había sido enviada a peritaje. A continuación, contactaron a la empresa Lizcal de la camioneta que se veía en el video y les dieron el contacto de un funcionario de esa empresa que la tenía a su cargo, fueron a Santiago y lo entrevistaron, fotografiándose la camioneta, el chofer dijo que su camioneta recibió disparos de una persona que estaba a un costado, y luego encontró los proyectiles en el chasis del vehículo. Matus reconoció aquel vehículo al exhibírsele las 15 imágenes de **evidencia fotográfica N°14**, en que se apreció la parte frontal y posterior de un furgón marca Fiat modelo Doblo con logo y nombre de la empresa Lizcal, patente KKTG33 y dos orificios atribuibles según Matus a un proyectil balístico del calibre 9

milímetros.

Agregó que en esta diligencia recuperaron dos trozos de proyectil balístico que se enviaron a peritaje, los que reconoció en la imagen 15 del set anterior y en la **evidencia material N°62** que se le exhibió al efecto.

A Matus se le exhibieron y reconoció una serie de otras fotografías sobre lo mismo ya explicado, es decir, la ubicación de las cámaras y las imágenes recabadas, incorporándose de esa forma las **evidencias fotográficas 22 (34 fotos), 49 (50 fotos) y 18 (47 fotos)**. De este ejercicio, claramente innecesario por sobreabundante, cabe destacar las láminas 1 y 2 del set 49, que muestran un plano de la ciudad de Curicó donde se marcó la ubicación en que se habrían encontrado las víctimas Solís, Espinoza y Ayala, conforme a lo que a este testigo le indicó la oficial Marcela Sánchez, así como el fallecido, y la 50 que indica un resumen del recorrido de todos los vehículos: la camioneta de imputado, la de los militares y el bus de los militares.

Agregó que hicieron un informe con los horarios de los movimientos de la camioneta del acusado y pidieron a funcionarios de Temuco que hicieran un video compilatorio.

Terminó señalando ante consultas de la Defensa que el informe final con estas diligencias lo tuvieron el 11 de noviembre de 2019 y por tanto no considera los aportes de las víctimas en la reconstitución de escena realizada en febrero de 2020; que no hay algún video que diera cuenta objetivamente que Fuenzalida Calvo disparó desde la camioneta y que esa noche hubo numeroso contingente policial en las calles, parte de los cuales usan armas cortas del calibre 9 milímetros.

A propósito de lo señalado por Matus sobre el encargo a funcionarios de Temuco, declaró **Jorge Rodrigo Guzmán Martínez**, quien se identificó como perito de la sección sonido y audiovisual del Laboratorio de Criminalística de la PDI Regional Temuco, sobre el informe pericial de sonido y audiovisual N°195/019, explicando que por solicitud de la BH de Curicó trabajó varios videos de cámaras de seguridad que recibió en un disco duro

para realizar una mejora de las imágenes de una camioneta y un bus, y hacer un extracto según set fotográfico que se le facilitó adjunto también al oficio. Debía hacer un nuevo video con secuencia cronológica para explicar mejor los hechos en una infografía. Los 19 archivos de video correspondían a diversas cámaras y se guio por el cuadro gráfico, extrajo 24 pequeños videos para mostrar la secuencia, en el orden del set fotográfico. Además, se mejoraron las imágenes de una camioneta color rojo, doble cabina con una barra anticuerpo y llantas de cinco rayos y respirador de color oscuro en el costado del copiloto, y la de un bus de color claro durante la noche, tenía ciertos diseños no muy visibles. Con los 24 videos se generó un video final o recopilatorio de 9 minutos de duración que remitió conjuntamente con el informe. Se obtuvieron 8 fijaciones y 8 ampliaciones de los vehículos. Las imágenes que recibió eran de fecha 21 de octubre de 2019.

Se le exhibió la **evidencia N°28, consistente en un video**, el que reconoció como el efectuado.

La larga exposición de Fernando Matus, sintetizada aquí, permitió comprender, al igual que al escuchar a Marcela Sánchez, cómo la Fiscalía y la PDI dirigieron la investigación de estos hechos y fueron recopilando evidencias y atando cabos para esclarecerlos. Relevante es resaltar que desde los albores de la investigación, la misma noche de los sucesos, ya se contaba con información que vinculaba los disparos que hirieron a las víctimas con el conductor de una camioneta roja, al principio en relación a los hechos de la Alameda, y con el devenir de los días también con el crimen cometido en la carretera. Fundamental resultó el trabajo de pesquisa de los establecimientos que tuvieran cámaras que hayan podido captar imágenes de los sucesos, y, si bien quedó claro que en ninguna toma, lamentablemente, se visualizó el momento de los disparos, o cuando los afectados fueron heridos, ni siquiera se posiciona alguno de ellos en el lugar, sí se recopiló información útil, consistente y unívoca para reconstruir un actor tan fundamental de lo ocurrido como fue la camioneta roja que luego se asoció al acusado, como ya vimos estableció Marcela Sánchez. En ese sentido, las imágenes y videos

aportados, que una y otra vez se exhibieron, aparecieron sintetizados en el buen trabajo que acertadamente se le encomendó al Lacrim de Temuco, efectuado y explicado por el perito Jorge Guzmán, que, en forma coherente con tales antecedentes, nos permitió unir todas las piezas disponibles para posicionar dicha camioneta en las circunstancias de comisión de los crímenes. Como explicó Matus, y teniendo en mente la distribución de las calles de Curicó en ese sector, las que, sin perjuicio de ser un hecho público y notorio, se describieron sucesivamente en varios relatos y, a mayor abundamiento, se mostraron en las indicadas imágenes del plano de la ciudad incorporadas en las láminas 1, 2 y 50 de la evidencia fotográfica N°49, pudimos apreciar que la camioneta roja marca Toyota, patente HVLD26, circuló esa noche del 21 de octubre de 2019 por la Alameda Manso de Velasco de Curicó, llegando desde el norte a la intersección con calle Estado, justo donde está el Unimarc tantas veces aludido, momentos después de las 22:00 o 22:05 horas, doblando a su izquierda, para seguir de largo por esa calle, que toma el nombre de Carrera hacia el oriente. La calle anterior en forma paralela a Estado, al norte, a la altura de la Alameda, desde donde venía el móvil, es Merced, la misma señalada por el acusado como el lugar en que dispara y que Nicolás Espinoza indica como el lugar donde él estaba al ser herido, donde se ubica el monumento a O'Higgins que él menciona en su declaración. En esta sección del video, gracias a una cámara del local Facaz, se muestra en primer plano a tres personas, las que claramente hacen un gesto inequívoco de oír un ruido fuerte que les sobresalta, es más, la mujer se tapa los oídos, lo que Matus asoció con un disparo, apreciación plausible desde el sentido común. Y los tres se dan la vuelta para observar el lugar desde donde provenía el ruido, mirando justo en dirección a la camioneta. En esta intersección, que es bastante amplia y donde existe una pequeña rotonda o bandejón que separa ambos sentidos del tránsito de calle Estado, se situaron a la vez Miguel Ayala y Ricardo Solís, el primero sobre ese bandejón central, donde está el monumento a Luis Cruz Martínez, por él mencionado como la estatua con la espada, y el segundo en la esquina sur oriente, donde se sitúa el Juzgado de Letras que indicaron Solís y su pareja. Pero por esta convergencia de arterias, según las imágenes, la camioneta pasó al menos otras dos veces, ya que cuando se va en la secuencia anterior por calle Carrera, se la ve aparecer luego

desde el poniente por calle Estado, antes de la Alameda, teniendo a su izquierda el Unimarc y a su derecha el local Facaz, cada uno con sus cámaras que graban ese momento. Para aparecer por ese sector debió haber dado la vuelta en algún punto, siendo muy probable que lo hiciera cuando iba por Carrera en alguna calle que lo conectó al sur una cuadra con calle San Francisco, que tiene sentido hacia la Alameda, y en cuya esquina, recordemos, la vieron Ricardo Solís y Karolain Suazo cuando éste ya se encontraba herido. Calle San Francisco hacia el poniente cambia de nombre después de la Alameda, pasando a llamarse Argomedo, donde está el servicentro Petrobrás, lo que nos traslada a lo que menciona el mismo Ayala y especialmente la testigo Carmen Salinas, como el lugar donde ella ve disparar al conductor de esa camioneta. A su vez, el video N°1 de la evidencia 27, conseguido de las redes sociales por el detective Valeria, donde vimos a la camioneta pasar y luego se oyó una ráfaga de varios disparos muy seguidos, puede situarse - apreciando el letrero de Petrobras que se ve en las tomas finales, al fondo- captado por el lado poniente de la Alameda, más o menos a mitad de la cuadra entre Estado y Argomedo, es decir, muy cerca de donde es vista la camioneta por aquella testigo y en una dirección coherente con la que ella la ve dirigirse, que es la misma en que la captan después las cámaras de la Copec y el local Protege, mencionados por Matus, al sur de esas calles. Por su parte, los horarios también son importantes, porque, más allá de que los que se indican en las grabaciones no sean coincidentes 100%, hay algunos que resultaban más confiables y ajustados a la realidad, como dijo Matus, siendo compatibles con los horarios descritos por las víctimas y demás testigos, y, sobre todo, con la información de sus atenciones posteriores en el Hospital Base de Curicó, a donde acudieron prontamente Ricardo Solís (ingresado a las 22:19 dice su DAU, documento 6), Nicolás Espinoza (ingresado a las 22:27 según su DAU, documento 3), y luego llevaron a Uribe Antimani (ingresado también a las 22:27, según el DAU respectivo, documento N°1 aportado) en un vano esfuerzo por salvarle la vida, tiempos que sitúan el momento de los disparos entre las 22:00 y las 22:20 aproximadamente, y en que puede asociarse, no con absoluta certeza, pero más allá de toda duda razonable si se combina con las otras pruebas, a la camioneta roja aludida, en los lugares donde dicen haberla visto y a su chofer disparando.

Esta estimación se ve corroborada por la comunión de otros relatos y evidencias, que, a la vez, no solo refuerzan la presencia de esa camioneta, sino, más importante aún, que aquella era conducida por el acusado Fuenzalida Calvo. Nos referimos a los testimonios ya aludidos por Marcela Sánchez de **Dani Alexis Bravo Maturana** y **Sergio Osses Arenas**.

El primero señaló que esa noche, aproximadamente entre las 22:00 y 22:30, se encontraba haciendo filmaciones en la Alameda, donde está el local Facaz, frente al Unimarc, cuando llegó a ese lugar una camioneta roja, de la que bajó un tipo, que lo empezó a insultar por estar grabando, lo que había hecho igualmente momentos antes en otro lugar. Bravo indicó que había empezado a grabar allí a las 22:18 y alcanzó a captar lo que este sujeto le dijo, pudiéndose escuchar que dice “y a vo’ quien te paga conchatumadre para andar filmando”. Ahí llegó personal de la SIP de Carabineros que estaban cerca, porque la persona estaba muy alterado, eufórico, aunque no lo agredió físicamente. Mientras lo controlaban en la parte de atrás de la camioneta, alcanza a tomar una imagen de la patente que después entregó al personal policial. Les hicieron un control de identidad, dejándolo ir al sujeto, lo que calcula fue a las 22:30, el que tomó su camioneta para doblar por la Alameda hacia el sur, hacia la carretera.

Osses, por su parte, coincidió en señalar que se encontraba con otros funcionarios a un costado del Unimarc, alertas frente a las personas que estaban en los alrededores, ya que ya habían tratado de entrar al Unimarc, cuando se percata que hay un incidente a unos metros, entre un hombre que bajó de una camioneta roja e insultaba con fuertes epítetos a un joven que no tenía un ojo y al que conocía como comunicador social, llamado Dani Bravo, acercándose a hacerles un control de identidad, recordando solo que el conductor era de apellido Calvo, lo que le llamó la atención precisamente porque tenía muy poco pelo. Pero justo en esos momentos le comunica la comisaria que deben replegarse y suspende el control, indicándole al chofer que se retirara a su domicilio. Más tarde, cuando la oficial de la PDI Marcela Sánchez requirió información sobre la camioneta roja observada por varios testigos, él recordó este episodio y ubicó a Bravo, quien le envió

el video con la patente.

Bravo reconoció cuando se le exhibió la **evidencia N°33**, el video que filmaba con la transmisión de las manifestaciones esa noche, cuando llega la camioneta y se escucha al sujeto que lo increpa, al tiempo que se ven vehículos de Carabineros delante del Unimarc; y la imagen de captura de pantalla que le envió a Osses con la patente del vehículo, que era HVLD26 y correspondía a una camioneta roja, Toyota Hilux con toma de aire en la parte delantera tipo snorkel, en la que se desplazaba un hombre de metro setenta, tez pálida, pelo corto calvo, quien viajaba solo.

Tanto Bravo como Osses identificaron a Fuenzalida Calvo en el juicio como la persona que increpó al primero y a quien hizo un control de identidad el segundo.

Los testimonios contestes en general del comunicador Bravo y carabinero Osses permitieron de esta manera tener certeza del posicionamiento de la camioneta conducida por Fuenzalida Calvo esa noche en el sector de la Alameda, en un tiempo coincidente con los disparos, descartando así una eventual hipótesis de que otra persona pudiera haberla manejado o intervenido en el suceso en lugar de él, lo que se ratifica con que ambos apreciaron que se encontraba solo. Despeja cualquier duda su certero reconocimiento en el juicio, al punto que el propio encartado, cuando declaró, después de escucharlos, reconoció ese encuentro.

También fue relevante el que se acotara el horario en que ello ocurrió. Bravo, eso sí, hizo una estimación exagerada del tiempo que habrían permanecido en esa situación con el imputado, supuestamente entre las 22:18 hasta las 22:30, episodio que en realidad duró bastante menos, como pudo comprobarse objetivamente al examinar las dos secuencias fílmicas aportadas sobre lo mismo, recogidas en el video compilatorio elaborado por el perito Jorge Guzmán, donde se pudo apreciar que, independiente de que las horas que aparecen en las cámaras no coincidan, no se apreció alterado el tiempo transcurrido, que pudo medirse en poco más de 3 minutos, desde las 22:20:53 a las 22:23:58 según la cámara del Unimarc, o bien entre las 22:19:21 y las 22:22:31 según la de Facaz. Con todo, la

diferencia de las horas señaladas en una y otra es escasa y más bien son convergentes en un mismo horario.

La importancia de esta precisión dice relación con el tiempo que habría demorado Fuenzalida Calvo en salir de esta escena y llegar a la carretera, donde efectuó los otros disparos que hirieron a Uribe Antipani, cuando ya se habían retirado de ese lugar los militares, sindicados en un comienzo de haberlos realizado, en un horario situado alrededor de las 22:30 o tan solo momentos después, como analizaremos.

En otro aspecto, sin perjuicio de las pruebas señaladas que apuntaban a sostener la responsabilidad del acusado en los sucesos de la Alameda, la Fiscalía aportó prueba para dar respuesta a la pregunta obvia implícita en la postura de la Defensa en esta materia, en cuanto a despejar la duda sobre si otra explicación pudo existir para que los proyectiles alcanzaran a las víctimas, distinta de que haya sido el conductor de la camioneta roja el que los disparó, que ya sabemos era el acusado Fuenzalida Calvo. Debemos decir que ninguna duda surgió en relación a que Fuenzalida Calvo no haya sido el conductor esa noche de la camioneta sindicada, y él mismo al declarar en el juicio, como hizo esa misma noche de los sucesos ante la PDI, señaló que solo él manejó su camioneta y andaba solo, lo que fue corroborado por las pruebas reseñadas; y también señaló en la audiencia, ante el interrogatorio del abogado señor Norambuena, que la pistola CZ que portaba la manipuló, usó y disparó solo él aquella jornada, lo que igualmente es coherente con lo que se asentó probatoriamente.

Sin perjuicio de ello, en lo que entendemos como labores propias de la investigación de un caso que fue en inicio tan confuso y complejo, la Fiscalía en conjunto con las policías hicieron diligencias para descartar la participación de funcionarios policiales en los crímenes, y en ese sentido escuchamos al ya mencionado **Sergio Osses Arenas**, quien expuso en relación a esto que cuando surgió el rumor que había una persona fallecida y considerando que estaban piquetes de control de orden público en la calle, la comisaria indicó que iba a haber una revisión de armamento con el armero y el encargado de la sala de armas de la unidad, por lo que debieron acudir a la comisaría y

este testigo los acompañó en su labor, siendo junto a sus compañeros de la SIP de los primeros en ser revisados. Este testigo portaba una pistola y el sargento Solís le revisa que tenía los 10 cartuchos en el cargador, ninguno en la recámara, y pudo oler que no había olor a pólvora como queda cuando se hace uso. Después procedió así con los demás, incluyendo los jefes, y supo que ninguno había disparado, que ninguna arma de puño fue usada. Los de control de orden público usan escopetas lanza gases o estoper de perdigones y esas aparentemente sí las habían usado. Terminó aclarando que el personal usa en general revólveres calibre .38 y pistolas calibre 9 milímetros, que esos calibres equivalentes, y la prueba de residuos nitrados se les hizo terminando la noche, entre las 8 y las 10 de la mañana siguiente, cuando se apersonaron peritos del Labocar, ignorando su resultado.

Sobre el punto declaró en especial **Sergio Opazo Flores**, quien expresó que es suboficial mayor de Carabineros y trabajaba a esa época, como ahora, en la 1ª Comisaría de Curicó, siendo encargado de sala de armas, y que ese día su jefatura dispuso que se efectuara una revisión al personal que andaba de servicio en la población, a raíz de un supuesto uso del armamento, por lo que él acompañó al armero artificiero Gonzalo Solís Muñoz para verificarlo revisando la munición y el armamento que mantenían los cerca de 60 funcionarios que esa noche estaban en servicio, los que se formaron en el patio posterior de la unidad, y Solís los revisó uno por uno, a ojo desnudo, indicándole al jefe que debía hacerse una prueba más técnica para saber si las armas habían sido utilizadas, por lo que se solicitó la presencia de personal de Labocar. En cuanto a la munición, la que portaban era conteste al cargo de la unidad, pertenecía a la unidad, pero no pudo determinar si faltaba, pues de eso se encarga otro funcionario; y en cuanto a las armas, Solís manifestó que no se habían utilizado, éste era el especialista.

Gonzalo Andrés Solís Muñoz, por su lado, declaró ser armero artificiero de la prefectura de Carabineros de Curicó y que ese día se le ordenó revisar el armamento y municiones del personal en funciones, se les formó en el patio de esa unidad y cada uno exhibió su armamento y munición, debiendo verificar que el armamento no tuviera signos

de limpieza -que borran los signos del disparo- y que la munición obedeciera a la marca asignada a los carabineros. Fueron entre 55 a 60 de los que estaban en servicio de contingencia esa jornada. Se revisó el armamento, la pistola, verificando que parte interior no este húmeda producto de limpieza, y que munición fuera de la marca y el calibre, .38 para revólver y 9 milímetros para pistola. Eso se realizó uno por uno a cada funcionario. Lo hizo en compañía del suboficial Sergio Opazo y el encargado de la sala de municiones, entre las 23 y las 00 horas. El resultado fue que toda la munición era de la marca que usa carabineros y ningún armamento tenía señas de limpieza y no presentaban alguna característica o señal que hubiera sido disparado, por lo que ninguno había sido disparado. Además, el jefe le consultó si habían efectuado algún disparo y todos manifestaron que no.

Conforme a estas declaraciones, quedó patente que esa noche el personal de Carabineros en la población, que podría haber estado en condiciones de disparar a la gente, fue llamado a una revisión extraordinaria de su armamento y munición, lo que implicó un gran despliegue de funcionarios policiales, los en servicio retirándolos a su unidad, y llevando a ella peritos para realizar el estudio pertinente, y no obstante las dudas o vacíos que levantó la Defensa en torno a que la revisión no fue muy acuciosa porque la prueba más importante, que era la de residuos nitrados, solo se practicó al otro día en la mañana y nadie refirió su resultado, lo cierto es que estos tres testigos y perito confluieron en cuanto a que la revisión de todo el armamento se hizo por el experto en base a su observación y olfato, que es un método de uso corriente, que, más el conteo de la munición, arrojó que no se había hecho uso del armamento ni usado munición de la asignada por la institución en el trabajo en la población de esa noche, salvo de elementos antidisturbios, que no es de fuego, no existiendo, por tanto, antecedente alguno para afirmar que uno de los agentes haya podido usar su armamento contra los lesionados en el sector de la Alameda. Ninguna prueba en contrario se brindó que pudiera alzarse como una duda razonable al respecto.

Por otra parte, el oficial Matus, como vimos, también hizo una referencia clave a la

ubicación en el sitio del suceso de la carretera, donde fue lesionado Uribe Antipani, de una camioneta o furgón blanco, marca Fiat -que aparecía en uno de los videos recogidos- vehículo que ubicaron y que resultó haber recibido dos impactos balísticos, entrevistando a quien lo conducía, diligencia que les permitió recuperar dos trozos de proyectil que se enviaron a peritaje. Al respecto, escuchamos a esa persona en el juicio, **Cristian Humberto Miranda Miranda**, quien declaró que ese día volvía de un viaje por trabajo a Chiloé, con reuniones y capacitaciones relacionadas con la empresa para la que trabajaba, Lizcal S.A., que se suspendieron por el estallido social. Circulaba en un furgón marca Fiat modelo Doblo patente KKTG33. Andaba solo. Estaba preocupado por los cortes de carretera y todo eso, llegó a las 6 de la tarde a Chillán y, como iba todo bien, siguió. En Parral había barricadas, disturbios, manifestantes y carabineros, pero logró pasar. Iba un bus y una camioneta blanca con militares cerca, los vio varias veces en el taco, atrás o adelante. A la altura de Talca también había barricadas. En cada detención se bajaban algunos militares con fusiles, pero no actuaban. Como a las 10 de la noche llegaron cerca de Curicó, donde el taco fue más largo, al fondo se veían las barricadas en la salida sur de Curicó. Dejaban pasar y avanzaban, y a 100 o 150 metros de la barricada el ambiente se puso más tenso, mucha gente caminaba por el sector poniente. Estaba a la mano izquierda del bus, rueda trasera, militares se bajaron con sus armas, la gente solo les gritaba, pero se puso más tenso cuando se acercaron a las barricadas, uno de los militares sacó un arma desenfundada, y junto a otros avanzan, siente entre 4 y 6 disparos y todo los vehículos en el taco avanzan, la camioneta de los militares avanza rápidamente hacia el norte y el bus pasó sobre la platabanda y dobló hacia Curicó. Él avanza hasta quedar en primera línea a la barricada, como a 4 metros, donde ve a dos jóvenes con piedras del tamaño de la mano, tuvo certeza de frenar y no pasar porque lo más probable es que le hubieran tirado las piedras. Esos jóvenes eran una niña vestida de verde completo y el joven que después supo falleció, al que recuerda que sus pantalones eran negros con rectángulos blancos, después lo vio en las imágenes de redes sociales. Cuando frenó pasó por el lado un camión gigante con rampla y no se detiene y ve que le tiran piedras y revientan sus vidrios, pero siguió, y a su costado no quedó nadie, ningún vehículo. Posterior a eso aparecen tres niños

más, un gordito con moño, una niña de contextura más gruesa y un joven más bajo, que tira una piedra al camión y sale arrancando cobardemente. Segundos después aparece el joven más gordito, que pasa a su costado izquierdo, él baja el vidrio y le dice al lado “pásame plata para tomar”, con una agresividad fuerte, le pasa unas monedas y le pide que lo dejara pasar, y le responde “espérate”. Pasan 2 o 3 segundos, este chico debe haber ido en la cola del furgón y empiezan unos disparos y los niños corren de su derecha a su izquierda, él ve que en el pavimento saltan chispas de las balas. El joven que falleció pasó por la derecha del furgón, y fue hacia atrás, no tuvo contacto con él. Una de las niñas más gruesa se cubre en su rueda delantera izquierda, se agazapa, después hicieron contacto visual de asombro, en shock, escucha disparos y siente unos impactos que le llegaron al furgón, fue algo corto y rápido, escuchó por lo menos 10 disparos. Segundos después escucha que grita gente y una voz de hombre dice “se lo pitearon, se lo pitearon los milicos”, y pasa rajada una camioneta roja al lado y se va y con el mismo impulso él también lo hace. Seguía con su vidrio abajo y por eso escuchó. Fue un viaje terrible. Pasó a un puesto de Teno sándwich estaba uno de los choferes de un camión y estaba la camioneta blanca de los militares. En la próxima Copec pasó a cargar combustible y tenía dos orificios en la puerta del copiloto que afortunadamente pegaron en el marco. Llegó a la Tenencia de Santa Rosa de Pelequén donde le piden salvoconducto para entrar a Santiago, delante iba un bus y conversaron y le confirmaron que el chico había fallecido, no sabía quién era porque no había visto imágenes, los pasajeros comentaban que se subieron al bus para pedirles monedas para dejarlos pasar, pero igual les tiraron piedras, y contó lo de sus balazos y sacó la cuenta que ese chico había muerto allí. Llegó a su casa tipo una de la mañana y ahí vio las noticias y hablaban del joven fallecido y se da cuenta que fue la persona que vio en el cruce de Curicó. Al día siguiente descansó y al siguiente revisó que tenía dos disparos en el furgón, uno lo sacó. Lo llamaron de la PDI de Curicó y aceptó colaborar. Se juntaron en el cuartel de la PDI de Puente Alto donde hicieron peritajes y dio su primera declaración. Luego declaró también en la fiscalía de Curicó y participó en una reconstitución de escena. Preciso que antes se le había preguntado si había visto una camioneta roja y dijo que no, pero recordó que sí pasó a su lado. No vio

quien hizo los disparos la primera ni la segunda vez.

A Miranda el fiscal le exhibió la **evidencia fotográfica N°14**, con 15 imágenes, donde reconoció el furgón que usa y que es de la empresa Lizcal S.A., apreciando su patente KKTG33 y el logo de la empresa Lizcal, el área donde llegaron los impactos y los dos trozos de proyectil recuperados y que entregó a la PDI, objetos que asimismo identificó al ver la **evidencia material N°62**.

El testimonio de Miranda fue apreciado muy vívido, circunstanciado, suficientemente detallado y coherente como para ser estimado confiable, pues también se complementó y ratificó con las otras probanzas. Con esas y otras virtudes pudo ser considerado para asentar las circunstancias en que su vehículo recibió esa noche los impactos balísticos cuyos restos entregó a la policía, quedando claro, a su vez, que él no se presentó a la policía diciendo que era testigo, sino que fue la policía la que pudo ubicarlo, lo que concuerda con lo que explicó Matus y la visualización en el juicio de las imágenes que éste señaló fueron proporcionadas por el testigo Nicolás González, donde se aprecia ese furgón con su logo distintivo. Esa circunstancia que explica cómo se recabó su versión fue otro factor de credibilidad, reafirmado porque no se apreció ganancia alguna en dar ese testimonio. Por lo mismo, fue creíble también en cuanto a la identificación que hizo del occiso, cuando lo vio momentos antes de recibir el disparo mortal, situándolo a un costado de su vehículo en los momentos en que se efectuaron los disparos, describiendo una secuencia en que enseguida ve pasar la camioneta roja y escucha que la gente grita que había una persona herida. Ciertamente es que él no vio quien disparó en ese instante, pero eso lo podemos deducir los jueces a partir de la propuesta de los acusadores con base en estas pruebas, unidas lógicamente tanto con los otros testimonios que expondremos. En ese sentido, Miranda, por de pronto, fue confirmado por la declaración del referido oficial Matus, en cuanto a cómo lo contactó, a su entrevista y la evidencia recogida de su vehículo, y asimismo con esta misma evidencia material incorporada y con las pericias que se le practicaron.

Sobre ese análisis y su resultado expuso el mencionado perito balístico **Daniel**

Cáceres Aravena, refiriéndose a su informe pericial balístico N°122/019, relativo a determinar la aptitud para el disparo de la pistola marca CZ, calibre 9 milímetros, modelo 85, serie A2773, y cinco cartuchos 9 milímetros, sobre las que, como ya vimos, realizó las pertinentes pruebas de funcionamiento y disparo, concluyendo que todos eran aptos para el disparo, siendo a su vez los cartuchos compatibles para ser disparados con esa arma. Además, para este examen se le remitieron dos trozos de proyectil, que rotuló como P1 y P2, que conforme a su cadena de custodia habían sido levantados desde la carrocería del vehículo patente KKTG33, el primero con deformación en forma de achatamiento, estableciendo que, conforme a sus características, ambos formaron parte de cartucho balístico de calibre 9 milímetros. Posteriormente con la evidencia obtenida de las pruebas de disparo efectuó una comparación microscópica con los trozos de proyectil P1 y P2, concluyendo que por sus características fueron disparados con una misma arma de fuego. Luego hizo el análisis comparativo de los proyectiles balísticos y el arma periciada, viendo primero el calibre, eran calibre 9 milímetros; después se visualiza rallado balístico que coincide, campos y estrías que coincidan, que son las huella primarias; y luego vienen las huellas secundarias, al interior de los campos y estrías que se comparan al microscopio, verificando que estos proyectiles fueron disparados con la misma arma de fuego y luego concluyendo que esa arma era el arma periciada. Cáceres terminó enfático: no hay un tema de probabilidades, sino de 100% de seguridad, ambos proyectiles fueron disparados con la pistola CZ indicada.

Cáceres complementó su exposición reconociendo las evidencias peritadas al exhibírsele la **evidencia fotográfica N°24**, compuesta de 4 imágenes, donde reconoció la aludida pistola, los cinco cartuchos aludidos, calibre 9 por 19 milímetros, así como los dos trozos de proyectil que peritó. Luego, también reconoció esas especies al exhibírsele las **evidencias materiales 52 y 62**.

Este perito señaló también que participó en una diligencia de reconstitución de escena, en febrero de 2020, donde, a proposición suya, debía verificarse si los proyectiles obtenidos del vehículo fueron disparados en la circunstancias que indicaba es testigo.

Explicó al efecto las pruebas y mediciones que realizó, lo que ilustró al exhibírsele la **evidencia fotográfica N°35**, específicamente las fotos 78 a 91, en las que pudo apreciarse el furgón o camioneta de la empresa Lizcal y los dos orificios que presentaba, atribuibles al impacto de los proyectiles balísticos que se encontraron en ella y se trazó la trayectoria, conforme a la versión del conductor, respecto del momento donde sintió los impactos, y se estableció la factibilidad de ello, es decir, es compatible su versión con la evidencia. Como se muestra en esas imágenes se usó una lienza naranja para marcar la línea de tiro y trayectoria desde la posición en que se sitúa la camioneta roja y coincide la altura donde se recibieron los disparos, en la ventana del vehículo de Miranda.

Así expuestas, las pericias indicadas por Daniel Cáceres fueron muy importantes, porque entregaron un soporte científico certero a la vinculación entre la pistola CZ que portó y usó esa noche Fuenzalida Calvo, conforme los testimonios apuntados, con los trozos de proyectil balístico recuperados desde el vehículo conducido por el testigo Cristian Miranda, certeza que a su vez permite articular un indicio relevante para atribuirle también la herida mortal a Uribe Antipani, ya que éste, conforme a ese testigo, se encontraba en el mismo lugar al recibir la ráfaga de disparos que impactó su furgón. Ninguna otra prueba desvirtuó su rotunda conclusión ni levantó duda al respecto.

Otro engranaje relevante de la investigación y prueba de estos hechos estuvo en el relato entregado por **Bernardo Veloso Rojas**, quien señaló ser oficial de la PDI y que el 21 de octubre de 2019, a las 23:55 horas, recibe una orden de investigar verbal del fiscal Jaime Rojas, que le solicita realizar diligencias para esclarecer un hecho ocurrido en la carretera norte sur a la altura del acceso sur a Curicó, a raíz que había ingresado una persona fallecida al Hospital de Curicó. Por ello junto a su colega Matus se trasladaron al cuartel, donde desde el hospital se les informó el ingreso de una persona herida por traumatismo torácico por proyectil balístico, identificada como José Miguel Uribe Antipani. Ante eso se recopilaron antecedentes por redes sociales, que decían que el origen fue un evento de altercado entre manifestantes que tenían cortada la Ruta 5 sur con personal del ejército. Cerca de la una el fiscal les dice que la patrulla militar estaba en la Tenencia de Carreteras

de Romeral, donde van y hablan con el oficial a cargo, el capitán Jorge Gómez González, que les comenta que venían desde Chillán y efectivamente tuvieron un altercado con manifestantes, haciendo disparos con sus armas con munición de fogueo, de escopeta antimotines y un funcionario con munición real, de guerra, con un fusil Sig, calibre 7,62 por 51 milímetros. Acceden a concurrir a su cuartel y cerca de las 2 de la mañana levantan residuos de disparo a los 8 integrantes de la patrulla, los que hicieron entrega de su armamento y munición: cuatro pistolas Beretta calibre 9 por 19 milímetros con sus cargadores y 15 cartuchos cada una, una escopeta antimotín Winchester y 3 fusiles Sig, dos con 19 cartuchos de su capacidad de 20, y el cabo Reyes entrega su fusil de la misma capacidad con 18 cartuchos sin percutir, faltando uno a fogueo y uno real.

Luego, junto a peritos y el fiscal a las 4 horas van al hospital y realizan examen externo al cadáver de Uribe, al que constatan que vestía polera gris manga larga la cual tenía desgarradura en línea anterior producto de primeros auxilios y dos orificios, uno a cada costado, compatibles con trayecto de proyectil balístico. También vestía pantalón negro con cuadros blancos y zapatillas Convex color blanco. Mantenía lesiones equimóticas y erosivas, destacando en la cara anterior del tórax derecho un anillo contuso erosivo compatible con orificio de entrada, y en la cara del costado izquierdo observaron un segundo anillo contuso erosivo con características de orificio de salida, los que describió.

Luego se trasladaron a la Ruta 5 sur, kilómetro 190 que corresponde al lugar de entrada y salida sur de Curicó, donde en compañía de los peritos se hizo el examen del sitio del suceso, comprobando que en la ruta de sur a norte, en la berma, encontraron cuatro vainillas de calibre 7,62 por 51 milímetros, compatibles con las cuatro municiones indicadas como usadas por el capitán. A un costado hay un parque, llamado Jamaica, donde a la misma altura se encontraron dos vainillas calibre 12, compatibles con munición antimotines. A 41 metros al norponiente, entre medio de las dos rutas, en el bandejón central, junto a la barrera de contención que da al poniente, se encontraron manchas pardo rojizas que impresionaban a sangre, por impregnación y goteo, lugar que fue fijado como

donde Uribe fue lesionado y falleció.

En el cuartel se formalizó la declaración del capitán Jorge Gómez, que dijo que era del ejército N°1 Bellavista y que el día del hecho salieron de Santiago en una camioneta Nissan Navara blanca haciendo escolta a un bus marca Hyundai color gris con manchas rojas y azules por el costado, para transportar personal al batallón de Talca y Chillán, lo realizan y vuelven en la noche, tienen problemas de congestión por el estallido social, en Parral, luego en Talca y después en Curicó, en la salida sur, al percatarse apagan las luces para no ser detectados, pero manifestantes caminaban por el costado por lo que decide bajar y acercarse en búsqueda de carabineros, tomando contacto con manifestantes, que los atacan, vuelven a los vehículos a buscar al cabo Romero a cargo de escopeta antimotín para repeler ataque, en ese contexto se dan los disparos antidisturbios y a fogueo y el cabo Reyes hace los dos disparos para disuadir a los manifestantes. Escuchaba insultos, les tiraban piedras y cabo Pincheira resultó lesionado en una pierna. Escucharon disparos, en un momento manifestantes corren a la alameda y se libera la congestión, se reparten, el capitán y 2 funcionarios se suben a la camioneta y se van al norte, los otros al bus y se meten a Curicó, y luego sale por Aguas Negras para juntarse. Reyes da cuenta de disparo de munición de guerra y jefatura les indica acudir a Tenencia más cercana, por lo que pasan a Teno, percatándose que había una persona herida y que falleció. Agregó que llevaba pistola Beretta calibre 9 por 19. Por su parte, también le tomó declaración a Juan Reyes Araneda, que señaló básicamente lo mismo, precisando que cuando ya venían de vuelta, había ambiente hostil, sus compañeros entran en conflicto con manifestantes y ahí se baja, dispara primer disparo de fogueo y cuando se ve más presionado, ya que lanzaban piedras y palos, él hace un segundo disparo hacia el aire y el norte. Además, tomó declaración a los otros integrantes de la patrulla, que lo hicieron en términos similares. Todos andaban con vestimenta de camuflaje, casco balístico y chaleco táctico.

Veloso explicó que en ese momento ya habían tomado contacto con testigos, pero no pudieron concretar declaración, y se solicitó la orden de detención para Reyes. La BH ya trabajaba con otros lesionados en la Alameda, frente al Unimarc, en lo que se suponía

era un evento independiente. Añadió que se redacta el informe policial con las primeras diligencias de fecha 22 de octubre de 2019, donde se dice que Reyes Araneda da muerte a la víctima Uribe Antipani, no obstante que debía ser complementado con la declaración de los otros testigos. Este informe recogió las versiones los militares y el levantamiento de su armamento y municiones, y las mencionadas declaraciones, además del trabajo del sitio del suceso. Este fue el informe que se consideró para la formalización de Reyes.

Se aportó a continuación la **evidencia fotográfica N°2, compuesta por 24 fotografías**, donde identificó una imagen de Uribe Antipani obtenida del Registro Civil, fotos que se le tomaron a su cuerpo en el hospital, a sus vestimentas y lesiones, sobre todo dos orificios que estimó compatibles con proyectil balístico, el segundo mayor que el primero y es que el de salida, y el sector de la Ruta 5 sur, berma de la calzada de la ruta que va de sur a norte, donde se encontraron las 4 vainillas calibre 7,62 por 51 milímetros, y en el pasto del parque Jamaica se encontraron dos vainillas del calibre 12 compatible con la escopeta que portaban marca Winchester; y la mancha de sangre por goteo e impregnación fijada como el probable lugar donde Uribe fue lesionado.

Veloso explicó que en los días siguientes fueron entrevistando a las personas que tenían información sobre lo ocurrido: Nicolás González Iturriaga, que apareció en redes sociales dando una entrevista a una conocida radio de Curicó, llega a la unidad el día 25 de octubre y de manera voluntaria declara que el 21 participó de las marchas en la Alameda y se traslada con dos amigos por Chacabuco a la población Diego Portales y a la ruta 5 sur, estaba en la pista de norte a sur, en costado poniente, caminan por vereda hacia el norte, a la barricada, y observan camioneta blanca con militares al lado y graba con su celular, escucha disparos y ve que vehículos comienzan a avanzar hacia el norte, y eso hace una camioneta con militares en tanto que el bus ingresa a Curicó, él dice que manifestantes se reponen y vuelven a cortar el tránsito al norte, deja de grabar, los militares se habían ido y escucha nuevamente disparos, se tira al suelo y indica que una camioneta roja que estaba en la congestión efectúa disparos y luego cae una persona lesionada, que después supo era Uribe, y comienza una segunda grabación, gritan que

militares estaban involucrados, gente le dice que deje de grabar, él llama una ambulancia pero antes hacen detener un vehículo al que suben al lesionado y lo trasladan al hospital. Él graba un tercer video sobre eso y relata que después que se lo llevan hace rastreo por el lugar buscando casquillos y evidencias, pero no encuentra. Él entrega los tres videos grabados bajo acta y se le entregan a Matus para análisis. También entrevistó a manifestantes que estaban con Uribe, José González, que era amigo y vivía al igual que este en Los Niches, dijo que participaron en la marcha, van al cerro a tomar una caja de vino, al volver se percatan cerca de las 22 horas que había fuego, se suman junto a Jonatan López a las protestas en la barricada, por la ruta de sur a norte, pasa como media hora, escucha “ahí vienen los milicos”, levantan las manos diciendo que se unan a la causa, que sus familias sufren lo mismo, y hacen disparos, dijo que hizo el servicio militar y eran fusiles Sig, y reconoce disparos como de fogueo. Luego los militares se van y ve ingresar al bus a Curicó, y posterior a eso, 5 minutos aproximadamente, viene una segunda tanda de disparos desde el sector oriente, de la plaza denominada Jamaica, él arranca, y observa a dos o tres militares disparando, como pelotón, en eso salta la barrera y se percata que alguien venía atrás de él, ve a la persona que miraba y se desvanece y cae en la barrera con los pies arriba, lo toma y arrastra y se da cuenta que era Uribe. Daniela Espinoza, Luis Navarro e Ismael Riquero, por su parte, coinciden en que los de la patrulla militar son los que tienen directa relación con la muerte de Uribe.

Indicó también Veloso que, al analizar los tres videos aportados, Matus reconoce a un costado del bus de los militares una camioneta con la leyenda “Lizcal”, haciéndose diligencias para ubicar esa empresa y contactar al chofer, era una empresa de pinturas, es el primer vehículo que queda en la congestión frente a la barricada, en la pista de sur a norte. Así logran ubicar a esa persona, Cristian Miranda Miranda, y coordinan una entrevista en Puente Alto para el sábado 26, coincidiendo con lo que al respecto expuso Matus, en cuanto a lo que declaró y la evidencia recogida, que correspondía a proyectiles 9 milímetros.

Añadió que, por su trayectoria, esos proyectiles venían desde el oriente. Como no

había cámaras en el sitio del suceso fueron a un establecimiento cercano, de la Asociación de Dueños de Camiones que está a un lado del Servicio Médico Legal, en la salida a Curicó, y allí tenían dos cámaras que abarcaban su frontis, las rutas de entrada y salida a Curicó y el parte del parque, en ella divisaron una camioneta doble cabina de color rojo que circula y sube tomando la curva para salir al norte, y a los pocos segundos ingresa el bus de los militares a Curicó, saliendo de la carretera, también se observan personas que estaban mirando hacia la ruta, que eran choferes de los camiones y miraban las manifestaciones. Se les viene a la mente el caso investigado por la oficial Sánchez, como eran de la misma unidad tenían conocimiento de parte de sus diligencias y tenían identificada una camioneta roja Toyota Hilux y un imputado, Francisco Fuenzalida Calvo, que había declarado y entregado una pistola CZ calibre 9 milímetros que estaba en peritaje por parte del perito Daniel Cáceres del Lacrim Talca. Al ver el modus operandi con que él disparó a los manifestantes frente al Unimarc se le solicita al perito Cáceres hacer comparativo de la munición encontrada por Miranda en su vehículo con la pistola incautada a Fuenzalida. Mientras, se abocaron a levantar cámaras de vigilancia de la tienda Protege de la alameda, de la Copec de San Martín con la Alameda, del gimnasio Pura Sangre cerca de la entrada a Zapallar, siendo Matus el encargado de su análisis.

Por su parte, como las cámaras de la ASODUCAM enfocaban a cuatro personas se ubicó el 31 de octubre a Cristian Abarca Vargas, que dice que estaba en ese lugar por el temor que manifestantes se metieran donde estaban los camiones y había neumáticos, identificando a sus acompañantes, y dijo que vio un militar que andaba por el lugar y dispara, se retira, y compañeros le relatan que camioneta roja que salió para ir al norte efectuó disparos. Estos compañeros eran Héctor Mujica y José Recabal. Mujica dice que observa cuando un militar estaba entre los árboles de la plaza Jamaica y efectúa unos disparos y ve esta camioneta roja que viene desde la Alameda, les llama la atención porque no circulaban vehículos, cerca de cinco metros antes de llegar arriba se detiene, luego acelera y al asomarse arriba hace una secuencia de 5 o 6 disparos. Recabal es el nochero y dice que pidió ayuda en la custodia y llegan los otros y ve al militar con arma larga y efectúa dos dispararon al aire y luego pasan como 5 minutos y llega esta camioneta

roja, relatando lo mismo, que hace 5 o 6 disparos y camioneta acelera hacia el norte y se va. También dijo que estaba 100 por ciento seguro que esa camioneta hace los disparos porque enseguida los manifestantes empiezan a gritar que había un herido.

Luego contactaron al perito balístico Cáceres que les da cuenta el resultado de la pericia a los proyectiles obtenidos en la camioneta, indicando que fueron disparados por la pistola CZ entregada por Fuenzalida Calvo en el procedimiento sobre lo ocurrido en la Alameda. Por lo anterior se unieron ambas investigaciones, por las lesiones y la muerte.

En ese punto, ya se habían recabado imágenes de diversas cámaras, las que situaban la camioneta roja conducida por Fuenzalida Calvo en los lugares donde se efectuaron los disparos en la Alameda, recibándose asimismo la información sobre el control de identidad que se le realizó que verificó que andaba solo.

Por eso se toma la decisión, para descartar la participación del señor Reyes, de solicitar al Lacrim Central a través de Eduardo Soto Valdés un pronunciamiento de la lesionología que produce la munición disparada por FC y la del fusil disparada por el cabo Reyes, y lo mismo se le solicito al Departamento de medicina criminalística a cargo del médico German Tapia. Al recibir la respuesta, ambos peritos coinciden que una munición disparada por el fusil Sig calibre 7.62 por 51 al tener mayor energía produce fenómenos internos más destructivos, una pulpificación de órganos y destrucción de huesos, lo que no era compatible con las lesiones internas de Uribe, ya que en la autopsia figuraba que tenía lesiones del tipo lacerante y transfixiante, siendo el paso de la munición calibre 9 milímetros compatible con esas lesiones.

Con todos estos antecedentes emitieron informe policial con fecha 5 de diciembre en que su conclusión descarta la participación de Reyes, y se establece la responsabilidad de Fuenzalida Calvo en el homicidio, basado en medios de prueba irrefutables, los técnicos, que son cámaras, pues Matus lo sitúa en tiempo y espacio en el acceso a la carretera; el peritaje balístico de Cáceres respecto a que arma entregada por él era la misma que efectuó los disparos al momento de la muerte de Uribe; declaraciones que

complementan esas evidencias certeras: Mujica y Recabal coinciden en que camioneta roja efectuó los disparos y acto seguido muere Uribe; también el pronunciamiento de los dos peritos señalando que la lesionología de Uribe era más compatible con la disparada por éste.

Después recibieron videos obtenidos por el oficial Valeria de las redes, que corresponden a los contenidos en la **evidencia 27**, según así los reconoció al exhibírseles. También reconoció los videos proporcionados por Miguel Neira al exhibirse la **evidencia 37**.

Veloso añadió que después se hicieron otras diligencias. En octubre se tomó contacto con Rodrigo Castro, quien subió uno de esos videos, que dijo lo recibió de su amigo Alejandro Muñoz por WhatsApp, que él no estuvo en el sitio del suceso. Por eso el 7 de octubre se le toma declaración a Muñoz y dice que vivía en la población Iansa, al costado de la carretera, elevó un dron que tenía y toma fotografías aéreas a las 22:13 del día del hecho, y después con su celular, que muestran donde estaba ubicado, pasan 10 minutos, escucha disparos, vuelve a salir de su casa a un sitio eriazo entre su domicilio y carretera, ve militares, los pierde de vista y pasados unos minutos observa que desde salida de la Alameda hacia el norte aparece una camioneta roja, señala algunos modelos, pero se inclina por la Toyota Hilux, y el chofer efectúa disparos en el lugar contra los manifestantes, luego se va al norte y personas gritan que había alguien herido. Indicó que estaba seguro que los disparos venían desde esa camioneta.

Se le exhibieron e incorporaron los videos contenidos en la evidencia 47, reconociendo que fueron las obtenidas por Alejandro Muñoz.

Veloso indicó que de estos videos obtuvieron nueva información, detectando que aparecía un camión que se ve y pasó, de carga, color rojo, de la marca Mack, y obteniendo información desde concesionaria Ruta del Maipo logran ubicar este camión, y se sabe que eran dos camiones similares que iban en caravana de la empresa Segenox de Talcahuano. Tomó contacto telefónico con Alex Muñoz Garcés, que relata que el día de los hechos

estaba en la congestión en el acceso sur a Curicó, observa a los militares, en un momento la pista se habilita y avanza y antes de llegar a la barricada manifestantes se le cruzan, él toca su bocina y continua, a raíz de lo cual le lanzaron piedras, una le trizó el parabrisas en el costado izquierdo, pero igual siguió. Resultó lesionado con corte en su brazo por esquivarlas del vidrio. Se estacionó pasado el peaje con su compañero Juan Carlos Esparza que venía en el otro camión, conversan y Juan Carlos le comenta que cuando estaban estacionados en la barricada por el costado aparece una camioneta roja doble cabina y desde ella efectuaron disparos. Alex le da teléfono de Esparza y coordinan una entrevista telefónica, ya que por ser camionero pasaba viajando, y le relata algo similar, y que en un momento, cuando ya no ve militares, se abre la pista, avanza y cuando manifestantes intentan cruzarse su compañero pasa y él se detiene, observando que en el costado oriente estaba la camioneta de Miranda y al poniente el camión de don Alex, y en un momento por costado aparece la camioneta roja y su chofer dispara por costado del piloto, estaba con vidrio abajo, ve los disparos a los manifestantes y después la camioneta sigue al norte. Luego se junta con su compañero y hace inspección a su vehículo, y tenía un orificio por proyectil balístico. Le entregó fotografías del orificio, que por tiempo y espacio corresponde a un disparo efectuado desde la camioneta de Fuenzalida Calvo. Ambos terminaron ratificando personalmente sus declaraciones y aprovechó de tomarle fotografía al camión de Esparza, las que reconoció en la **evidencia N°60** exhibida, consistente 11 fotos del camión y del daño producido en el vidrio y por el impacto balístico, agregando Esparza que no recuperó el proyectil.

Bernardo Veloso culminó su extensa declaración exponiendo que su apreciación criminalística de la investigación fue que con todos los antecedentes recopilados y dando más importancia a los medios probatorios técnico-científicos señalados, puede concluir que Fuenzalida Calvo dio muerte a Uribe Antipani.

Veloso condensó y resumió bien los múltiples antecedentes recopilados para el esclarecimiento de este caso, de un modo que se apreció veraz y objetivo, pues una y otra vez fue ratificado con el resto de la prueba aportada. A lo que ya se ha mencionado sobre

los testimonios, por ejemplo, de los oficiales de la PDI Sánchez, Valeria y Matus, el perito Cáceres y el testigo Miranda, entre otros, cabe agregar que en el juicio también prestaron declaración los principales testigos que él indicó haber entrevistado, y se exhibieron las imágenes, videos y evidencias materiales que señaló. Fue valiosa en ese sentido su apreciación final, aunque mucho más el haber recabado junto a sus colegas la gran cantidad de fuentes informativas descritas, en una secuencia cronológica que permitió comprender cómo desafortunadamente los antecedentes preliminares que manejaba la policía aquellas primeras horas luego de acaecida la muerte de Uribe Antipani eran muy parciales e incompletos, en comparación con los que se obtuvieron después, lo que llevó a lo que ahora podemos concluir fue una injusta formalización del cabo Reyes Araneda, que nada tuvo que ver con esa muerte, de la que el único responsable es el acusado Fuenzalida Calvo.

Sobre los testimonios recogidos, además de lo ya citados, contamos en el juicio con **Alejandro Andrés Muñoz Moraga**, quien explicó que el 21 de octubre de 2019 vivía en la población Iansa, al costado de la carretera, y fuera había una pandereta que deslinda a un terreno vacío, se veía cuando había accidentes, por ejemplo. Ese día habían empezado las manifestaciones y como tiene un dron, lo sacó como a las 10 y cuarto y lo elevó para ver la barricada y tomó fotografías, había manifestantes bloqueando el tránsito. Después se aburrió y se le acabó la batería y volvió a su casa. Pasaron 10 minutos y en la casa sintió disparos y se asomó por la panderetea a mirar, vio a militares con fusiles, como retrocediendo, al parecer dispararon y los manifestantes les tiraban piedras, escapaban de la barricada, como hacia el sur, por la pista oriente se replegaban, los insultaban también. Se quedó mirando con otras personas, no sabían quién disparó. Intentó grabar lo que estaba pasando. Todos estaban nerviosos ya que no habían escuchado antes disparos. Y a los minutos ve que desde la Alameda sale hacia el norte por el caracol una camioneta roja, una mano sale de ella, del conductor, y hace disparos -no sabe cuántos- y la camioneta se va rápido hacia el norte, escuchando enseguida gritos de la gente de que le habían disparado a alguien. Los militares se habían alejado hacia el sur, venían como por la carretera, pero este vehículo rojo lo ve que sale de la Alameda, como subiendo, dispara y

sale rápido. No alcanzó a grabar eso, sí segundos después. Les llamó la atención que fue una camioneta roja y que había matado a alguien. Aclaró que las primeras imágenes que grabó fueron a las 22:15 y 15 minutos después fueron los disparos, uno o dos, vio unos militares y al parecer fueron ellos, porque la gente les tiraba piedras y estos retrocedían entre medio de los autos. Luego viene la camioneta saliendo de la Alameda y pasa por el caracol, la ve como que emerge, como al lado de un camión rojo, dispara hacia la derecha y sale al norte. En ese momento los militares como que se habían retirado, ya no estaban. El video que tomó lo compartió a un amigo y este en una red social.

Se le exhibió la **evidencia N°33, reconociendo 5 fotografías y un video que él capturó**. En las fotos 1 y 2 se aprecia la vista que tenía desde la pandereta cuando ocurrió el disparo que mató al muchacho, calcula que como a las 22:30 horas, dice que estaba súper nervioso por lo que soltaba el botón y por eso no grababa sino tomaba solo fotos; en las siguientes indicó que había vistas con el dron, se ve el caracol que sale desde la Alameda hacia el norte, las llamas de la barricada y el taco que estaban en la pista de sur a norte, eso fue 15 minutos antes de la pasada de la camioneta. En el video se ve y escucha un camión pasando y tocando bocina, segundos después de los disparos, se escucha “mataron a un gueon”... “camioneta roja...”. Añadió que en un primer momento pensamos que los que iban en la camioneta roja eran militares, porque antes habían visto. Un vecino dice que había que avisar que fue una camioneta roja. Después de los segundos disparos escuchan los gritos de que habían herido a alguien, no fue así después de los primeros, nadie gritó algo de eso. Vieron que fue la camioneta roja.

Alejandro Muñoz, de esta manera, entregó un testimonio prolífico en detalles y apoyado con las imágenes que tan afortunadamente capturó esa noche, valorándose especialmente las de su dron, que desde las alturas ayudaron a recrear lo que sucedió. Todo ello hizo que fuera un relato creíble, conclusión reforzada al compararlo con las otras pruebas. Muy relevante es su confirmación de los horarios y secuencias y su sindicación de que ve cómo emerge desde la Alameda al sector del acceso sur a Curicó que él observaba aquella camioneta roja, en momentos en que ya se habían ido los militares, y

desde su interior el chofer efectúa disparos hacia las personas que allí se encontraban, para luego seguir hacia el norte, escuchando acto seguido los gritos que indicaban que había alguien herido, por lo que asocia -como nosotros que somos observadores externos de la situación, basados simplemente en el sentido común- a esos disparos.

También declaró sobre esta parte de la dinámica, como lo hizo ante Veloso, **Miguel Ángel Neira Neira**, quien señaló que ese día por redes sociales se enteró que había manifestaciones en la carretera y que estaba cortada, así es que poco antes de las 21:30 horas salió de su casa y llegó a la carretera, viendo que efectivamente estaban cortadas las dos calzadas, oriente y poniente, comenzaron a hacer fuego en la oriente, de sur a norte, y como 20 minutos después en la poniente, de norte a sur. En ese momento grabó unos videos. Durante rato no pasó mucho, los manifestantes dejaban pasar algunos vehículos, como por ejemplo una ambulancia, daban gritos y golpeaban la barrera de contención. Estuvo gran parte del tiempo en la calzada poniente. Como a las 10:20 cruzó a la oriente y miró por la fila de vehículos hacia el sur y por el costado de la berma venían caminando cuatro militares con fusiles que avanzaban hacia ellos, a la barricada, él y otros gritaron que venían los militares y corrieron hasta la salida sur por esa calzada y se quedó agachado en lugar seguro, algunos manifestantes arrancaron y no volvieron, otros sí, ahí se escucharon disparos de los militares, no sabe cuántos, porque había gritos y piedras que sonaban que les tiraron los manifestantes. Se quedó unos cuatro minutos hasta que volvió a la calzada poniente, los militares se habían ido. Avanzó por el costado de esa calzada, por la berma, y mientras hacía ese trayecto mira al frente, habían empezado a cruzar algunos vehículos por la calzada oriente, lentamente, algunos pasaban por el costado de la barricada, otros por encima. Cuando caminaba como 20 metros hacia el sur vio al frente y miró una camioneta roja que venía entrando a la carretera por la salida sur para seguir hacia el norte, le quitó la vista uno o dos segundos y escuchó disparos, volvió a mirar y vio que el conductor era el que realizaba los disparos, calcula como 8, no está seguro, fueron muy pocos segundos, le vio el brazo al conductor y se veía la silueta del conductor, estaba bastante oscuro en ese momento pero se podía ver, y vio que el conductor era de contextura gruesa, un hombre y en su mano tenía un arma corta, la que tomaba con una

sola mano, no sabe si era pistola o revólver. Cuando efectuó los disparos iba más o menos a la altura de la barricada en la calzada oriente. Apenas terminó de realizar los disparos hacia el bandejón central y la calzada poniente aceleró rápidamente, mostrando luego que fue hacia el norte. Delante de él iban un par de vehículos avanzando, y por el costado, pero no vio manifestantes al lado del vehículo ni en el camino, sí en el bandejón central y la calzada poniente, por eso no se justificaba que el conductor rehiciera los disparos en ese momento, es decir, pudo haber seguido sin disparar. Ahí empezó a grabar y escuchó que había heridos, se acercó y había una persona grave en el piso, tenía una herida de bala a la altura del pecho, en el costado, y le brotaba mucha sangre. Personas trataron de ayudarlo, le pusieron la mano y polera en la herida, fue un momento muy confuso y dramático, luego lo subieron a un vehículo para llevarlo al hospital saliendo contra el tránsito. Después se fue a su vehículo en dirección al hospital a ver como estaba y se enteró que había fallecido. Envío alguno de los videos a un canal de televisión y una radio y un audio explicando lo que había pasado, y enfatizando que había sido una camioneta roja y no como decían los manifestantes que habían sido los militares. Preciso que al momento de los disparos estaba como 25 metros de la camioneta roja y eran aproximadamente las 22:30. La camioneta era roja, robusta, de cilindrada grande. Aclaró que pudo distinguir lo que señaló pese a ser de noche porque no estaba tan oscuro, los videos que entregó se ven más oscuros, pero es porque la resolución no era buena, pero a simple vista se distinguía claramente que era roja. Al interior de la camioneta le pareció ver más personas, pero no está seguro, pudieron haber sido los asientos. La persona de la camioneta disparó hacia el costado, como hacia el centro de Curicó, hacia la pista poniente, no sabe con qué mano, y lo hizo al grupo de personas, claramente con la intención de matar o herir, no tiene duda de eso. No fueron disparos al suelo ni al aire, por la altura del brazo y el arma disparó hacia las personas.

Se le exhibió entonces la **evidencia N°37**, reconociendo las grabaciones que él hizo, apreciando en la 1, que grabó como a las 9 y media, que aún no se encendían barricadas, había gente gritando delante de un bus y otros vehículos detenidos; en la 2 se ve el momento en que se le abre el paso a ambulancia y tocan la bocina los vehículos, él estaba

en la calzada poniente; en la 3, unos minutos más tarde, se aprecia todo relativamente calmado, se ve pista oriente donde están detenidos los vehículos y se ve el fuego encendido; en la 4, aun en la misma calzada grabando hacia la oriente, unos manifestantes peleaban parece que porque algunos dejaban pasar vehículos, son más o menos las 22:15; en la 5 se muestra el lugar segundos después que los militares dispararan, fue cuando corrió hacia la Alameda y se quedó a un costado de la carretera, en la salida sur, sector poniente de la carretera, los militares ya se habían ido y los manifestantes les habían tirado piedras. Eso revisando las grabaciones sabe que fue exactamente a las 22:25. En la 6 él volvió a la carretera, habían pasado cinco minutos desde los disparos de los militares y uno antes que disparara la persona de la camioneta. Estaba en la calzada poniente. Eso fue a las 22:30 o 31. En la 7 se ven y escuchan los vehículos pasar y se oye gritos de llamar a una ambulancia y de groserías contra los militares, se ve la imagen de una persona en el suelo, es segundos después que el conductor de la camioneta disparara, aun en calzada poniente a un costado de la berma, empezó a grabar yendo al bandejón central, a un costado estaba esta persona herida y manifestantes tratando de ayudarlo. En la 8 grabó y cortó porque estaba sin flash. En la 9 se ve el momento en que la víctima estaba herida, lo toman y suben a un auto; ese video fue segundos después, dos minutos después del disparo, o sea, aproximadamente 22:32 o 33, lo que reviso con el video donde sale la hora exacta. La persona herida estaba a un costado de la calzada de norte a sur, la poniente.

A su turno, respondiendo inquietudes de la Defensa, señaló que esto que ha relatado se lo dijo también a la policía y el fiscal, entregándole estos videos, el 20 de marzo de 2020. Antes no había prestado declaración, habían transcurrido casi 5 meses. Es decir, desde el primer momento supo que los militares se habían retirado cuando este joven fue herido. Supo que un militar fue detenido por eso, habló con la familia de la víctima para avisarles que él sabía, pero estaban tan cegados que había sido el militar que no lo escucharon. Es decir, la propia familia del fallecido no le creyó, pensaban que había sido un militar. Interesante fue el ejercicio propuesto por el defensor respecto a apreciar en las imágenes las características de otro conductor de un camión en el sitio donde vio mas o menos la camioneta roja, indicando Neira que a este no podía apreciarlo, pero quizá sí

podría haberlo hecho si estuviera más cerca del fuego de la barricada o de la luz del lugar, como sí estaba la camioneta que vio.

El testimonio de Miguel Neira también se apreció veraz, ya que fueron muchos los detalles y apreciaciones que manifestó que encontraron correlato en las imágenes exhibidas y en los otros testimonios, siendo destacable que, al igual que Muñoz, el anterior, refiere haber visto el instante en que el chofer de la camioneta roja disparó un arma de fuego corta sobre los manifestantes, luego de provenir de la Alameda y apuntando hacia el poniente, hacia el bandejón central, lo que es coincidente no solo con los otros relatos, sino con los impactos recibidos por la camioneta conducida por Cristian Miranda. Asimismo, relevante es la secuencia similar que relata: los militares se van, transcurren unos pocos minutos, aparece la camioneta roja, su chofer dispara y se va a alta velocidad, y casi enseguida escucha los gritos de las personas diciendo que había un herido, el que él mismo ve en sus últimos momentos con vida y que pudimos revivir como espectadores en el juicio gracias a su filmación. Estos detalles y su sindicación fue muy importante, y también lo fue la descripción que hizo de la camioneta y su conductor, dando razón adecuada de sus dichos cuando se le confrontó sobre cómo pudo poder apreciarlo, siendo coherente con lo observado en los videos, en que se notaron diversas fuentes de luz, como postes de alumbrado público y los focos de los vehículos, que hacen razonable que haya podido distinguir los detalles que indicó, sobre todo estando a una distancia tan corta como los 25 metros que señaló. Incluso explicó de modo verosímil por qué es que su testimonio no surgió en la investigación más tempranamente, lo que debemos complementar indicando que parece bastante razonable que sean los órganos persecutores los que recaben la evidencia de un suceso y no los particulares. En suma, razón alguna surgió para desmentir sus dichos o desacreditarlo como testigo.

Aparte de estos testigos presenciales, como informó Veloso, gracias a las indagaciones policiales fue posible ubicar a dos conductores de camiones similares que transitaban por el lugar en esos momentos, y al respecto declaró **Alex Eduardo Muñoz Garcés**, indicando que es transportista y el 21 de octubre de 2019 viajaba con su colega

Juan Esparza de Concepción a Santiago, cada uno en un camión articulado, con batea, de color rojo y marca Mack de la empresa Segenox. Como en Curicó había manifestaciones por el estallido social, quedaron en la fila y avanzaron de a poco. Esto sucedió alrededor de las 22 horas. Llegando a donde estaban las personas deteniendo el tránsito vio una camioneta con personal del ejército y a otros funcionarios con traje distintivo y armas largas caminando entre los vehículos. De repente estos militares se retiran y alcanza a pasar la gente que ya se estaba juntando, tocándoles la bocina, y siente un golpe en el lado izquierdo y el vidrio se rompe, y él siguió igual. Luego se detuvo en el descanso, pasado el peaje de Quinta, a donde llegó su colega que no había alcanzado a pasar con él, quedando en la barricada formada, y le cuenta que había pasado una camioneta color rojo disparando. Después con rumbo a Santiago avisa a su empresa que se quebró el vidrio y pasó a buscarlo, explicando lo que pasó, que asume fue por una piedra. Siguió trabajando normal.

Muñoz Garcés graficó sus dichos al exhibírsele la **evidencia fotográfica N°60**, compuesta de 11 fotos, donde reconoció el camión que esa jornada conducía su colega Esparza, patente FSSB70, apreciándose sus características similares a las de su propio camión (aunque no el color pues las fotos eran blanco y negro), describiendo un pequeño vidrio roto de la puerta del lado derecho, del copiloto, que este testigo apreció, y al otro día Esparza le comentó que se le había roto ese vidrio.

Este testigo entregó información que, sumado a las imágenes exhibidas, pudo corroborar lo expuesto por el agente Veloso respecto de la declaración del chofer Juan Esparza, al que no pudimos escuchar en el juicio por estar con licencia médica, pero cuya versión lo sitúa pasando con su camión al momento de los hechos, donde vio al conductor de una camioneta roja disparando, y presumiblemente el vidrio roto en el camión que conducía fue provocado por uno de esos disparos, siendo compatible aquello con el orificio apreciado en las fotografías, muy distinto al de una piedra, por ejemplo, dado su tamaño pequeño y que traspasó el vidrio dejando este trizado pero casi entero.

En síntesis, respecto del episodio en la carretera, conforme explicó Veloso y oímos

de los otras versiones, en los momentos previos y concomitantes con que Uribe Antipani resultara herido mortalmente, Cristian Miranda, Alejandro Muñoz y Miguel Neira dicen que ven una camioneta roja ingresar a la carretera 5 sur hacia el norte, desde el sector de la Alameda de Curicó, alcanzando precisamente el lugar donde estaban la barricada y las personas que bloqueaban el paso de los vehículos que transitaban en esa dirección, cuyo conductor efectúa disparos hacia esa pista, hacia el poniente, para luego salir rápidamente al norte, escuchando enseguida gritos que daban cuenta que había alguien herido, lo que Neira observa directamente y grabó en el video incorporado. Se trata, como bien acentuaron los acusadores, de tres testigos que no tenían lazos entre sí, que estaban en distintas posiciones y por diferentes motivos se encontraban en el lugar, Miranda en su furgón, Muñoz en las cercanías de su casa y Neira como curioso que registraba en video lo que pasaba, sin que se visualizara algún motivo para inventar, mentir o ponerse de acuerdo en esta versión, apreciándose que, por sus posiciones y lo que cada uno explicó, efectivamente pudieron presenciar y captar por sus sentidos lo ocurrido. Sobre todo considerando las múltiples evidencias que concuerdan con lo que expusieron.

Por si fuera poco, conforme al relato de Veloso, según vimos, otros dos testigos que no declararon en el juicio también coincidieron con estos, Héctor Mujica y José Recabal, que se encontraban a la salida de la sede de la ASODUCAM, como se vio en las imágenes aportadas de las cámaras allí instaladas, coinciden en señalar que luego de ver o notar que los militares se retiran pasan unos pocos minutos y aparece una camioneta roja que viene desde la Alameda y al asomarse arriba, en la pista de la carretera que va al norte, hace una secuencia de 5 o 6 disparos con un arma de fuego, y que enseguida los manifestantes empiezan a gritar que había un herido.

A su vez, todos estos testigos, tanto los presenciales que declararon en el juicio como aquellos cuyas versiones introdujo de oídas el policía Veloso, coinciden en que al momento de aparecer y disparar la camioneta roja, y por tanto resultar herido Uribe Antipani, los militares que habían estado en el sector ya se habían retirado, no teniendo nada que ver con esos disparos.

¿Pudieron ser militares u otros agentes públicos los que fueran en esa camioneta roja y efectuaran los disparos? La convicción de estos jueces, en línea con todas las probanzas vinculadas entre sí, es que no, que esa posibilidad es solo una especulación sin base en la prueba.

Más bien la única duda o distorsión de información que surgió en esta causa, al principio, fue la posibilidad de que uno de los funcionarios del ejército que esa noche estuvieron en el sector de la carretera y que efectivamente hizo disparos, hubiera causado la herida que quitó la vida a la víctima, tesis que tuvo cierto sustento en los albores de la investigación, al punto que se formalizó al cabo del ejército Juan Carlos Jesús Reyes Araneda como autor del homicidio y estuvo en prisión preventiva, lo que sin embargo fue desvirtuado completamente, como bien explicó Bernardo Veloso.

Al respecto, sus explicaciones para los dos informes policiales en que participó, y el cambio entre la apreciación criminalística entre el que sirvió para la formalización de Reyes y el que lo exculpó y justificó redirigir este cargo contra Fuenzalida Calvo, encontraron correlato en diversos testimonios.

Por de pronto, el único de los militares aludidos que declaró fue **Cristian Felipe Ruiz Cid**, quien indicó ser cabo segundo del ejército y ese día fueron a una comisión de la Academia de Guerra en Santiago a Talca y Chillán, por el tema del estallido social, y cuando venían de vuelta pasaron por una emboscada en Curicó, donde tuvieron el problema. Se bajaron del vehículo, fueron a hablar con la gente y se les tiró encima. Él iba en una camioneta Nissan Navara blanca con patente del ejército de escolta de un bus institucional color plomo en el que fueron a dejar oficiales y volvía vacío. En la camioneta venía de conductor el cabo Sandoval, el capitán Gómez y el cabo Pincheira; en el bus el cabo Jara, el cabo Loncomil, el cabo Reyes y el cabo Valenzuela. Eran todos clase uno del ejército. Andaban con tenuta de combate pixelada verde. Portaban armamento, él un fusil de guerra SIG 510 calibre 7.62; el conductor del bus cabo Jara llevaba una pistola, Loncomil tenía una escopeta ante disturbios y el resto fusiles; y en la camioneta iban el conductor y el capitán con pistola y los otros dos con fusiles. Llevaban un cargador con 20 tiros, el

primero de fogueo y el resto munición de guerra. La escopeta antidisturbios usa munición de goma. Esto pasó en Curicó, justo donde está la entrada, aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche, el 21 de octubre de 2019. Como había barricada se bajaron y hablaron con la gente para poder pasar, no andaban en procedimiento, solo iban en viaje. Y al hablarles la gente les empezó a tirar piedras, y usaron los tiros de fogueo y la escopeta ante disturbios, se les fueron encima, se subieron a los vehículos, pasó la camioneta y el bus entro a Curicó. El cabo segundo Reyes utilizó munición de guerra, se supo porque después hicieron recuento de tiros y faltaba un tiro de fusil, lo hicieron antes de llegar a un retén de carabineros, se estacionaron esperando que llegara el bus. Reyes dijo que había disparado un tiro de guerra, pero no hacia la gente sino a una especie de plaza donde se entra a Curicó, es parte del protocolo disparar a donde haya tierra, nunca al aire. Se informó la situación al alto mando del regimiento y les dijeron que fueran al cuartel de Carabineros más cercano. Ahí llegó una patrulla con un suboficial mayor que les dijo que en el lugar había un fallecido, esperaron a la PDI y se dirigieron a la brigada del crimen, donde prestaron declaración, entregaron el armamento y les hicieron pericias sobre si tenían rastros de pólvora. Cuando Reyes disparó estaba cerca, al lado un poco más atrás suyo, no vio a donde disparó. Cuando Reyes se dio cuenta que disparó ese tiro se retiraron del lugar. Ya habían disparado dos tiros antidisturbios y el capitán ordenó retirarse. De los 8 que iban, 4 en el bus y 4 en la camioneta, se bajaron 5, con su capitán. Ahí volvieron a los vehículos. Cuando se retiraron empezaron a escuchar más atrás de donde estaba la gente ráfagas de disparos, pensaron que los estaban atacando, por eso se fueron.

Ruiz Cid, de esta forma, ratifica el contexto en que su patrulla militar estuvo en el sitio del suceso, portando las armas referidas y disparándolas del modo indicado, quedando claro que Reyes Araneda había efectuado un único disparo de munición real, de guerra, del calibre 7.62 por 51 milímetros, tal como este testigo, el capitán a cargo y el propio Reyes lo expusieron esa misma noche ante la PDI.

El perito fotógrafo **Ricardo Andrés Henríquez Fuenzalida**, refirió su haber realizado un primer informe para esta causa, el 263-2019, sobre su intervención realizando

fijación fotográfica en las primeras del 22 de octubre de 2019, entre estas sobre la prueba de residuos de disparos a 8 militares y la fijación del armamento que mantenían, pistolas, una escopeta y fusiles de guerra, las que fueron remitidas a peritaje balístico, y sobre ello escuchamos al varias veces aludido **Daniel Cáceres Aravena**, quien entre los estudios de evidencias que evacuó en estos antecedentes expuso su informe pericial balístico N°11 de 7 de febrero de 2020, relativo al examen del sitio del suceso en el acceso sur de Curicó y a las siguientes especies: una escopeta calibre 12 marca Winchester serie 977588, 4 cartuchos calibre 12 antidisturbios, de goma; tres fusiles marca Sig, modelo 510, series 1964, 1966 y 1968 con sus cargadores e inscripción Ejército de Chile, remitidas con 18, 19 y 19 cartuchos calibre 7.62 por 51 milímetros, respectivamente; todas estas entregadas por personal militar en esa unidad; y vainillas encontradas en el sitio del suceso señalado, 4 del calibre 7.62 por 51 milímetros, 3 de ellas de fogeo y una convencional, y dos vainillas de escopeta calibre 12. Cáceres explicó que se realizaron pruebas de funcionamiento y las armas recibidas y los cartuchos resultaron ser aptos para disparar, escopeta y tres fusiles, y con las evidencias de prueba obtenidas se hizo comparación microscópica con las vainillas de fogeo y la letal y para escopeta encontradas en el sitio del suceso, estableciéndose que una de las vainilla de fogeo y la vainilla de munición real del calibre 7.62 por 51 milímetros fueron percutidas por la misma arma de fuego, el fusil Sig serie 1964; las otras vainillas de fogeo fueron percutida, una cada una, por los otros dos fusiles, y las dos vainillas de munición de escopeta calibre 12 fueron percutidas por la misma arma, en este caso la escopeta Winchester. Cáceres complementó su exposición reconociendo las evidencias peritadas al exhibírsele la **evidencia fotográfica N°29**, compuesta de 14 imágenes, donde reconoció las especies señaladas que peritó. Luego, también reconoció el fusil serie 1964 y los 18 cartuchos que venían en su cargador al exhibírsele las **evidencias materiales 50 y 51**.

También señaló, ante la consulta de la Defensa, que no supo el resultado de la prueba de residuos nitrados practicada a los militares, el que debía realizarse por un perito químico de la institución que no hay en la región.

De la exposición de este perito se corroboró lo señalado por los militares de la patrulla interrogados por la PDI, como expuso el oficial Veloso, por cuanto las armas y municiones que portaban y las vainillas encontradas en el sitio del suceso concordaban exactamente con lo que habían señalado sobre el uso que hicieron de ellas esa noche. Respecto de la prueba de residuos, cierto es que no se conoció su resultado, pero ello no pareció relevante, pues todo el resto de la información confluyó en el sentido de que el único que había efectuado un disparo con munición real era el a ese entonces imputado Reyes Araneda, siendo relevante para aquello los estudios balísticos indicados y el hallazgo de las vainillas en el sitio del suceso, que entregaron credibilidad a lo que los miembros del ejército declararon.

En ese contexto, ¿pudo alguno de ellos haber disparado munición de una de las 4 pistolas marca Beretta calibre 9 milímetros que portaban algunos miembros de la patrulla? ¿y que una de esas haya sido la que hirió a Uribe? En términos de posibilidad, sí, pero, en cuanto a probabilidades, se apreció que, en el contexto de la verdad procesal que es la que puede establecer el Tribunal, en base a la prueba aportada en el juicio y su evaluación racional, no, pues, amén que el detective Veloso dijo que al examinar este armamento todas las pistolas tenían la carga de munición completa, ninguno de los militares refirió su uso, resultando creíbles sus relatos, como se dijo, y no se encontró evidencia alguna en el sitio del suceso que lo respaldara. A ello debemos agregar todo lo referido respecto de que, en el momento de resultar herido Uribe, los militares ya no se encontraban en el lugar, aspecto esencial que lleva a desestimar esta alternativa, nacida solo de la especulación.

Por otro lado, y conforme lo expuesto por Veloso, escuchamos al perito de la sección balística del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI **Eduardo Soto Valdés**, sobre el informe pericial balístico N°1349-19, realizado el 27 de noviembre de 2019, en que la BH de Curicó le solicita pronunciamiento respecto a lesionología de la víctima Uribe Antipani y, dado que no se encontró el proyectil que lo hirió, se deseaba saber qué arma había sido, existiendo dos posibles respecto de las que había que establecer sus diferencias, una calibre 7.62 por 51 milímetros y otra 9 por 19 milímetros. Se le remitió al efecto un cd

con información de la autopsia del Servicio Médico Legal, imágenes del sitio del suceso, fotos de la heridas a la víctima y antecedentes de la carpeta investigativa. Primero analizó los antecedentes, revisando la autopsia en que aparecía un orificio de entrada por proyectil balístico de 0,9 por 0,9 centímetros en la región del tórax lateral derecho, que presentaba un anillo contuso erosivo, bordes irregulares e invertidos, lo que da cuenta de orificio de entrada; y un orificio de salida en tórax lateral izquierdo de 1,8 por 1,2 centímetros, de bordes irregulares y evertidos. La Herida fue transfixiante de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba en el plano. En segundo lugar, estudió bibliografía sobre las heridas causadas por arma de fuego, autor Di Maggio, que señala que las heridas por arma de fuego en región del tronco o tórax, por fusil, son extremadamente devastadoras, con destrucción masiva y pulpificación o estallido de los órganos. El orificio de salida tiende a ser grande, de aproximadamente 25 milímetros, por la energía que libera el fusil. Se revisaron prendas de vestir de la víctima, que no presentaban elementos que dieran cuenta de una corta distancia. Reviso imágenes del cadáver comprobando que concordaban el orificio de entrada con el de salida que daba el Servicio Médico Legal, dando cuenta del trayecto de un mismo proyectil balístico de derecha a izquierda. 5) Respecto del orificio de entrada no es posible asociarlo con un calibre específico, de acuerdo al diámetro, porque la piel es tejido blando y elástico que tiende a recuperar su forma. Sin embargo, ese tipo de orificios se ven empíricamente en heridas por armas de fuego del tipo pistola o subametralladora. Respecto al calibre 7.62 por 51 milímetros, la velocidad inicial del arma de fuego larga tipo fusil es de alrededor de 800 metros por segundo, en boca, en cambio, la de la pistola de calibre 9 por 19 mm, es de unos 340 metros por segundo, es decir, hay una diferencia sustancial de velocidad y energía liberada por ambas armas. Por otro lado, respecto del alcance, el primero en literatura habla de 600 a 700 metros. Respecto de los daños internos que tenía el cuerpo, no se encontró pulpificación de órganos. Su conclusión es que las heridas presentes en el cadáver son más contestes al calibre 9 por 19 milímetros que a las generadas por el calibre 7.62 por 51 milímetros.

Este perito ilustró si pericia al exhibírsele la **evidencia fotográfica N°23**, compuesta de 9 fotografías de las prendas de vestir de la víctima al momento del hecho, los orificios

de entrada y salida y la zona de la parrilla costal y las lesiones que presentaba, donde los órganos no presentan una destrucción masiva, como señaló.

Terminó señalando ante consultas de la Defensa que las heridas en la víctima por su experiencia, de acuerdo a su morfología, corresponden a una pistola o subametralladora del calibre 9 por 19 milímetros, pero también podían ser de una 9 por 17, o 9 por 23, y otras, también de un revólver del mismo diámetro, como el .38 corto, .38 largo o .38 especial.

A su turno, **Germán Tapia Coppa**, perito médico cirujano criminalista de la PDI, especialista en medicina legal, declaró acerca del informe que realizó por encargo de la Fiscalía de Curicó, el 26 de noviembre de 2019, en referencia a lesionología de la víctima especialmente en relación al calibre que podría haberlas provocado, comparando un fusil SIG calibre 6.72 con relación a una pistola CZ calibre 9 milímetros. Tuvo a la vista informe de autopsia, fotografías de ella y el informe científico técnico de la BH de Curicó, cuyos antecedentes refirió, destacando que una polera negra manga corta que vestía la víctima tenía una desgarradura por cara anterior superior derecha y una segunda en la cara anterior superior izquierda. Al examen del fallecido se constató contusión en región frontal media y una lesión balística caratulada como herida transfixiante con ingreso en tercio medio del hemitórax derecho en cara antero lateral con salida en hemitórax izquierdo por cara antero lateral. El médico no constató otras lesiones y la causa de muerte era anemia aguda por herida por arma de fuego de carácter homicida. Con esos antecedentes estimó que la causa de muerte de la víctima fue una herida transfixiante por proyectil con salida del mismo, el impacto fue de larga distancia en virtud de la ausencia de elementos alrededor de la herida; el carácter de la lesión era mortal dada la ubicación, la distancia fue homicida y las heridas siguen trayecto lineal con un canal hemorrágico anfractuoso, sin lesión periférica de las mismas. En virtud de ello se pudo establecer en su informe que no existe compatibilidad con que la lesión descrita haya sido producida por un proyectil percutido desde un fusil, debido a la energía que estos tienen, que generan gran destrucción, debido a la gran energía cinética que poseen. En el sitio del suceso la PDI

logró levantar evidencia balística de distintos calibres, por lo que no se podría descartar que las heridas fueran causadas por otra arma de un calibre distinto del fusil.

Añadió que participó en la reconstitución de escena ya que en su informe la sugirió para aclarar posibles trayectorias entre víctima y victimario, y al participar en ella pudo validar las observaciones que había emitido en su informe.

Las pericias efectuadas por Soto y Tapia aparecieron bien sustentadas racionalmente en la ciencia que cada uno practica, sin que nada los desvirtuara, permitiendo compartir su conclusión respecto a que las lesiones correspondientes a los orificios de entrada y salida de proyectil presentes en el cadáver de Uribe Antipani, así como las que produjeron la trayectoria interna del mismo, no eran compatibles en absoluto con un proyectil balístico del calibre 7.62 por 51 milímetros, que fue el disparado por Reyes, lo que coincidió con la apreciación de estos jueces desde las máximas de la experiencia, en cuanto al devastador efecto que una munición así podría producir en el cuerpo humano, al contrario de lo que mostraron las fotografías del cadáver exhibidas.

Los mismos indicaron que esas lesiones eran mucho más coherentes y por tanto atribuibles a una munición similar a la calibre 9 milímetros, que fue la percutada por la pistola usada por Fuenzalida Calvo, lo que también pareció de acuerdo a las máximas de la experiencia, al haber observado en el juicio, reiteradamente, las imágenes de municiones calibre 9 milímetros, de la trayectoria intracorporal de la bala que mató a Uribe Antipani y especialmente las dimensiones del orificio de entrada de ese proyectil bajo su axila derecha, que medía 0,9 por 0,9 milímetros, y a su vez la de los daños que dos proyectiles de ese calibre provocaron en el furgón conducido por Miranda, de dimensiones similares. El cuerpo humano es elástico, sí, y una prueba aislada puede ser coincidencia, también, pero la conjunción de muchas hace que esa posibilidad no sea plausible, pues en definitiva atenta contra el sentido común, como aquí ocurrió, siendo lo más lógico que esas heridas hayan sido efectivamente provocadas por una munición del calibre señalado.

Cabe indicar al culminar el análisis de la intervención de los militares en los hechos

y de cómo se descartó, que, como explicó también el oficial Veloso, en la primera etapa de la investigación la policía empadronó y obtuvo las versiones de varios testigos que se encontraban en el lugar donde estaba la víctima Uribe Antipani y que luego fueron descartados. Así fue con Daniel González, amigo de aquel y que dijo que andaban juntos, que al escuchar disparos escapan hacia la Alameda y al girar la vista observa a dos o tres militares disparando a los manifestantes desde la plaza Jamaica, dando a entender que estaban parados como pelotón de fusilamiento, y afirma por ello que estaba seguro que le dispararon a Uribe. Daniela Espinoza y Luis Navarro, a su vez, también dijeron que estaban en ese lugar, la primera dice que un militar se arrodilló, apuntó y lesionó a Uribe, y el segundo también dice que tuvieron responsabilidad los militares. Pero esos testimonios, solo aportados por Veloso como antecedentes de la investigación en su etapa preliminar, efectivamente parecieron totalmente desvirtuados en cuanto a la responsabilidad que achacan a los militares por las diversas pruebas reseñadas, principalmente las pericias que dan cuenta que las lesiones presentes en el cadáver eran incompatibles con la munición disparada por Reyes Araneda, el único de los militares que disparó munición real, siendo mucho más coherente con un proyectil calibre 9 milímetros, similar al usado por la pistola de Fuenzalida Calvo; aquella otra pericia que determinó que los proyectiles que impactaron el furgón conducido por Cristian Miranda, justo en el momento que éste sitúa el momento en que es herido Uribe, fueron disparados por la pistola CZ; y la suma de relatos que ven cómo el conductor de la camioneta roja es el que dispara en dirección a los manifestantes y acto seguido resulta herido Uribe, cuando ya los militares no estaban, como además vimos en las imágenes de las cámaras explicadas por el oficial Matus, donde se veía el bus del ejército ya habiendo abandonado el sector del acceso sur cuando se produjeron los disparos de la segunda oleada. Todo ello restó absolutamente mérito a aquellos testimonios, que además eran imprecisos y no se apoyaron en prueba científica alguna, por el contrario, varios de ellos parecieron en gran medida influenciados por un prejuicio irracional contra los militares. En definitiva, no surgió de aquello alguna duda razonable.

Finalmente, en el análisis de las pruebas de cargo citaremos la exposición del ya

aludido **Ricardo Andrés Henríquez Fuenzalida**, perito fotógrafo de la PDI, quien refirió su intervención realizando fijación fotográfica en diversas diligencias policiales para este caso, las primeras agrupadas el 22 de octubre de 2019 sobre la prueba de residuos de disparos a 8 militares y la fijación del armamento que mantenían, pistolas, una escopeta y fusiles de guerra, que ya referimos; luego en la morgue de Curicó, donde se fijó el cadáver del señor Uribe, que mantenía lesiones en región frontal de la cabeza y en la zona torácica; a continuación en la Ruta 5 sur a la altura del kilómetro 190, de esta ciudad, donde fue abatido el afectado y también un área cercana en donde se pudo observar a un costado de la carretera diversas vainillas percutidas, que según lo señalado por el especialista corresponderían a cartuchos de escopeta y vainillas de fusil. Esta diligencia consta en su informe 263-2019.

Sobre estas diligencias y fijaciones ya nos hemos referido, por lo que omitiremos repetirlo.

Agregó que hubo otra diligencia, a la que se refiere su informe 42-2020, en el cual se refleja una reconstitución de escena efectuada el día 11 de febrero de 2020, donde se plasmaron las declaraciones y la ubicación de algunas víctimas y testigos del hecho señalado.

A continuación, se le exhibieron, reconoció y explicó las 104 fotografías de la **evidencia N°15** y las 95 de la **evidencia N°35**. A las primeras ya nos referimos en gran medida al exponer los otros relatos que se expusieron sobre las primeras diligencias de esta investigación, y en las segundas, como dijo, se consignaron las diferentes versiones de los hechos:

De la 1 a la 6 se refleja la versión del testigo Nicolás Espinoza signado como A, en la intersección de Manso de Velasco con Merced, quien indica que presenciaba manifestaciones, escuchó disparos, vio a carabineros, estaba sentado, se para y al intentar huir recibe disparo en su pierna. De la 7 a la 14 se posiciona la camioneta roja del imputado Fuenzalida Calvo, señalado con letra B, está en la misma intersección y se lo ve

en varios ángulos y orientado en relación al lugar donde estaba Espinoza; la oficial Sánchez dijo que en ese lugar habrían efectuado unos disparos. De la 15 a la 19 se da cuenta de la versión de un comunicador social indicado con letra C, Dani Bravo, quien indicó que ve la camioneta de similares características, color rojo. Señaló que estaba despachando noticia cuando se aproxima la camioneta y el chofer se bajó alterado a increparlo, fue agresivo, y carabineros se percata y logran calmar al señor de la camioneta. Se observa el supermercado Unimarc que es donde ese encuentro se produce. De la 20 a la 23 se fija la versión del funcionario de carabineros sargento Osses, quien señala que estaban prestando colaboración a personal de la institución y se percata de persona que llega en camioneta color rojo indicada con letra B, actuando frente a la situación para calmar y que no pasara a mayores, la persona se baja a increpar a un grupo de personas, la D es la ubicación del carabinero. Bravo comenta que sacó fotografía a la patente lo cual permitió a los funcionarios de carabineros ubicar al dueño de la camioneta, de apellidos Fuenzalida Calvo. La 27 y 28 son otra fijación seguida en orden cronológico a petición del fiscal Gajardo y la oficial a cargo, para situar la camioneta de acuerdo a la versión de testigos. Es Alameda con calle Estado, lugar donde hay una rotonda ubicada frente al Unimarc, a un costado se observan sus letreros donde ocurren los hechos con el carabinero Osses y el periodista. Algunas personas escucharon disparos en ese lugar según la oficial Sánchez. La 29 y siguientes muestran la versión del testigo E, Ricardo Solís, que fue víctima de un disparo en uno de sus brazos, dijo que estaba observando a las personas que se manifestaban en la calle, que la gente quería entrar al supermercado Unimarc forzando el acceso, escucha algunos disparos y luego le llegó uno en su brazo izquierdo y la mano se le adormeció. En la 33 avanza por la Alameda de norte a sur, en compañía de su pareja, la cual lo observa que no puede ser balín de goma porque el orificio era muy grande. En la 34 y siguientes se aprecia que en la próxima esquina, Argomedo, él también se percata de una camioneta de color rojo, que tenía una estructura metálica como de minera. En la 43 y siguientes se indica versión de la pareja de Solís, representada con letra F., que coincide con versión de Solís, señala que su pareja le indica que recibió perdigón y ella observa y se da cuenta que no sería una lesión tan leve y le dice que se trasladen a un recinto

asistencial. En la 47 y siguientes se indica la versión de otra víctima, de apellido Ayala, con la letra G, quien señala que en la Alameda había sido testigo de manifestaciones y observa camioneta de color rojo en donde un señor desde su interior efectuó diversos disparos, en principio señala que cree que es arma a fogueo porque no veía lesionados, el señor le disparaba a cualquier persona que pasara, a quemarropa, y Ayala emprende la huida y siente que le llega un disparo en la espalda, no le toma mayor importancia porque cree que podría haber sido balón de goma. B representa la camioneta que él observa efectuando disparos. La 52 y siguientes recogen la versión de la testigo Carmen Salinas, quien se sitúa en Manso de Velasco con Argomedo y señaló que observó una camioneta roja que viene desde la carretera hacia la ciudad y ella va en sentido contrario. Se la indica con la letra H y la camioneta de color rojo está con la B, la que ya giró hacia la izquierda, pues habría venido en sentido contrario. La 53 muestra la dirección en que se trasladaba la testigo, quien dice que un sujeto conducía con la mano izquierda y con la derecha empuñaba un arma de fuego con la que disparo varias veces hacia la carretera. La 54 y 55 representan otra vista, desde calle Argomedo en dirección norte a sur, señala que la camioneta giró nuevamente hacia la izquierda hacia la carretera 5 Sur. La 56 y 57 indican la posición suya en que observa al conductor de la camioneta manejando con la mano izquierda y empuñando con la derecha el arma con la que disparó. La 58 a la 63 muestran el lugar en que se ubicó el cabo Reyes al momento de usar su arma de cargo, el fusil, con el cual efectuó dos disparos disuasivos para dispersar a la gente que se manifestaba en la ruta. Al costado izquierdo donde viene el camión cayó el occiso. Se ve el árbol casi al lado derecho de él, donde se encontraron diversas evidencias balísticas. La 64, 65 y 66 muestran el lugar donde estaban la camioneta y el bus de los militares, se fijó también un vehículo en que se trasladaba un testigo de apellido Miranda a un costado del bus. 68 y siguientes indican ese vehículo de la empresa Lizcal. La 73 y 74 indican la versión del señor Miranda, que dice que en un momento el bus hizo maniobra brusca para incorporarse a acceso sur a Curicó, y que él se encontró con los manifestantes a esa altura, eran cinco, provistos de algunas piedras y actitud amenazante si es que no se detenía, y uno de estos pasó por el lado izquierdo y le solicitó dinero, y otro, que reconoce como la víctima Uribe, según supo

después, pasó por el lado derecho. La 75 y siguientes muestran el lugar donde cayó abatida la víctima, justo en la parte de atrás del furgón de Miranda, se observa una animita, y este perito pudo fijar manchas pardo rojizas. La 78 a la 91 indican una camioneta color rojo de similares características de las señaladas por testigos, y se fijó posible trayectoria de la que dio cuenta el perito de la especialidad, e impactos balísticos en la puerta del copiloto de la camioneta de Lizcal. De la 92 a la 95 fijó la versión entregada por un guardia de seguridad, José Recabal, con letra K, que trabajaba en una empresa ubicada a un costado del Servicio Médico Legal de Curicó, cuya fachada deslinda con acceso sur a Curicó, quien señala que observó a militar enfrentando la manifestación, lo vio asustado, y que en un momento aparece camioneta de color rojo de similares características a la que hemos visto, la que trata de incorporarse a la ruta pues las personas que se estaban manifestando lo impedían, pero en un momento lo logra, haciéndose paso, y una vez que se incorpora a la ruta escuchó unos disparos.

El trabajo expuesto por el perito Henríquez sobre la reconstitución de escena fue particularmente útil para ilustrar las versiones de los principales testigos de los sucesos acaecidos la noche en que resultaron lesionados los tres afectados del sector de la Alameda de Curicó y herido de muerte Uribe Antipani en la carretera. En gran medida, pudo ilustrarse y corroborarse sus versiones, apreciando que las dinámicas narradas fueron en términos sustantivos las mismas que declararon en el juicio, y que ellas eran coherentes con los lugares, distancias y posiciones de los distintos actores en el lugar, dándoles mayor credibilidad. Así ocurrió, especialmente, con lo expuesto por Nicolás Espinoza, respecto a donde se encontraba -en la Alameda con calle Merced- y cómo recibió el impacto en su pierna. También se corroboró lo que dijeron Dani Bravo y Sergio Osses sobre su interacción con el acusado y su camioneta. Del mismo modo, se apreció el lugar donde estaba Ricardo Solís y cómo es que pudo recibir el disparo en su brazo, dada la corta distancia con la calle por la que vimos transitó varias veces la camioneta del acusado, en la Alameda con Estado, donde está el Unimarc, calle que pasa a ser Carrera al oriente, y lo plausible que resultó que él con su pareja Karolain Suazo pudieran observar a la misma camioneta al retornar a la Alameda por calle Argomedo, una cuadra al sur de la primera

posición.

Sobre la versión de Ayala, cierto es que se apreciaron diferencias con lo que expuso primeramente a la policía y en el juicio. Respecto de la primera, como apuntamos en su momento, donde, sin perjuicio de indicar que le dispararon desde la camioneta roja, había señalado que en ella había carabineros, con uniforme de tales, y que vio cómo le apuntó uno y disparó. Él mismo no explicó por qué habría señalado eso y en el juicio eliminó lo concerniente a los carabineros, solo aludió a que lo último era la verdad. ¿Por qué creerle? Llamó la atención al respecto el contexto de su primera declaración, cuando muchas personas sindicaban a carabineros de los disparos, ya que los vieron en la calle, disolviendo o enfrentando a los manifestantes. ¿Quién mas podría haber sido? Esa primera versión pareció sesgada e influenciada por ese ambiente, en que parecía absurdo que un sujeto apareciera de la nada en una camioneta y disparara desenfrenadamente contra la multitud, como ocurrió. Pero sí pudo creérsele en que lo que dijo en el juicio era lo más cercano a la realidad, ya que dio razón suficiente de sus dichos y varios elementos de su versión fueron confirmados por otras probanzas, como hemos razonado. A su vez, respecto de la posición que se le puede asignar al momento del impacto, él declaró en el juicio que se encontraba en el bandejón central de la Alameda, frente al Unimarc, donde está el monumento con la espada, pero en la reconstitución de escena se sitúa unos metros al sur, cerca de otro monumento, pudiendo observar en las fotos 47 y 48 cómo habría estado cuando recibe el impacto en su espalda, lo que indicó de un modo verosímil, sobre todo dada la distancia en que estaba de la calle por donde circuló la camioneta, que también se reproduce en esas tomas. ¿Qué motivo tendría para mentir o inventar esto o aquello? Se comprobó que él estaba en el sector, que recibió el disparo en su espalda y que el acusado transitó en su camioneta por esas calle haciendo disparos. Entonces, ¿resta mérito este cambio a su versión? Creemos que no, que en realidad lo que sucedió es que este testigo, al encontrarse en situ y conminado a señalar lo que sucedió, fue más preciso, no pudiendo olvidar que, además de los factores estresores que en cualquier persona pueden determinar su reconstrucción en la memoria de un evento, nos referimos a hechos en que este testigo y la camioneta aludida estaban en movimiento. Por ello la crítica de la

Defensa al respecto no fue atendida.

Por otro lado, relevante pareció la reconstrucción de la versión de Carmen Salinas, dada su directa sindicación del acusado como autor de disparos en la Alameda con calle Argomedo, la que se pudo palpar en las imágenes 55 y 57, al punto de advertir que ella pudo perfectamente ser otra víctima de los disparos.

Capítulo aparte son las fotos en la carretera, la ilustración de la versión de Reyes, irrelevante aquí por lo ya expuesto, y particularmente la del testigo Miranda y la ubicación de la camioneta o furgón que conducía esa noche, en la que pudieron hacerse las pericias de la trayectoria de los disparos desde la camioneta del acusado, considerando las posiciones en que estuvieron conforme a este y otros relatos, no olvidemos el video respectivo, haciendo plenamente congruente esa posibilidad.

Finalmente, la recreación con las imágenes 92 y siguientes de la versión del testigo José Recabal, le dieron plena credibilidad sobre que pudo haber percibido lo que le declaró a la policía, según reprodujo Veloso, en cuanto a haber visto el paso y aproximación a la carretera de la camioneta roja cuando se producen los disparos.

Así las cosas, la diligencia de reconstitución de escena, introducida por diversos testimonios y graficada por Henríquez, dio mayor peso a la prueba de cargo que sostuvo la imputación.

En suma, la participación culpable del acusado Fuenzalida Calvo como autor ejecutor de los cuatro homicidios, tres frustrados y uno consumado, pudo concluirse valorando las pruebas reseñadas en su conjunto, apreciando que algunas directamente lo incriminaban, así como el resto entregó información que permitió construir en su contra una serie de indicios. Las principales pruebas e indicios fueron:

1º El testimonio del afectado Miguel Ayala Salinas, en cuanto señaló que poco antes de recibir el disparo vio una camioneta roja con un tubo negro que le salía por el lado -la que reconoció al exhibírsele la evidencia fotográfica N°20 con imágenes de esa

camioneta patente HVLD26- y cuyo chofer empieza a disparar. Él pensó que eran balas de mentira, y, cuando se alejaba, de repente le llega un impacto en la espalda. Al principio pensó que le habían disparado carabineros que estaban más allá, ya que oyó disparos y éstos lanzaban bombas lacrimógenas, y que la camioneta roja también era de carabineros, así lo dijo a los policías que lo entrevistaron esa noche, pero no era así. Similares percepciones expresaron los testigos Carmen Salinas Cea, Clara Salinas Cea, Nicolás Espinoza Rojas, Ricardo Andrés Solís Opazo y Karolain Yosett Suazo Narváez, respecto de la intervención del conductor de una camioneta de esas características en los disparos, de hecho, Solís y las hermanas Carmen y Clara Salinas Cea reconocieron esa camioneta al igual que Ayala al observar las imágenes de la evidencia fotográfica N°20. A su vez, la policía Marcela Sánchez Torrejón, como ya señalamos, dio cuenta de las pesquisas que comenzó a hacer el personal de su unidad para ubicar ese vehículo, a partir de la declaración de Ayala, en la central de cámaras de carabineros y con personal de la SIP, lo que le llevó a hablar con el sargento Sergio Osses, que recordaba el control de identidad efectuado esa noche al conductor de una camioneta similar, quien contactó a su vez al testigo Dani Bravo que había fotografiado la patente, haciéndosela llegar a Sánchez, quien al consultarla en la base de datos obtuvo que se encontraba registrada a nombre del acusado, apareciendo su domicilio, donde acudieron y lo encontraron a él y su camioneta. Los testigos Sergio Osses Arenas y Dani Bravo Maturana así lo ratificaron, reconociendo el primero la foto contenida en la evidencia N°33, cuando se le exhibió, como aquella donde aparece la patente de la camioneta que él captó con su celular, y que es la HVLD26, y, del mismo modo, un video que grabó momentos antes, haciendo un despacho en vivo sobre los sucesos en la Alameda frente al Unimarc, donde se aprecia que llegó junto a él una camioneta roja y su conductor lo insultó por estar grabando. El Ministerio Público, como citamos, aportó el Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.N.V.M. respecto de la referida camioneta patente HVLD26, comprobando que aparecía registrada a nombre de Francisco Fuenzalida Maquinarias Limitada, persona jurídica a todas luces asociada con el acusado. Vale decir, un primer indicio estuvo dado por la vinculación entre la camioneta que conducía la persona que Ayala apreció disparando, y que

presumiblemente le disparó a él, la que asimismo vieron otros testigos en el sector esa noche, con la que se encontraba registrada como de propiedad de una sociedad comercial que tiene el nombre del acusado, Francisco Fuenzalida Maquinarias Limitada, según el certificado respectivo, vinculación que hace inferir que él tendría la posibilidad de usar ese vehículo y por tanto haber cometido los delitos desplazándose en éste.

2° La testigo Carmen Salinas Cea, como hemos citado, fue certera en señalar las circunstancias en que presenció cuando, estando en la Alameda cerca del servicentro Petrobrás esa noche, calle que se llama Argomedo, parada en la ciclovía del bandejón central, vio una camioneta de color rojo que paró casi frente a ella y el chofer con la mano izquierda afirmaba el volante y en la derecha tenía una pistola color negro oscuro, la que apoyó sobre la otra mano y disparó cuatro o cinco tiros en dirección a la carretera, donde había mucha gente corriendo. Ella explicó en forma verosímil y coherente cómo es que pudo recordar características particulares de esa camioneta y su conductor, un caballero que notó bajo, lo vio de perfil y se lo notaba con pelo a la altura de las orejas y calvo hacia arriba, indicando que lo podía reconocer y así lo hizo en el televisor de la sala de audiencia durante el juicio, señalando al acusado Fuenzalida Calvo. Por su parte, la subcomisario Sánchez refirió también su versión y que efectivamente pudo apreciar las características generales tanto del vehículo como del chofer, razón por la que se le hizo un reconocimiento en set fotográfico, reconociendo al imputado Fuenzalida Calvo como el autor de los disparos. Como ya se argumentó, las descripciones que hizo, los detalles entregados y especialmente las razones sobre por qué identificaba la camioneta en las imágenes que se le exhibieron y al acusado presente en la audiencia, fueron estimados factores potentes para asignarle credibilidad. En consecuencia, esta testigo presencial fue estimada otra pieza fundamental para cimentar la participación del encartado en los hechos.

3° Los testigos Sergio Osses Arenas y Dani Bravo Maturana coincidieron en señalar que esa noche, aproximadamente entre las 22:00 y 22:30, el primero se encontraba haciendo filmaciones en la Alameda con calle Estado, frente al Unimarc cuando llegó a ese

lugar una camioneta roja, de la que bajó un tipo que lo empezó a insultar por estar grabando, ante lo cual se acercó el segundo que junto a colegas se encontraban cerca y le hicieron un control de identidad, pidiéndole el carné, alcanzando a recordar Osses que un apellido era Calvo, precisamente porque le llamó la atención que tenía poco pelo, explicando que debieron interrumpir el procedimiento cuando los llamaron a replegarse. Los dos dijeron que el conductor tomó su camioneta para doblar por la Alameda hacia el sur, hacia la carretera. Osses agregó que más tarde, cuando la oficial de la PDI Marcela Sánchez requirió información sobre la camioneta roja observada por varios testigos, él recordó este episodio y ubicó a Bravo, quien le envió el video con la patente, lo que confirmó este último. Como también vimos, los dos testigos ratificaron sus dichos ante dicha oficial investigadora y asimismo en la diligencia de reconstitución de escena, siendo captada esa situación en la evidencia fotográfica 18 y en el video recopilatorio recogido en la evidencia 28, en tanto que, en el juicio, reconocieron al conductor de esa camioneta y que insultó a Bravo fue el acusado Fuenzalida Calvo. De ambos relatos surgió, por una parte, el posicionamiento irrefutable del encartado a bordo de la camioneta roja tantas veces mencionada, que se vinculó esta vez mucho más precisamente con la patente, a través de la captura incorporada. Pero, en lo que constituye una evidencia independiente, ellos sindicaron directamente al acusado como su conductor, y en minutos plenamente coincidentes con los hechos de la Alameda y previos a lo ocurrido en la carretera, hacia donde ambos vieron desplazarse a Fuenzalida Calvo luego de dejarlos, lo que lleva a posicionarlo en esa ubicación alrededor de las 22:30 horas o momentos después, cuando se produce el disparo a Uribe Antipani.

4° Ello se complementa con las imágenes del recorrido por las calles del sector de la Alameda, hacia el acceso sur a la carretera luego y por la caletera de esta hacia el norte, luego, según expuso el oficial Matus y el perito Guzmán, al exhibirse los múltiples set fotográficos de las cámaras de seguridad pesquisadas en la zona, que muy bien sintetizó el video elaborado por este último, evidencia N°28. Esas imágenes y relatos reafirman la presencia de la camioneta conducida por el acusado en las intersecciones de la Alameda con calle Estado, donde fueron heridos Ayala y Solís, y donde vimos que testigos se

estremecen ante lo que claramente fueron disparos, volteándose a mirar el origen de los mismos, precisamente a donde estaba la camioneta en esos momentos. También la posicionan en la esquina de la cuadra siguiente hacia el sur, que es donde la ve la testigo Carmen Salinas. A su vez, entre las mismas calles Estado y Argomedo, ya analizamos el video 1 de la evidencia 27, donde se vio pasar a una camioneta de las mismas características y en seguida se oye una ráfaga de varios disparos. Las mismas imágenes, recordemos, fijan un tránsito de la camioneta hacia la carretera, siendo captado por imágenes del servicentro Copec, el local Protege, el domo de la municipalidad de Curicó y las cámaras de la Asociación de dueños de camiones, hasta entrar a la carretera, para ser luego captado por las cámaras de un gimnasio en su camino a Zapallar, donde el acusado vivía. Este posicionamiento múltiple es otro indicio.

Por su parte, convergiendo esas pruebas en determinar la intervención de Fuenzalida Calvo en los crímenes de la Alameda, y por extensión al de la carretera, se apreció un aporte recíproco, natural y coherente de las pruebas recopiladas en relación al último episodio que reafirman la participación en el primero, pues se trata de una misma arma empleada y un mismo vehículo en que se traslada el autor.

5° El relato del testigo Cristian Miranda Miranda, brindado repetidamente en la investigación, incluyendo la reconstitución de escena que lo graficó, y en el juicio, dio cuenta de un modo plenamente creíble, como se razonó, de las circunstancias en que había estado en el furgón de la empresa Lizcal justo frente a la barricada donde manifestantes tenían cortado el tránsito de la carretera esa noche, cuando, ya habiéndose retirado los militares, se produjeron disparos, dos de los cuales impactaron en el móvil, y días después permitieron recuperar dos trozos de proyectil que se llevó la PDI, y reconociendo luego en las imágenes de redes sociales que uno de los jóvenes que había visto allí era la víctima José Uribe. También indicó que apenas escuchó los disparos alcanzó a percibir gritos de la gente diciendo que alguien estaba herido. En el juicio preciso que vio en ese momento una camioneta roja pasar muy rápido hacia el norte, aspecto que no había indicado anteriormente, pero que no varió la convicción de su credibilidad, por todos los motivos

que se expusieron. Por su parte, los testimonios de Alejandro Muñoz Moraga y Miguel Neira Neira, los tres absolutamente independientes y que no se conocían, coinciden en que estando presentes en el sector del acceso sur de la carretera panamericana a Curicó, vieron el momento en que el conductor de una camioneta roja disparaba a las personas, escuchando enseguida los gritos que mencionó Miranda. Entonces, tales relatos confluyen para establecer que desde la camioneta que conducía el acusado se hicieron los disparos que hirieron a Uribe.

6° En el mismo sentido, el funcionario policial Bernardo Veloso incorporó, de oídas, el testimonio, entre otros, de Héctor Mujica y José Recabal, que se encontraban a la salida de la sede de la ASODUCAM, como se vio en las imágenes aportadas de las cámaras allí instaladas, quienes coincidieron en señalar que luego de ver o notar que los militares se retiran pasan unos pocos minutos y aparece una camioneta roja que viene desde la Alameda y al asomarse arriba, en la pista de la carretera que va al norte, hace una secuencia de 5 o 6 disparos con un arma de fuego, y que enseguida los manifestantes empiezan a gritar que había un herido.

7° A partir del relato del oficial Bernardo Veloso y luego de Cristian Miranda, entre otros, también supimos de los trozos de proyectil recuperados desde el furgón conducido por ese testigo y del estudio que se encargó al respecto, el que evacuó el perito balístico Daniel Cáceres, que dio cuenta de la compatibilidad total de esas evidencias balísticas con la misma pistola CZ calibre 9 milímetros que portó esa noche el encartado, lo que se apoyó en las fotografías y demás evidencias aportadas. Cáceres también refirió el estudio comparativo que hizo de las evidencias balísticas recuperadas desde los cuerpos de los afectados Solís y Espinoza, sin resultado categórico, y, asimismo, del proyectil que aún se aloja en el cuerpo del ofendido Ayala, visualizado en las radiografías que se le tomaron y que se exhibieron y aportaron en la audiencia que era compatible con ese calibre. Por su parte, conforme también a lo expuesto por Veloso, escuchamos a los peritos Eduardo Soto, balístico, y Germán Tapia, médico cirujano, respecto al análisis que desde sus experticias hicieron de la lesionología del occiso, coincidiendo en esa correspondencia. Es decir, los

proyectiles recuperados desde el vehículo donde estaba el testigo Miranda fueron disparados esa noche por la pistola CZ portada por el acusado, la que era del calibre 9 milímetros, munición que es compatible con la lesión mortal de Uribe y con la bala que hirió a Ayala. Y,

8° El propio acusado declaró en el juicio, como hemos transcrito, y admitió que esa noche se desplazó en su camioneta por el sector de la Alameda de Curicó y en un horario que fue coincidente con las circunstancias en que fueron heridos los afectados Solís, Espinoza y Ayala, y agregó que efectuó 3 o 4 disparos con la pistola CZ calibre 9 milímetros que portaba, lo que corroboró parcialmente los testimonios y evidencias que así también lo establecieron, señalando solo haberlo hecho en un lugar preciso, la intersección de la Alameda con calle Merced, que coincide con donde fue herido únicamente el primero, quedando un vacío en su versión sobre los otros dos que resultaron lesionados en las cercanías, prácticamente a una cuadra hacia el sur, omitiendo totalmente haber efectuado esos otros disparos, y asimismo respecto de lo ocurrido en el acceso sur, siquiera indicando haber estado en ese sector, y menos disparado allí, como se estableció. Con todo, el uso de la camioneta y de la pistola indicada constituyeron otro indicio muy importante de su responsabilidad como autor de los disparos contra todas las víctimas, a lo que se puede agregar que mantenía en su poder dos cargadores y 5 municiones de ese calibre.

Por último, estimando que ya hemos analizado todos los cuestionamientos fundamentales de la Defensa, diremos una palabra sobre el referido a que no es verosímil que Fuenzalida Calvo haya podido disparar su pistola múltiples veces y cerca y en tantos lugares de la Alameda, sobre todo de aquellos en que estaban muchos policías, sin ser detectado. Esa es una pregunta retórica que necesariamente debe aterrizar a las circunstancias que se desarrollaron esa particular noche, marcada por una de las jornadas más grises del estallido social. Tanto en los relatos como en las imágenes se apreció la confusión y el desorden, con la policía claramente desbordada y sin que pudiera asegurar el orden público, lo que quedó graficado en que efectivamente, como no fue controvertido,

se saquearon supermercados y quemaron establecimientos, como el peaje aludido por Fuenzalida Calvo. Y en ese contexto se efectuaron disparos que hirieron a tres víctimas, sin que el autor haya sido inmediatamente identificado y menos detenido, cualquiera que fuera. Tampoco lo fue el acusado, pese a estar confeso de que sí hizo disparos, al menos cuando estaba en la Alameda con Merced. ¿Inverosímil entonces que haya podido seguir disparando impunemente? Para nada, como quedó graficado en el varias veces video 1 de la evidencia 27, aquel que situamos grabado a mitad de cuadra entre Estado y Argomedo, cuando se vio la camioneta transitando en dirección al servicentro Petrobras y se escucha una ráfaga de varios disparos, video que permitió apreciar que un par de segundos después, a escasos metros, tal vez unos 50, pasaron varias motos con carabineros, sin que actuaran al respecto.

En conclusión, las probanzas expuestas, complementadas por el resto de las que se incorporaron, y los indicios que permitieron deducir, fueron suficientes para configurar una sólida presunción judicial de participación culpable del encartado en los hechos que afectaron a los afectados Espinoza, Solís y Ayala, y que provocaron la muerte de Uribe.

De este modo, con las probanzas descritas se tuvieron por acreditados todos los elementos de los cuatro delitos de homicidio imputados, y la intervención en los mismos de Francisco José Fuenzalida Calvo en calidad de autor ejecutor.

DÉCIMO SEGUNDO: Análisis de las pruebas aportadas con relación a los dos cargos de porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, argumentos de las partes y conclusiones. Según el persecutor oficial y los querellantes representados por los abogados Herrera y Barrera, Fuenzalida Calvo sería responsable del porte y tenencia, en las circunstancias de lugar y tiempo descritas en el libelo pretensor, de un arma de fuego del tipo pistola, marca CZ, calibre 9 milímetros, más dos cargadores y cinco municiones del mismo calibre, y, también, de la tenencia de otra arma de fuego, un fusil marca Máuser calibre 7 por 57 milímetros, y municiones compatibles, incurriendo, con cada una de esas dos conductas, en el delito previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley 17.798 sobre control de armas y explosivos. Recordemos que esta norma sanciona con la pena que

establece a quienes *poseyeren, tuvieren o portaren algunas de las armas o elementos señalados en las letras b) y d) del artículo 2, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4º, o sin la inscripción establecida en el artículo 5º*. Por ende, conforme al tenor literal de este artículo, en relación con los demás preceptos pertinentes y lo que han definido la doctrina y jurisprudencia mayoritariamente asentadas, para que se verifique este delito, y la autoría del mismo reprochada al encartado, es necesario: 1) *que el sujeto activo realice una conducta consistente -en este caso- en portar o tener ciertos objetos*; 2) *que esos objetos correspondan a alguno de los mencionados en el artículo 2 de la misma ley, en este caso los de su letra b), que menciona las armas de fuego, y letra c), que incluye las municiones*; y 3) *que el autor no cuente con la autorización pertinente señalada en el artículo 4, o la inscripción establecida en el artículo 5*.

Los presupuestos fácticos mencionados y cada uno de dichos elementos fueron acreditados con la prueba de cargo y la misma declaración de Fuenzalida Calvo.

En efecto, se consideraron primeramente los relatos y demás evidencias señaladas en el apartado anterior, en cuanto a las personas afectadas con los disparos en la Alameda de Curicó y en el sector del acceso sur de la ciudad esa noche, que significaron herir a los afectados Solís, Espinoza, Ayala y Uribe, que se atribuyeron con el conductor de la camioneta roja que después se asoció con el acusado, y el conjunto de evidencias que permitieron establecer la participación de Fuenzalida Calvo en tales hechos, lo que dio cuenta que portaba en esos momentos una pistola con munición del calibre 9 milímetros con la que efectuó tales disparos.

Recordemos que **el propio imputado** declaró en el juicio, y esa misma jornada lo había hecho ante la policía, reconociendo que efectivamente él condujo su camioneta roja por el sector de la Alameda y en un momento disparó 3 o 4 tiros contra los manifestantes con su pistola marca CZ calibre 9 milímetros, la misma que entregó esa noche a personal de la PDI que concurrió a su domicilio.

Al respecto, conviene citar el testimonio de la subcomisaria **Marcela Sánchez Torrejón**, quien explicó la diligencia efectuada algunas horas después de los hechos, ya en

la madrugada del día 22 de octubre de 2019, en el domicilio del imputado ubicado en el Camino Los Cristales, kilómetro 0.8, sector Zapallar de la comuna de Curicó, al que llegaron una vez que, gracias a testigos y videos de cámaras de seguridad, fue identificada su camioneta en las cercanías de donde fueron heridas las víctimas, sindicando testigos que desde la misma se habían efectuado disparos, resultando fundamental Dani Bravo Maturana, quien grabó una imagen de la patente y la entregó a Carabineros. Explicó que, en esa oportunidad, el acusado colaboró en todo momento, admitiendo en primer lugar haber efectuado disparos mientras transitaba por esos lugares en la camioneta aludida, y entregándoles aquellas evidencias que mantenía en su poder, en concreto, una pistola marca CZ, calibre 9 milímetros, modelo 85, serie A2773, más dos cargadores y cinco cartuchos del mismo calibre, así como cuatro vainas correspondientes a cartuchos ya percutidos que había recogido desde el interior de su camioneta. Sánchez reconoció además esos elementos al serle exhibida la **evidencia fotográfica N°6, fotos 3 y 4**, y las **evidencias materiales números 52 y 53**.

Por otra parte, la oficial Sánchez dio cuenta que en la misma diligencia Fuenzalida Calvo hizo entrega de otros armamentos, entre ellos un arma de fuego del tipo fusil, calibre 7x57 milímetros, marca Máuser, modelo 1912, serie 69148, añadiendo que ese día no se efectuó una revisión del domicilio, solo se recibió las especies que entregó voluntariamente el imputado, y que, con posterioridad, el 26 de octubre de ese mismo año, cuando el encartado ya estaba en prisión preventiva, concurrió nuevamente al domicilio con una orden de entrada y registro, ocasión en que encontraron una caja con 240 cartuchos calibre 7 milímetros y 10 cartuchos calibre 7 x 57 milímetros. Esta testigo reconoció también estos elementos al exhibírsele la **evidencia fotográfica N°6, foto 6**, y las **evidencias materiales 56 y 57**, respectivamente.

En su reconocimiento de la evidencia aclaró que algunos de los cartuchos estaban ahora percutidos, lo que se explica por las pruebas balísticas efectuadas.

Fuenzalida Calvo también indicó en el juicio haber entregado ese fusil a la policía aquella noche, y haberse enterado que se llevaron de su casa posteriormente la aludida

caja con municiones, explicando que esa arma era una herencia de su padre, que su madre le había entregado el año 2008, un año después de la muerte de aquel, junto con la caja con las municiones, añadiendo que nunca la usó ni la inscribió a su nombre.

En el mismo sentido, la Defensa aportó el testimonio de **Manuel Antonio Gamboa Morán, Mario Enrique Undurraga Castelblanco y Óscar Gonzalo Fuenzalida Calvo**, quienes, en este punto, coincidieron en saber que Fuenzalida Calvo mantenía ese fusil en su poder desde hacía muchos años y que era una reliquia heredada de su padre, lo que complementaron reconociendo el arma al exhibírseles la evidencia material 56, antes mencionada.

Con el mérito de estos elementos probatorios, no rebatidos por pruebas en contrario, pudo, en primer término, concluirse que Fuenzalida Calvo portó la noche del 21 de octubre de 2019 la referida pistola, sus cargadores y municiones, en su recorrido criminal por Curicó, disparando e hiriendo a las víctimas, especies que entregó a la policía cuando se presentaron en su domicilio horas más tarde; y que, en esta ocasión, ya en la madrugada del día 22, además, entregó el aludido fusil, lo que se complementó el día 26 del mismo mes y año con la incautación en ese lugar de la caja con el resto de las municiones aludidas.

Todo ello concordó con lo planteado en la acusación.

En la misma línea, y con relación al primer elemento del tipo penal, pudo establecerse con dichos testimonios y evidencias que el imputado Fuenzalida Calvo portó, es decir, llevó consigo la pistola, cargadores y munición referida del calibre 9 milímetros, por vías públicas de esta comuna, y que tenía y guardaba en su domicilio el aludido fusil y la caja con las municiones indicadas. Fue entonces posible atribuir al acusado la conducta definida por el verbo rector *portar*, descrita en el artículo 9 de la Ley 17.798, referida a los elementos individualizados como pistola, cargadores y municiones calibre 9 milímetros, y, del mismo modo, su acción de *tener*, relativa al fusil y los 250 cartuchos de munición indicados.

A su vez, en cuanto al segundo elemento, relativo a que esas especies sean efectivamente armas de fuego y municiones, se contó con lo expuesto en el juicio por el perito balístico del Laboratorio de Criminalística de la PDI **Daniel Cáceres Aravena**, quien indicó que examinó precisamente aquellas evidencias y realizó las pertinentes pruebas de funcionamiento y disparo, así como su análisis comparativo, evacuando, en primer término, su informe pericial balístico N°122/019, relativo a la aludida pistola marca CZ, calibre 9 milímetros, modelo 85, serie A2773, y los cinco cartuchos 9 milímetros remitidos junto a la misma, estableciendo al percutar dos de ellos con esa pistola que todos eran aptos para el disparo, siendo a su vez los cartuchos compatibles para ser disparados con esa arma. También dijo haber emitido su informe pericial balístico N°41/020, donde debió examinar nuevamente la pistola CZ y tres cartuchos indemnes calibre 9 milímetros -los otros dos que la acompañaban él ya los había utilizado en su anterior pericia-, más cuatro vainillas percutidas, y, por otro lado, un fusil calibre 7x57 milímetros, marca Máuser, modelo 1912, serie 69148; 209 cartuchos calibre 7 por 57 milímetros con proyectil encamisado y ojiva aerodinámica; 15 cartuchos mismo calibre proyectil encamisado con ojiva cilíndrica; 27 cartuchos del mismo calibre semiencaamisados con ojiva cilíndrica y 1 cartucho calibre 7,62 por 51 milímetros. Indicó, en lo que aquí importa, que efectuadas las pruebas de funcionamiento y disparo, pudo verificar con la pistola y los tres cartuchos calibre 9 milímetros procesos eficaces de percusión y disparo; y con el fusil y los otros cartuchos aludidos, pudo concluir que el fusil se encontraba apto para el disparo, y que, al probar seis de aquellos cartuchos con esta arma, solo tres pudieron realizar un proceso de disparo, por lo que podía establecer que el 50% de esa munición se encontraba apta.

Cáceres complementó su exposición reconociendo las evidencias peritadas al exhibírsele la **prueba fotográfica N°24**, compuesta de 4 imágenes, donde se apreció la aludida pistola y los cinco cartuchos aludido en el informe 122, así como dos proyectiles obtenidos de las pruebas realizadas; la **evidencia fotográfica N°39**, compuesta de 16 imágenes, en las que se observó la pistola, los tres cartuchos compatibles con esta, el fusil Máuser y los cartuchos vinculados a esta arma (fotos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11); y las **evidencias materiales 53** (vainillas), **56** (fusil Máuser), **57** (240 cartuchos), y **58** (evidencias

obtenidas de las pruebas con el fusil).

Entonces, de lo explicado por el perito, tampoco contrariado por prueba alguna, se extrajo que tanto la pistola CZ como los cinco cartuchos calibre 9 milímetros, que portó el acusado, eran aptos para el disparo, pudiéndose efectivamente considerar como un arma de fuego y municiones, en los términos del artículo 2 letras b) y c) de la citada ley, siendo a la vez compatibles entre sí; en tanto que iguales conclusiones pudieron obtenerse del fusil Máuser y al menos el 50% de los 250 cartuchos de diferentes modelos que perició y que fueron encontrados en poder del encartado, en su tenencia, usando el concepto del tipo penal.

Se tuvo por acreditado de esta manera el segundo elemento necesario para configurar ambos delitos.

Por su parte, en cuanto al tercero, relativo a que el acusado no tuviera la autorización competente, se aportó la **documental número 11**, emanada de la Dirección General de Movilización Nacional, autoridad fiscalizadora N°42 de Curicó, fechado el 22 de octubre de 2019, que dio cuenta que el imputado no tiene esas armas inscritas a su nombre, no posee permiso de porte y no registraba a esa época autorización para la compra de municiones. La misma información se corrobora en el **documento N°16**, Oficio de la Autoridad Fiscalizadora de Curicó N°6442/4250/2019, emitido con fecha 19 de noviembre de 2019 en relación a consulta efectuada por la Fiscalía respecto del acusado, el que estaba ofrecido también con otro nombre en el **número 26** (en la nueva numeración); al que se anexó el **documento 22** (en la nueva numeración), consistente en un Reporte de armas inscritas a nombre del imputado, en el que se detalla lo referente a la única arma que poseía legalmente inscrita, cual era la aludida escopeta Maverick calibre 12 que le incautó la policía.

Es más, conforme a la **documental de cargo N°21**, consistente en un Reporte de Armas emitido por la misma autoridad con fecha 21 de octubre de 2019, la pistola CZ descrita se encontraba inscrita a nombre de un tercero, Francisco Socías Reyes; y según la

documental N°23 y 25, consistente en Informe de la autoridad fiscalizadora de Curicó N°6442/3954/2019 y su anexo Reporte de Armas de la misma autoridad, respectivamente, el fusil aludido, serie 69148 (no se indica marca) figuraba inscrito a nombre de Gastón José Oscar Fuenzalida Navarrete, fallecido el 13 de abril de 2007.

Recordemos que Fuenzalida Calvo, en el juicio, indicó que esa pistola la había adquirido hacía muchos años en un trueque que hizo con Enrique Marchant, sin que se realizara el traspaso formal de la misma ni estuviera por tanto inscrita a su nombre, habiendo incluso intentado ubicar a la persona a nombre de la cual estaba registrada, Francisco Socías, sin que tuviera los papeles ni pudiera ayudarlo en esa tarea. La oficial Sánchez, asimismo, señaló haberle tomado declaración a Socías, en el mismo sentido.

Así pues, quedó demostrado que el acusado no tenía las referidas pistola y fusil inscritos a su nombre ante la entidad respectiva y no contaba con permiso de porte de la primera, ni para comprar municiones, como exigen los artículos 4 y 5 de la referida ley de armas.

Se acreditaron de este modo las circunstancias de lugar y tiempo de los delitos imputados vinculados a estas especies, verificándose cada uno de los elementos enunciados del tipo penal, y asimismo la intervención de autor que se reprochó a Fuenzalida Calvo, quien ejecutó el porte y la tenencia referidos con pleno conocimiento y voluntad, es decir, dolosamente.

Por si fuera poco, no surgió de los dichos de los testigos o el acusado, y no planteó su defensa, excusa o justificación legítima para tal conducta.

Finalmente, cabe señalar que la conducta de porte de la pistola, cargadores y municiones, se visualizó efectivamente peligrosa para la seguridad de las personas, bien jurídico tutelado por esta y otras figuras punibles de la Ley 17.798, como lamentablemente fue palmario en la conducta del acusado aquella jornada, quien, además de portarlas, las usó, configurándose así el delito de la ley de armas, con independencia de los otros que se establecieron con motivo de tal uso, cuyo castigo por separado impone el artículo 17 B de

la referida ley.

Por otro lado, por decisión de mayoría, con el voto a favor de las magistradas Yáñez y Avendaño y en contra del juez Gómez, se consideró que, respecto del delito de tenencia ilegal del fusil Máuser y sus municiones compatibles, atendido que este delito se configuró por la sola tenencia de esa arma de fuego y municiones en el domicilio del acusado, sin que se haya demostrado que usó o portó alguno de esos elementos, y habiéndose establecido que provenían de una herencia familiar que había llegado a su poder en el año 2008, como resultó avalado por los atestados de los ya mencionados Manuel Gamboa Morán, Mario Undurraga Castelblanco y Óscar Gonzalo Fuenzalida Calvo, lo que fue coherente con la documental de cargo N°23 señalada, se estimó aplicable a este caso la Ley 17.798 en su texto vigente a aquella época anterior, en que principió su tenencia, con las consecuencias punitivas correspondientes.

DÉCIMO TERCERO: Análisis de las pruebas aportadas con relación al delito de daños simples, argumentos de las partes y conclusiones. El último cargo planteado por el Ministerio Público en su acusación fue el referido al **delito consumado de daños simples** del artículo 487 del Código Penal, perpetrado en perjuicio de la empresa Lizcal S.A., en que se imputó a Fuenzalida Calvo haber disparado contra un vehículo de propiedad de esta empresa, ocasionándole daños.

Conforme a su acusación y la norma invocada, que es la que establece el tipo penal residual de daños simples, el persecutor debía acreditar: a) *que el acusado, dolosamente, realizó una acción destinada a provocar daños en un bien ajeno, sin concurrir las circunstancias que calificarían el hecho de otra forma más grave;* b) *que efectivamente se hayan producido daños cuya evaluación sea superior a una unidad tributaria mensual;* y c) *que entre la acción y el resultado hubiera relación de causalidad, excluyendo otra explicación o concausa.*

Al respecto, el Tribunal, como se ha razonado al analizar los hechos que causaron la muerte a José Miguel Uribe Antipani, estimó verificados con la prueba aportada al juicio cada uno de los elementos anteriores, vale decir, que el mismo día 21 de octubre de 2019,

en el sector del acceso sur de la carretera 5 sur a Curicó, el acusado Fuenzalida Calvo efectuó diversos disparos con la pistola CZ que portaba contra manifestantes que se encontraban allí, contexto en el cual dos proyectiles disparados por él impactaron aquel vehículo, causándole daños.

En efecto, respecto de la acción destinada a causar daños, se contó para demostrarla, en primer lugar, con el testimonio del policía **Bernardo Veloso Rojas**, que dio cuenta de las labores investigativas realizadas por su equipo, la Brigada de Homicidios de la PDI de Curicó, a propósito de la indagación de los hechos en que había resultado herido Uribe Antipani, y cómo fue que se determinó que dos proyectiles disparados por la pistola del acusado Fuenzalida Calvo impactaron en el costado derecho del vehículo tipo furgón, marca Fiat, modelo Doblo, color Blanco, placa patente KKTG33, conducido por Cristian Miranda Miranda y perteneciente a la empresa Lizcal S.A. Dicho móvil se encontraba momentáneamente detenido en ese momento en la pista oriente de la Ruta 5 sur, producto de la barricada instalada por manifestantes en el lugar esa noche, precisamente entre quienes se encontraba Uribe Antipani, el que en esos instantes resulta herido mortalmente por los disparos realizados por el acusado mientras transitaba al volante de la camioneta roja marca Toyota, modelo Hilux, doble cabina, patente HVLD26, que venía desde la Alameda de Curicó y con la que accedió a la citada carretera norte sur. Como vimos, Veloso llegó a convencerse de que eso había sido lo ocurrido luego de indagar los hechos y entrevistar a diversos testigos, entre ellos Cristian Miranda Miranda, Alejandro Muñoz Moraga y Miguel Neira Neira, que se encontraban en el sitio del suceso, y Héctor Mujica y José Recabal que estaban en el recinto de la Asociación de Dueños de Camiones de Curicó, ubicada en las inmediaciones, habiendo recabado las grabaciones tanto proporcionadas por Muñoz y Neira como por otras personas, así como obtenidas desde diversas cámaras de seguridad de locales comerciales, bombas de bencina, la misma ASODUCAM y otros establecimientos ubicados en la referida Alameda y sus cercanías, y tras tomar conocimiento de las diversas pericias realizadas al respecto, sobre todo comparando la pistola marca CZ que esa noche fue incautada al acusado, con los restos de proyectiles balísticos obtenidos del vehículo conducido por el testigo Miranda. Veloso

graficó sus dichos con las fotografías de las evidencias 2 y 47 y los videos de las evidencias 27 y 37, exhibidas en el juicio e incorporadas como prueba.

Asimismo, pudimos escuchar la exposición del **perito balístico Daniel Cáceres Aravena**, quien señaló haber efectuado el estudio mencionado por Veloso acerca de comparar los trozos de proyectil recuperados del vehículo conducido por Miranda con la pistola CZ incautada al acusado, estableciendo, a través del análisis de comparación microscópica y la fijación de sus características, que los dos restos de proyectil balístico recuperados desde el vehículo formaron parte de proyectiles calibre 9 milímetros y fueron disparados por aquella pistola periciada, por presentar el mismo rallado balístico. Cáceres reconoció dicha arma de fuego, los cartuchos que se le remitieron junto a ella para pericia y los trozos de proyectil recuperados desde el vehículo en la **evidencia fotográfica N°24** y en la **evidencia material 52 y 62**, respectivamente. También explicó las fijaciones efectuadas en la reconstitución de escena por encargo suyo, con los posibles ángulos de disparo desde la posición en que se vio la camioneta del acusado y los orificios en el furgón, lo que graficó a través de la **evidencia fotográfica N°35**, en particular las imágenes 78 a 91.

Fundamental resultó el relato del testigo **Cristian Miranda Miranda**, quien narró las circunstancias en que se encontró conduciendo su furgón marca Fiat, placa patente KKTG33, la noche del 21 de octubre de 2019 por la carretera 5 Sur desde el sur hacia Santiago, quedando detenido por el corte de la carretera a la altura del acceso sur a Curicó, junto a muchos otros vehículos, describiendo la intervención de militares que venían en una camioneta y un bus para intentar desbloquear el camino, lo que le permite avanzar hasta quedar en la primera línea antes de la barricada, momento en que observa a unos jóvenes que le piden dinero y, enseguida, escucha unos disparos, ve cómo saltaban chispas delante de él en el pavimento, dos de los cuales impactan en la carrocería de su móvil, escuchando que había alguien herido, avanzando nuevamente los vehículos y saliendo del lugar, enterándose más tarde que había muerto alguien allí y viendo imágenes en que reconoció a uno de los muchachos que había visto. Este testimonio, dotado de amplia

credibilidad según lo razonado, fue importante, porque permitió vincular los disparos al furgón en que transitaba esa noche, con aquel que hirió y en definitiva dio muerte a Uribe Antipani. Añadió que pudo recuperar los dos trozos de proyectil balístico de su vehículo y los entregó a la policía cuando fueron a entrevistarlo y a examinar el móvil.

Finalmente, el **perito fotógrafo de la PDI Ricardo Andrés Enríquez Fuenzalida**, a su vez, expuso su labor el día de la diligencia de reconstitución de escena realizada en febrero de 2020, en la que participaron, entre otros, el testigo Miranda y el perito Cáceres, efectuando una fijación fotográfica de la versión de aquel y las mediciones y cálculos efectuados por Cáceres, reconociendo las imágenes en que lo plasmó, las que corresponden a la **evidencia fotográfica N°35**, en particular las imágenes 73 a 91.

Según esas pruebas, entonces, pudo demostrarse que existió una acción realizada por el acusado Fuenzalida Calvo consistente en disparar a lo menos en dos oportunidades su pistola hacia el sector en que se encontraba el vehículo aludido, presumiblemente con dolo eventual, en el contexto de dirigir sus disparos contra los manifestantes que se encontraban en el lugar. Se acreditó de esta manera el primer requisito del delito, antes enunciado.

A su turno, respecto del segundo elemento, los impactos, como describieron los testigos Veloso y Miranda y como estos jueces apreciamos al exhibirse las imágenes 89, 90 y 91 de la citada evidencia fotográfica N°35, provocaron daños evidentes en el vehículo, los que si bien no fueron cuantificados, pueden estimarse razonablemente que superan el equivalente de una unidad tributaria mensual, conforme a las máximas de la experiencia, debiendo, por tanto, encuadrarse esta conducta en la norma residual que castiga el delito de daños, ya indicada.

A su vez, de la misma prueba surgió una inequívoca y necesaria causalidad entre los disparos y los daños, sin que estos últimos pudieran explicarse de otro modo o por una causa distinta a la actividad del ejecutor, por ejemplo, por los disparos de los funcionarios militares que estuvieron en el sitio del suceso momentos antes, posibilidad que aun la

Defensa no levantó. Rija aquí lo señalado al analizar ese aspecto en el capítulo anterior.

Por lo tanto, cada uno de los presupuestos fácticos invocados y todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal fueron acreditados.

DÉCIMO CUARTO: Hechos acreditados, calificación jurídica y participación del encartado. Con el mérito entonces de toda la prueba aportada al juicio, incluida la versión del acusado, debidamente analizada, apreciada en su conjunto y libremente por este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, sin contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, pudo tenerse por suficientemente establecida, más allá de toda duda razonable, la siguiente relación de hechos:

*El día 21 de octubre de 2019, alrededor de las 22:00 horas, **el acusado Francisco José Fuenzalida Calvo** se desplazó por diversas arterias de la ciudad de Curicó en su vehículo camioneta, marca Toyota, modelo Hi Lux, color rojo, placa patente HVLD26, portando y manteniendo en su poder un arma de fuego del tipo pistola marca CZ, modelo 85, serie N°A2773, calibre 9 milímetros, junto con cargadores y municiones calibre 9 milímetros. En ese contexto, el acusado, al llegar a las inmediaciones de la Avenida Manso de Velasco con calles Merced y Estado de Curicó, realizó diversos disparos directamente en contra de grupos de personas que se encontraban en el lugar, a raíz de lo cual resultaron lesionadas las siguientes víctimas: **Ricardo Andrés Solís Opazo**, quien resultó con una herida por arma de fuego en el antebrazo izquierdo, con entrada y salida de proyectil, que le provocó fractura conminuta de radio izquierdo y lesión del nervio mediano del lado izquierdo, con secuela funcional; **Nicolás Francisco Espinoza Rojas**, quien resultó con una herida por arma de fuego en el muslo izquierdo, con entrada y salida de proyectil, que le provocó fractura conminuta de la diáfisis del fémur izquierdo, con secuela funcional; y **Miguel Andrés Ayala Salinas**, quien resultó con herida por arma de fuego en la espalda, en zona infra escapular izquierda, con entrada y sin salida de proyectil.*

*Momentos más tarde, alrededor de las 22:30 horas, **el acusado** se desplazó en la camioneta señalada por la Alameda Manso de Velasco de Curicó en dirección al sur, ingresando a la carretera*

5 Sur hacia el norte, donde el imputado, portando y manteniendo en su poder el arma de fuego del tipo pistola marca CZ, ya descrita, y municiones calibre 9 milímetros, efectuó varios disparos a las personas y vehículos que se encontraban en el lugar con motivo de manifestaciones ahí existentes, impactando uno de los disparos realizados a la víctima **José Miguel Uribe Antipani**, provocándole una herida penetrante en la cavidad torácica por proyectil de arma de fuego, con salida de proyectil, que le produjo heridas lacerantes y transfixiantes en diversos órganos, incluido el corazón, lo que le ocasionó una anemia aguda que desencadenó su muerte momentos más tarde.

Además, los disparos efectuados por el acusado provocaron daños en el vehículo tipo furgón, marca Fiat, modelo Doblo, color Blanco, placa patente KKTG33, conducido por Cristian Humberto Miranda Miranda, perteneciente a la empresa Lizcal S.A., el que se encontraba detenido en la calzada, siendo alcanzado en el costado derecho por dos de esos disparos realizados por el acusado. Tales daños se avaluaron en una suma superior a una unidad tributaria mensual.

Luego, el acusado se retiró a su domicilio particular ubicado en camino a Los Cristales, kilómetro 0.8, sector de Zapallar de la comuna de Curicó, lugar hasta donde llegó la Policía de Investigaciones durante la madrugada ya del día siguiente, 22 de octubre, oportunidad en que Fuenzalida Calvo les entregó la pistola marca CZ, ya descrita, junto a dos cargadores y cinco municiones calibre 9 milímetros; y un arma de fuego del tipo fusil, calibre 7x57 milímetros, marca Máuser, modelo 1912, serie 69148, la que mantenía en su poder desde el año 2008. Dichas armas se encontraban aptas para el disparo. Fuenzalida Calvo mantenía en su poder ambas armas de fuego, junto a las municiones indicadas, sin tenerlas inscritas a su nombre y sin los permisos respectivos para el porte y tenencia de esas armas de fuego y municiones.

El día 26 de octubre de 2019, en horas de la tarde, siendo alrededor de las 13:30 horas, oficiales de la Policía de Investigaciones incautaron desde el domicilio de Fuenzalida Calvo, ya señalado, 240 cartuchos calibre 7 milímetros y 10 cartuchos 7 x 57 milímetros, respecto de los cuales no mantenía las autorizaciones respectivas.

Tales presupuestos fácticos se apreciaron suficientemente congruentes con la acusación del Ministerio Público y acusación particular, no obstante algunos cambios

accesorios ya sea para una mejor redacción o precisión que se definieron como resultado de la prueba brindada en el juicio.

En definitiva y como se anticipó, estos hechos asentados configuraron a juicio del Tribunal **los siguientes delitos:**

1° Tres homicidios simples, en grado de frustrados, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 en relación al artículo 7 inciso segundo del Código Penal, cometidos, respectivamente, en las personas de Ricardo Andrés Solís Opazo, Nicolás Francisco Espinoza Rojas y Miguel Andrés Ayala Salinas.

2° Homicidio simple, en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, cometido en la persona de José Miguel Uribe Antipani.

3° Porte ilegal de arma de fuego y municiones, en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 9 en relación a los artículos 2, 4, 5 y 17B de la Ley 17.798 sobre control de armas y explosivos, recaído en un arma de fuego del tipo pistola, marca CZ, calibre 9 milímetros, serie A2773, más dos cargadores y cinco cartuchos de munición compatible.

4° Tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley 17.798, en su texto vigente al año 2008, recaído en un arma de fuego del tipo fusil, calibre 7x57 milímetros, marca Máuser, modelo 1912, serie 69148, más 250 cartuchos de munición compatible. Y,

5° Daños simples, del artículo 487 del Código Penal, perpetrado en perjuicio de la empresa Lizcal S.A.

Conforme a la prueba y a todo lo razonado se estableció también, más allá de toda duda razonable y venciendo la presunción de inocencia que ampara a todo acusado, la participación dolosa y culpable del encausado **Francisco José Fuenzalida Calvo**, en calidad de **autor ejecutor, inmediato y directo**, de conformidad a lo establecido en el

artículo 15 N°1 del Código Penal, pues fue él quien ejecutó materialmente las acciones correspondientes a cada delito.

DÉCIMO QUINTO: Alegación de absolución de la Defensa por inimputabilidad del acusado. La Defensa solicitó la absolución de su representando invocando su inimputabilidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 N°1 del Código Penal. Para ello se fundó en diversos antecedentes de la vida del imputado, sus relaciones familiares, sus negocios y su historia médica siquiátrica, marcada por un trastorno afectivo bipolar de antigua data.

Al respecto, primeramente aportó los testimonios de su amigo **Mario Undurraga Castelblanco**, sus hermanos **Óscar Gonzalo y Óscar Gastón Fuenzalida Calvo**, su hija **Josefina Fuenzalida González** y **José Pablo Toro**, con el cual efectuó negocios en el rubro de movimiento de tierras con maquinaria pesada por varios años, todos los que dieron cuenta de aquellos aspectos, así como de su estado anímico y características de personalidad, los que, en términos generales, no fueron mayormente controvertidos por los acusadores, ni desvirtuados por prueba en contrario.

Como síntesis de esos relatos podemos señalar que coincidieron en que:

< Francisco José Fuenzalida Calvo tenía 60 años de edad al momento de los hechos ocurridos la noche del 21 al 22 de octubre de 2019, es de profesión técnico mecánico, se casó con María Josefina González, con quien tuvo 5 hijos, incluidos cuatrillizos, uno de ellos fallecido a los 7 años, siendo una persona que nunca antes de los hechos había sido condenada por delito alguno;

< Desde hace mucho tiempo él tenía épocas depresivas y otras de mucha actividad y buen ánimo, siendo diagnosticado con una enfermedad mental, un trastorno afectivo bipolar, lo que originó que a lo menos durante los últimos 10 años recibiera atención siquiátrica particular en Santiago, además del respectivo tratamiento farmacológico. A mediados de 2019 y debido a dificultades económicas que padecía, se cambió al sistema público del GES en Curicó, donde a partir de septiembre de ese año empezó a tratarse con

otro médico, el que le cambió los fármacos que tomaba por bioequivalentes, los que él dejó de consumir los primeros días de octubre del mismo año porque consideró que le hacían mal;

< Llegó a tener 4 empresas, sin embargo y producto de decisiones erróneas, tuvo grandes pérdidas económicas y en los últimos años solo funcionaba una de ellas, Fullmaq, dedicada al arriendo de maquinarias para el movimiento de tierras, la que contaba con máquinas en general viejas y que presentaban problemas, prestando trabajos principalmente a una empresa agrícola ubicada en San Javier;

< Uno de sus pasatiempos tenía que ver con la cercanía a la institución de Carabineros, ya que deseaba integrarse a una agrupación de amigos de Carabineros, participando en reuniones y actividades de beneficencia hacia el personal;

< Tenía grandes gastos producto de deudas anteriores y de las necesidades familiares y de los estudios que cursaban algunos de sus hijos;

< En ese escenario padecía frecuentes cambios de ánimo, irritabilidad e impulsividad, potenciados por su consumo de alcohol, afectando sus relaciones familiares, especialmente con su cónyuge, con quien tuvo múltiples discusiones y problemas que le hacían prever una separación;

< En ese contexto, con una situación económica y sobre todo el porvenir de su empresa siendo motivo de permanente angustia para él, surgió la posibilidad de un negocio que le podría dar un giro a su situación, cuando su principal cliente, Agrícola HN, le exigió para la renovación del contrato que la unía con su empresa, a fin de continuar con un proyecto a largo plazo muy conveniente, que adquiriera máquinas excavadoras nuevas, consiguiendo, después de intensas negociaciones y alta tensión por las trabas para obtener financiamiento, asesorado por su hermano Gastón, un acuerdo con su cliente y empresas de leasing para comprar 2 excavadoras, por un valor cercano a los \$200.000.000, disponiendo además de sus otras máquinas antiguas. Esperaba que con el pago que recibiría por sus servicios podría pagar el leasing, servir la deuda histórica que tenía y

financiar sus otros gastos. Sin embargo, las máquinas nuevas no llegaron en la fecha convenida con el cliente, siendo el último plazo el lunes 21 de octubre de 2019, oportunidad en que las dificultades derivadas del denominado estallido social, con cortes de carreteras, le impidieron que las máquinas llegaran a la obra, frente a lo cual el gerente de la empresa que lo contrataba, José Pablo Toro, lo llamó ese día para decirle que el negocio se cancelaba; y,

< Con ese estado de agobio llegó a su casa la tarde de ese día 21 de octubre, donde tuvo una nueva discusión con su esposa y recibió noticias tanto por redes sociales como por un amigo acerca de los violentos disturbios que se producían en todo el país y en Curicó, donde habían saqueado un supermercado y quemado un peaje, existiendo el rumor de que una turba de gente avanzaba hacia el sector de Zapallar, donde él vivía, con el fin de saquear y quemar las casas del sector. Además, veía cómo se atacaba y agredía injustamente a Carabineros, por los que sentía especial afecto.

Este conjunto de premisas, fueron afirmadas en su declaración por el imputado y en gran medida se corroboraron con dichos testimonios, e incluso, parcialmente, por el resto de la prueba, llevando a demostrarlas, ratificando lo planteado por la Defensa. Ellas articularon, en palabras de su defensor, una tormenta perfecta que desencadenó que esa noche del 21 de octubre de 2019 su representado saliera de su casa en su camioneta y portando una pistola con municiones, pensando que debía hacer algo.

Además, la Defensa aportó los peritajes realizados por la **médico siquiatra Vilma Ortiz Torres** y la **sicóloga Susana Pavié Cid**, quienes señalaron trabajar desde hace años como funcionarias públicas junto a un equipo de profesionales en el Hospital Siquiátrico Dr. José Horvitz Barack de Santiago, precisamente en la unidad de evaluación mental de imputados, teniendo una basta experiencia en la materia, y que realizaron una evaluación en forma privada del imputado Fuenzalida Calvo. Para ello, Ortiz tuvo una primera entrevista con él el 19 de enero de 2020 y luego, junto a Pavié, otra el 1 de marzo del mismo año, ambas en el CCP de Parral. Además, recabaron información proporcionada por su madre María Cristina Calvo y su esposa Josefina González, además de tener a la

vista antecedentes policiales y certificados de su historial médico. Ortiz particularmente, refirió en detalle esos antecedentes, narrados por Fuenzalida Calvo y en algunos puntos ratificados por los otros relatos y antecedentes, destacando las características de su personalidad, el historial psiquiátrico y el consumo recurrente de alcohol, entre otros aspectos de su vida. Con todos esos elementos, concluyeron en términos generales que Francisco Fuenzalida Calvo tenía un trastorno afectivo bipolar tipo 1 y un trastorno por uso de alcohol, en abstinencia al momento de la evaluación, agregando que al momento de los hechos se encontraba sicótico (invadido por los afectos y el miedo, explicó Pavié), en una fase maniaca de su enfermedad mental, es decir, descompensado de su trastorno afectivo bipolar, lo que implicaba a su vez, que tenía su juicio de realidad alterado, siendo incapaz de diferenciar lo lícito de lo ilícito, ni autodeterminarse conforme a su voluntad. Ortiz profundizó en la descripción de aquel diagnóstico, explicando, por ejemplo, que el trastorno afectivo bipolar estaba caracterizado por elementos maníacos y depresivos, (al momento de la evaluación aún estaba hipomaniaco), el que se desestabilizó por el cambio de los medicamentos, y que las circunstancias externas le implicaron al peritado un importante estrés, siendo gatillantes de su reacción. En su caso, no tenía afectada su inteligencia, pero sí su voluntad.

El defensor postuló que, con el mérito de lo expuesto en el juicio por los testigos indicados, se habían ratificado los presupuestos fácticos que consideraron las peritas en su estudio, y que por tanto sus conclusiones no dejaban lugar a dudas respecto a sustentar su solicitud de que se reconociera la inimputabilidad de su representado en los hechos.

Sin embargo, el Tribunal desechó esa tesis. Se atendió, en primer lugar, a que se contó, de contrario, con la prueba pericial aportada por la Fiscalía, consistente en lo informado por el **psicólogo forense Jonathan Valdés Estay** y la **psiquiatra forense María José Villena Cabrera**, quienes coincidieron en describir el examen que realizaron al encausado, en septiembre de 2020, y para lo cual mantuvieron con él tres entrevistas. Además, revisaron los antecedentes de la carpeta judicial, donde constaban, entre otras piezas, los informes periciales efectuados por las profesionales de la Defensa. También

entrevistaron a los médicos siquiátras Barros y Barrantes, que habían tratado a Fuenzalida Calvo en Santiago, por casi 10 años, y en Curicó, los últimos meses, respectivamente, y a los paramédicos de los centros penitenciarios de Curicó y Parral donde había permanecido el imputado a esa fecha, antecedentes últimos que expuso en detalle **Claudia Cáceres Fuenzalida**, perita social del departamento de salud mental del Servicio Médico Legal de Rancagua, a quien se le encomendó tales entrevistas. Asimismo, Valdés y Villena explicaron que practicaron distintos test o aplicación de fuentes instrumentales al peritado, que descartaron simulación, daño orgánico cerebral y problemas de índole cognitivo, además de evidencias sus características de personalidad.

Con todo ello, concluyeron de manera conteste que Francisco Fuenzalida Calvo, aunque tiene un trastorno afectivo bipolar, y que confluyeron en su conducta ciertas características de su personalidad unidas a factores ambientales, desde el punto de vista médico legal no estuvo impedido de conocer y comprender su conducta en los hechos y, tampoco, estuvo incapacitado, de modo significativo, para autodeterminarse. Sin perjuicio de ello, también refirieron que su capacidad volitiva estaba levemente afectada, siendo precisa Villena en que su imputabilidad estaba disminuida.

Para estos sentenciadores la prueba aportada por la Defensa sobre los padecimientos siquiátricos de su representado al momento de los hechos no brindó un aval certero a su pretensión, apreciándose que las pericias expuestas por la siquiátra Ortiz y la psicóloga Pavié adolecieron de un claro sesgo, al reconocer, especialmente la primera, que, además de los certificados médicos aludidos, fue importante la información que recabaron de los dos familiares del acusado, ya que les sirvió para corroborar lo que él decía, sin haber acudido a otras fuentes de información más objetivas, como sí lo hicieron los profesionales del Servicio Médico Legal, quienes incluso tuvieron a la vista las pericias de aquellas.

Resultó manifiesto que en su estudio pudieron recabar más información, por ejemplo, haciéndose cargo de lo que contenía la carpeta investigativa, relativo a las personas que interactuaron con el imputado esa jornada, como sí lo hicieron Villena y

Valdés. Ortiz, en cambio, pese a que señaló haber revisado después de su informe lo que estos últimos hicieron, prefirió no pronunciarse al respecto, sobre todo en relación a las manifestaciones de la manía que ella visualizó y los otros no, lo que a todas luces dejó en entredicho sus propias conclusiones. Tampoco se aportó un metaperitaje a lo concluido por estos últimos. A ello hay que añadir que, como bien apuntó el abogado querellante señor Gajardo, efectivamente se constató una diferencia relevante entre lo declarado en el juicio y las conclusiones anotadas en su informe, lo que le restó mérito a su apreciación.

Por su lado, el estudio de Villena y Valdés pareció más sólido y bien fundado, pues efectuó un análisis de los hechos narrados por el propio imputado a la luz de los fenómenos psiquiátricos en estudio, descartando que, si cursaba una fase maniaca, pudiera sentir el miedo que señaló, comportarse de modo prudente al disparar solo hacia el cielo para disolver a los manifestantes, mostrar un respeto por las normas sociales y la autoridad cuando se detiene frente a la luz roja de un semáforo -lo que se reforzó al apreciar en el juicio las grabaciones de las cámaras de seguridad incorporadas a través de la exhibición de la evidencia fotográfica y, especialmente, la evidencia N°28 consistente en el video secuencia elaborado por Jorge Guzmán Martínez, donde en su minuto 7:35 se observa una situación similar- y luego atiende a lo expuesto por carabineros en cuanto a regresar a su casa -como también se verificó al escuchar en el juicio al sargento Sergio Osses y el comunicador Dani Bravo-, y, por último, cuando realiza una conducta de autocontrol al llegar a su hogar, verificando que sus hijas estaban bien y medicándose para conciliar el sueño; todo lo que apreciaron completamente incoherente e incompatible con ese estado de alteración mental.

Lo propio advertimos los jueces sobre su desenvolvimiento aquella noche, conduciendo su camioneta por distintos lugares de la comuna y, especialmente, disparando en distintas oportunidades y lugares, al punto que se estableció probatoriamente que así hirió a cuatro personas, desencadenando la muerte de una, conducta que él jamás reconoció y que las peritas de la Defensa no consideraron, pues partieron de la base de lo que él decía era la verdad.

Finalmente, pudiendo extenderse este análisis a muchos otros aspectos, pero siendo suficiente lo hasta aquí precisado, diremos que llamó la atención lo concluido por las peritas de la Defensa respecto al trastorno por uso de alcohol de Fuenzalida Calvo, aspecto no profundizado, aunque presente en su historia conforme a las mismas profesionales, siendo algo gravitante como para ser una de sus dos conclusiones principales (destacada con negrilla en su informe escrito, según fue patente en el ejercicio de confrontación respectivo), lo que podemos vincular con la información aportada respecto a que esa noche, antes de salir en su camioneta hacia Curicó, Fuenzalida Calvo precisamente consumió alcohol. En el mismo sentido, se insistió mucho por la Defensa y el propio acusado en su declaración, la incidencia en su descompensación el cambio de médico tratante, aceptando una nueva farmacología bioequivalente (que como explicaron las doctoras Villena y Ortiz no alteraba el contenido de la farmacología prescrita) y dejado posteriormente de tomarla. Pero, ambos factores, consumo de alcohol y abandono de medicación, se apreciaron como antecedentes que no pueden elevarse a la categoría de un argumento para avalar su afectación síquica, puesto que normativamente se exige que la privación de razón sea por causas independientes de la voluntad del agente, como se desprende del claro tenor del artículo 10 N°1 del Código Penal.

Se rechazó por todo lo expuesto la inimputabilidad alegada.

DÉCIMO SEXTO: Modificadorias de responsabilidad penal. En la acusación del Ministerio Público y acusación particular no se esgrimieron circunstancias agravantes de responsabilidad penal sobre las que pronunciarse, y se reconoció, por su parte, como única circunstancia atenuante a favor de Fuenzalida Calvo, su **irreproachable conducta anterior, establecida en el artículo 11 N°6 del Código Penal**, la que por cierto la Defensa también sostuvo y este Tribunal reconocerá, estimando que, conforme al **extracto de filiación y antecedentes** del acusado que aportó el fiscal, exento de anotaciones, resultó probado su supuesto fundamental, cual es que el encartado no fue condenado con anterioridad a los hechos de esta sentencia por delito alguno.

Adicionalmente, como se señaló en el veredicto, estos sentenciadores ya reconocimos a favor del imputado la **circunstancia atenuante de eximente incompleta** prevista en el **artículo 11 N°1 en relación al 10 N°1 del código punitivo**, conforme a lo concluido por los mismos profesionales del Servicio Médico Legal que evaluaron al imputado, el sicólogo forense Jonathan Valdés Estay y la siquiatria forense María José Villena Cabrera, quienes coincidieron en que concurre en este caso una imputabilidad disminuida, por la confluencia en la conducta del acusado, al momento de los hechos, de una afectación en su capacidad volitiva, determinada por su patología del ánimo, cual es el trastorno afectivo bipolar diagnosticado y con tratamiento hacía varios años; además de ciertos caracteres de su personalidad, como su impulsividad, irritabilidad y narcicismo, y los factores estresores crónicos y agudos descritos por Villena. En sus palabras, Fuenzalida Calvo tenía terreno predispuesto para la descompensación de su patología del ánimo, pues se le suman los estresores relacionados con el negocio que fracasa y la preocupación por el daño a sus bienes y su familia.

Esta opinión vino a sumarse a la manifestada por las peritas de la Defensa, que apuntaban a que la afectación de esos factores era mucho más intensa y comprometía absolutamente su imputabilidad.

No ahondaremos nuevamente en el detalle de estas pruebas, para evitar repeticiones, remitiéndonos a lo ya descrito a propósito de la tesis principal de la Defensa, solo reiterando que estos sentenciadores apreciamos que, conforme a la prueba experta rendida en el juicio, Fuenzalida Calvo, aquella noche del 21 de octubre de 2019, tuvo afectada parcialmente su capacidad volitiva y con ello su capacidad para conducirse conforme a derecho y autodeterminarse completamente de acuerdo a su voluntad.

La negativa a reconocer dicha atenuante por parte de la Fiscalía y los otros acusadores no fue atendible, al no basarse en obstáculos razonables y verificables con la prueba, puesto que, como hemos razonado, y compartiendo lo expuesto por el defensor señor González en este punto, no había una tercera alternativa: o se acogía la eximente o, rechazándose, se debía acoger la atenuante por eximente incompleta, ya que fue la propia

prueba científica brindada por el acusador oficial la que condujo irrefutablemente a esta última posibilidad.

Otro debate intenso y relacionado a ello fue el valor que debía darse a esta mitigante. Para la Fiscalía, debía ser el de una atenuante genérica, la del artículo 11 N°1 del Código Penal a secas, siendo improcedente aplicar lo dispuesto en el artículo 73 del mismo código, que fue el planteamiento de la Defensa. Al respecto, efectivamente puede apreciarse de esta última norma que el valor privilegiado que otorga está dirigido a aquellas situaciones en *que el hecho no fuere del todo excusable por falta de alguno de los requisitos que se exigen para eximir de responsabilidad criminal en los respectivos casos de que trata el art. 10, siempre que concurra el mayor número de ellos*. Es decir, de su tenor literal se desprende que la eximente incompleta que puede dar lugar a aplicar esta importante ventaja para el condenado debe ser alguna de aquellas que exigen explícitamente requisitos, idea que se refuerza conforme a la misma norma al señalar que la rebaja en uno, dos o tres grados que prevé, se determine *atendido el número y entidad de los requisitos que falten o concurren*. Entonces, por una interpretación literal de esta norma, los acusadores negaron que pudiera aplicarse a la eximente del artículo 10 N°1 cuando no concurriera completamente.

Curiosamente, eso sí, al indicar el fiscal que solo podía reconocérsele el valor de una atenuante genérica a la imputabilidad disminuida, conforme al artículo 11 N°1, olvidó que esa norma también alude a las eximentes que señalan requisitos, contrasentido que restó valor a su crítica, pues, en su interpretación, en realidad no podría haber tenido valor como atenuante alguna, lo que por cierto no pareció razonable.

Más bien, como planteó la Defensa, esta materia ha sido objeto de tratamiento doctrinal y decisiones jurisprudenciales desde hace mucho, asentándose el criterio de que si bien la inimputabilidad por enajenación mental del artículo 10 N°1 del código de castigo no contiene requisitos, sí es posible concebir graduaciones en su intensidad, es decir, admite división sistemática o moral, de modo que es posible extenderle la aplicación de los preceptos indicados, especialmente la institución de la atenuante privilegiada. Esa

posibilidad, por lo demás, parece evidente y razonable, pues, como pudimos advertir de las exposiciones de los cuatro peritos aludidos, Villena y Valdés, por un lado, Ortiz y Pavié, por el otro, claramente el análisis de la capacidad cognoscitiva y volitiva de un sujeto permite visualizar que, aunque no estén completamente comprometidas frente a ciertos hechos, pueden encontrarse parcialmente afectadas, siendo la cuestión determinar si esa afectación es significativa o no, lo que queda entregado a la valoración que los jueces hagamos de las opiniones expertas y que en nuestro caso llevó a una respuesta afirmativa. En ese marco, y conociendo la jurisprudencia reiterada sobre el punto, pareció que más bien el tratamiento de ello es siempre como atenuante privilegiada y nunca genérico, opción por la que estos magistrados nos inclinamos.

Se acogió en esta forma la petición de la Defensa y se reconocerá esta atenuante privilegiada.

Por otra parte, la Defensa, planteó en la audiencia de determinación de penas que a su juicio concurría a favor de su representado, además, la atenuante del **artículo 11 N°9 del estatuto de castigo**, esta es, la **colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos**, respecto de todos los delitos materia de castigo. Basó esta petición en la actitud que adoptó el imputado desde la misma noche en que se desarrollaron los hechos, según lo acreditado a través del testimonio de la funcionaria policial Marcela Sánchez y el acta con su declaración prestada esa jornada, que aportó al efecto, resaltando la autorización que otorgó a la policía para la entrada y registro a su domicilio sin orden judicial, su renuncia a su derecho a guardar silencio y a ser asistido de un abogado, prestando declaración, el hecho que entregó su pistola usada en los disparos, así como dos cargadores con 5 cartuchos, 4 vainas correspondientes a cartuchos percutidos, el fusil Máuser, su traslado voluntario al cuartel policial donde estuvo alrededor de 3 horas hasta que declara ante el fiscal terminando a las 9:20, y su permanencia hasta que a las 9:30 se le intimó la orden de detención. En su concepto, esos aspectos cumplen el requisito de esencialidad de la colaboración, especialmente al entregar la pistola que permitió hacer las pericias balísticas para comparar los proyectiles encontrados en la camioneta.

Los acusadores, por su lado, se opusieron tenazmente, argumentando que se levantó una tesis alternativa de absolución y, en todo caso, la colaboración no fue sustancial, ya que, en su concepto, la prueba de cargo bastaba para tener por acreditados los hechos de la acusación. El querellante señor Gajardo añadió que el Tribunal debió recurrir a la prueba de presunciones o indicios y Fuenzalida Calvo omitió su presencia en el lugar donde fue herido Uribe Antipani, siendo necesarias pericias y recopilación de múltiples pruebas, que nos tuvieron mucho tiempo en juicio, para situarlo allí, a lo que se suma que su falta de colaboración fue decisiva para que la Fiscalía imputara y mantuviera en prisión preventiva al militar que disparó su arma de fuego en el mismo lugar.

Al respecto, y si bien los presupuestos que indicó el defensor resultaron en gran medida efectivos, como se desprendió de los antecedentes probatorios expuestos y varios otros recibidos en el juicio -siendo absolutamente improcedente la argumentación del querellante señor Herrera en torno a que el artículo 334 del Código Procesal Penal impediría incorporar la declaración policial del imputado, pues esa norma recoge una garantía suya, a la que la Defensa puede renunciar, como lo hizo- la valoración de los mismos llevó a resultados diversos.

Los jueces consideramos aquí que, según la norma citada, es fundamental para acoger dicha atenuante que no solo se haya prestado una colaboración que ayude a esclarecer los hechos, sino que ella sea sustantiva o esencial, aunque no al punto de suplir la prueba de cargo. Debimos hacer, entonces, un estudio diferenciado de los hechos materia del juicio, comprobando que la actividad del acusado, especialmente la misma noche de los sucesos, resultó ser una efectiva colaboración en varios sentidos, aunque en otros tendió a la confusión de las diligencias del persecutor oficial y las policías, exigiendo el máximo despliegue de recursos y personal para recabar múltiples fuentes informativas. En efecto, cierto es que Fuenzalida Calvo admitió esa misma noche ante los funcionarios de la PDI que acudieron a su domicilio, y luego al prestar declaración ante el fiscal, como testificó Marcela Sánchez Torrejón, que había transitado en su camioneta por el sector de la Alameda de Curicó y efectuado 4 o 5 disparos en la esquina de esa avenida con Merced,

por las motivaciones que indicó, y, también, que en esa oportunidad entregó voluntariamente su pistola CZ, el fusil Máuser y demás elementos referidos, lo que, entre otros aspectos, permitió la realización de las pericias balísticas tan importantes para su conexión con los disparos que afectaron a los lesionados Solís, Espinoza, Ayala. Tales aportes se apreciaron trascendentes para esclarecer lo allí ocurrido y, en suma, que él fue quien disparó a estas tres personas, más allá de la postura de su Defensa de ponerlo en duda. Lo mismo puede extenderse a los delitos vinculados a las armas y municiones, que se tuvieron por establecidos claramente a partir de esa misma jornada, resultando determinante la entrega voluntaria de tales elementos. Sin embargo, respecto de los hechos acaecidos en el acceso sur de la carretera panamericana a Curicó, donde fue demostrado que Fuenzalida Calvo disparó nuevamente su pistola, impactando en Uribe Antipani y al furgón conducido por el testigo Cristian Miranda, si bien puede valorarse la entrega de su pistola, permitiendo las pericias comparativas, se apreció que el acusado omitió en su detallado relato, tanto en el juicio como ante la policía, cualquier referencia a su presencia en ese sitio del suceso, y por ende su intervención o la de su arma en tales disparos, al punto de sostener su Defensa su absolución por falta de participación en esos delitos. Como se dijo, esa omisión resultó gravitante, pues no solo exigió un esfuerzo muy importante en los órganos persecutores, sino llevó a que el militar originalmente vinculado al hecho por haber disparado su fusil en ese lugar fuera imputado injustamente, permaneciendo casi dos meses en prisión preventiva. Por tanto, el valor de la colaboración prestada en este aspecto de la acusación fue relativo, no alcanzando la sustancialidad exigida para que configurara la mitigante solicitada.

Recordemos que esta atenuante se encuentra establecida por razones de política criminal, para premiar la actitud de un imputado y su defensa que facilita la actividad investigativa de las policías y probatoria del Estado en el juicio respectivo, ahorrando recursos al erario público, por lo que la sustancialidad puede ponderarse a la luz de si se advierte o no alguna ganancia en ese sentido.

Se acogerá, por tanto, la solicitud de la Defensa en cuanto a reconocer la concurrencia de la atenuante referida en torno a los hechos ocurridos en la Alameda de Curicó y que constituyeron los tres delitos de homicidio frustrado, y, asimismo, respecto de los delitos vinculados al porte y tenencia de armas de fuego y municiones; no así respecto del delito de homicidio consumado que implicó la lamentable muerte de José Uribe Antipani ni en los daños que afectaron al vehículo conducido por Cristian Miranda.

No se alegaron ni establecieron otras circunstancias atenuantes ni agravantes que analizar.

DÉCIMO SÉPTIMO: Determinación de las penas. Respecto de la determinación de las diversas penas a imponer al encartado, cabe distinguir lo siguiente:

1) En cuanto a los delitos de homicidio.

Como se ha concluido, Fuenzalida Calvo resultó responsable de haber cometido en calidad de autor tres delitos de homicidio simple en grado de frustrado y uno en carácter de consumado, ilícito que de acuerdo con el artículo 391 N°2 del Código Penal tiene aparejada como pena principal la de presidio mayor en su grado medio, para cada uno.

Conforme al artículo 50 del mismo estatuto, esa es la pena que debe aplicarse al homicidio consumado, pero respecto de los tres homicidios frustrados, acorde al artículo 51 de ese mismo código, corresponde que se imponga la pena inmediatamente inferior en un grado, es decir, la de presidio mayor en su grado mínimo, por cada uno.

A su vez, como ya vimos, concurre en todos los casos la atenuante privilegiada señalada, por cuyo mérito se efectuará otra rebaja en un grado, alcanzando una pena situada en el presidio mayor en su grado mínimo por el homicidio consumado y tres penas de presidio menor en su grado máximo por los tres homicidios frustrados.

Por su parte, como respecto de los homicidios frustrados se reconocieron otras dos atenuantes genéricas, se ejercerá la facultad prevista en el artículo 67 inciso cuarto de ese compendio normativo, que autoriza rebajar la pena en uno, dos o tres grados, optándose

por hacerlo en uno y no más, dada la entidad que se apreció a ambas minorantes, quedando en los tres casos la pena en el presidio menor en su grado medio; en tanto que, respecto del homicidio simple, al concurrir solo una atenuante y de acuerdo a lo que señala el mismo artículo 67, esta vez en su inciso segundo, se radicará la sanción en el *minimum* del presidio mayor en su grado mínimo.

Así pues, el Tribunal se encuentra facultado para regular el castigo de cada homicidio frustrado en una pena de presidio menor en su grado medio, que comprende entre los 541 días y los 3 años, y el del homicidio consumado en el *minimum* del presidio mayor en su grado mínimo, es decir, entre los 5 años y un día y los 7 años y 180 días.

En este escenario, se apreció lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, estimando ya agotado el efecto de las atenuantes con lo razonado anteriormente, valorando a continuación únicamente la extensión del mal causado con cada uno de estos delitos para llegar a la sanción final. Al respecto, apreció la información que consignamos al mencionar las secuelas que las heridas por proyectil balístico provocaron en cada una de las víctimas sobrevivientes, Solís en su antebrazo izquierdo, que le ha implicado una pérdida de movilidad permanente en ese brazo y mano, restándole capacidad laboral e impidiéndole realizar actividades cotidianas en forma autónoma, lo que además le ha implicado una afectación emocional muy profunda, con pensamientos suicidas recurrentes; Espinoza en su pierna izquierda, con secuelas físicas equivalentes y pérdida de autonomía, además de molestias permanentes; y Ayala, que aun mantiene alojada la bala recibida en su espalda, y sufre limitaciones importantes en su movilidad, privándole de realizar los trabajos que antes hacía y muchas actividades deportivas y cotidianas que le eran normales, como correr y agacharse. Ninguno de esos padecimientos y secuelas es inherente a un homicidio frustrado, pues es concebible que esa fase imperfecta del delito se determine aun sin lesión alguna en las víctimas, de modo que estos perniciosos efectos, claramente, inciden en el aumento del mal del delito y justifican su sanción muy por sobre el mínimo del grado determinado.

Por su parte, respecto de la muerte de Uribe, se apreciaron las consecuencias particulares de este caso, más allá de la sola muerte, cuyo desvalor se recoge en la penalidad mínima que el legislador previó. Aquí, se acreditó que su temprana partida - tenía 24 años, puesto que nació el 2 de septiembre de 1994- no solo acabó con su proyecto individual de vida, sino dejó muchos otros damnificados, entre quienes cabe considerar a su círculo más cercano, por de pronto sus padres, Jaqueline Isabel Antipani Bustamante y Nelson Octavio Uribe Álvarez, su pareja Claudia Belén Pezo Sáez, y, particularmente, su hijo Máximo Baltazar Uribe Pezo, de tan solo un año y 10 meses de edad -todo ello conforme a lo declarado por los mencionados Nelson Uribe y Claudia Pezo y los documentos números 2 y 4 aportados por la parte acusadora particular, correspondientes a los certificados de nacimiento de la víctima y del mencionado menor- a quienes se les privó irreparablemente de su relación cotidiana con un familiar tan cercano y naturalmente importante, lo que aparece incrementado en el caso del hijo, al que también se le impidió de contar con sus cuidados, compañía y afecto, dejándolo, además, sin una fuente esencial de sustento económico, como lo señalaron los mismos testigos. Es decir, las circunstancias personales del fallecido tienen relevancia y no da lo mismo que su muerte haya trascendido tan negativamente a personas cercanas.

Por si fuera poco, en la consideración del mal causado no puede eludirse que el ataque a mansalva realizado por el encausado, implicó que no sólo las víctimas estuvieran expuestas a su actuar delictivo, sino también todos los presentes en los lugares donde ejecutó los disparos, pudiendo haber obrado el azar en perjuicio de quienes estaban por ejemplo junto a Ricardo Solís y Nicolás Espinoza, o dando muerte al propio Miguel Ayala en lugar de que una costilla haya detenido la bala que lo impactó, o el testigo Cristian Miranda que estaba en su furgón cuando recibió dos de los impactos balísticos que, para su fortuna, dieron en parte de la estructura más sólida de su vehículo y no lo alcanzaron; lo que a todas luces hizo más peligroso y reprochable su obrar.

Así las cosas, dentro de los marcos indicados, el Tribunal advirtió justificación en la extensión del mal causado para fijar las sanciones por los cuatro delitos de homicidio en

sus máximos, es decir, en los 3 años por cada uno de los tres homicidios frustrados, y en los 7 años y medio por el homicidio consumado, lo que totaliza 16 años y medio de duración conjunta.

No obstante, tratándose esos cuatro ilícitos de delitos de una misma especie, debió evaluarse si beneficiaba más al encartado sancionarlo conforme al sistema previsto en el artículo 351 del Código Procesal Penal. Conforme a esta norma, el Tribunal puede imponer a todas esas figuras punibles una pena corporal única, aplicando *la pena señalada a aquella que, considerada aisladamente, con las circunstancias del caso, tuviere asignada una pena mayor, aumentándola en uno o dos grados, según fuere el número de los delitos*. En este caso, dado que el homicidio consumado tiene una pena superior a los otros, situada en el presidio mayor en su grado mínimo, según se razonó, correspondería situar la pena única en uno o dos grados por sobre ella. De modo de no hacer ilusorio el ejercicio y considerando que cuatro delitos justifican que tal elevación sea solo de un grado, el castigo unificado alcanzaría el presidio mayor en su grado medio, es decir, entre los 10 años y un día y los 15 años de presidio. Esa solución apareció claramente más favorable a Fuenzalida Calvo, puesto que, aun el tope máximo de ese grado es inferior a la suma de las otras sanciones, razón por la que se la preferirá.

Al así razonar se desechó la propuesta de la fiscalía, efectuada en la audiencia prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, que había pedido imponer una pena única por los tres homicidios frustrados y otra separada por el homicidio consumado, alcanzando los 20 años de presidio, planteamiento que estimamos obedeció a una exégesis equivocada de lo dispuesto en el artículo 351 de ese estatuto, olvidando que los homicidios son, independiente de su grado de ejecución, delitos de una misma especie, debiendo unificarse punitivamente en favor del encausado.

En definitiva, se impondrá al sentenciado por su responsabilidad en los cuatro homicidios la pena única de **15 años de presidio mayor en su grado medio**.

2) En cuanto al delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones:

Como se determinó, Fuenzalida Calvo ha de ser sancionado por su responsabilidad en un delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, previsto y sancionado en el artículo 9 en relación a los artículos 2, 4 y 5 de la Ley 17.798, que se castiga con la pena principal de presidio menor en su grado máximo. Como el encausado tuvo la calidad de autor y el ilícito alcanzó el grado de ejecución consumado, ésta es precisamente la pena a imponerle, conforme al artículo 50 del Código Penal.

Si bien el artículo 17B de la misma ley establece un sistema especial de sanción y determina un marco rígido, en que no es posible rebajar la sanción por la confluencia de 2 o más atenuantes u otras reglas generales, la misma norma contempla situaciones de excepción, en que sí es ello posible. Así ocurre en el caso de darse aplicación al artículo 73 del Código Penal, vale decir, la consideración de una atenuante privilegiada, que fue lo que precisamente se ha resuelto, por lo que dicho marco rígido no es tal en este caso. En consecuencia, siguiendo las reglas generales, la pena referida se disminuirá en un grado por efecto de esa consideración, rebajando a su vez otro grado atendida la incidencia de las otras dos minorantes genéricas determinadas, conforme lo faculta el artículo 67 inciso cuarto de aquel código, con lo que la pena a imponer en este capítulo se sitúa en el presidio menor en su grado mínimo.

Finalmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 del código punitivo y agotado el efecto de las reglas de atenuación indicadas, se dirá que, valorando la extensión del mal causado por el delito, o el nivel de peligro contra la seguridad de las personas provocada con el porte del arma de fuego y municiones realizado por el condenado, pues esta figura punible es de peligro y no de resultado, estos sentenciadores optamos por imponer la pena en su límite superior, es decir, en los **540 días de presidio menor en su grado mínimo**, pena que apareció como la más justa y proporcional al caso concreto.

3) En cuanto al delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones:

Fuenzalida Calvo ha resultado responsable, además, como autor de un delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, que, como se dijo,

corresponde ser sancionado al alero del artículo 9 de la Ley 17.798, en su texto vigente al año 2008, es decir, sin las modificaciones introducidas por la Ley 20.813, que agravaron las penas y fijaron el marco rígido anteriormente comentado. Conforme a esa norma, entonces, y teniendo a la vista lo establecido en el artículo 50 del Código Penal, la pena a imponer es la de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo. Pero el inciso segundo de ese artículo contempla una regla adicional que resulta relevante en este caso: *No obstante, si de los antecedentes o circunstancias del proceso pudiera presumirse fundadamente que la posesión o tenencia de las armas o elementos a que se refiere el inciso anterior estaba destinada a fines distintos que los de alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública o perpetrar otros delitos, se aplicará únicamente la multa de once a cincuenta y siete unidades tributarias mensuales.* En el caso de marras, la prueba brindada en el juicio por uno y otro lado fue unívoca en cuanto a que el fusil Máuser y los 250 cartuchos de munición compatible que se encontraban en poder del acusado, cuando llegó la PDI a su domicilio la madrugada del 22 de octubre de 2019, no habían sido utilizados o siquiera portados por él esa noche o en fecha alguna, desde su adquisición años atrás, y menos que los utilizara para alguno de los fines descritos en dicha norma, sobre todo teniendo en cuenta que así usó su pistola esa jornada, justificándose razonablemente la tenencia de estos elementos solo por el motivo que señaló el acusado, en cuanto a que constituían una reliquia familiar. De este modo, pareció razonable imponerle por este delito únicamente la pena de multa, la que se graduará haciendo una rebaja prudencial de la indicada en la norma transcrita, por efecto tanto de la atenuante privilegiada como de las dos genéricas que se le han reconocido, como lo autoriza por lo demás el artículo 70 del Código Penal, fijándola en **5 unidades tributarias mensuales**.

4) En cuanto al delito de daños simples:

Por último, Fuenzalida Calvo debe ser sancionado por un delito de daños simples del artículo 487 del Código Penal, que se castiga con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Como el encausado tuvo la calidad de autor y el ilícito alcanzó el grado de ejecución consumado, ésta es precisamente la pena a imponerle, conforme al artículo 50 del

Código Penal. Concurren aquí también a su favor la circunstancia atenuante privilegiada del artículo 73 de ese estatuto, que llevará a rebajar en un grado esa pena, arribando así a una sanción de prisión en su grado máximo, dentro de la cual se fijará el límite inferior, **41 días de prisión en su grado máximo**, dando así valor a la mitigante genérica reconocida y apreciando que no hubo en este caso una mayor extensión del mal causado, precisamente porque no se pudo determinar con certeza el alcance de los daños.

5) Por otro lado, se le impondrán al encausado, también, las **penas accesorias generales correspondientes**, a saber, las contempladas en el **artículo 28 del Código Penal respecto de los homicidios**, y las del **artículo 30 del Código Penal** respecto del delito de **porte ilegal de arma de fuego y municiones**, y **daños**, teniendo presente que son de aplicación imperativa para el caso de condena y que la Defensa no levantó cuestionamiento específico al respecto. Y,

6) Por último, respecto del **comiso** solicitado y al que no se opuso la Defensa, se estimó acreditado, sin contrapeso, que las armas de fuego incautadas al acusado y aportadas como evidencia, a saber, la **pistola marca CZ**, calibre 9 milímetros, modelo 85, serie A2773, más dos cargadores y cinco cartuchos de munición compatible; y el **fusil marca Máuser**, calibre 7x57 milímetros, modelo 1912, serie 69148, más 250 cartuchos de munición compatible, constituyen instrumentos con los que se cometieron los delitos establecidos, la primera y sus municiones los homicidios y el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, y el fusil y sus municiones el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, por lo que, atento a lo dispuesto en los artículos 31 del Código Penal, 348 inciso tercero del Código Procesal Penal y 15 de la Ley 17.798, se decretará su comiso. Eso sí, ello es sin perjuicio, en ambos casos, de los cartuchos que se hayan utilizado en las pertinentes pruebas balísticas.

Lo mismo se hará respecto del vehículo tipo **camioneta marca Toyota**, modelo Hilux, color rojo, placa patente única e inscripción HVLD26-7, inscrita en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados a nombre de Francisco Fuenzalida Maquinarias Limitada, la que se probó fue usada por el acusado en su periplo delictual por las calles

aledañas a la Alameda de Curicó y a la carretera norte sur, desde el acceso sur a Curicó hasta el cruce que da acceso a Zapallar, siendo también un instrumento del delito, pues Fuenzalida Calvo se desplazó en ella y disparó desde su interior, en distintos lugares y oportunidades, resultando favorecido por su capacidad de moverse en ella para llegar y salir de cada sector, favoreciendo la eficacia de sus disparos y su inmediata impunidad. Esa conducta no podría haber sido ejecutada sino es con ese medio de transporte.

Por su parte, se consideró que si bien esa camioneta no le pertenecía, en cuanto se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados a nombre de la indicada sociedad, que es una persona jurídica distinta de él, como quedó demostrado con la incorporación del certificado de inscripción respectivo, otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación (documental N°10 del Ministerio Público), esa distinción no tiene incidencia práctica en este caso, pues la sociedad tiene el nombre de Fuenzalida Calvo y él es su socio principal, es su dueño, como admitió al declarar en el juicio, lo que resulta coherente con que haya tenido a su disposición el vehículo para usarlo y tenerlo en su casa, según fue también acreditado, entre otras pruebas con el testimonio de la agente de la PDI Marcela Sánchez Torrejón, de modo tal que puede presumirse fundadamente el conocimiento y autorización de la propietaria respecto del uso ilícito que le dio el acusado.

DÉCIMO OCTAVO: Forma de cumplimiento. En cuanto a la forma de cumplimiento de las penas impuestas, cabe señalar, respecto de las corporales, que atendida su cuantía y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 18.216, **no resulta procedente aplicar alguna de las penas sustitutivas** que contempla dicha normativa, posibilidad que la Defensa, aun para el caso de las penas más bajas que había pedido, no invocó. Por tanto, **las penas corporales impuestas, que totalizan 15 años y 581 días, deberán satisfacerse en forma efectiva**, en orden sucesivo y principiando por la más grave, contándose a partir del día 22 de octubre de 2019, fecha desde la cual Fuenzalida Calvo se encuentra sujeto en forma ininterrumpida a medidas cautelares privativas de libertad en esta causa, según consta del auto de apertura, contabilizando a esta fecha, a

modo referencial, **736 días de abono**, sin perjuicio de los días que sigan acumulándose hasta que inicie el cumplimiento efectivo.

En cuanto a la pena de **multa de 5 UTM**, ella deberá ser pagada a su valor equivalente en moneda de curso legal al día del pago, dentro de los cinco primeros días del mes subsiguiente a aquel en que la presente sentencia quede ejecutoriada, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 49 del Código Penal.

DÉCIMO NOVENO: En cuanto a la Acción Civil. Según lo consignado en el Auto de Apertura y lo sostenido en la audiencia de juicio oral, los abogados **Carlos Gajardo Pinto y Pablo Norambuena Arizábalos**, actuando en representación de **Claudia Belén Pezo Sáez**, y ésta a su vez por representación legal, en calidad de madre, de su hijo menor de edad **Máximo Baltazar Uribe Pezo**, dedujeron a favor de éste demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del acusado Francisco José Fuenzalida Calvo, a fin de que sea condenado a pagarle los perjuicios causados con ocasión de la perpetración del delito de homicidio de la víctima José Miguel Uribe Antipani, delito previsto en el artículo 391 N°2 del Código Penal, materia de la acusación particular, de conformidad a los siguientes fundamentos:

En cuanto a los hechos, corresponden a los mismos de la acusación particular, ya consignada en esta sentencia en el Apartado Tercero, relativos a lo ocurrido el 21 de octubre de 2019, en que el acusado Fuenzalida Calvo efectuó diversos disparos con un arma de fuego, los que hiriendo a varias personas, entre ellas el afectado Uribe Antipani, provocándole las lesiones descritas y que en definitiva le causaron la muerte, incluyendo las pesquisas policiales y la detención del imputado, a quien se le incautó la evidencia señalada; y el 26 de octubre del mismo año, en la que la policía nuevamente acude al domicilio de aquel, donde se le incauta nueva evidencia.

A los párrafos pertinentes se agrega en esta demanda lo siguiente:

Cabe señalar que nuestra representada Claudia Belén Pezo Sáez, el año 2015 comenzó una relación sentimental con el fallecido José Miguel Uribe Antipani, empezando

a vivir juntos el año 2016, con quien formó una familia en la cual nació el hijo común Máximo Baltazar Uribe Pezo, quien nació con fecha 5 de diciembre de 2017, y que por tanto al momento de la muerte de su padre, causada por el demandado Francisco José Fuenzalida Calvo, el menor tan solo tenía un año y 10 meses de edad, quedando a partir de entonces por toda su vida restante privado de la presencia, apoyo y cuidado de su padre, fallecido por la acción delictual del demandado. Así el menor no contará con la figura paterna durante su infancia, adolescencia y vida futura, ni con el apoyo paterno en lo espiritual ni material, ni podrá ser guiado por su padre, todo lo cual ha causado un gran daño al menor que debe ser indemnizado. El menor tampoco podrá recibir de parte de su padre lo necesario para su mantención o bienestar, privándolo de ser cuidado por él.

La demanda agrega las secuelas que la muerte de la víctima acarreó para su pareja Claudia Belén Pezo Sáez y su padre Nelson Octavio Uribe Álvarez, personas que, sin embargo, no fueron incorporados en definitiva en la demanda sometida a la decisión de este Tribunal, por lo que no se transcribirán.

La demanda civil incluyó la siguiente fundamentación:

Como se puede apreciar al momento de su muerte José Miguel Uribe Antipani, tan solo tenía 25 de años de edad, a quien por tanto le quedaba toda una vida por delante, la cual fue interrumpida por la acción dolosa homicida del demandado, quedando desprovistos los integrantes de la familia del fallecido de ayuda moral, económica, esto es, tanto su conviviente y su hijo menor, quienes junto a Nelson Uribe, todos fueron gravemente afectados por la muerte de José Miguel Uribe, muerte ejecutada por el demandado, quien es autor del delito de homicidio ejecutado y descrito precedentemente, causando dolor y angustia a la familia de la víctima.

S.S., si bien la indemnización de daños no patrimoniales tiene más bien un carácter compensatorio, dado que no es posible restablecer el estado de las cosas a un momento anterior al grave daño ocasionado, una indemnización es una pretensión legítima de justicia que de alguna manera compensen a las víctimas por el mal recibido. Existe con la

actuación del demandado una lesión o agravio ejecutado dolosamente de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona imputable al demandado.

Añadió que el Tribunal debe tener presente la relación de cercanía y parentesco en el caso del hijo menor y el gran dolor que provoca un daño de este tipo en el hijo, que se expresará con mayor intensidad con el avance en su edad, legitimándolo para demandar una indemnización.

Por otra parte, atendida a la edad del hijo Máximo Baltazar Uribe Pezo, quien nació con fecha 5 de diciembre de 2017, y que por tanto al momento de la muerte de su padre, causada por el demandado, tan solo tenía un año y 10 meses de edad, queda por el actuar del demandado así por el resto de su vida el menor privado de la figura paterna, lo que es y será un dolor de gran intensidad, que debe ser indemnizado.

Los hechos antes relatados que gran parte de ellos son materia de la acusación de lo principal, en su concepto son constitutivos del delito de homicidio de la víctima José Miguel Uribe Antipani, ilícito previsto en el artículo 391 N°2 del Código Penal, en grado de ejecución consumado, teniendo la calidad de autor el demandado Francisco José Fuenzalida Calvo, hechos que irrogaron un perjuicio a su representado, solicitando que por daño moral se le condene a la suma de \$200.000.000, respecto del demandante Máximo Baltazar Uribe Pezo.

Se sostuvo también que con la prueba que se rendiría en el juicio oral se acreditarían por concepto de daño moral los hechos y justificación de dicho monto.

Añadió la demanda que la fuente principal de la responsabilidad extracontractual son los delitos y cuasidelitos, según lo dispuesto en el artículo 1437 del Código Civil que dispone : “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los

delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad”.

En la especie por los hechos ejecutados por el demandado tiene, adicionalmente a la responsabilidad penal, responsabilidad civil de carácter extracontractual y está obligado a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con su accionar, toda vez que el delito de homicidio cometido y ejecutado por el demandado constituye un delito que ha inferido daño a otro en los términos del artículo 2314 del Código Civil, por lo que corresponde que S.S. determine el monto de los daños y perjuicios que debe indemnizar, debiendo condenarlo precisamente al pago de la indemnización indicada, por concepto de daño moral o a la suma que S.S. determine conforme al mérito de la prueba que se produzca. Cabe resaltar que el demandado al haber cometido un delito que ha causado el daño descrito está obligado a indemnizar al demandante. Por su parte, el artículo 2329 del Código Civil señala que todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Así, las conductas delictivas del demandado, de carácter dolosas, han causado un daño moral, detrimento y perjuicio al demandante víctima que debe indemnizar.

En concepto de la parte demandante, el demandado es responsable del pago de la correspondiente indemnización de perjuicios más costas e intereses corrientes y reajustes de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (I.N.E.) desde la fecha del ilícito hasta la del pago efectivo, dado que la indemnización debe ser completa y así compensarse el daño sufrido, debiendo reajustarse según la variación del I.P.C., desde el día en que quede ejecutoriada la sentencia en esta causa hasta la fecha en que efectivamente se pague la indemnización que se disponga por S.S., debiéndose ordenar que se paguen por el demandado también los correspondientes intereses, con costas.

La demanda terminó expresando que, de acuerdo a lo expuesto y a lo dispuesto en los artículos 108, 109 letra c) del Código Procesal Penal, 171 del Código Orgánico de Tribunales y 2314, 2317 y 2329 del Código Civil, solicitaba: tener por interpuesta demanda

civil de indemnización de daños y perjuicios en contra de Francisco José Fuenzalida Calvo, acogerla a tramitación y en definitiva condenarlo al pago de una indemnización de daños y perjuicios ascendente por daño moral a la suma de \$200.000.000 respecto del demandante Máximo Baltazar Uribe Pezo, sin perjuicio de las sumas que el Tribunal determine de acuerdo al mérito de la prueba rendida, más reajustes, intereses y con expresa condenación en costas.

Por su parte, en sus alegatos en la audiencia de juicio, como se ha transcrito, el abogado Carlos Gajardo sostuvo dicha acción civil, solicitando fuera acogida, indicando que, aunque sabe que es meramente declarativa, pues es muy posible que el menor Baltazar y su familia no reciban un peso, les interesa que se declare la responsabilidad civil del demandado. Agregó que se aportó la prueba necesaria, los testimonios del abuelo y la madre, el certificado de nacimiento que da cuenta que es hijo de José Uribe Antipani y de acuerdo a la doctrina que reiteradamente ha asentado la Corte Suprema, el daño moral lo debe establecer y cuantificar el Tribunal de acuerdo al baremo que ha establecido la misma corte y, por tanto, no es necesario una prueba adicional.

VIGÉSIMO: Posición de la Defensa sobre la acción civil. Respecto de esta demanda, la Defensa del acusado y demandado nada señaló específicamente, amén de todo lo que expuso sobre su cuestionamiento a los hechos en el aspecto penal.

VIGÉSIMO PRIMERO: Prueba de los presupuestos de la acción civil. Durante el juicio se recibieron diversas pruebas que contribuyeron a acreditar los supuestos de la acción civil, a las cuales en gran medida ya se ha hecho referencia al analizar la prueba con la cual se dieron por establecidos los diferentes elementos del tipo penal del delito de homicidio simple en la persona de la víctima José Miguel Uribe Antipani, en grado consumado, y la participación del acusado en calidad de autor ejecutor del mismo, con lo que se pudo establecer su responsabilidad criminal.

Por su parte, para precisar los diversos elementos de la responsabilidad civil derivada del hecho, y especialmente el daño moral invocado, la demandante aportó, por

una parte, los documentos signados con los números 2, 3 y 4 de su prueba, el primero consistente en el **Certificado de Nacimiento del menor Máximo Baltazar Uribe Pezo**, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, donde se lee que nació el 5 de diciembre de 2017 y es hijo de José Miguel Uribe Antipani y Claudia Belén Pezo Sáez; el segundo, el **Certificado de defunción de José Miguel Uribe Antipani**, otorgado por la misma institución, que da cuenta que falleció el 21 de octubre de 2019 producto de una anemia aguda por herida penetrante en cavidad torácica por proyectil de arma de fuego; y el **Certificado de nacimiento de José Miguel Uribe Antipani**, del mismo origen, que muestra que nació el 2 de septiembre de 1994, siendo sus padres Jaqueline Isabel Antipani Bustamante y Nelson Octavio Uribe Álvarez.

A estos antecedentes puede agregarse el testimonio de la mencionada **Claudia Belén Pezo Sáez**, quien declaró a instancias de la Fiscalía, y señaló ser profesora y haber sido la pareja de la víctima José Miguel Uribe Antipani y madre de su hijo Máximo Baltazar, y describió su conocimiento de lo sucedido el día de los hechos, la llamada de un amigo de él que le avisa que estaba herido y necesitaba una transfusión, y que acuden con el padre de José Miguel al Hospital de Curicó donde había sido llevado, enterándose de su muerte. También refirió las dolorosas consecuencias que su abrupta partida implicaron para ella y la tristeza que le provoca el pensar que no estará con su hijo ni lo verá crecer. José Miguel fue buen hombre y papá, que velaba por el bienestar de su familia hasta en sus mínimos detalles, y la dejó sola, sin poder darle a su hijo los detalles que su padre le habría dado. Ha vivido este tiempo con rabia, tristeza, inseguridades y dolor, no tiene nada positivo que decir. Le cambiaron su vida, desarmaron su familia. Ha estado con tres psicólogos y psiquiatras, pero no se ha sentido satisfecha ni apoyada. Actualmente es adicta a los antidepresivos porque le ayudan a estar bien, a trabajar y tomar decisiones. Sobre lo que esperaba del juicio indicó que cree que no va a poder tener conformidad, solo quiere que él (el encausado) no quede impune y de alguna manera retribuya o compense a Baltazar por todo lo que le quitó, le quitó su papa, crecer con él, con sus consejos, sus abrazos, aun no lo vive, pero más adelante lo vivirá y ella tendrá que guiarlo para que sea fuerte.

También citaremos aquí el relato de **Nelson Octavio Uribe Álvarez**, quien señaló que José Miguel era su hijo y dio cuenta cómo se enteró lo ocurrido, a través de la pareja de su hijo, Belén, quien por teléfono le dijo que le habían disparado, que estaba grave y le iban a hacer transfusiones, llevándola al Hospital, a donde amigos de su hijo les informaron que había fallecido. Fue tan impactante que estuvo hasta las 4 o 5 de la mañana fuera del hospital sin saber qué hacer, siendo que era inútil estar ahí. No se atrevía a contarle a su señora, pero ya lo había visto en redes sociales, donde el nombre de su hijo apareció de inmediato. Para su señora, madre de José Miguel, este era aún su niño, aunque era adulto, sabe lo que ha sufrido. El dolor es muy grande y también lo ha vivido su hijo menor, de 12 años, con el que José Miguel era muy unido. De ahí para adelante han tratado de salir, refugiándose él más que nada en el trabajo, cree que su señora también, no conversan del tema porque saben que les hace mal. Hay un nieto, hijo de José Miguel, Máximo Baltazar Uribe Pezo, que tiene 3 años 10 meses. Con el tiempo se calma un poco la pena, pero reflota. A su nuera se le complica por el trabajo y el niño, con su señora tratan de ayudarlo lo más que pueden, la va a acompañar o pide permiso, y así sacan esto adelante. Económicamente hay que ayudarla para que no le falte nada al niño, porque no está el proveedor, y los niños siempre necesitan. Es su nieto, lo que les dejó su hijo. Terminó describiendo la vida, estudios y trabajo de José Miguel, quien tenía capacidad de hacer muchas cosas, aprendía trabajos rápidamente, sabía de albañilería, soldador, limpiaba ventanas en edificios, sabía de gasfitería; no tenía muchos estudios, pero era muy empeñoso y últimamente quería estudiar en Inacap, habían hablado por si lo apoyaba en eso. Había madurado, empezado a vivir la vida de manera adulta. Cambió cuando conoció a Belén y formó su familia, tenía ganas de tener sus cosas y salir adelante. Después de su muerte su preocupación ha sido su nieto, quien al morir tenía como un año y 10 meses. Actualmente vive con su madre, Belén, en la misma población, a una cuadra y media. Belén es profesora en el colegio del sector. Económicamente al principio recibieron ayuda, pero después solo la que le dan él y su señora.

La parte demandada no rindió prueba especialmente dirigida a desvirtuar la acción civil.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Procedencia de la acción civil y prueba de respaldo. De acuerdo a lo razonado en los considerandos precedentes y especialmente a lo concluido en el Apartado Décimo Quinto del presente fallo, conforme a la prueba rendida en el juicio Francisco José Fuenzalida Calvo resultó ser autor directo del delito consumado de homicidio simple de José Miguel Uribe Antipani, cometido el día 21 de octubre de 2019 en Curicó. La existencia de este delito y la autoría establecida del acusado y demandado constituyen la base de su responsabilidad tanto penal como civil, traducida en este último caso en su obligación de reparar las consecuencias dañosas ocasionadas por el hecho punible a el o los afectados.

En la especie, la parte demandante es únicamente el menor Máximo Baltazar Uribe Pezo, representado por su madre Claudia Belén Pezo Sáez, habiendo quedado excluidos de esa demanda ella por sí misma y el padre del occiso, Nelson Octavio Uribe Álvarez, según se aprecia del auto de apertura, por lo que los razonamientos y expresiones de la demanda referidos al daño moral de estos últimos no serán directamente consideradas. En este contexto, debió probarse su legitimación activa para demandar, esto es, que el demandante era titular del derecho a pedir y obtener una reparación por el delito cometido. Esto fue cumplido a satisfacción, pues, sin perjuicio de los testimonios reseñados, se aportó el respectivo certificado oficial de nacimiento que así lo constata. Además, la Defensa no levantó cuestionamiento alguno al efecto, así como sobre ninguno de los presupuestos de la acción civil, aún más, ninguna prueba presentó tendiente a desvirtuar la pretensión civil.

En cuanto al perjuicio invocado y que motivara la indemnización solicitada, claro está que la única reparación requerida se circunscribió al daño moral causado, y en este sentido, tal como se adelantó en el veredicto, se acogerá la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida en este punto –aunque sólo parcialmente en lo concerniente a su monto–, en atención a que se acreditaron los supuestos de hecho que así lo justifican. Se analizó en ese sentido la procedencia de tal indemnización, lo que se concluyó afirmativamente toda vez que resulta una consecuencia de la aplicación del

principio de que todo daño causado por una persona debe ser reparado por ésta, principio recogido en nuestra legislación en diversas disposiciones, siendo la más importante la que contempla el artículo 2.314 del Código Civil –invocada por cierto por la parte demandante-, norma que dispone específicamente que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. En el caso sub lite, se acreditó por de pronto la existencia de un delito, cometido por el demandado Fuenzalida Calvo; un daño, moral en este caso, originado en las secuelas de dolor y sufrimiento para el hijo que dejó la persona asesinada; y una relación de causalidad necesaria entre la conducta dolosa del culpable y el daño del afectado. Asimismo, se estableció que la indemnización la pidió el hijo del occiso, a través de su madre, dada su menor edad, conforme la prueba testimonial referida. Además, conforme tales testimonios, el niño vivía con su padre en un contexto familiar, del que formaba ciertamente parte la madre, Claudia Belén Pezo Sáez, y Uribe Antipani era el sostén económico y emocional de la familia, circunstancias que pudieron darse por acreditadas suficientemente con el mérito de los relatos de ella y de Nelson Octavio Uribe Álvarez, padre del fallecido, que en este punto fueron especialmente coherentes, precisos y detallados como para ser estimados creíbles, no siendo desvirtuados por probanzas en contrario. Los mismos testigos manifestaron la afectación emocional que seguramente ha de producir la muerte del padre para el menor, que lógicamente a su corta edad no puede entender la ausencia de su padre y los motivos de ella, solo viviendo las consecuencias de su falta, especialmente en lo sentimental y económico, ya que Uribe Antipani ayudaba financiar la vida familiar y del niño.

Teniendo presente que solo fue demandada indemnización por el daño moral, se atendió a que su existencia resultó evidente, de toda lógica y acorde con las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, ya que se encuentra sobradamente documentado en la ciencia médica, en la psicología y por cierto en la jurisprudencia, que el hecho de la muerte y consecuente ausencia de un ser querido y tan cercano, como lo es un padre para un niño, genera consecuencias emocionales de tristeza, menoscabo y amargura permanentes, y en el caso de los niños, carencias afectivas y

relacionadas con los roles parentales que pueden afectarles de por vida, reconociéndose el derecho a obtener la única reparación posible de parte del victimario en estos casos, cual es la económica, sin la necesidad de una prueba acabada acerca de la existencia o extensión de tal daño, especialmente cuando aquel daño es esperable, atendida la normalidad de las cosas. Ese principio de la normalidad implica que lo normal se presume y no exige prueba, y así lo es lo que para un hijo pequeño conlleva la pérdida del padre, que es el dolor, pero no solo eso, sino el conjunto de carencias y aflicciones que le han de implicar no contar con su padre diariamente, aún más allá de la edad en que su madurez y experiencia le permitan desenvolverse en forma autónoma, lo que lamentablemente en el caso de Máximo Baltazar requiere aun muchos años.

Con todo, los testimonios de la madre del niño, Claudia Pezo, y el abuelo paterno, Nelson Uribe, que se refirieron a esas circunstancias en el caso concreto, brindaron información, no contrarrestada, que configuró una presunción judicial en el mismo sentido.

En ese contexto, la regulación del monto de la indemnización se hará de manera razonable y prudente por el Tribunal, buscando que responda a un principio de reparación integral. Para ello se tomará en cuenta la gravedad de la afectación provocada por el crimen cometido por el acusado, que es la máxima que puede existir, cual es aniquilar la vida humana, de un padre en este caso respecto de su hijo, con sus severos y permanentes efectos para éste, sobre todo considerando su tan corta edad, que implicará que se le privó de tener a su padre prácticamente toda su vida. Si estuviéramos hablando de daños y pensáramos en algo valioso, por ejemplo una casa, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? Y entonces, ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Y cuánto un padre para un hijo? Por cierto, estos jueces no tenemos cómo responder esas preguntas, pero sí tenemos por misión regular una indemnización que procure ser una reparación equivalente al daño causado, procurando hacerlo de un modo razonable. En ese ejercicio consultamos sentencias sobre la materia (no estuvo disponible el Baremo del poder judicial al respecto en los días de redacción de esta sentencia, en el sitio web oficial

<https://baremorm.pjud.cl/>), especialmente aquella dictada por la Excma. Corte Suprema el 5 de agosto recién pasado en la causa Rol N° 82-2021, por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, que, si bien se concentra en la falta de servicio del Estado, en lo que aquí nos interesa, que es su tratamiento del daño moral y la fijación del monto de la indemnización por cada hijo, pareció marcar una tendencia.

De contrario, no podrá dejar de tenerse en cuenta que en la especie no se brindó prueba certera y detallada sobre otras eventuales consecuencias psicológicas del menor, u otros efectos a considerar, como para apreciar una dimensión superior de tal daño, lo que contribuyó a estimar desmedido el monto pretendido en la demanda.

Por todo lo anterior, **se regulará el daño y la consecuente indemnización en la suma de 3.327,53 (tres mil trescientos veintisiete coma cincuenta y tres) Unidades de Fomento, que, a modo referencial, equivalen a la fecha de esta sentencia a \$100.000.129 (cien millones ciento veintinueve pesos).**

Dicha suma se ordenará pagar más los **intereses corrientes** para operaciones de crédito de dinero reajustables, entre la **fecha en que el presente fallo quede ejecutoriado y el momento del pago efectivo.**

VIGÉSIMO TERCERO: Costas. No obstante lo dispuesto en los artículos 24 del Código Penal y 47 del Código Procesal Penal, se eximirá al sentenciado del pago de las costas, tanto en lo penal como en lo civil, en virtud de encontrarse privado de libertad hace casi dos años y que debe cumplir en forma efectiva las largas condenas señaladas, lo que implica que se presuma titular de privilegio de pobreza, conforme al artículo 135 del Código de Procedimiento Civil.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 10 N°1, 11 números 1, 6 y 9, 14 N°1, 15 N°1, 21, 24, 26, 28, 30, 50, 51, 67, 68, 69, 70, 73, 391 N°2 y 487 del Código Penal; 47, 59, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 343, 348 y 349 del Código Procesal Penal; 2, 4, 5 y 17B de la Ley 17.798 sobre control de armas y explosivos; 135 del

Código de Procedimiento Civil; 1 de la Ley 18.216; Leyes 19.970 y 20.568; y demás disposiciones pertinentes, **se declara que:**

EN LO PENAL:

I.- Se **condena** a **Francisco José Fuenzalida Calvo** a la pena privativa de libertad única de **quince (15) años de presidio mayor en su grado medio**, más las sanciones accesorias generales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la referida condena, por su responsabilidad en calidad de AUTOR EJECUTOR DE CUATRO DELITOS DE HOMICIDIO SIMPLE, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, tres ellos en grado frustrado, cometidos en las personas de Ricardo Andrés Solís Opazo, Nicolás Francisco Espinoza Rojas y Miguel Andrés Ayala Salinas, y uno consumado, que provocó la muerte de José Miguel Uribe Antipani, cometidos el día 21 de octubre de 2019 en Curicó.

II.- Se **condena** a **Francisco José Fuenzalida Calvo** a la pena principal de **quinientos cuarenta (540) días de presidio menor en su grado mínimo**, más la sanción accesoria general de suspensión de cargos y oficios públicos durante el mismo tiempo, por su responsabilidad en calidad de AUTOR EJECUTOR DE UN DELITO CONSUMADO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES, previsto y sancionado en el artículo 9 en relación a los artículos 2, 4, 5 y 17B de la Ley 17.798, recaído en un arma de fuego del tipo pistola, marca CZ, modelo 85, calibre 9 milímetros, serie A2773, más dos cargadores y cinco cartuchos de munición compatible; ilícito perpetrado el día 21 de octubre de 2019 en Curicó.

III.- Se **condena** a **Francisco José Fuenzalida Calvo** a la pena de **multa de cinco (5) unidades tributarias mensuales**, por su responsabilidad en calidad de AUTOR EJECUTOR DE UN DELITO CONSUMADO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley 17.798, en su texto vigente al año 2008, recaído en un arma de fuego del tipo fusil, calibre 7x57

milímetros, marca Máuser, modelo 1912, serie 69148, más 250 cartuchos de munición compatible; ilícito descubierto el día 22 de octubre de 2019 en Curicó.

IV.- Se condena a Francisco José Fuenzalida Calvo a la pena de cuarenta y un (41) días de prisión en su grado máximo, más la sanción accesoria general de suspensión de cargos y oficios públicos durante el mismo tiempo, por su responsabilidad en calidad de AUTOR EJECUTOR DE UN DELITO CONSUMADO DE DAÑOS SIMPLES, del artículo 487 del Código Penal, perpetrado en perjuicio de la empresa Lizcal S.A. el día 21 de octubre de 2019 en Curicó.

V.- Las penas corporales impuestas, que totalizan 15 años y 581 días, deberán satisfacerse en forma efectiva, al no reunir Fuenzalida Calvo los requisitos de la Ley 18.216 para optar a una pena sustitutiva, y deberán cumplirse sucesivamente, principiando por la más grave, **contándose a partir del día 22 de octubre de 2019,** fecha desde la cual se encuentra sujeto en forma ininterrumpida a medidas cautelares privativas de libertad en esta causa, según consta del auto de apertura, contabilizando a esta fecha, a modo referencial, **736 días de abono,** sin perjuicio de los días que sigan acumulándose hasta que inicie el cumplimiento efectivo.

VI.- Se ordena el comiso de las siguientes especies incautadas al acusado con motivo de este proceso: un arma de fuego del tipo pistola, marca CZ, calibre 9 milímetros, modelo 85, serie A2773, más dos cargadores y cinco cartuchos de munición compatible; un arma de fuego del tipo fusil, calibre 7x57 milímetros, marca Máuser, modelo 1912, serie 69148, más 250 cartuchos de munición compatible; en ambos casos, sin perjuicio de los cartuchos que se hayan utilizado en las pertinentes pruebas balísticas; y el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, modelo Hilux, color rojo, placa patente única e inscripción HVLD26-7, inscrita en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados a nombre de Francisco Fuenzalida Maquinarias Limitada.

EN LO CIVIL:

VII.- Se acoge la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por los abogados Carlos Gajardo Pinto y Pablo Norambuena Arizábalos, en representación de Claudia Belén Pezo Sáez, actuando ésta a su vez por representación legal, en calidad de madre, de su hijo menor de edad Máximo Baltazar Uribe Pezo, en contra del acusado y demandado Francisco José Fuenzalida Calvo, y, en consecuencia, se condena a éste al **pago de la suma de 3.327,53 (tres mil trescientos veintisiete coma cincuenta y tres) Unidades de Fomento**, que, a modo referencial, equivalen a la fecha de esta sentencia a \$100.000.129 (cien millones ciento veintinueve pesos); **más los intereses correspondientes desde la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo.**

VIII.- Se exime al sentenciado, tanto en lo penal como en lo civil, del pago de las costas de la causa.

Prevención:

Se deja constancia que, respecto de la condena por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones señalado en el acápite III precedente, el magistrado Rodrigo Gómez Marambio estuvo por no estimar que el delito tuvo su principio de ejecución en el año 2008 y, por tanto, aplicar la Ley de Control de Armas en su texto vigente a esa época, con el tratamiento más benévolo consecuente para el condenado, sino de regular su sanción conforme al texto de esa ley vigente a la época en que el ilícito fue descubierto, el 22 de octubre de 2019, por estimar que en esta última fecha es cuando se cometió la conducta sancionada, resultando improcedente castigarlo conforme al tenor de una ley que a esta última fecha había sido modificada y no estaba vigente, como ocurrió al dictarse entre las dos épocas la Ley 20.813, de 6 de febrero de 2015, que fijó el marco punitivo aplicable desde entonces. Ello debió traer como corolario que el encartado sufriera una pena no inferior al presidio menor en su grado máximo por este delito, o que, considerando la otra condena por una figura de dicha ley, la señalada en el acápite II anterior, correspondiera sancionarlo en base al sistema de acumulación jurídica de penas previsto en el artículo 351 del Código Procesal Penal. Es decir, con una pena sustantivamente superior a la que se le impuso.

Ejecutoriada que sea esta sentencia, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal y 113 del Código Orgánico de Tribunales, y remítanse los antecedentes pertinentes al Juzgado de Garantía de Curicó para su cumplimiento y ejecución, y a fin de que ponga en conocimiento lo resuelto de los organismos correspondientes. En particular, para efectos del artículo 17 de la ley 19.970 y en caso de que no se hubiere fijado la huella genética del imputado previamente, se ordena que ésta se determine, previa toma de muestras biológicas si fuere necesario, a fin de que se incluya en el Registro Nacional de ADN de Condenados del Servicio de Registro Civil e Identificación.

De conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la ley 20.568, inclúyase la presente sentencia en el respectivo informe mensual al Servicio Electoral, una vez que se encuentre ejecutoriada.

Devuélvase la prueba documental y evidencias que se hayan incorporado materialmente, previa constancia.

Regístrese.

Sentencia redactada por el juez Rodrigo Gómez Marambio.

RIT 23-2021.

RUC 1.901.138.322-2

Sentencia pronunciada por los jueces **Macarena Yáñez Cerda, Amelia Avendaño González y Rodrigo Gómez Marambio**, todos titulares de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó.